

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Académica de México

DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
Con énfasis en Sociología

**Al borde de la cornisa:
Construcción cotidiana del mundo social
en el conflicto armado colombiano”**

Presentado por:
Guillermo Alejandro D’abbraccio Kreutzer.

**Director de Tesis:
Dr. Marco Estrada Saavedra**

**Lectores Sinodales:
Dra Pilar Calveiro y Dr Alejandro Agudo Sanchíz**

**Seminario de Tesis Flacso México:
Dra Cecilia Bobes y Dr Santiago Carassale**

México D.F, 23 de mayo de 2007

Dedicatoria

A mi padre, mi más tierno amigo, compañero y guía. Pucha que te extraño viejo, hace catorce años que dejaste un vacío en mí. Tu memoria sólo morirá conmigo.

A la memoria de los compañeros, académicos y defensores de Derechos Humanos que pagaron con sus vidas por indagar tercamente en ese mundo social colombiano de ciegos, sordos y mudos, en especial a:

Profesores Darío Betancourt y Hernán Henao

Jaime Garzón

Jesús Bejarano

Manuel Cepeda

Mario Calderón y Elsa Alvarado (investigadores Cinep)

Eduardo Umaña

Jaime Gómez

Y a cientos de valientes a quienes no alcanzaría a citar aquí

Agradecimientos

Primero que todo, este trabajo no se hubiera podido realizar sin la colaboración de los 35 entrevistados del centro-norte del Valle del Cauca que me brindaron sus confianzas para entrar en sus mundos sociales. Hay personas muy especiales y significativas a quienes deseo manifestar mi gratitud por estos años mexicanos compartidos. Preferiré iniciar al revés de cómo se estila, es decir, con las claves de mis sentimientos, luego por los gratos “hallazgos” y apoyos institucionales y académicos, posteriormente con los amigos ajedrecistas y cinéfilos y, finalmente, por los sufridos “Flacsianos”.

En primer lugar a mi adorada Paola y mi Juandis. Pao, no sólo eres la mujer que amo, mi cómplice, pareja, novia, amante, esposa y amiga (todo eso y mucho más), sino mi compañera de ruta desde hace doce años, la persona más trascendente en mi historia, quien me “bancó” (apoyó) incondicionalmente durante todo este tiempo, y a quien salgo debiendo por tanto amor y solidaridad. A mi pequeño Juandis, quien con su amor y cariño me hace ver más lindo y amable el mundo social que me rodea. Como dice esa canción sureña que nos encanta *“si te quiero es por que sos, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos”*

Ellos dos y mi querida madre Elfride, fueron mi soporte al filo de madrugadas redactando y estudiando, de noches en vela leyendo y preparando exámenes e informes, así como de contar los días para terminar este periodo, para dar la vuelta. Mi vieja, luchadora y combativa, aún en la distancia venezolana, siempre dijiste presente.

Un lugar muy especial lo constituye el profesor Marco Antonio Estrada, director y copiloto de tesis, el contenedor de mis precipitaciones, a quien le agradezco no solamente brindarme su rigurosidad teórica y disciplina académica, sino que además desde el principio de este largo camino confió en mí y me otorgó todo su apoyo y afecto, sin hacerme sentir arbitrariamente diferencia de roles ni situación de poder alguno. Desde ese primer mail que me contestó casi inmediatamente (apenas a dos horas de escribirle, sin conocerme, sin ninguna referencia), sentí que conocí a un buen ser humano. Dos años y numerosas entregas e informes después, sigo convencido que he sido afortunado en conocerte, Marco. Mil gracias.

A los profesores e investigadores Pilar Calveiro y Alejandro Agudo Sanchíz, mi reconocimiento y agradecimiento por sus pertinentes y rigurosas observaciones, en el transitar paralelo en el proceso dispendioso y largo de revisar y reformular la tesis. Gracias a ustedes por leerme, por sus aportes y sugerencias, lo cual contribuyó a consolidar un trabajo que a ratos se dispersaba, desbordaba o, simplemente, se quedaba corto por algún motivo, aunque tal vez siempre hay muchas cosas por hacer que quedan en el tintero. Pero todo este camino tiene un origen y en él quisiera evidenciar mi reconocimiento y agradecimiento a los profesores del seminario de tesis Cecilia Bobes y Santiago Carassale, en ese ir “marcándome la cancha” en la formulación del problema y del proyecto cuando sólo era un esbozo sin grandes pretensiones. Gracias a los cuatro.

Enorme reconocimiento a mi querida Universidad Nacional de Colombia (sede Manizales), porque me financiaron íntegramente durante tres años –vía licencia y comisión de estudios- mi estadia en México. A ellos mi gratitud, especialmente al decano Germán Albeiro Castaño Duque, y los profesores Patricia Noguera y Julián García, por mantenerme informado de los procesos en la capital caldense. De igual modo, agradezco a la Flacso México por haberme otorgado un complemento de beca, así como la financiación parcial del trabajo de campo.

Un agradecimiento muy especial por los debates, discusiones, lecturas y aportes teóricos que compartimos, quisiera realizar aquí a las queridas profesoras e investigadoras Isabel

Piper y María José Reyes, adscritas a la Universidad de Chile y Arcis (Chile), coordinadoras del Grupo de Trabajo Académico en “Derechos Humanos y Violencia Política” del campus virtual de CLACSO (Argentina), así como a mi amiga Raquel, profesora e investigadora del Instituto Andaluz de Estudios Sociales y Políticos. A ellas tres (Isabel, María José y Raquel) mujeres modernas, brillantes y comprometidas con sus entornos, gracias por sus voces, apreciaciones y sobre todo, compartir sus valiosas experiencias.

También gratitud a “Los Tercos por la paz”, grupo de exiliados colombianos en México, especialmente a Mercedes y a Eduardo, así como Floresmiro quien falleció hace un año lejos de su patria pero con el calor de su familia mexicana. Militantes progresistas devenidos en académicos, radicados aquí desde los años ochenta, comprometidos contra el autoritarismo y terrorismo estatal, el narcoparamilitarismo y los “señores de la sombras” del Uribismo.

Pasaré revista de gratitud a mis amigos cinéfilos y ajedrecistas en el D.F, los catalanes Paco y Manolo y el “franchute” Pierre, tanto en la cineteca de Coyoacán y el Lumière Reforma de la calle Guadalquivir, así como en las difíciles partidas ajedrecísticas a dos o tres horas (verdaderas batallas campales) de aperturas intrincadas y complejas que se desarrollaron en cafés cercanos a los metros Hidalgo, Balderas y Zócalo, un centro lleno de historias. Gracias al ajedrez, cine y el centro histórico, estos tres años fueron menos penosos. Pasábamos a gusto y placer de disfrutar a Bergman, Wenders, Buñuel y Fellini, hacia el mundo de los escaques de Spassky, Anand, Kasparov y Polgar. Y en más de una ocasión, los réditos obtenidos en torneos ajedrecísticos me salvaron los apretados presupuestos de fin de mes. Gracias muchachos.

A mis tres grandes amigos colombianos William López (Universidad del Valle), Enrique Peña (Universidad del Cauca) y mi compañero de veladas, el ajedrecista-matemático Rubén Lara alias “Capablanca” (Universidad de Caldas), siempre presentes con su voz de aliento vía e-mail y chat. A mis amigos venezolanos, especialmente José Gregorio, así como los “chamos” de Caracas. De igual modo, a los amigos de Clacso Argentina, quienes me enviaban documentos de trabajo desde su campus virtual.

Finalmente, a mis amigos compañeros de Flacso. A mi compa guatemalteco Ricardo Sáenz, que siempre ha tenido voces de aliento en todo el camino. Y también gratitud a Nancy, Ale, Gaby, Daniel, Vero, Anayeli, Miriam, Nacho y Emilio. También a Pancho y a Victoria de la maestría en Gobierno. Del seminario de tesis, a la tierna y encantadora Vicky Chanquín (de la tierra del Quetzal) y mi querida compañera porteña Valeria Falletti (gracias a las dos por estar siempre cerca), por sus voces de aliento. En cada conversación con “la Vale”, me topé de frente con cada rastro y huella de esa Avenida Corrientes, de San Telmo, Barracas, de los barrios Caballito y Flores que llevo en mi corazón, valga decir, en mi memoria. Con Vale nos sentimos como dos nostálgicos porteños. Suerte Vale en tu nueva etapa con Juan, sea donde sea que vayan (o se queden). Del Colmex quiero agradecer a mi compatriota Gabriel Gallego del doctorado en Población, quien me brindó su hospitalidad y cuyo humor me hizo más liviano la adaptación al D.F.

A mi querida amiga cubana Charlene, su pareja el chileno Carlos y sus hermosos niños, junto al cordobés Guille Pereyra. A Carlos Simonelli, más porteño que el Obelisco y la avenida Corrientes, un abrazo “fiera”. Al profesor Jorge Horbarth, siempre alegre para recordarme a su Valle del Cauca, al igual que al profesor Molinet, por esas amenas conversaciones de sobremesa. Aquí en las oficinas administrativas de Flacso México a la Dra Giovanna Valenti, a Karla, Laura Montalvo, Leticia y Laura Rodríguez, Rita Valenzuela, Aurora Ortiz y Oscar en la oficina de “Asuntos escolares”, por su amabilidad y ayuda sin par, al igual que a Cristian y los muchachos de la fotocopidora. Finalmente, pero no por ello en último lugar, a los estandartes de la biblioteca Gerardo, Hugo, Pato, Martita, Toño y Gaby.

“En primer lugar, la colombiana, como todas las guerras, ha producido atrocidades sin nombres. Pero, segundo, al contrario de muchas otras, ha resultado inasible hasta para la barroca obsesión tipológica de los analistas sociales. ¿Es una “nueva guerra” Kaldoriana, en la que tendencias localistas se enfrentan a los criterios universalistas de la comunidad global? ¿Es una guerra civil? ¿Más criminal? ¿Cada vez más ideológica? ¿o simplemente trivial? ¿Todas las anteriores? ¿Ninguna?”
Nuestra guerra sin nombre. F Gutiérrez y G. Sánchez

“Hoy los colombianos somos víctimas de los tres grandes males que echaron a perder a Macondo: la fiebre de insomnio, el huracán de las guerras, la hojarasca de la compañía bananera. Vale decir: la peste del olvido, la locura de la venganza, la ignorancia de nosotros mismos que nos hizo incapaces de resistir a la dependencia, a la depredación y al saqueo. Las numerosas guerras en la que se cruzan todos los conflictos de la diversidad, han tenido como efecto común el cortar sin tregua los hilos de la memoria” y de esta manera en Colombia” se ha borrado el tabú del asesinato”. **Gabriel García Márquez**

“Lo que sucede en Colombia es un exceso de realidad que se parece a una falta de realidad”. **Boaventura de Souza Santos**

Resumen

¿Qué hay en una sociedad que convive con la violencia desde la génesis de su historia nacional? ¿Qué más agregar a cientos de estudios y análisis que han abordado el fenómeno de la violencia, el conflicto armado y la represión militarista en la paradójica Colombia, desde diversas miradas y lentes?

El siguiente estudio indaga en un aspecto que ha recibido escasa atención, más por motivos de seguridad que de interés: el orden social que se construye y se reproduce entre actores armados y no armados en una región colombiana. Se intenta dar cuenta de los modos y tipos de interacción que llevan a cabo los pobladores de una particular zona rural/urbana en su coexistencia cotidiana con el miedo, la coerción de los guerreros y la necesaria inercia de seguir adelante con sus trayectos biográficos. En esos espacios “relativamente” compartidos y a la vez competidos, las estrategias de sobrevivencia constituyen una suerte de herencia social que se pasa de generación en generación, a modo de recetas y acervos de conocimientos, lo cual les permite sobrellevar las diversas violencias y reconfigurar sus respectivas memorias. Y, por ende, seguir despertándose, trabajar, amarse, coquetearse y seducirse, bailar y seguir durmiendo con ello a cuestas.

El supuesto que recorre el presente trabajo es que el conflicto y la violencia en Colombia tienen su propia regularidad y estructura que permiten tipificar y normalizar la vida social, aunque sea sólo para sobrevivir, surgiendo así las estrategias cotidianas de la población civil. En particular, se indaga en los procesos de formación de subjetividades en semejante escenario, donde los sujetos-actores, “sujetados” pero también protagonistas, construyen espacios y prácticas sociales que les permite transitar con relativa suficiencia entre la tensión y la interacción.

La interacción en el mundo social colombiano se construye conflictivamente y se negocia asimétricamente en el día a día de sus pobladores. Por ello una cierta anarquía ordenada es el propio orden social en el que el pre-dominio militar de un grupo armado (al igual que las lealtades que despierta), es tan frágil que las complicidades y alianzas configuran el sinuoso caminar por el “borde de la cornisa”.

Índice

| | |
|---|-----|
| Una Puerta introductoria | 12 |
| El problema y las premisas | 19 |
| Los objetivos, hipótesis y preguntas de partida | 20 |
| La estructura del texto | 24 |
| Capítulo 1 Delimitando la mirada | 28 |
| 1.1 Los recortes analíticos y el abordaje teórico | |
| a. Sobre el mundo de la vida cotidiana | 28 |
| b. Sobre el carácter social de la violencia | 43 |
| 1.2 El sendero metodológico y las vicisitudes | 52 |
| Capítulo 2: | |
| Colombia, un mundo social incierto, frágil y sui géneris | 66 |
| 2.1 Actores armados y dinámicas territoriales | 66 |
| a. Las Farc o la persistencia de la lucha guerrillera | 67 |
| b. Auc o paramilitarismo: los “paladines” del status quo | 73 |
| c. Responsabilidad histórica del Estado colombiano en la formación del paramilitarismo y en la “permisividad” con el narcotráfico | 91 |
| d. La negación del conflicto durante el gobierno de “Mano dura” de Uribe: armas y represión para “echarle leña al fuego” | 104 |

| | |
|--|-----|
| e. La escenografía de la impunidad: la Ley de Justicia y Paz | 113 |
| f. Viejos y nuevos narcos: de los carteles de Cali y Medellín al del Norte del Valle | 120 |
| g. ¿Compadres y aliados o los mismos pero “maquillados”? narcos y paramilitares, dos caras de la misma moneda | 128 |
| 2.2. Caracterización de la zona de estudio: el centro y norte del Valle del Cauca | 132 |
| Capítulo 3 ¿Por quién se “silencian” las campanas? Colorario normativo en el mundo de la vida vallecaucana: las justicias “para-estatales | 147 |
| 3.1 La ley del monte o justicia guerrillera: el sentir campesino | 150 |
| 3.2 Justicia paramilitar y códigos de narcos: de refuerzo del Estado a “depredadores” con intereses privados | 157 |
| 3.3 Las “listas negras” como reflejo de la represión y control paramilitar | 166 |
| 3.4 Justicia discrecional y arbitraria versus manual de convivencia y reparación. Acerca de las diferencias de las Justicias paralelas FARC y AUC | 171 |
| 3.5 Contribuciones impositivas, regulaciones morales y poder de enviarlos a dormir temprano a todos. Acerca de las similitudes de las Justicias Paralelas FARC y AUC | 176 |
| Capítulo 4 En un puente estrecho se recomienda no asustarse. Un abordaje fenomenológico de la interacción | 178 |
| 4.1 Estrategias de sobrevivencia e instrumentalización como acervos de conocimiento | 180 |
| Características de la interacción pobladores municipales y actores armados | 183 |
| Características de la interacción campesinos y actores armados | 192 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 4.2 | Una tipología de las interacciones y los interactores | 198 |
| a) | Interacción por interés o instrumentalización: actores lavaperros, camaleones, testaferros y sapos | 202 |
| b) | Interacción por simpatía o convicción: actores simpatizantes de bajo perfil | 211 |
| c) | Interacción por la sobrevivencia: actores ciegos, sordos y mudos. | 214 |
| 4.3 | Santuarios y espacios de inmunidad: fronteras de la violencia | 221 |
| | Los encuentros en la parroquia: De pecadores y Pecados, culpas y absoluciones | 227 |
| | “El Recreo”: el burdel del goce evasivo | 230 |
| | “Dónde se come no se mata”: el mercado de alimentos como espacio de inmunidad | 233 |
| | | 236 |
| | Capítulo 5: Desenmascarando las significaciones y valoraciones en un mundo social en conflicto | |
| 5.1 | Dime qué arma cargas y te diré quién eres: construcción social de las reputaciones | 236 |
| . | | |
| 5.2 | “Nadie es eterno en el mundo”: visión de futuro y expectativas vitales | 246 |
| | | 254 |
| 5.3 | El fin de la inocencia: Valoraciones en la tierra del azúcar y el café | |
| | El valor del enriquecimiento a cualquier costo | 254 |
| | Liposucciones y siliconas: el atajo al paraíso | 265 |
| | Dormir tranquilo sin deudores ni acreedores: La institución de los “intermediarios” y la demanda de sicarios | 267 |
| | El “monstruo” en el espejo: el caso Garavito y las consideraciones de la doble moral colombiana | 269 |

| | |
|--|---------|
| Capítulo 6: Nuestras guerras, nuestras memorias, nuestros muertos. Sombras del pasado e incertidumbres del presente | 273 |
| 6.1 La Percepción de la repetición de la violencia | 275 |
| 6.2 La clara identificación del otro en los años cincuenta: “Godos” azules versus rojos “come curas” | 279 |
| 6.3 Un fenómeno común de las guerras de antes y la de ahora: el despojo de tierras | 287 |
| 6.4 Lucha de memorias: de la historia oficial a la memoria campesina y guerrillera | 291 |
| 6.5 La ausencia de conmemoraciones como cierre represivo de la memoria colectiva | 295 |
| 6.6 Guerra, política y memorias | 302 |
| Capitulo 7 A modo de cierre | 312 |
| La militarización de la política y la bandolerización de la guerra | 312 |
| Una puerta entreabierta: Siete consideraciones finales para dar cuenta del complejo mundo social colombiano | 331 |
| Anexos | 343 |
| 1. Glosario | 344 |
| 2. Cuestionarios aplicados | 347 |
| 3. Guías de observación diario de campo | 348 |
| 4. Planeación y organigrama del trabajo de campo | 350 |
| 5. Estado del arte de la investigación sobre el conflicto armado colombiano | 357 |
| 6. Lo que se dice (habla) y se oye (narcorridos): Música y lenguaje teñidos de muerte. Letras de canciones de narco- | 376 |

| | |
|--|-----|
| corridos en la zona | |
| a. <i>“Historia de un paraco”</i> | 377 |
| b. <i>“Las monjitas”</i> | 379 |
| c. <i>“Prefiero una tumba en Colombia”</i> | 380 |
| d. <i>“Una muerte anunciada. Cayó Pablo Escobar”</i> | 381 |
| 7 Recortes de prensa (marzo-agosto de 2006) | 382 |
| Bibliografía | 393 |

Una Puerta introductoria

Una posible (y temida) consecuencia de la repetición de la violencia (y del terror) es banalizarla. Si se trivializan los asesinatos, las masacres, la tortura y la desaparición de personas, peligrosamente se normaliza el olvido al relativizarse la violencia.

En enero de 1987, cuando apenas superaba la barrera de mis diecisiete años, presencié por primera vez en mi vida un asesinato en plena vía pública en Bogotá. Ese día había terminado de cursar mi primer seminario en Derechos Humanos en la capital colombiana, y la persona acribillada era un valiente compañero de organizaciones juveniles. Yo, que había transitado toda mi infancia y adolescencia escuchando a mi exiliado padre hacer referencia a las diferentes etapas de represión militar en su natal Argentina, por una parte, y de haber escuchado y leído incipientemente sobre el conflicto armado en Colombia, por la otra, era triste testigo del deceso violento de un ser cercano a mi vida cotidiana. Un hecho que me marcó e interrumpió mis “inocencias”.

Después del asesinato de ese amigo fueron cayendo otros. Mi padre me envió inmediatamente a su “Buenos Aires querido” (como lo describió, sintió y cantó Carlos Gardel en su famoso tango), con el propósito de iniciar mis estudios en la entrañable Universidad de Buenos Aires (UBA), en plena transición democrática argentina. Pero la “Cuesta abajo en la rodada” colombiana era cada vez más pronunciada: empezaron a desaparecer o caer asesinados amigos/as, vecinos/as, compañeros/as y hasta un familiar cercano. Yo tuve la suerte de contar con un padre que me “sacó” de Colombia y saldó sus propios recuerdos y nostalgias, enviándome bajo el manto de sus (mis) familiares porteños. Lamentablemente, yo no era plenamente consciente de lo que sucedía, ni menos de lo que se avecinaba en esa Colombia de finales de los ochenta¹.

Paradojas latinoamericanas del crepúsculo de esa década. Yo estaba viviendo -como testigo privilegiado- una época histórica argentina, marcada por las desilusiones y traiciones a la democracia, provocadas por la Ley del “Punto Final”, la hiperinflación y las crisis económicas que provocaron el derrumbe de la moneda (austral) y hasta el dramático chantaje al gobierno radical de Alfonsín por parte de militares carapintadas, comandados por Rico y Seineldín, pero sufría día a día por la suerte de mis afectos y querencias dejados atrás en Colombia, una sociedad que ya venía desangrándose pero que, para terminar de completar su desgracia, observaba la nefasta emergencia de los

¹ Para hacerse a la idea de la dimensión escalofriante de esa época en particular (1987-1993), ver en el capítulo 2, los epígrafes referidos a “Viejos y nuevos narcos”, así como el del desarrollo histórico del paramilitarismo en Colombia.

escuadrones paramilitares del MAS (“Muerte a secuestradores”), la crítica “caza de brujas” a los movimientos populares opositores por parte del DAS y el F2², evidenciado dramáticamente en el aniquilamiento cobarde y sistemático a cinco mil valientes militantes de la Unión Patriótica (UP), las reiteradas bombas del cartel de Medellín para impedir a toda costa la temida extradición a Estados Unidos³, así como el recrudecimiento de las grandes masacres de la AUC a finales de los ochenta (durante el gobierno represor de Virgilio Barco), caracterizado por un permanente estado de sitio y supresión de las garantías constitucionales.

Pero me detendré aquí antes de continuar. Los tres párrafos anteriores no pretenden constituirse -de ninguna manera- en una mera anécdota personal⁴. Se trata de mucho más que eso. Dichos recuerdos, a través del espejo retrovisor de mi trayecto biográfico, constituyen los “demonios” personales que le dan vida y fuerza a una serie de interrogantes, que el autor de este escrito vivió y padeció, pero que también ha intentado (con menor o mayor fortuna) estudiar. El regreso a Colombia (en 1994), me permitió corroborar que muy pocas cosas habían cambiado en la tierra de “Macondo” (como la inmortalizó en sus novelas García Márquez) o la “Tierra del olvido” (como le canta al país el samario Carlos Vives) y que, adicionalmente, al ya complejo escenario se le sumaba el amenazante crecimiento de grupos del narcotráfico que superaban a los carteles de Cali y Medellín, un paramilitarismo copando los departamentos de Córdoba, Magdalena, Antioquia, la zona del Urabá, Valle del Cauca, Boyacá y Norte de Santander, el fortalecimiento de unas Farc resistiendo y nunca retrocediendo, una nueva Constitución Política (1991), la desmovilización o desarme de guerrillas como el M-19 producida años atrás, una fracción del EPL y el otrora combativo movimiento indigenista Quintín Lame.

Desde mi perspectiva biográfica, se trataba de un escenario más crudo y trágico que cuando partí, o tal vez lo percibía así porque ya era un joven que volvía sobre sus pasos, es decir, que para saber a dónde iba, necesitaba comprender de dónde venía. Pero ya mis pérdidas sobrepasaban mis emociones y dolores. Por eso, algunos estudios sobre el

² DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y F2 (Policía Judicial).

³ Como se podrá apreciar a lo largo del estudio, tanto narcos y paramilitares (cómplices y aliados) le tienen más temor y pavor a la extradición a ese país (EEUU), que a la propia muerte en combate. Adelantando la mirada, diríamos que para ellos una cadena perpetua en un país donde se habla otra lengua y en el que se niega la visita de sus familiares colombianos (porque les niegan la visa de entrada en dicho país, ya que adicionalmente esos familiares también son testaferros-prestanombres, es decir, cómplices), constituye una verdadera “muerte en vida” temida por todo “narco-paraco”: lenta, triste y sin privilegios. De ahí la célebre frase del asesinado capo Pablo Escobar “Prefiero una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos”

⁴ Otro comienzo no se me ha ocurrido, para tratar de dar cuenta de cómo surgió este camino. Una introducción que no tiene intención alguna de restarle “rigurosidad” académica a la presente investigación.

conflicto armado en los que participé en diferentes modalidades desde ese año (entre los que este es, sin duda, una continuación de intereses), intentan saldar esa deuda afectiva (y política), con aquellos seres queridos que ya no están y de los que, lamentablemente, nunca me pude despedir, especialmente mi viejo que -paradoja del destino-, huyó de la represión “gorila” en la Argentina de 1955 para caer en el desangre colombiano de 1993.

De esos “demonios” personales, surgen y se nutren los caminos del estudio que a continuación se presenta. Así como el punto de vista del fotógrafo coloca su mirada (foco), expresando o reflejando su intencionalidad, el estudio que a continuación se presenta, implica una particular mirada: las imágenes de un pueblo colombiano en guerra. Tal vez, las imágenes de un pueblo en espera. Pero ¿En espera de qué?

Parto de una convicción que, a mi modo de ver, no es negociable: la tarea investigativa es una actividad política -de ninguna manera neutra- que produce prácticas sobre las cuales es necesario reflexionar. La realidad no es independiente de nosotros como seres interactuantes, es decir, que la realidad no es externa ni ajena a nuestras prácticas sociales, sino más bien es producto de ellas. Por lo tanto, las categorías con las que describimos el mundo son obra de cada uno de nosotros, pues los individuos contribuimos a construirlo. En el presente estudio, por tanto, consideraré que no existe tal separación entre conocimiento y realidad, pues los colombianos que aquí se observaron, así como quien escribe- autor y actor, observador y observado-, construyen un mundo intersubjetivo.

Animo al lector (evaluador, observador, curioso o voyeurista), a ingresar por esta puerta introductoria, como un sendero en clave compartida. Ello nos permitirá a todos encontrar pertinentes pistas, con el objeto de desentrañar ese mundo social que, en el particular humor de sus habitantes, es denominado como “Locombia”, es decir, Colombia al revés, un mundo en permanente conflicto.

Para abrir esta puerta, partamos de la siguiente premisa: la presencia del conflicto ha sido una constante a lo largo de la historia humana. En la medida en que somos individuos con deseos, valores, intereses y necesidades distintos, y en que habitamos un mundo en el cual debemos compartir o disputar los medios y recursos elementales –y a veces escasos –de la vida, nos hallamos sujetos a la posibilidad del desacuerdo y la confrontación. Pero en el caso que aquí nos ocupa (una sociedad colombiana violenta/violentada como tema, problema, enigma, curiosidad), la tendencia de los conflictos han confluído hacia su degradación violenta. El caso de este país brilla por su

especificidad, dramatismo y complejidad. La excepcionalidad colombiana consiste en la combinación de la estabilidad de sus macroestructuras republicanas y niveles altos de violencia.

Y es que, además, vale señalar que Colombia tiene una larga historia de confrontaciones violentas. En efecto, los diversos conflictos que se han producido en los siglos XIX y XX, se dieron “dispersos” por todo el país, con variada intensidad en distintas zonas.

Según Pizarro (2004), el conflicto armado colombiano se caracteriza por ser interno, irregular, prolongado y con raíces históricas de índole ideológica y política. De lo que no cabe ninguna duda, es que dicho conflicto no está fundado en identidades primarias, sean éstas de orden étnico, religioso o lingüístico. Y esto es pertinente señalarlo, porque en el mundo académico se reitera que el planeta asiste, en las últimas décadas, a una serie de “nuevas guerras”, siguiendo a Mary Kaldor (2001). Una amplia y diversa literatura ha sido consagrada a los conflictos internos que sacuden a numerosos países desde el final de la guerra fría.

Estos conflictos no son necesariamente más numerosos que antes. Incluso, muchos de ellos provienen de épocas anteriores; además, las diferencias entre ellos son patentes. La naturaleza y los objetivos de los protagonistas son muy disímiles, al igual que la intensidad de los enfrentamientos, sus modalidades y sus consecuencias. Es suficiente aquí comparar a las guerras étnico-nacionales que acompañaron la disolución de la antigua Yugoslavia, la “guerra invisible” que arrasa a Argelia desde hace veinte años, el genocidio de Ruanda, los enfrentamientos sangrientos por el control de los recursos económicos de Angola o en Sierra Leona, los antagonismos religiosos de Sudán, las luchas de bandas sobre un fondo de descomposición de las estructuras de poder en Somalia, para tener una perspectiva de diversidad de los conflictos.

En la especificidad colombiana, el cóctel resulta explosivo: actores armados con un dominio territorial amplio pero difuso, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, etc. Aunque hay otros muchos países violentos, la especificidad colombiana podría consistir en las siguientes características: altos grados de descentralización en el ejercicio de la violencia, impunidad, inestabilidad en la reglas del juego e incertidumbre. El aparato de justicia colombiano enfrenta una sobrecarga catastrófica que no da abasto con la ola de criminalidad.

Resulta dicente que semejante sobrecarga conviva con- y a veces refuerce - las tradiciones republicanas y el Estado “formal” de derecho. En Colombia ocurren 77.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, el promedio más alto en el continente. En 1995, se cometieron en Colombia más asesinatos que en toda Europa (El Tiempo, 2003: 3A)

Para consolidar -desde los datos- las impresiones sobre este país andino, es pertinente señalar que en Colombia se registra, en forma ininterrumpida desde 1984⁵, alrededor de 26.000 homicidios por año, es decir, 70 por cada 100.000 habitantes (Cubides, 2001:21). Ello ubica a esta nación entre los países más violentos del mundo, según el profesor Fernando Cubides:

“con una tasa de homicidios cuatro veces el promedio Latinoamericano, diez y seis veces el de Europa, y sesenta veces el de Asia. En los noventa, el conflicto provocó más de 300.000 muertes violentas, 8.000 secuestros, 1.280 víctimas de desapariciones, más de un millón de desplazados y 708 masacres” (Cubides, 2001: 21)

A excepción de lo que estadísticamente se denomina “otras causas”, la violencia se ha convertido, desde mediados de 1980, en la principal causa de muerte en Colombia. En 1984, el número de defunciones por violencia, según cifras oficiales, alcanzó 20.235 víctimas. Seis años después, en 1990, las muertes por homicidio ascendieron a 24.300; el siguiente lustro aumentaron a 25.400 por año y, al final del año 2003, la cifra se elevó a 26.600 anuales.

Cuatro guerras civiles en el siglo XIX⁶, dos más en el XX. Cerca del 4% de su población asesinada en la guerra de los mil días (1899-1902), más de 200.000 muertos en “La Violencia” (1948-1958), un millón y medio de desplazados, 8000 desaparecidos en las

⁵ ¿Qué tiene de especial el año 1984 en Colombia para que se observe un aumento de la violencia del conflicto armado? La respuesta no fue simplemente un dolor más en nuestro legado histórico: ese año fue asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, por parte de los carteles de las drogas, y tras ello emerge el cóctel o sincretismo entre los actores armados y su relación- directa o indirecta- con el narcotráfico.

⁶ El historiador Fabio Zambrano considera que, desde los comienzos de nuestra historia Republicana, “se impusieron la diversidad geográfica, la multiplicidad de intereses, la heterogeneidad étnica y cultural, diferencias que no lograron ser ocultadas. Predominaron las fuerzas dispersoras y divisionistas de lo político, lo cual se convirtió en el vehículo que potenciaba todas las diferencias. La política, vista como conjunto de subculturas, comienza a dividir entre liberales y conservadores a los miembros de la nación. La lectura que se hacía entre sí estaba mediada por la frontera religiosa y por ello, los liberales eran vistos como “come-curas”, perseguidores de la Iglesia católica” (Zambrano, 1989: 33)

dos últimas décadas, según diversos cálculos (Sánchez, 2002: 55; Cubides, Olaya y Ortiz, 1998:33; Sarmiento Anzola, 2001:24)⁷. Todo ellos nos llevaría a considerar que el “problema colombiano” trasciende sus fronteras y se convierte en un asunto de interés del mundo latinoamericano.

Pero, ¿qué nos dicen estas cifras más allá de la frialdad que condensan? ¿Acaso podría llevarnos a preguntarnos por nuestra “fascinación” por la muerte? ¿Cuáles son los motivos culturales que impiden la resolución de nuestros conflictos, dentro de ciertas reglas y según ciertos rituales, que no impliquen necesariamente el derramamiento de sangre? ¿Qué nos lleva a querer eliminar, como actores sociales y por métodos violentos, al otro como sujeto diverso? Ello nos lleva a revisar las relaciones entre cultura y violencia, que no es más que identificar las maneras como las sociedades transan -en términos simbólicos e históricos- con su propia violencia. Dado este cuadro en el que se corre el riesgo que las cifras nos agoten y hagan perder de vista el bosque, a pesar que observemos sus árboles, cabe preguntarse cómo es que se puede vivir en semejante escenario, es decir, cómo se puede vivir con ello. Y en esa lógica, ¿Cómo ha logrado la población que conforma la nación llamada Colombia convivir con sus violencias a lo largo de su vida republicana?

El problema y las premisas

Y es por esas inquietudes que se llegó a este trabajo. Una sociología de la interacción cotidiana en el ámbito de violencia y conflicto armado en una región colombiana. De eso se trata en suma el estudio que aquí se presenta. Considero pertinente esta investigación porque el análisis del conflicto armado en dicho país sudamericano se ha hecho -quizás en correspondencia con la concepción estrecha de lo político y de lo público que hemos tenido en Colombia- desde la sociología y la ciencia política, pero ignorando las implicaciones culturales de lo político. Comparto con Blair (2004: 28) el considerar que la cultura no es un campo ajeno a la política sino que, más bien y siguiendo a Geertz, la política de un país refleja el sentido de su cultura. El pacto social, cualquiera sea la forma que tome, se caracteriza, al menos en las sociedades

⁷ Las inquietudes que despierta en la comunidad internacional el “problema colombiano” son diversas: ¿Es posible que Colombia represente el principal factor de desestabilización regional afectando la seguridad del conjunto del hemisferio occidental? Actualmente, Colombia constituye uno de los pocos casos que restan en el mundo de lo que se ha denominado “conflictos armados prolongados”, puesto que tras la finalización de la guerra fría, el mundo asiste a la evidente disminución de conflictos armados: ¿por qué persiste entonces el enfrentamiento en Colombia? Esa no es cualquier pregunta: tal vez es “la” pregunta más importante que nos compete a todos los que nos duele este singular país desangrado.

occidentales, por el mantenimiento de la prohibición de matar a otro. Y este pacto social brilla por su ausencia en Colombia.

El supuesto que recorre el presente trabajo, es que el conflicto y la violencia en Colombia tienen su propia regularidad y estructura que permiten tipificar y normalizar la vida social, aunque sea sólo para sobrevivir, surgiendo así las estrategias cotidianas de la población civil.

El punto de partida para dar cuenta del problema, fue la interacción de los individuos y su hacer, es decir, su mundo cotidiano como espacio intersubjetivo. A tal efecto, se requería indagar en las acciones sociales como comportamientos que suponen experiencias subjetivamente provistas de sentido, es decir, comprender los vínculos sociales, captando su carácter normal sin reducir su particularidad. Dicha comprensión, hace accesibles los significados dados a sus prácticas, así como los acervos de conocimientos que guían a los pobladores del municipio estudiado, para entender así sus posiciones frente a los actores armados y, por ende, frente al conflicto.

Es pertinente, en este momento del análisis, hacer referencia al concepto de “acción” y de “acción social” que nos ha legado la obra weberiana. En “*Economía y sociedad*,” Weber (1964:11), comprende por acción “*aquella conducta humana que su propio agente o agentes entienden como subjetivamente significativa, y en la medida en que lo es. Tal conducta puede ser interna o externa y puede consistir en que el agente haga algo, se abstenga de hacerlo o permita que se lo hagan*”. La “acción” es una conducta humana en la que el individuo o individuos de la acción, la enlazan con un sentido subjetivo. Respecto a la acción social, Weber la define como “*una conducta humana con sentido y dirigida a la acción de otro*”, es decir, aquella conducta en la que el significado que a ella atribuye el agente (o agentes), entraña una relación respecto a la conducta de otra u otras personas, y en las que tal acción determina el modo en que procede dicha relación⁸.

⁸ Weber identifica 4 formas de acción social, como modelos ideales: Tradicional (costumbre); Afectiva (emocional); racional con arreglo a valores; y racional con arreglo a fines. La rutina colectiva es el punto de partida originario en que puede surgir la acción social como tal, en cuanto “acción tradicional”; aquí la racionalidad subjetiva parece disuelta en el automatismo mecánico de la costumbre popular. La “acción afectiva” constituye un momento posterior en el proceso de racionalización, y su contenido es la pasión individual. En su propia descarga afectiva, la conciencia subjetiva rompe con la rutina tradicional y, afirmándose como subjetividad, se pone en camino de la autoconciencia racional. La “racionalidad con arreglo a valores”, sigue implicando el momento de la colectividad, y se corresponde con formaciones intelectuales tales como la religión, la ideología o la ética. Cuando la razón subjetiva es autoconsciente de sus fines individuales, la realidad deviene instrumental; es el momento de la “acción racional con arreglo a fines”, en la que su forma teórica es la ciencia, susceptible de aplicación tecnológica.

Si bien Weber presenta cuatro tipos de acciones sociales básicas, no necesariamente está estableciendo una segmentación rígida de las mismas⁹. En el pensamiento y la acción de los hombres pesan valores adquiridos. Los seres humanos persiguen fines, llegando a estos a través de diversos medios. Las consecuencias de una acción social se relacionan, entonces, con los medios utilizados y los fines perseguidos.

Weber destaca la infinitud de los hechos sociales en las relaciones del hombre en el devenir histórico de la humanidad, por lo que entiende que es imposible establecer axiomas que puedan explicar en forma homogénea y universal el comportamiento humano. Estos comportamientos, deben segmentarse para ser objeto de estudio a elección del científico. La relación social es una conducta plural donde existe una interacción entre los sujetos. Cuanto mayor es la multiplicidad de los actuantes, más compleja y dinámica resulta su trama. Weber ve que la sociedad en sí es una enorme y numerosa trama de relaciones sociales.

Si estamos de acuerdo en el hecho que la muerte en Colombia es excesiva, no sólo es por la cantidad de muertos producidos por esta sociedad, sino por lo excesivo de la carga simbólica inscrita en las maneras utilizadas para ejecutarla, y de las formas simbólicas (el lenguaje, por ejemplo), para nombrarla y para narrarla. Y es, finalmente excesiva, en las ceremonias funerarias y en los ritos de la muerte que utiliza para tramitarla, ritos que terminan por agotar su eficacia simbólica que los asiste al volverse cotidianos, esto es, al hacer de algo extraordinario¹⁰, una practica rutinaria¹¹.

El tema de la cultura ligado a la violencia, todos lo sabemos, es suficientemente complejo y “oscuro”, pero concebimos esta investigación –siguiendo al recientemente desaparecido

⁹ Desde la otra orilla, el funcionalismo ve limitada la acción social por las normas y valores, lo cual refleja una teoría de determinación estructural del sistema social, que quizás solo sean 'condicionantes estructurales' y hasta solamente de índole artificial o manipulado, pero que inhiben al sujeto de la acción

¹⁰ Lo “ordinario” o común en situaciones “normales” sería morir de “muerte natural”, vale decir, de pulmonía y no de “plomonía”.

¹¹ En “The Forest of Symbols (1967) y en “The Ritual Process” (1969), Victor Turner entiende los significados rituales como códigos de significado social con una influencia inmensa en la mente. Siguiendo entonces a Turner, la concepción del ritual se asume como un sistema total de símbolos, y el símbolo ritual es definido como “la unidad más pequeña del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual”. Cabe señalar entonces la diferencia entre ceremonia y ritual, indicando que la primera es confirmatoria y el segundo transformatoria. Si bien el ritual de la muerte expresa situación de conflicto, recordemos aquí que la función de este (siguiendo a Durkheim), es lograr que los individuos acepten su destino en la vida, es decir, que asuman los papeles que la sociedad les asigna, al mismo tiempo que como ritual adapta a los individuos a los valores incontrovertibles de la vida social.

Clifford Geertz (1996:88), como el privilegio de “*dirigirse al estudio de problemas lo suficientemente oscuros como para poder descubrir algo*”.

El análisis buscó desentrañar los contextos de significación en los cuales se produce la interacción entre la población civil desarmada y los actores armados. Y ello bajo la premisa de que el eje de la confrontación es el conflicto armado y, además, que toda la interacción social está atravesada por él.

Para indagar en el objeto de investigación, el camino elegido fue el estudio de la vida cotidiana en un municipio del occidente colombiano. Hacer referencia a la cotidianidad permitió una vía para entender la complejidad de las relaciones sociales, en la medida en que reflejaba la manera en que los sujetos gestionan sus necesidades sociales, así como los caminos que eligen para lograr satisfacerlos. Comprender la condescendencia y sumisión de los sujetos frente a los grupos armados, va más allá de la presión de la violencia por vía de las armas, situándose en los modos como se legitiman o no los actores ilegales frente a la población, los modos como los pobladores perciben la presencia o ausencia del Estado, así como los argumentos que construyen para justificar la violencia crónica que los acecha.

Las preguntas de partida, las hipótesis y objetivos

Al iniciar este largo proceso, las preguntas de partida que atravesaron el trabajo fueron las siguientes:

- 1) ¿Cómo se constituye la aceptación de la violencia como parte del “orden” cotidiano, de ver y relacionarse con el mundo?
- 2) ¿En qué sentido podríamos seguir hablando de vida cotidiana cuando esta supone regularidad, normalidad, orden, continuidad, naturalidad, etcétera, y la violencia todo lo contrario?
- 3) ¿Cómo se construye la percepción social (representación social) del otro como enemigo o alguien/algo al que sólo se le puede tratar en términos instrumentales?
- 4) ¿Cómo incide el conflicto en lo que los pobladores dicen (discurso) y hacen (prácticas sociales), cuando se encuentran frente a guerrilleros, paramilitares o representantes del Estado?

De ahí se derivaron las tres hipótesis fuertes del estudio:

- 1) La violencia es un medio de socialización y de formación de las relaciones y órdenes sociales de los Vallecaucanos, por lo que la regularidad de esta permite su normalización en el mundo de sus vidas cotidianas.

- 2) La memoria de las violencias y guerras configuran los trayectos biográficos-corporales de los pobladores, operando en la conformación de sus acervos de conocimientos.
- 3) Los pobladores configuran sus haceres cotidianos en el mundo exterior, acorde al orden social que construyen y regulan los actores armados, a través de estrategias “recetadas” que se transmiten generacionalmente, a modo de “herencia social”.

Los objetivos que configuré en un comienzo fueron los de conocer la multiplicidad de códigos de conducta y criterios de clasificación de la otredad/alteridad que construyen los actores armados, así como los que obedecen los pobladores en el mundo municipal, para así dar cuenta de los acervos de conocimiento de los pobladores para interactuar y sobrevivir en medio del conflicto.

Es decir, el trabajo que aquí presento se inscribe, a grosso modo, en la discusión relevante de la violencia en el mundo cotidiano de una sociedad cuyos integrantes nacen, viven y mueren en un contexto conflictivo.

En la interacción la tensión no desaparece, sino que continúa “enmascarada” en la vida cotidiana de los actores en el municipio, lo que impide entonces pensar el supuesto de la interacción como algo no problemático, normal y evidente. Al contrario, la interacción se construye conflictivamente, se negocia asimétricamente y hasta nuevo aviso.

En Colombia ése es el mundo público, real, cotidiano, es decir, no es un mundo escondido, sino que es visible. Otra cuestión es que esa visibilidad sea “escandalosa” para observadores externos, pero para los nativos ese es su mundo social cotidiano¹². Al observar la repetición de los diversos “haceres” cotidianos de los pobladores, se comprende la construcción significativa de sus mundos sociales. La violencia y el poder se encuentran articulados en el espacio de recreación del vínculo social municipal, es decir, constituyen un medio de socialización y de formación de relaciones y órdenes sociales.

¹² Las élites colombianas han llevado a cabo durante décadas toda una campaña de “invisibilidad” del conflicto, afirmando que Colombia no sufre un conflicto armado, sino que se encuentra acosada por “subversivos” en algunas zonas remotas del país y que la imagen de una Colombia con guerrillas, narcotráfico y paramilitares es una exageración de los académicos e investigadores “antinacionalistas”.

La estructura del texto

A modo de brújula, el estudio consta de siete capítulos. El primer capítulo constituye el eje teórico del texto, en el que se discuten los dos grandes temas de la investigación: la violencia y el mundo de la vida cotidiana. Respecto a la violencia, se enfatiza en su carácter social y multidimensional y, en el caso de la cotidianidad, nos serviremos de la caja de herramientas conceptuales que nos brinda la tradición fenomenológica. Acto seguido, presentaré las diversas vicisitudes que constituyeron el proceso de recolección de información, el cual denominé “sendero metodológico”.

El segundo capítulo que, a fuerza de no tener otra forma más original de nombrarlo, lo he denominado “Colombia. Un mundo social incierto, frágil y sui géneris”, se compone de dos epígrafes. En el primero, el más largo de todo el texto, tanto en lo descriptivo como en lo analítico, se titula “Actores armados y dinámicas territoriales”. En este epígrafe se presenta una breve referencia histórico-política de los grupos armados, así como una mirada concentrada en pensar y “visibilizar” la responsabilidad histórica del Estado colombiano en la configuración de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte.

Acto seguido, se aborda a las guerrillas, paras y narcotraficantes, dando cuenta de las lógicas de territorialización y depredación que vienen caracterizando al conflicto armado colombiano reciente, acentuado desde los años ochenta por la emergencia y consolidación de los carteles de la cocaína. Finalmente, para situar al lector en el contexto político actual de ese país, se hace referencia al gobierno del reelecto mandatario Álvaro Uribe Vélez, un gobierno de “mano dura” por una parte, pero también salpicado por múltiples escándalos políticos recientes, en lo que atañe a las responsabilidades en la conformación, apoyo y “permisividad” de escuadrones paramilitares y sendas violaciones de Derechos Humanos.

Se cierra el primer epígrafe de este segundo capítulo, con un breve análisis de la polémica Ley de Justicia y Paz, que aquí he denominado como la “Escenografía de la impunidad”, pues no solamente propicia que los paramilitares no “paguen” sus crímenes y violaciones a los Derechos Humanos, sino que además produce verdadera vergüenza ante una comunidad internacional que observa un circo político maquillado como “reparador”, pero que no es tal.

El segundo epígrafe de este segundo capítulo, intenta caracterizar la zona de estudio- que en nuestro caso está delimitada en el centro y norte del Valle del Cauca-, enfatizando las especificidades de esta región respecto a otras de mayor violencia (casos Caquetá, Arauca, Putumayo, etcétera) o de menos violencia (como lo es Bogotá).

En el tercer capítulo, intento dar cuenta de la coexistencia de las diversas justicias “para-estatales”, en el que el lector u observador encontrará interesantes similitudes (y también fuertes diferencias) entre las impuestas por la guerrilla y el mismo paramilitarismo (control de la delincuencia, defensa del honor sexual, tolerancia o intolerancia, limitación del consumo de alcohol y drogas, homofobia, códigos de honor, discrecionalidad y arbitrariedad, entre otros).

El cuarto capítulo -cuyo título es un préstamo de una milenaria frase china- nos lleva al centro neurálgico del proyecto y, así mismo, al análisis del material empírico obtenido en el trabajo de campo. Se trata de un abordaje fenomenológico en el que desarrollo dos aspectos:

1) Por una parte, en 4.1, las diversas estrategias de sobrevivencia e instrumentalización (que subyacen en las interacciones pobladores municipales-actores armados, así como la de campesinos-actores armados), son entendidas como acervos de conocimiento, siguiendo el legado de Schutz. Ahí es donde se puede ubicar parte de los hallazgos más reveladores del estudio: el descubrimiento de las estrategias para “llegar a morir de viejos” como diría una entrevistada, todo lo cual propició la construcción de una tipología de la interacción que derivó en las categorías de sujetos entendidos como Ciegos, Sordos y Mudos (en adelante CSM).

2) De otra parte, la apropiación y uso de los espacios encuentra su “lugar” en 4.2, a través de la construcción de la categoría “santuario”, como espacio inmune a la violencia, definido a partir del “miedo” a perder la satisfacción de diversas necesidades de los pobladores. De ahí que se descubriera una oscilación entre un menor y mayor grado de inmunidad en la frontera protectora, ya sea que se trate de la iglesia, el mercado o el prostíbulo: 1) El respeto (¿miedo?) a Dios representado en las instalaciones de una parroquia católica, 2) el templo del placer de oferta-demanda que encuentra en el prostíbulo su mayor fuente de intercambio, y en donde ni se conversa demasiado y menos se mata en un espacio de “goce pagano”, y 3) la consideración que “donde se come no se mata”, representado en el mercado de alimentos.

En el capítulo quinto, llegaré a convencerme que esta investigación ha producido, a mi modo de ver, el desenmascaramiento de las significaciones y valoraciones en un mundo social en conflicto. Y así lo he titulado.

En este quinto capítulo desarrollo tres epígrafes. En 5.1, presento la reputación, el prestigio y el respeto como ejes articuladores de las motivaciones de los actores armados paramilitares, así como de las ilusiones y ambiciones de los que quieren ingresar al

“reparto del pastel” de los recursos. El arma que se carga- cual falo que provoca éxtasis y placer en sujetos paramilitares y narcos cuyo proyecto de vida se conjuga simple y llanamente en la acumulación de tierras, la compañía de “mujeres-siliconas” y de automóviles enormes y “poderosos”-, es un factor de convocatoria a los armados a sentir poder, ese que conlleva a creerse “administradores” del derecho de decidir quién vive y quién muere.

El título de una canción de narco-corrido que, de tanto escucharlo (soportarlo), terminé aprendiendo, me ha inspirado para así mismo denominar al epígrafe 5.2, en el que se buscó encontrar esas pistas de la proyección de sujetos del “no futuro”, a modo de “vivo y gozo ahora, que quizás mañana me matan”. La visión de futuro y las expectativas, se reducen drásticamente en ese título de la canción de Darío Gómez “Nadie es eterno en el mundo”. De igual modo, este camino me llevó a descubrir los disfraces de la inocencia (falsa dicotomía víctimas/victimarios), lo cual desarrollaré en el epígrafe 5.3

En el sexto capítulo, se establece la vinculación de la memoria con la vida cotidiana. Las voces de entrevistados, sobre todo los de mayor edad, corroboran la discusión sobre cómo se enlazan los tres tiempos: pasado (memoria), presente (sobrevivir) y no-futuro. Aquí se explicita la relación entre violencia y memoria en Colombia (enfazando la dimensión política de la guerra y la violencia), confirmando fuertes intuiciones acerca del vínculo entre el cruce de violencias y las memorias de las guerras en el trayecto biográfico-coral de los pobladores colombianos

El séptimo capítulo tiene un cierto aire de cierre, en el que abordaré lo que he denominado el doble filo de la guerra colombiana: la militarización de la política y la bandolerización de la guerra.

De igual modo, en este último capítulo, presento a consideración del lector, siete conclusiones tentativas (y pretenciosas), las cuales no impiden dejar entreabierto esta puerta del estudio, con el ánimo de seguir en una discusión polifónica que obviamente no es posible de cerrar nunca, pues toda tesis deja a su autor (al igual que al director y lectores), con la sensación de que siempre algo más se pudo haber agregado. A pesar de ello, toda investigación, tesis o texto debe “dejarse leer por sí sola”, es decir, debe ser lo suficientemente clara y rigurosa para intentar dar cuenta del problema, preguntas e ideas centrales. Recomiendo muy especialmente al lector ir a los “Anexos” en los que se presentan los diversos abordajes investigativos que han dado cuenta del estudio del conflicto armado colombiano (a modo de “Estado del arte de la investigación sobre la violencia y el conflicto armado”), así como las guías de observación y los cuestionarios

utilizados para la recolección de información en el trabajo de campo. El estudio se cierra con la presentación de la bibliografía consultada, la cual incluye en mayor medida estudios e investigaciones específicas del contexto colombiano.

Esta investigación sobre la interacción cotidiana en el conflicto armado colombiano no es producida precisamente por un “outsider” sino por un actor-testigo, un observador participante privilegiado que creció oyendo sobre la violencia y viviendo (sufriendo) en ella, pues esta situación estuvo presente en los acontecimientos transcurridos en su propio trayecto biográfico. Las huellas de la memoria del autor (como actor), están presentes en la propia elección del problema de investigación y en el propio derrotero de esta tesis. Más allá del doble sentido o el sarcasmo que acompañarán -como sello de autor - los recortes analíticos a lo largo de las siguientes páginas, el estudio que aquí se presenta podrá ser juzgado, con toda razón, como amargo, lúgubre y sin esperanza. No se ha tenido la intención de ofrecer remedios de paños de agua tibia a una realidad que ha desbordado hace mucho tiempo- si se me permite la redundancia-, los propios bordes de la cornisa social. El estudio plantea más interrogantes que respuestas, pues no pretende aportar soluciones fáciles a un conflicto que no es sencillo comprender¹³. Pese a ello, una irónica alegría se refleja en el día a día de estos sujetos y les permite la conmemoración de fiestas a todo lo ancho del territorio nacional¹⁴. Pero ¿de qué se ríen estos seres conocidos como “colombianos”? ¿Cómo es que bailan tanto? ¿Cómo es que hacen uso y disfrute de su sensualidad y sexualidad mientras se siguen matando? ¿Tienen acaso motivos para festejar? ¿O son solo estrategias para olvidarse de sus violencias?

Para ir dejando entreabierta esta puerta introductoria que ya irremediablemente hemos abierto (y compartido) tanto el autor y el director-copiloto, como los lectores, evaluadores, observadores, curiosos y voyeuristas, es menester señalar que a los colombianos nos identifica algo que nos destruye como sociedad: la violencia. Y en ese sentido, porque pertenecemos al mundo de lo absurdo como rasgo definitorio de nuestra identidad, esta investigación es- también- un coro a mil voces. Los relatos o narraciones que aparecen aquí estremecen ciertamente, pero también alientan, pues en dichos relatos los sobrevivientes se expresan para que los muertos vivan, es decir, para que los caídos no

¹³ Soy un convencido que la investigación social no puede resolver conflictos armados, sino nada más y nada menos que intentar comprenderlos, aunque más no sea desde una perspectiva delimitada. Ello ya es un esfuerzo descomunal.

¹⁴ No tengo a la mano el número exacto, pero alguna vez escuché en un evento académico a un antropólogo que señaló cerca de 200 fiestas que se celebran todos los años en Colombia, entre “Reinados” de belleza, festividades religiosas, ferias populares, carnavales y festivales varios. Se vive y se mata, pero también se goza, a modo de ¿consuelo?

queden en la oscuridad del olvido. Por ello consideramos que las dimensiones subjetivas que se destacan a través de estas páginas, no impiden observar los nexos presentes con la dimensión del colectivo colombiano. Y solo entonces podríamos llegar a comprender el por qué un poblador de nuestra zona de estudio afirme con enorme sutileza y fina inteligencia, descubriendo (¿desenmascarando?) al ser nacional colombiano: “*en Colombia lo más democrático que hay es la violencia: porque todo el mundo la ejerce*”.

Capítulo 1 Delimitando la mirada

I Los recortes analíticos y el abordaje teórico

Los dos grandes temas del presente estudio son el mundo de la vida cotidiana y la violencia. Ambos son los ejes desde los que se articula el problema de investigación, el cual consiste en los tipos y espacios de interacción que se establecen cotidianamente en el mundo social de una población inmersa en el conflicto armado.

a) Sobre el mundo de la vida cotidiana

Este primer gran tema de estudio ha sido objeto de interés de las ciencias sociales, siendo la perspectiva fenomenológica¹⁵ el muelle de partida del que zarparé para llevar a buen puerto el abordaje teórico de nuestras inquietudes.

El mundo de la vida cotidiana del individuo- nos dice Schutz (1993)-, no es en modo alguno “su” mundo privado, sino, desde el comienzo, un mundo intersubjetivo, compartido con sus semejantes, experimentado e interpretado por otros; en síntesis, es un mundo común a todos los que lo rodean, incluido el propio individuo. Schutz retomó de la fenomenología el análisis del mundo de las vivencias que se denominará “el mundo de la vida” (*Lebenswelt*).

¹⁵ En la sociología fenomenológica se otorga un papel preponderante al individuo en la construcción de la realidad social, es decir, en la conformación de la estructura social. Schutz es uno de los primeros pensadores en reivindicar como objeto de estudio de la sociología el ámbito de la “socialidad”, o sea el conjunto de relaciones interpersonales y actitudes de la gente que, aunque dependen de patrones aprendidos, son pragmáticamente reproducidos o modificados en la vida cotidiana. Desde otra perspectiva, pero bajo ámbitos de intereses cercanos, encontramos la obra de Simmel, quien abordó fenómenos de pequeña escala, especialmente la acción y la interacción individual. Fue reconocido por su análisis de las formas de interacción (el conflicto) y los tipos de interactores (por ejemplo, el extraño). Simmel había señalado que la comprensión de la interacción entre la gente era una de las grandes tareas de la sociología. Sin embargo, era imposible estudiar el cuantioso número de interacciones de la vida social sin disponer de algunas herramientas conceptuales. Fue así como nacieron las formas de interacción y los tipos de interactores. Simmel presintió que podía aislar una cantidad limitada de formas de interacción que se daban en un elevado número de escenarios sociales. Con este bagaje, se podrían analizar y comprender los diferentes marcos en los que se desenvuelve la interacción (Simmel: 1986; Goffman: 1959).

Las principales características del mundo de la vida cotidiana es que es presupuesto, o sea que sus significados y las construcciones que lo configura son sociales, nos anteceden y conforman un conjunto de códigos y formas de ver lo que nos rodea, que en principio aprendemos y no cuestionamos. También es un mundo intersubjetivo, es decir, construido entre todos los actores (Estrada: 2001). Desde un aquí y un ahora determinados, cada uno de nosotros percibe, define e interpreta las actitudes y acciones de los demás. Los procesos que se dan en el mundo social son el resultado de múltiples acciones y de las recíprocas interpretaciones del sentido de las mismas, hechas por los sujetos de la interacción. Para Schutz, el mundo de la vida cotidiana (Lebenswelt), está conformado por personas que viven en él con una actitud “natural”, que consiste en tomar las cosas de manera aproblemática, acrítica y práctica¹⁶.

Ese mundo de la vida está constituido por tipificaciones, o sea que el conocimiento que tenemos del mundo —natural y social— supone construcciones, es decir conjuntos de abstracciones, generalizaciones, formalizaciones e idealizaciones propias del nivel respectivo de organización del pensamiento. En términos estrictos, cualquier dato nuevo es ubicado de manera no consciente en su horizonte de significación, y en forma automática interpretada por asociación con hechos anteriores que se le parecen. Con las tipificaciones los objetos se estabilizan como objetos idénticos a sí mismos.

Para Schütz, la estructura social es un mundo preorganizado por las interacciones interindividuales de las generaciones precedentes: ese mundo constituye la realidad referencial para el individuo. No es posible entonces que las estructuras de la vida social se configuren “más allá” de los actores sociales¹⁷, sino, por el contrario, estas se configuran a partir de las interacciones sociales. La realidad social es reproducida y transformada constantemente por los individuos mediante la interacción. Los individuos adoptan actitudes y comportamientos y adquieren conocimientos a partir de lo observado y lo aprendido del mundo preorganizado. La mayoría de las veces también utilizan las tipificaciones (roles sociales, estrategias, significados, etc.) y las recetas (los modos de proceder, estrategias que aplicamos, reglas de conductas, etc.). Los individuos tienen capacidad de transformar el mundo preorganizado, pues el actor social abandona las tipificaciones, cuando se ve enfrentado a problemas verdaderamente contrarios a sus

¹⁶ En las cercanías a las tesis fenomenológicas señaladas en este estudio, es posible percibir un tipo de individualismo metodológico, proporcionado a partir de la definición de acción social de Weber, el cual implica que el individuo da un significado subjetivo a su comportamiento que tiene en cuenta el comportamiento de los demás y está, por ello, orientado en su dirección.

¹⁷ Como podría derivarse de la obra de Durkheim.

intereses, fines, convicciones o su conciencia. Entonces es cuando tiene que encontrar nuevas y diferentes soluciones y cuestiona lo existente. Crea en ese momento nuevas respuestas y con ello transforma, en la medida de su acción, el mundo preorganizado y modifica las tipificaciones y las recetas.

El individuo lleva a cabo su aprendizaje en el mundo inmediato, el que le rodea, es decir, las relaciones cara a cara, relaciones “nosotros”. Sin embargo suele aplicar tanto recetas como tipificaciones en el mundo con el que convive, el mundo de las relaciones algo más distantes, menos personales, es decir, el mundo de los grupos, de las organizaciones sociales, (éstas son relaciones “ellos” en donde aplica sus estrategias). Los dos mundos, “nosotros” y “ellos”, forman lo que Schütz denomina “el mundo de la vida” o “la vida cotidiana”. En esta vida hacemos uso de un determinado conocimiento, que es nuestro conocimiento de la realidad, al que denomina “conocimiento común” o “sentido común”. Este se refiere a todo aquello que consideramos normal, todo lo que nos permite desenvolvernos en la vida cotidiana. El sentido común no es otra cosa que la interiorización de las tipificaciones y recetas (interacciones normativas).

Una característica central del “lebenswelt” lo constituye la intersubjetividad. (Schutz, 1993: 28). Para develar la interacción en el “Mundo de la vida”, Schutz parte del concepto weberiano de “acción social” entendida como una acción significativa. Pero además, una acción es social si entre los miembros que interactúan tiene lugar una interpretación. En primer lugar, Schutz distingue “tres mundos”: el de los antepasados o predecesores (Vorwelt), el de los contemporáneos (Mitwelt) y el de los sucesores (Folgewelt). Respecto al primero, solo puedo ser un observador y no un actor; con los sucesores, en cambio, es posible establecer influjos, pero ellos no pueden hacer lo propio conmigo. Sin embargo, Schutz centra la mayor parte de sus esfuerzos en caracterizar el mundo presente, el de los contemporáneos, dado que, a su juicio, es el más interesante a nivel social. Aquí es donde se establece la importante distinción entre “congéneres” o “asociados” (Mitmenschen) y los “meros contemporáneos” (Nebenmenschen). Los primeros “viven conmigo”, los segundos, en cambio “a través mío”¹⁸

¹⁸ Afirmará Schutz al respecto: “Mientras yo solo puedo observar mis propias vivencias después de pasadas y transcurridas, puedo observar las tuyas cuando están efectivamente ocurriendo. Ello implica que tu y yo somos, en un sentido específico “simultáneos”, que “coexistimos”, que nuestras respectivas corrientes de conciencia se intersectan. Tal como el mundo de mi percepción actual es solo un fragmento de todo el mundo de mi experiencia, y este es solo, a su vez, un fragmento del mundo de mi experiencia posible, del mismo modo el mundo social (que es a su vez una porción de ese “mundo total”) solo es vivenciado directamente por mí en fragmentos, a medida que vivo de momento a momento. Este mundo social directamente vivenciado esta a su vez, por su parte, segmentado de acuerdo con perspectivas conceptuales” (Schutz, 1993: 172).

En ese mundo de la vida, los objetos del mundo social están constituidos dentro de un marco de “familiaridad y preconocimiento”, proporcionado por un repertorio de conocimientos disponibles cuyo origen es fundamentalmente social. Esto es el “acervo de conocimiento a mano”.

El repertorio de construcciones sociales de los actores se mantiene de forma tipificada¹⁹. En su nivel más inmediato- afirmarán Berger y Luckmann (1968)-, la sociedad es un conjunto de acciones tipificadas, distribuidas por actores también tipificados. Acciones típicas y personas típicas construirán el fondo del saber común básico para orientar a los sujetos en su medio social. Sin ellas, la sociedad debería en cada momento volver a fundarse. La sociedad pasa por las subjetividades; los hechos sociales son del orden del “significado” compartido.

Este complejo de experiencias se caracteriza por haber resistido la prueba de las desilusiones, por lo cual son aceptadas sin tematizarse, pero sólo “hasta nuevo aviso”. Este complejo de experiencias no constituye un conjunto coherente y sistemático de vivencias, opiniones, creencias y experiencias, pero sin embargo es el marco desde donde se ejerce toda duda (Carassale: 2004). Estas experiencias no cuestionadas son experimentadas como típicas. Las tipificaciones de acciones y actores son producidas por un trabajo social de interpretación y fijación de significados, donde son socialmente producidas o institucionalizadas pero luego es borrada la huella de su origen, como “realidad” absoluta y no contingente. De realidad producida (por el acuerdo intersubjetivo de asignación de significado a las acciones) deviene “realidad” deificada, la realidad producida de las instituciones.

Entiende Schutz que resulta fundamental en este proceso, la transmisión intergeneracional o socialización de los nuevos miembros en la enseñanza del mundo social. Al ser transmitida, la institución borra su génesis social para ser presentada, y luego representada como “realidad”: objetivada, realidad socialmente producida de las

¹⁹ El concepto de habitus en Bourdieu se asemeja al de las tipificaciones, se refiere a la reproducción social, es decir, cómo los individuos interiorizan los elementos estructurales de su medioambiente (social como decían Berger y Luckmann). Para Bourdieu (1995), el habitus hace alusión a las estructuras sociales de nuestra subjetividad, es decir, nuestra entidad como persona social, nuestro yo social, no nuestro yo psicológico. Las estructuras son los modos de pensar, de hacer y de comportarse, interiorizados durante el proceso de socialización; es lo que Bourdieu llama “la interiorización de la exterioridad”. Ahora bien, cada habitus individual combina de un modo diferente y específico múltiples experiencias sociales, sintetizadas por cada individuo de una manera diferente y también a menudo transformadas creativamente; parecido al cambio de las tipificaciones y recetas de Schutz, pero ahora ese cambio ocurre en el campo como ámbito de lo simbólico en el que tiene lugar la exteriorización de lo interiorizado (habitus).

instituciones, requiere ser cubierta por un sendo marco de verdad, una especie de escritura de “segundo orden”.

Todo proceso culmina en la escena cotidiana, por ello es el espacio en que las instituciones sociales se corresponden a las subjetividades que las desempeñan. El mundo está en orden: la sociedad se reproduce y el sujeto encuentra el sentido. La cotidianidad pasa a ser así, desde el punto de vista de la intersubjetividad, el mundo seguro en que no hay incertidumbre.

¿Cuál es el proceso mediante el cual el actor, en la vida cotidiana, determina su actuar futuro después de haber sopesado diversos cursos de acción posible? Esta es la pregunta que dirige Schutz (1974:86) en torno a los diferentes proyectos de acción, entendiendo por acción *“un proceso en curso que es ideado por el actor de antemano, es decir, que se basa en un proyecto preconcebido.”*²⁰

En “La elección entre diversos proyectos de acción”, Schutz enfatiza los cursos y los proyectos de acción en el marco de una teoría de las realidades múltiples enfocado al problema del orden social. El objetivo que perseguía era entender cómo los procesos sociales están compuestos por comportamientos individuales, y también aprehender cómo el proceso de interacción constituye un intercambio entre individuos (Schutz, 1974: 86). De ahí que Schutz introduzca la diferenciación entre el “para” y el “porque” de los motivos: si bien normalmente se afirma que las acciones son conductas motivadas, el concepto de motivo es equívoco y es necesario distinguir entonces dos tipos de motivos.

Por una parte podemos entender el motivo de una acción como el objetivo que dirige el comportamiento, el estado de cosas que se pretende alcanzar mediante la acción, a este motivo Schutz le llama motivo “para”. Frente a esta clase de motivos es necesario distinguir otra clase de motivos, los motivos “porque”: estos aluden a la experiencia pasada del actor, las cuales lo conducen a actuar del modo en que lo hace. En este sentido lo motivado es el proyecto de acción, en el transcurso mismo de la acción el actor no tiene conciencia del motivo “porque”, el motivo de la acción en el transcurso de la misma es el objetivo (el motivo “para”), mientras que el motivo “porque” sólo puede ser observado por el actor cuando la acción ha sido cumplida (Carassale: 2004).

²⁰ Schutz, Alfred (1974) “La elección entre diversos proyectos de acción” pp. 86-108. En Schutz: El problema de la realidad social. Editorial Amorrortu, Buenos Aires.

Las experiencias del motivo “porque” remiten siempre a un pasado o futuro perfecto, porque esta estructura temporal sólo puede revelarse retrospectivamente:

“La estructura temporal de todo proyecto tiene para nosotros suma importancia: nuestro análisis ha demostrado que siempre se refiere al acervo de conocimiento que el actor tiene a mano en el momento de esbozar el proyecto, pese a lo cual lleva consigo su horizonte de anticipaciones vacías, el supuesto de que el acto proyectado se producirá de una manera típicamente similar a todos los actos pasados típicamente similares que el actor conoce en el momento de elaborar el proyecto. Este conocimiento es exclusivamente subjetivo, y por esta misma razón el actor, en la medida en que vive en su proyectar y actuar, se siente exclusivamente motivado por el acto proyecto de la manera “para”.” (Schutz, 1974: 90)

Hasta aquí he delimitado algunos conceptos claves formulados desde la sociología fenomenológica para comprender el mundo de la vida cotidiana. Pero aquí viene una pregunta pertinente a nuestros fines y es ¿Por qué hacer uso de la fenomenología para dar cuenta de la interacción cotidiana entre pobladores de la región del Valle del Cauca y los grupos armados? Para responder dicha inquietud, debemos señalar inicialmente que, en los cientos de estudios sobre el conflicto armado colombiano, la explicación funcionalista y estructural funcionalista predominó en los llamados “violentólogos”²¹ de la primera época. Sin embargo, dichas perspectivas, aunque valiosas y pertinentes -porque abrieron camino-, no dieron cuenta de las tramas de significación presentes en ese mundo social que, en innumerables ocasiones, fue desdeñado. Por esas ausencias y por la necesidad de recuperar las significatividades de los actores, es que partiré de Schutz y otros autores cercanos (Berger y Luckman, por ejemplo), pero no como discursos cerrados y suficientes, sino como aportes rigurosos que este pensador austríaco legó a la sociología contemporánea. Para Girola (2002), Schutz arremete contra la “ingenuidad” de funcionalistas y estructural funcionalistas como Merton y Parsons, cuyas perspectivas sociológicas eran las hegemónicas en la época que Schutz vivió en Estados Unidos.

¿Por qué afirma Girola que son ingenuos los estudios funcionalistas? Revisemos sus argumentos:

“1) Porque consideran a la sociedad como un conjunto esencialmente armónico y en equilibrio, que a veces se ve perturbado por agentes principalmente externos y en ciertas ocasiones por tensiones, incompatibilidades y desviaciones internas que de manera rápida los diversos grupos sociales se ocupan de controlar (Girola, 2002: 12)

Este primer argumento es particularmente importante porque las élites y la clase dirigente colombiana se han ocupado de minimizar ante los observadores y prensa

²¹ Así se denominó precisamente en Colombia a la primera Comisión de estudios sobre la violencia en los años setenta. Los medios de comunicación “bautizaron” así a estos investigadores y sin un análisis serio- algo no extraño en los *mass media* de nuestras naciones- quedó así grabado en el diario vivir de la sociedad colombiana.

internacional la magnitud del conflicto armado. Y además, porque la academia en este país en los años cincuenta y setenta presenció la aparición de decenas de estudios que señalaban las “desviaciones” internas en la sociedad colombiana.

2) Porque consideran la conformidad con respecto a las convenciones sociales como un producto natural de la interacción. En el caso de Parsons llegan, por ejemplo, a formular esta apreciación en el conocido “teorema de la estabilidad de los sistemas sociales”, que sostiene que las sociedades y los diversos grupos en ella se mantienen y reproducen a sí mismos gracias a que a través del proceso de socialización los miembros son enseñados en el respeto a las normas y reglas de convivencia de su grupo y sociedad, de manera que internalizan un conjunto de pautas de conducta que los hace actuar de la manera en que los demás lo esperan. La conformidad con las convenciones sociales es natural, espontánea y cuasi automática para Parsons; lo contrario es desviación y por lo tanto es lógico reprimirla” (Girola, 2002: 12)

Respecto a este segundo argumento, bien vale recordar a ciertos intelectuales y políticos (por ejemplo, el filósofo y ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus), para quienes el conflicto armado se explica en la ausencia de pautas de convivencia ciudadana, el respeto a las normas, así como la percepción de la desviación o “enfermedad colombiana” producida por grupos “desestabilizadores”.

Continuemos con el tercer argumento que Girola plantea acerca de la “ingenuidad” de los estudios funcionalistas:

3) Porque tienen en mente un esquema dualista que intentan aplicar a casi todas sus formulaciones, de tal manera que las sociedades son tradicionales o avanzadas, democráticas o antidemocráticas, autoritarias o antiautoritarias, y las personas por ende son buenas o malas, conformistas o desviadas. Esto también puede ser relacionado con la percepción de que la sociedad colombiana es “premoderna”, que tiene rezagos de sociedad “tradicional” y que ello permite explicar el predominio de actitudes autoritarias y antidemocráticas en la población que ingresa en los grupos armados (o aquellos que la apoyan) (Girola, 2002: 13)

Finalmente, porque tienen la idea de que el conocimiento de lo social puede, en algún momento, llegar a formular leyes sociológicas que —a la manera de las leyes de la física— permitan predecir los resultados de los procesos sociales con un alto grado de confiabilidad. Según Lidia Girola,

4) Schutz rompe con la ingenuidad de los análisis sociológicos precedentes (funcionalismo) porque en lugar de concebir a las acciones que se apartan de lo esperado como conducta desviada, Schutz ve los diferentes grados de aceptación de las convenciones como producto de la interacción y la negociabilidad intrínseca de la vida en el mundo cotidiano. Schutz considera el supuesto equilibrio armónico parsoniano como una afirmación sociológica trivial y por ello no acepta el teorema fundamental de la internalización de valores y

normas y la posterior conformidad, sino que sienta las bases para una visión más pragmática, negociada, de las normas que posteriormente —con Garfinkel— desarrolló la etnomedología (Girola, 2002: 13).

Además, hacemos uso de la fenomenología – o acudimos a ella mejor- porque nos proporciona herramientas conceptuales claves para pensar el mundo de la vida cotidiana en una sociedad determinada. Pero- y he aquí un pero significativo, un pero notable, ergo, un pero inmenso- el mundo social colombiano estaría rompiendo *paradójicamente* con los supuestos fundamentales de la vida cotidiana en las sociedades (si seguimos aquí a la sociología fenomenológica): Si el mundo de la vida se caracteriza- según Schutz- por domesticar la incertidumbre a través de la confianza, la aproblematicidad, la evidencia, la actitud natural y la tipicidad (elementos que le ofrecen estabilidad y orden a la realidad de la vida cotidiana), el caso colombiano en cambio “refutaría” esas premisas: en dicho país la incertidumbre es “la única certeza”, pues cientos de poblaciones se encuentran viviendo en medio de la muerte, a merced de la violencia, o -parafraseando a un político mexicano- “muy lejos de Dios pero muy cerca del terrorismo de Estado, paramilitares, carteles de la cocaína y guerrilleros”.

¿Paradójico? Por supuesto que sí. Porque la resolución violenta de los conflictos en el Valle del Cauca tiene su propia regularidad y estructura, lo cual permite tipificar y normalizar la vida social aunque sea sólo para seguir viviendo, sin más pretensiones que “llegar a viejos”. De este modo es que emergen las recetas a modo de acervos de conocimientos, que les ofrece- vía memoria colectiva y herencia social- la experiencia necesaria para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo bajar la mirada y no preguntar más de la cuenta, cuándo denunciar un caso especial a la guerrilla o a los paramilitares- en vez de acudir al Estado- o así mismo, “olfatear” el mejor momento para involucrarse en un grupo armado determinado.

En ese mundo social colombiano, caracterizado como “negador de la otredad” y proveedor de una caja de herramientas para la “cultura de la desconfianza”, los actores sociales optan por apostarle a proyectos de vida sin futuro, es decir, a un “no futuro”: ingresar al laberíntico- y suicida- campo minado del paramilitarismo, guerrilla o narcotráfico. Al observar la vida cotidiana, cabe preguntarse por los intereses del actor social o agente, lo cual implica tomas de decisión por diversos caminos o proyectos de vida.

¿Cómo haré uso de la fenomenología para dar cuenta del problema de investigación que aquí nos convoca? En primer lugar, cabe considerar que si el mundo de la vida en una zona como la estudiada (Valle del Cauca), implica que uno debe “compartir” con

semejantes que portan armas, asesinan sin piedad y ejercen un control social sobre mi conducta, entonces resulta pertinente preguntarse por qué y de qué manera estos pobladores desarmados (campesinos o no) pueden convivir, resistir y seguir sus vidas restringidos en su mundo “público” y delimitados a una mayor autonomía solamente en su espacio privado. Si el mundo intersubjetivo es construido, según la fenomenología, por todos los actores, cabe preguntarse si aquellos que no tienen armas (léase voz, entiéndase “poder defenderse”), tienen alguna ingerencia o no en la construcción del orden social en el que viven.

En segundo lugar, porque desde la fenomenología puedo considerar el carácter presupuesto del mundo de la vida cotidiana de pobladores, narcos, guerrilleros y paramilitares, es decir, observar los significados y construcciones sociales que anteceden y conforman las normas de la vida social, percibiendo- sin embargo- la necesidad de prestar atención y tener sumo cuidado en las observaciones de las actitudes “naturales”, es decir, si los pobladores realmente toman o no las cosas de manera aporosa y crítica. Podría agregar que, en el caso *colombiano*, la premisa de la seguridad no se cumple: la incertidumbre es la única certeza, el orden social se encuentra atravesado por la violencia armada y la cotidianidad -que para otras sociedades podría implicar tranquilidad y seguridad como reflejo de la “normalidad”- en esa anarquía ordenada llamada Colombia no se presenta de ese modo, pues el mundo social de sus gentes se construye permanentemente, fluye y no se estaciona.

En tercer lugar, el uso de categorías fenomenológicas como las tipificaciones me permitió indagar en el conocimiento del mundo —natural y social— lo cual supone construcciones sociales propias de la interacción intersubjetiva. Los pobladores del Valle del Cauca- como veremos cuando lleguemos al análisis del material empírico hallado- adoptan actitudes y comportamientos y adquieren conocimientos a partir de lo observado y lo aprendido del mundo preorganizado. En este punto es donde cabe ubicar la importancia de la memoria colectiva, pues los pobladores en su interacción con los guerreros utilizan tipificaciones (léase aquí “marcos cognitivos”) y también recetas (por ejemplo: prevención en el proceder y reglas de conducta). Cabe preguntarse además si el mundo preorganizado es o no transformado y de qué manera, es decir, si se crean nuevas respuestas y, por ende, se llega a modificar las tipificaciones y recetas.

En los espacios de interacción entre pobladores desarmados con los armados (ya sean estos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes o miembros del ejército), los primeros

han “aprendido” a comportarse en esas relaciones “ellos” para sobrevivir, mientras que en su mundo más cercano, el de las relaciones “nosotros” se relajan, se sienten seguros, pues – como veremos a lo largo del estudio- es solamente al interior de su hogar y con los más allegados (familia y los “verdaderos” e íntimos amigos) donde pueden expresarse naturalmente y sin control alguno de los agentes armados. Es en ese mundo “ellos” -tan lleno de peligros pues constituye la jungla de la anarquía-, donde el poblador hace gala de su destreza y experiencia, pues interioriza las tipificaciones y recetas a modo de interacciones normativas, nada más y nada menos que para volver sano y salvo por la noche a su hogar.

Una categoría clave que nos ha legado aquí la sociología fenomenológica de Schutz (y otro aspecto del cual haremos uso e intentaremos confluir) es la de los “tres mundos”: antepasados, contemporáneos y sucesores, los cuales iremos articulando con el eje temático de la relación “memoria-guerra e historia” (un epígrafe especialmente), triada propia del trayecto nacional colombiano.

La tenebrosa familiaridad de estos pobladores vallecaucanos con la muerte es un repertorio de conocimientos disponibles, es decir, un “acervo de conocimiento a mano”. No otra cosa es que los abuelos en su infancia escucharon sobre la guerra de los mil días (1899-1902) en la que combatieron sus antepasados, pero también sufrieron en carne propia los conflictos de los años treinta del siglo Veinte y algunos hasta combatieron en la época de “La Violencia” partidista liberal-conservadora (1948-1960).

Así mismo, la generación de los padres (contemporáneos), ubicados en edades comprendidas entre 30 y 50 años, han oído esas macabras historias, pero también algunos vivieron la muerte en la guerra posterior a 1964 con el advenimiento de las guerrillas y, la mayor parte, alcanzó a sufrir la emergencia de carteles de la cocaína en los ochenta, así como el paramilitarismo de los sanguinarios Fidel y Carlos Castaño y de igual modo- vuelve y juega-, después de los noventa presenciaron toda una nueva legión de neoguerreros (léase los que nunca se desmovilizaron desde el año 2004 y siguieron luchando desde los escuadrones de la muerte neoparamilitares y nuevos narcos). Y, finalmente, los niños y jóvenes (sucesores), quienes siguen inmersos en un mundo violento, ya una guerra de narcos, denominada por dos profesores de la Universidad del Valle como propia de “dinosaurios depredadores” (Salazar y Castillo: 2001). En síntesis, “tres mundos” que saben de primera mano qué significa morir y no precisamente de forma “normal”.

Finalmente, también nos serviremos de la rica reflexión presente en la obra de Schutz acerca de la elección entre diversos proyectos de acción, lo cual es particularmente pertinente en nuestro estudio puesto que, al indagar en dicha “elección”, podemos comprender cómo se produce el sopesar recompensas y costos, posibilidades y riesgos. Hacemos referencia aquí a quienes deciden arriesgarse al involucrarse y colaborar con un grupo armado en particular (o, como veremos en otros capítulos, hasta cambiar de bando como el camaleón).

En ese sentido ¿Por qué un poblador “ingresa” al mundo del paramilitarismo, la guerrilla o el narcotráfico y asume de ese modo enormes riesgos? Las experiencias del yo biográficamente determinado del actor (Schutz: 1993) implica no solamente imposición de los elementos del mundo presupuesto, sino también control o descontrol de otros elementos y factores. El actor nunca tiene una conciencia plena de todos los elementos que están determinando el proceso de elección, no es necesario que los tenga para poder decidir.

Conceptos como “mundo de la vida cotidiana”, “tipificaciones”, “acervos de conocimientos a mano”, “recetas”, “mundos de los antepasados, contemporáneos y sucesores”, entre otros, nos serán de enorme utilidad- como hemos podido ver en las páginas anteriores- para dar cuenta de las preguntas de investigación formuladas, a saber ¿Cómo se configuran los haceres cotidianos en una sociedad que vive en medio de la muerte? ¿Cómo afecta la violencia y las guerras continuas a las expresiones de la memoria colectiva, la configuración de las identidades y los trayectos biográficos? ¿Cómo incide el conflicto en lo que dicen los pobladores (el discurso) y lo que hacen (sus prácticas sociales) cuando se encuentran frente a guerrilleros, paramilitares o representantes del Estado?

b. Sobre el carácter social de la violencia

En este epígrafe, me referiré a dos aspectos centrales: 1) intentaré problematizar y oponerme (confrontar) la obviedad de la violencia como situación inherente al ser humano, es decir, un cierto lugar común que asume a este fenómeno como un hecho natural y esencial a la naturaleza humana. 2) Plantearé a lo largo de las siguientes páginas la necesidad de historizar, es decir, pensar la violencia como un proceso histórico y construcción social.

1) Para llevar a cabo este primer cometido, es pertinente inicialmente observar la dificultad que entraña definir y caracterizar el fenómeno de la violencia, por una parte, así como encontrar y explicar sus causas.

Aunque los discursos sobre la violencia intentan precisar qué es lo que entienden por este término, no llegan nunca a definir claramente el fenómeno. Un número importante de autores define la violencia en términos de acción agresiva. En este caso no se alcanza una definición de violencia, sólo se la plantea en referencia a la agresión. Esto establece una vinculación inmediata con lo biológico, en la medida en que la conducta agresiva es considerada instintiva. En estos casos lo que se define es la agresión y no la violencia propiamente. Una perspectiva que muestra esto de manera ejemplar es la de Konrad Lorenz, quien define agresión como un “*instinto que lleva al hombre como al animal a combatir contra los miembros de su misma especie*” (Lorenz, 1998: 35).

Existen peligrosos argumentos que definen a la violencia como un fenómeno exterior a los individuos que se les impone y determina sus acciones de manera inevitable. Tales argumentos sostienen la inmanencia de la violencia en la naturaleza humana, por la que el hombre estaría condenado a la contradicción de ser violento y al mismo tiempo tener que horrorizarse de ello.

En esa lógica argumentativa reduccionista, diversos enfoques presentan o entienden la violencia no sólo como una acción posible de llevar a cabo en situaciones concretas sino como una característica perdurable de ciertas personas, una “*cosa*” que alguien posee y de la cual no es capaz de deshacerse, una disposición de la personalidad muy arraigada que se extrema y perdura, lo cual llevaría a pensar que la “*violencialidad*” no es una dimensión de una acción sino de ciertos tipos de sujetos. Al situar las causas de la violencia en una supuesta disposición interna se desvía la atención de los contextos sociales, históricos y culturales en los que dichas acciones se producen y tienen sentido. La retórica de etiquetar a alguien como violento sitúa en algunos sujetos individuales las explicaciones de la violencia, lo que contribuye a debilitar el status factual de otro orden de explicación, por ejemplo las que aluden al sistema social, político y/o económico.

Es por medio de una retórica similar que se afirma que hay *sociedades violentas*. Las explicaciones son también variadas: puede que sea producto de una naturaleza propia de los seres humanos y del orden social que ésta conlleva, o puede ser una muestra de falta de civilidad, de cultura política, de buenos gobernantes, de polarizaciones ideológicas o de escasez de recursos o de injusticias sociales en la redistribución de la riqueza.

Desde esa particular pero limitada mirada, la “*violencialidad*” no sería una dimensión propia de ciertos individuos sino de ciertas sociedades. La capacidad de ser violento sería común a los seres humanos, parte de esa supuesta naturaleza que nos dispone a aprender dicha conducta en ciertas condiciones sociales. En esta retórica, lo social aparece como un espacio “fuera” del alcance de los actores sociales, quienes aparecemos más bien como víctimas de un sistema que nos invade y determina, despertando unos instintos de los cuales no nos podríamos librar.

Siguiendo ambas explicaciones (eminentemente reduccionistas), los seres humanos pareceríamos condenados a ser, al menos “violenciables”, es decir, seres violentos en una dinámica sujeta a leyes naturales, exteriores a nosotros. Una dinámica que no podríamos modificar, que nos determina sin que podamos aspirar a influir en ella.

Para “entender” y “explicar” la violencia, sin embargo, situaré el análisis en una perspectiva crítica que entienda la realidad y las categorías teóricas que usamos para explicarla como producciones humanas. Si partiéramos de argumentos de la psicología (que no es el caso), se diría que hay *personas violentas*²². Pero dicho camino no podría ofrecer una mirada amplia, sino que “reduciría” la o las causas principales de la violencia como si fuese un rasgo relativamente permanente que caracteriza a algunos “tipos” de personas y que las hace, bajo ciertas condiciones, “ponerse violentas”.

En ese estudio, por el contrario, partiré desde una orilla opuesta, buscando así no caer en la trampa de dichos reduccionismos: consideraré entonces pertinente asumir el carácter social de la violencia, lo cual implica alejarse de los argumentos psicologicistas que señalan las causas y los efectos de la violencia en los sujetos individuales. Los colombianos no son “violentos” ni propensos a ser violentos, por lo que es preciso abandonar el análisis de la violencia en Colombia, como si se tratase de un fenómeno natural, es decir, negar que los colombianos “somos violentos por naturaleza” como cierta frase del sentido común²³ pretende generalizar, reflejando así el pesimismo que invade a muchos. Creemos que la violencia entonces ha sido producida en un contexto histórico y cultural específico²⁴

²² Algún sector de la psicología (afortunadamente existen disidencias en el interior de su disciplina), explicarían esta situación de múltiples maneras: argumentando que la violencia es un producto de predisposiciones naturales en interacción con ciertos factores ambientes, o una muestra de inseguridad, un signo de inmadurez, falta de auto estima, impulsividad, debilidad del yo, modelo de conducta, etcétera.

²³ Y aunque haga mucho “ruido”, existen muchos académicos que en Colombia todavía creen en la tesis del carácter natural de la violencia del “ser” colombiano.

²⁴ En el caso colombiano ¿acaso “pecaría” de osado si dijera que también es sui géneris?

Me parece importante resaltar la idea de violencia, como un acto humano que implica una relación de poder y que, por lo tanto, pertenece al reino político de los asuntos humanos, y no al de los fenómenos naturales inherentes al proceso vital. Por lo tanto, la violencia siempre implica significado(s). La segunda idea para retener, se refiere al elemento común presente en las múltiples violencias, que tal vez pueda ser denominado como el de la destrucción, y no solo la de bienes y cuerpos, sino también la destrucción del propio ser, de la identidad y del conjunto de relaciones sociales a las que pertenece el individuo. Es en estos dos conceptos -relación de poder y destrucción- donde podemos encontrar la articulación del análisis de la violencia, el cual reviste además un carácter relacional y específico en el tiempo y en el espacio.

Desde una perspectiva foucaltiana, una visión del poder presente en cada una de las prácticas sociales, asumiría el poder como base de las relaciones sociales, y la violencia una manera de ejercerlo. Por ello, es pertinente pensar y reflexionar la violencia como un campo conflictivo de significaciones e interpretaciones. Los significados de la violencia no son homogéneos, sino contradictorios (y relativos en un sentido amplio). Al estar insertos en estrategias de poder, la violencia es utilizada estratégicamente.

Para poder definir la violencia, me apoyaré en la obra de Martín Baró (1988) quien afirma que es necesario considerar los siguientes presupuestos:

- a. La violencia presenta múltiples formas y entre ellas pueden darse diferencias muy importantes (por ejemplo, es diferente la violencia estructural y la interpersonal, aunque esta última podría materializar la estructural). Englobar todas las formas de violencia en una sola categoría podría ser una simplificación.
- b. La violencia tiene un carácter histórico y por consiguiente es imposible entenderla fuera del contexto social en que se produce. Este enfoque permitiría ponderar el significado concreto de cada acto de violencia con respecto a la totalidad social.
- c. Existe una espiral de violencia, es decir, los actos de violencia social tienen un peso autónomo que los dinamiza y los multiplica. La agresión desencadena un proceso que, una vez puesto en marcha, tiende a incrementarlo sin que para detenerlo baste con conocer sus raíces originales²⁵

²⁵ Una pertinente observación que me ha formulado la profesora Pilar Calveiro, es que también la violencia produce lo contrario, es decir, tiende a disminuirla.

La violencia, entendida como problema en una dimensión cultural, más específicamente en el ámbito de los significados sociales, requiere, desde nuestra perspectiva, que se le aborde en términos de proceso social, cuya dinámica se ve atravesada por relaciones de poder históricamente determinadas. Como bien afirma Foucault (1976), en la aplicación de la violencia las diversas estrategias y mecanismos del poder se ocultan. Relaciones de poder entendidas además como prácticas insertas en las mismas raíces del tejido social. De ahí que se requiera entender las violencias como producción histórico- social.

Aunque las categorías que usamos (tanto cotidiana como disciplinariamente) concedan un grado de relatividad a la división de la violencia en categorías separadas, aceptan naturalmente su fragmentación instalándose y reproduciendo la dualidad público/privado tan propia de la racionalidad moderna. Esta dicotomía se reproduce a través de las explicaciones que cotidianamente se dan de la violencia y a través de los espacios de ejercicio en los cuales se definen.

De ahí la convicción de aproximarnos a la “violencia” como proceso histórico social, es decir, como producto social. Ya no como un fenómeno natural innato del ser humano, antes bien como algo “problematizable”. Sumidos/as en la violencia, esta puede terminar siendo “naturalizada”. Considero más apropiado- por el contrario- demandar su desnaturalización, pues tanto ella -como sus significados- son el resultado de prácticas socio-culturales temporal y espacialmente situadas que adquieren sentido en las relaciones de poder. Este enfoque reivindicará entonces, el carácter político de la violencia, así como la premisa de que la violencia, como proceso social, se encuentra instalada en las prácticas y discursos cotidianos, definida por sus espacios de ejercicio.

2) Al estudiar un contexto tan particular como el colombiano, no es posible eludir las relaciones de poder que, siguiendo a Foucault (1976), son prácticas insertas en las mismas raíces del tejido social, actuando por medio de la regulación de los aspectos más íntimos y privados de nuestra vida, es decir *constituyéndonos como sujetos*. De ahí que sugiero entender las “violencias” colombianas como prácticas relacionadas entre sí, como espacios de ejercicio de relaciones de poder constituyentes, produciendo distintos lugares que le sirven a la vez de soporte, de materialización y de espacios de producción.

La violencia no es un sello característico de ciertas personas y sociedades. No se trata de la insensatez de un individuo o de una propiedad de la naturaleza. Se trata de la colectividad que algunas veces se funda entre los “unos” y los “otros”, porque efectivamente ambos comparten normas, usos, significados, cotidianidades y conflictos. La violencia se destruye a sí misma en cuanto sociedad, ya sea por medio de la

eliminación del otro, o bien en el empate que lleva a los acuerdos de paz que cambian el “*vencer o morir*” por relaciones protegidas, consensuales y duraderas (¿tranquilas?, ¿rutinarias?).

Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿de qué manera podemos entender la realidad violenta de una sociedad como la colombiana? Primero que todo, problematizando lo obvio, desnaturalizando a la violencia, cuestionando las débiles premisas de que la “naturaleza humana” de los colombianos tiene la característica de ser violenta. Siguiendo a Guthman (1991), los saberes convencionales acerca de la violencia fragmentan la realidad, la naturalizan, a la vez que tratan de clasificar y jerarquizar las múltiples violencias. Hacen así una operación ideológica, en que se ocultan las razones y las dinámicas de la emergencia del fenómeno.

Por el contrario, reitero, aquí en este estudio entenderé el fenómeno de la violencia como resultante de una totalidad histórica y de prácticas sociales generadoras de conflicto, lo cual desde el punto de vista político, implicaría que la violencia deriva de relaciones de poder y se articula con determinadas prácticas sociales, que tienen un contenido histórico y se relacionan con procesos locales y mecanismos más amplios y globales, como el narcotráfico.

Las significaciones e interpretaciones sobre la violencia son múltiples y cobran sentido en los entramados de las relaciones de poder. A partir del posicionamiento que se adopte dentro de estas relaciones de poder, se producirán interpretaciones diferenciadas sobre la violencia junto a un discurso que le da legitimidad. Por ejemplo el Estado, para Weber, tiene el monopolio de la violencia legítima. Es decir que no sólo puede desplegar violencia sino además que es su deber, pues es considerado como un medio para lograr un fin: mantener el orden y su propia reproducción como Estado, la democracia, etc. Sin embargo, la violencia puede ser también desplegada por los sectores oprimidos, tornándose en una lucha de resistencia al poder.

La violencia no puede ser vista como un fenómeno neutral, resultante e inseparable de la naturaleza misma de los seres humanos o las sociedades. Ella nace de relaciones de poder y dominación y por ellas es enmarcada y, por lo tanto, toma formas propias, diferenciadas según los objetivos que le son asignados por los grupos sociales, ya sean dominantes o dominados. Además, la violencia tiene necesariamente un carácter histórico, estando determinada por las relaciones de poder y dominación particulares que se forman en cada periodo histórico y en cada sociedad.

El foco de atención de las situaciones extremas que resultan de los procesos de dominación en nuestros países latinoamericanos, nos lleva a reconocer la existencia de relaciones de poder y violencia en el cuerpo social. Obviamente, cabe distinguir formas de dominación y violencia ejercidas en regímenes dictatoriales (como las del cono sur en la guerra fría) o en sociedades que no han logrado todavía un padrón democrático de convivencia social (como continúa siendo el caso colombiano).

No obstante, para analizar a la violencia misma y a los efectos que ella causa, es pertinente asumir que la sociedad sólo existe a través de las prácticas de los individuos y éstos existen como seres sociales a través de la producción de la sociedad. Esto es un proceso relacional en el que no es pensable la existencia de una realidad social independiente de nuestras prácticas, se trata de un proceso dialéctico. Caso contrario, podríamos caer en los planteamientos del “positivismo lógico” que consiste en la afirmación de la existencia de la realidad como algo independiente de la acción humana. Por tanto, partiendo de este proceso relacional entre individuo y sociedad, no es pensable la existencia de una realidad social independiente de nuestras prácticas.

Ya sea por parte de los dominadores como de los dominados, se genera permanentemente nuevas formas de poder. En América Latina, violencia y poder suelen ser momentos de una misma relación de dominación, cuya realidad se impone.

Cuando desde este marco, se alude al individuo, se entiende, en términos generales, al individuo *en tanto miembro de un grupo social*. En otras palabras, se apela a la concepción del ser humano como una construcción histórica, como producto de particulares relaciones sociales, sostenidas en un contexto socio-histórico contingente. En este sentido, no es el “ser” colombiano por sí mismo el que construye (o destruye), sino más bien son las particulares prácticas sociales las que posibilitan y limitan el campo de construcción de realidad, entendiendo por prácticas “*secuencias de actos contextuales determinados desde una perspectiva sociohistórica y dirigidos a la construcción de objetos, la producción de sentido y a la articulación de relaciones*” (Vázquez, 2001:324)

Si bien los actos de los individuos producen la realidad social y sus significados, ello no supone que las acciones de todos tengan la misma densidad social, es decir, que no haya dominados y dominantes, pues las prácticas sociales se inscriben en un particular contexto histórico-social particular, en tanto condición de reproducción y producción social, de continuo dinamismo y conflicto, como bien lo plantea Guthman (1991, 43)

Finalmente, acerca de la causas de la violencia, y aunque no es el objeto central de mi interés en esta investigación, es menester señalar que los discursos sobre la violencia están marcados por una constante búsqueda de sus causas. Las explicaciones que se dan sobre este fenómeno marcan posturas epistemológicas distintas y tienen como consecuencia distintas propuestas de abordaje²⁶.

Cabe señalar someramente el hecho de que teóricos del conflicto como Simmel y un continuador de sus postulados, Lewis Coser, enfatizaron las posibles funciones positivas del conflicto en oposición a los teóricos funcionalistas que lo consideraban destructor y desintegrador. Para Coser, varios son los aspectos con los que el conflicto en su función positiva contribuye al ajuste y mantenimiento de las estructuras sociales. La violencia entonces encarna aspectos funcionales, por ejemplo, la violencia como logro es para Coser (1970), la posibilidad que tienen ciertos grupos de acceder mediante su uso a status más altos cuando se les impide usar los canales legítimos y también los ilegítimos

²⁶ Es importante señalar aquí que los enfoques explicativos de la violencia pueden agruparse en tres clases grupos según el tipo de argumento que desarrollan:

a) **Argumento biológico** (interior al ser humano): según este argumento la violencia se explica como un fenómeno que es intrínseco a la naturaleza de las personas. La violencia sería expresión de fuerzas instintivas. Al respecto Martín Baró afirma: *“El ser humano es considerado como una especie de animal, con sus peculiaridades, sí, pero parte y producto de la evolución de las especies y, por tanto, sujeto a las mismas leyes básicas”*. (Martín Baró, 1985). Un ejemplo de este argumento lo encontramos en la explicación de la agresión de Lorenz, quien define agresión como un “instinto que lleva al hombre como al animal a combatir contra los miembros de su misma especie” (Lorenz, 1971).

b) **Argumento ambientalista** (exterior al ser humano): este argumento enfatiza la importancia de los factores ambientales y situacionales en la determinación de acciones violentas. Scott, siguiendo este argumento afirma que «los resultados de todas las investigaciones apuntan al hecho de que no hay pruebas fisiológicas de alguna necesidad interna o de alguna fuerza pulsional espontánea hacia la lucha; toda la estimulación hacia la agresión procede de las fuerzas presentes en un medio ambiente externo» (citado en Hacker, 1973). Un ejemplo de este argumento lo encontramos en las teorías de la frustración agresión de Dollard y Miller (1939), según el cual la conducta agresiva supone la existencia previa de una frustración.

c) **Argumento interactivo** (exterior e interior al ser humano): según este argumento, la violencia se explica por la interacción entre factores interiores y exteriores a las personas. Las condiciones sociales desencadenan los factores instintivos, que en otras circunstancias permanecerían latentes. Un ejemplo de este argumento se encuentra en las reflexiones de Fromm: *“La pulsión orgánica hacia la lucha constituye un forma de violencia defensiva que está al servicio de la supervivencia del individuo y de la especie, es biológicamente adaptativa y cesa cuando cesa la amenaza a los intereses vitales del individuo”* (Fromm, 1975; cfr Baró, 1988). En cambio, hay otro tipo de violencia, la que Fromm califica como «agresión maligna», que es una pulsión no orgánica y que lleva a la destructividad y crueldad propias del hombre. Puesto que la agresión maligna no es heredada genéticamente, *“el problema consiste en examinar en que modo y grado son las condiciones concretas de la existencia humana causantes de la calidad e intensidad del placer que el hombre siente matando y torturando”* (Fromm, 1975; cfr Baró, 1988).

Los dos primeros argumentos se plantean como posturas contrapuestas y el tercero se presenta a sí mismo como una explicación que las integra a ambas. Sin embargo los tres argumentos se mantienen en una misma discusión, que busca situar las causas de la violencia en un *adentro*, un *afuera* de los individuos o una interacción entre ambos. Por otro lado, estas tres líneas explicativas asumen a los individuos como actores que ejercen la violencia.

para la obtención de sus logros. La violencia como señal de peligro la enuncia como “*los seres humanos- los que no están entrenados sistemáticamente en el uso de la violencia legítima o ilegítima- recurrirán a la acción violenta sólo bajo condiciones extremas frustrantes, perjudiciales para el yo o generadoras de ansiedad*” y, agrega, “*si su incidencia aumenta, sea en toda la sociedad o en algunos sectores, es que puede considerársele como una señal de grave desajuste*” (Cosser, 1970: 73).

El sendero metodológico y las vicisitudes

Para llevar a cabo una empresa tan compleja como esta, me asaltaron no pocos interrogantes (y por qué no confesarlo, angustias), no solamente en lo que atañe a la planeación, programación y precauciones, sino en el camino o sendero más apropiado para cumplir con el cometido. En ese sentido, no pocas noches en vela me llevó a preguntarme ¿Cómo dar cuenta de esta interacción entre pobladores y actores armados? ¿Qué camino o sendero metodológico transitar?

Han sido las propiedades de la realidad social (regional) del conflicto armado colombiano, las que determinaron el método elegido. El reto no consistió en separar un fenómeno social, para comprenderlo en una y otra dimensión, sino en aprehenderlo en todas sus dimensiones. La indagación científica no puede ignorar el conocimiento que tienen de su realidad los sujetos que la construyen, la mantienen y la transforman. Es decir, siendo una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica, lo que se buscó aquí es dar sentido a la situación según la interpretación de los informantes, sin prejuicios condicionadores. Y ello –como se podrá apreciar, observar y criticar a lo largo del texto- es difícil, pues ¿acaso podemos caer en la cuenta de que somos víctimas de nuestra subjetividad? O, siguiendo a Comte, uno no puede a la vez asomarse a la ventana y verse pasar por la calle.

Son muchas las fuentes que alimentan esta investigación. En primer lugar, un trabajo de campo de cinco meses en el centro y norte del Departamento del Valle del Cauca. Segundo, treinta y cinco entrevistas detalladas con pobladores que conviven con guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, así como con funcionarios del Estado. Tercero, bases de datos sobre prensa nacional y regional. La clave entonces fue apostarle a un seguimiento corrientemente sistemático y organizado a través de un diario de campo que cubrió 120 jornadas (4 meses), intentando un sentido ponderado del nivel de detalle que requieren las descripciones. El proceso se sistematizó a partir de guías de observación.

El reto entonces fue lograr acceder al mundo social de nuestros sujetos observados (es decir, sus estructuras de significación), de suerte que pudimos conversar con ellos, buscando desentrañar e interpretar -en el mejor sentido geertziano- símbolos, concepciones, sentidos, esto es, algunas tramas de significación de la interacción de los guerreros. La ruta elegida tuvo como objetivo profundizar en el fenómeno pero no necesariamente generalizar.

La pertinencia y la sensibilidad de los datos recogidos dependieron de la preparación cuidadosa, detallada y organizada del trabajo de campo, así como de los instrumentos para observar la compleja trama social colombiana y delinear los parámetros que explicarían las interacciones observadas. Con el fin de aprovechar al máximo las salidas del campo, se intentaba visualizar todas las posibles situaciones que se presentarían durante el recorrido, tales como incursiones guerrilleras, reuniones de las juntas de acción comunal promovida por la propia guerrilla, y las dos suntuosas fiestas a las que fuimos invitados (uno de mis informantes y yo) por allegados a narcos y que necesariamente aceptamos. Antes de cada recorrido, a través de los dos informantes claves (uno en la zona rural, otro en la urbana), se establecía una serie de contactos y reuniones informales que me garantizara la aceptación de los pobladores de las veredas y corregimientos en la zona.

Uno de los riesgos que asumí fue confiar en los informantes, en sus estrategias de referencia y en sus consejos para acceder a los “anillos de seguridad” de cada zona entrecruzada. Y como se dice popularmente “no había de otra”. En principio podría pensarse que se trata de una confianza ciega e incondicional, aunque en el fondo fuera una confianza miope, pues en cierta medida uno llega a aprender en no confiar completamente y, para ello, es preferible el astigmatismo a las tinieblas. Tal como lo señaló don Ángel, uno de mis dos informantes claves, el de mayor edad y experiencia, dado que se trata de una persona que ha participado activamente en comités campesinos y Juntas de Acción comunal:

“Usted va a Ceilán y todo el mundo se conoce, pero llegan cinco personas que nadie los ha visto y entonces todo el mundo los enfoca. Allá mismo en Bugalagrande (casco urbano) yo he vivido por aquí como siete años y el simple hecho de ver a una persona se las pilla que no es de aquí. En la vereda con mayor razón, porque uno sabe cuántos somos, todo el mundo los conoce. Yo que soy de por acá.....uno en la vereda sabe cuántos somos, cuántos viven en la vereda cuánta gente

somos. Uno se pega de eso y se dice...este que viene por ahí no es de aquí.

La cuestión de la seguridad es clave. Si usted por ejemplo viene aquí y me dice Ange²⁷.... voy a ir a Chorreras, entonces yo le digo mire...vaya a Chorreras y pregunte por fulano de tal, amigo mío. Si le salen allá los farianos o los muchachos²⁸ en la entrada usted dice que va por don fulano, que viene de Manizales y que va de parte mía, al menos a uno lo conocen en toda la región.....que va a Ceilán y se le pregunta entonces usted dice que va dondeMario Ortiz(duda y vacila) que va donde.....(silencio.....duda) donde Alberto Dávilapero si usted va para Chorreras a conocer y no tiene una persona conocida en la región entonces lo cogen y ¡ venga pa´ acá.....pero si usted va y tiene un primo, un tío, un conocido, un amigo, entonces puede usted ir más tranquilo, ya sale usted con él, va usted más respaldado. Va usted y los tipos le preguntan y ya saben si este va con este..... Pero si usted va así sin conocer a nadie, olvídese, olvídese,olvídense.....lo quiebran (sic) así sea la misma ley o la misma guerrilla, porque ellos conocen toda la montaña, toda la cordillera, ellos saben cuánta gente.....quienes viven en cada casa. Ellos conocen cada casa, ellos hacen hasta censo, quienes y cuántos vienen a visitarlos a ustedes, quienes son, que van a donde fulano de tal ...de dónde vienende tal parte....todo eso se lo apuntan y hasta el número de la cédula se la conocen” (Don Ángel)

Una cuestión a la que tuve que acostumbrarme, en calidad de entrevistador durante cinco meses de trabajo de campo, era que, para ganarme completamente la confianza de los entrevistados, tuve que invitar a mucha gente a tomar unas copas, especialmente anís (aguardiente), ron y cervezas, con las consecuentes sumas enormes (a despecho de mi austera beca) y, en contraparte, teniendo en cuenta lo que se gastan ellos en invitarlo a uno. No sé hasta que punto la resistencia “etélica” obtenida trajo o no un plus en las entrevistas, pero sí en el sobrepeso correspondiente.

En el aspecto metodológico lo más complejo fue el diferenciar lo que decían nuestros sujetos observados de lo que hacían. No se tuvo en todo momento facilidades para extraer toda la información pertinente. Y tal como se me había advertido antes de entrar a

²⁷ La identidad del entrevistado ha sido cambiada

²⁸ “Los muchachos”, es el apelativo como se los conoce en clave a los guerrilleros.

campo, se requirió un pacto de confianza con los entrevistados para poder llegar a lo subterráneo. Para romper los muros de la desconfianza, se hizo pertinente ingresar con mentiras, pues se planteó que se iba a escribir un libro sobre fiestas y comidas en la región vallecaucana, con miras a su posterior publicación en la republicana mexicana²⁹.

Es pertinente señalar que en los cuestionarios se llevaron a cabo preguntas sobre experiencias de violencias, percepciones sobre la realidad del país y grupos armados, consideraciones sobre el control social ejercido por los guerreros en sus diversos matices, expectativas de futuro, construcción y configuración de la memoria de la violencia, etcétera, aspectos que no son precisamente “atajos” en el camino de las preguntas, sino puentes directos.

Sin embargo, la mentira a la que se alude en los párrafos anteriores se formuló paradójicamente para “construir confianzas”, es decir, para obtener la cita y fecha de las entrevistas, así como una pantalla ante los pobladores no entrevistados (y los guerreros obviamente) con el fin de no levantar sospechas y sentirnos “cobijados” con los entrevistados elegidos con ayuda de los dos informantes claves (uno en la zona municipal/urbana y el otro en las veredas y corregimientos rurales). Esta elección (de los entrevistados), constituye un sesgo ineludible pues se trató de contactar a personas que no tuvieran intereses o complicidades con grupos armados, o por lo menos que no se supiera que la tuvieran³⁰. Pero este sesgo constituye una barrera insalvable: ninguna persona que colabore o simpatice con un grupo armado va a abrirse tan fácilmente ante nadie y menos a un extraño, o tal vez entra a formular una serie de mentiras para cubrir su posición al respecto. He aquí uno de los terrenos movedizos o “pantanosos” del trabajo. Por eso no faltaron quienes, al escuchar alguna pregunta, solicitaban por favor apagar la grabadora y ahí si daban respuesta a las inquietudes del entrevistador.

Por tanto, la controversia ética que puede provocar el hecho de haberle mentido a muchos pobladores sobre mi presencia en el campo durante cinco meses, atraviesa y atravesará todo el entramado de este estudio. Y ello es así porque por más seguridad

²⁹ Cabe aquí detenerse en este aspecto (mentir para obtener confianza y despejar obstáculos en el camino) pues es un aspecto que genera mucha controversia y discusiones en el mundo de las Ciencias Sociales: la ética en la investigación. Una mentira, por más pequeña que sea, puede llegar a contaminar el proceso de recolección en sí y en cierta medida no permite fehacientemente recoger todo lo que se busca indagar.

³⁰ Aspecto controversial dada las características de las guerras en Colombia que aquí señalaremos a lo largo del estudio (su “larga duración”, las presencias y responsabilidades de toda la población ya sea por “acción” o por “omisión”, etcétera).

que se busque para entrevistados o entrevistadores, las mentiras- al igual que la cojera- tienen “patas cortas” y acaban siendo un boomerang para el propio trabajo. Pero no había otro camino posible, pues la naturaleza del tema y problema no permitió una consideración metodológica “sincera”. Y en ese sentido, este aspecto puede señalarse como un lunar en el corpus del texto.

Una vez obtenida la confianza de los entrevistados (que a su vez eran recomendados por mis dos informantes claves para asegurar los anillos de seguridad del trabajo), resultaba obvio que el interés de las charlas “de fondo” no era precisamente ni la comida ni las fiestas. Pero ya había traspasado- o por lo menos eso creí- los muros del silencio. Sólo se debía observar las prácticas sociales (con las recetas y acervos de conocimiento no siempre claros de dilucidar), hacer las entrevistas rápidamente, salir y reingresar periódicamente de la zona y en cuanto se pudiera cumplir con los parámetros de la saturación de información, retirarse prontamente de la región en el mes de agosto, cuando mi presencia era tan “natural” y “rutinaria” que una insinuación de llevar drogas a México me sorprendió por la confianza que ya se había ganado, pero también me hizo despertar sospechas y suspicacias, pues tal vez se estaba “probando” mi posición, es decir, “¿qué tanto escribe ese tipo sobre comidas y fiestas por acá?”

En la primera etapa del trabajo de campo, se usó una guía bastante exploratoria, dado que aunque ya conocía el terreno, desconocía en parte las condiciones de seguridad coyunturales, debido a que se trataba de una época electoral (para congreso en marzo, presidenciales en mayo). Por eso, la forma en que sería posible tener acceso al municipio, veredas y corregimientos requería una paciente espera de dos semanas mientras se iban concertando los contactos afianzados por el informante clave, a quien conocía hace años, al igual que algunos pobladores. Por ello delimité dos grandes objetivos los cuales definirían las siguientes salidas de campo. Estos fueron: 1) el trabajo sistemático de escribir diariamente lo observado y 2) el trabajo de recolección de información propiamente dicho, que fue el de las entrevistas en profundidad. El diseño de guías de trabajo (ver anexos) no sólo permitió establecer un cronograma de actividades sino además constituyó una estrategia para ordenar el curso del proceso del estudio, así como verificar si se estaban cumpliendo parcial o totalmente algunos objetivos propuestos inicialmente.

La primera etapa, correspondió al periodo comprendido entre el 20 de marzo al 20 de abril de 2006. En este periodo se hizo el reconocimiento del terreno, se obtuvo la confianza de pobladores y se diseñaron las estrategias para informar sobre el estudio.

La información requerida en la segunda etapa (21 abril al 11 de julio) se centró en: a) las situaciones de violencia vividas, b) las percepciones de los pobladores sobre los guerreros, c) los tipos de conductas permitidas y castigadas, así como d) la percepción del pasado, presente y futuro. Los instrumentos ya se hicieron presentes en esta segunda etapa, tales como las entrevistas con informantes claves y la observación y registro en diarios de campo.

Los datos fueron recogidos utilizando una gran variedad de instrumentos tales como: grabaciones de entrevistas individuales; registro escrito de observaciones de eventos particulares; testimonios de las personas respecto a códigos de conducta y espacios de interacción, así como recortes de prensa (crónicas judiciales, columnas de opinión y editoriales).

Las entrevistas a los pobladores desarmados me sirvieron para indagar en las formas en que éstos percibían a los guerreros y cómo interactuaban con ellos, cuáles fueron las situaciones de violencia vividas tal como es interpretado por los sujetos estudiados, sin imponer categorías preconcebidas. Como afirma Patton (1990: 22), el objetivo de la entrevista cualitativa es conocer la perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las personas organizan su entorno y orientan su comportamiento³¹. En este sentido, las entrevistas individuales en profundidad son el instrumento más adecuado cuando se han identificado informantes o personas claves dentro de la sociedad municipal estudiada.

Dos asuntos delicados requieren en este momento estacionarnos y hacer un alto en el camino para realizar aclaraciones pertinentes para la lectura del texto. Ellos son la confidencialidad de las fuentes primarias y la redacción y secuencia de las preguntas.

Respecto al asunto de la confidencialidad, cabe señalar que todos los nombres de entrevistados mencionados en este texto son en realidad pseudónimos, con el objeto de preservar su identidad y por ende, su seguridad, dado que la zona es relativamente pequeña y ciertos personajes presentes a lo largo de la investigación son fácilmente identificables y susceptibles de sufrir represalias. Y, como una medida cautelar extrema, se omite señalar las verdaderas edades, profesiones u oficios, rasgos particulares ni lugar de origen, aún a costa de ocultar datos claves de ciertos entrevistados que, en

³¹ En términos generales, la entrevista personal puede definirse como una conversación o un intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o una situación particular (Maccoby y Maccoby, 1954)

circunstancias “normales de seguridad”³², permitirían un seguimiento más rico y sugestivo como muestra al lector-observador-voyeurista. Lo que se puede perder en “riqueza” de los perfiles de entrevistados, se gana en un deber ético de resguardar sus vidas.

Ese aspecto es un factor ético neurálgico: el de ocultar “totalmente” en el presente estudio a todos los entrevistados, -sean del bando o trincheras al que pertenezcan- pues ellos siguen allá, mientras yo lo narro, describo y analizo acá, bajo el amparo de un ámbito como el académico, que permite (como bien ha señalado Manuel Castells), desplazarse en redes internacionales, las cuales, dado nuestro objeto de estudio, permiten otras “seguridades” aunque, como también es conocido, los académicos no están exentos en Colombia de ser víctimas frecuentes de la intolerancia y la agresión en el conflicto armado.

Otro asunto delicado es la redacción y secuencia de las preguntas. En todo el proceso, se evitó preguntar por los “por qué” o por las “responsabilidades” del conflicto armado. Pero por sus respuestas “los conoceréis”, es decir, que en todo caso, de las respuestas se infieren motivos y señalamientos.

La selección de la muestra de entrevistados procuró ser lo más amplio y heterogéneo posible, tanto en edad como en género. Sobre el perfil de los entrevistados, cabe señalar someramente quiénes son, aclarando que todos los nombres han sido cambiados por seudónimos.

1) Zona urbana: “**Francisco**”, soltero; don “**Anastasio**”, integrante de una asociación comunal; **Doña Bárbara**, viuda ama de casa, “desempleada”. Su esposo fue asesinado por paramilitares y narcotraficantes de la zona; **Doña Petrona**, ama de casa, desempleada; **don Ruperto**, pensionado; **Valentina**, estudiante universitaria. Sueña con la posibilidad de salir del municipio para estudiar en el exterior³³; **Risueña**, funcionaria del hospital municipal, ha vivido en otras zonas de conflicto y su relato es pertinente para comparar con otras zonas del país; los hermanos Mejía: **Melchor**, **Tiberio**, **Tomás** y **Clemente**; “**Apaleado Morientes**”, casado, desempleado actualmente; **Dagoberto**, estudiante universitario y amigo de Valentina; **Dionisio**, trabaja en una ONG de la zona,

³² La particularidad y singularidad de este estudio es su complejidad y situación de incertidumbre. Tal vez bajo “circunstancias normales de seguridad”, no habría tal riqueza de información, es decir, esta tesis no sería lo mismo. Este comentario (que parece absurdo y fuera de lugar) viene a cuento del imperativo ético (anonimato de las fuentes), que trasciende a los datos.

³³ Al mes de mayo de 2007, ya obtuvo la visa mexicana y se dispone a entrar a estudiar una maestría en la UNAM. Según afirma, no piensa volver a su terruño.

Melinda y **Woody**, 7 y 8 años (grabación incompleta); **doña Ariza**, docente. **Doña Marta**, ex empleada del sector público. **Lina**, peluquera.

2) Zona rural (Corregimientos y veredas): **Doña Justina**, cañera; **Don Filomeno**, campesino. Los paramilitares lo buscaron el año pasado para ajusticiarlo y buscó refugio en las veredas con “los muchachos de las Farc”; **Don Eustagio**³⁴, Campesino, “cañero”. Coordinador de paros campesinos en ingenios azucareros en los setenta. Tenía inutilidad motriz por impactos de bala recibidos en su pierna izquierda hace cuatro años. Al final del trabajo de campo fue asesinado por sicarios. Según comentarios, los autores fueron hombres de la banda “Los Rastrojos” del cartel del Norte del Valle. Nunca se supo por qué lo asesinaron. Voces extraoficiales me comentaron que fue debido a deudas económicas; **Doña Anita**, campesina, vende comidas para los cañeros; **Placida**, prostituta en un burdel de la zona; **Aburrido Alcázar**, funcionario del Estado; **Lucas**, oficios varios; **Manolete**, vive en la zona rural pero trabaja en la urbana; **Doña Matilde**, campesina, madre de familia numerosa; **don Justo Albarracín**, pensionado, sus familiares tuvieron incidencia en la época de La “Violencia” liberal-conservadora. **Relina**, casada, 4 hijos (dos varones en la guerrilla). **Ernesto**, 22 años, cultiva amapola. **Doña Margarita**, ama de casa.

Cabe señalar, sin embargo, que no primó un criterio de clasificación de entrevistados. Un ejemplo de ello es que en un principio no se había incluido ni a los niños ni a los escasos extranjeros. Pero observé que en los juegos de los niños y niñas que se producían en el mundo cercano de los sujetos investigados, estas criaturas reproducían lógicas culturales del orden social violento, represor, machista, excluyente y autoritario en el que vivían. Este aspecto- tan obvio como ingenuamente dejado de lado por el investigador en un principio- se sumó al de la mirada especial de los extranjeros. En ese sentido, se realizaban observaciones seleccionando una ‘muestra’ de situaciones sociales representativas del universo de eventos culturales identificados como relevantes al problema de investigación. Estas observaciones diarias se llevaron a cabo en la plaza principal, el mercado del domingo, el encuentro en las misas de la parroquia San Bernabé, así como los bares y prostíbulos especialmente los fines de semana. Para efectos de la observación, una situación social se define en un nivel básico, como el conjunto de comportamientos realizados por uno o más actores, en un espacio y un tiempo determinados. Aunque a simple vista las situaciones sociales pueden parecer ‘claras y ordenadas’, normalmente esta percepción de la realidad obedece a que lo que

³⁴ Dado que se trata de un acto consumado (y por tanto irreversible), los datos permanecen tal como son.

observamos es el resultado final de una serie de actos. Normas y relaciones implícitas, no tan evidentes ni aún para los mismos actores. Dado que las situaciones sociales están configuradas por la interacción entre individuos, sus componentes no están aislados, sino que se encuentran interconectados formando redes complejas.

En el proceso de observación hice 'cortes' espaciales para comprender por ejemplo, por qué la iglesia, la plaza de mercado y el prostíbulo son espacios de inmunidad en los que no se presentan conflictos ni enfrentamientos entre guerreros. Ello implicó focalizar la mirada intencionalmente sobre algunos segmentos de la realidad municipal estudiada, tratando de captar sus elementos constitutivos y la manera como interactúan entre sí, con el fin de reconstruir "inductivamente" -si así lo podemos llamar- la dinámica de la situación.

El definir los elementos a observar me permitió organizar las diferentes dimensiones que conforman una situación y además permitió entender el modo en que se interrelacionan los componentes de esa situación. ¿Cuánto duraban las observaciones cotidianas en el terreno? Iban desde las sencillas de una hora, o limitadas a medio día (o espacios determinados de la jornada diaria), hasta las observaciones de una semana (como por ejemplo el de las fiestas del retorno de agosto). Pero en sí misma la observación fue de tal intensidad que se compartió vivencialmente el mundo social municipal estudiado³⁵.

Los registros observacionales consistieron en notas de campo, grabaciones secretas de un día de mercado, afiches de las fiestas del retorno o cualquier elemento que documente la situación social estudiada. El trabajo de campo fue tan arduo y complejo, que se hizo necesario una mayor capacidad de concentración durante las observaciones, escribir descriptivamente evitando interpretar la situación observada, ser capaz de enfocar la atención selectivamente para hacer explícitos los procesos que normalmente pasan desapercibidos para el común de la gente, enfocarse en los detalles sin perder la perspectiva global de la situación observada y experimentar subjetivamente la situación

³⁵ Me compenetré de tal modo en la zona, que fui invitado a cinco reuniones festivas de diferente calibre: dos bacanales y monumentales fiestas nocturnas ofrecidas y organizadas por conocidos narcos (lavaperros) de la zona, una reunión de la Junta de Acción comunal de las veredas, una reunión religiosa dominical en el barrio La María y, finalmente, una reunión por los campeonatos deportivos (fútbol y ajedrez) en el que participé y en el que cabe señalar que obtuve el primer lugar en un torneo de ajedrez estilo "suizo" (es decir, los que se conocen como "torneos abiertos" a siete rondas) en un reñido final de una partida que duró dos horas y fue organizada por el sindicato de la Nestlé. El grado de compenetración fue tal, que me llegaron a denominar como "el mexicano", pues muchos no recordaban mi nombre y era más sencillo acudir a dicha mención dado el lugar de procedencia. Puedo señalar con satisfacción que se trató de una observación participante intensa y total.

pero al tiempo intentar desempeñarse como “espectador objetivo” de la misma. Lo más complejo en el campo fue intentar refinar la capacidad de introspección, para entender - por ese sendero- las reglas que organizan este contexto cultural marcado por la violencia, así como por la intolerancia reflejada en el machismo, la homofobia, el desprecio por la vida de otros, la subestimación del discurso del otro, etc.

El diario de campo constituyó una fuente importante para ponderar la información en tanto que me previno sobre vacíos y deficiencias en los datos, a modo de monitoreo de la recolección de información. El conjunto de esta información constituyó el universo de análisis a partir del cual se inició la etapa de codificación y categorización inductiva, cuyo fin es reducir el volumen de datos, ordenándolos en torno a patrones de respuesta que reflejen los principales parámetros culturales que permiten conocer la población estudiada³⁶.

Otro aspecto pertinente, fue el de tener en cuenta los efectos que sobre los entrevistados producía el investigador, puesto que si bien no era un extraño ni outsider, tampoco era un nativo en el sentido estricto de la palabra. Es decir, que si bien no fui “forastero” en el sentido estricto que lo define Schutz, no fui tampoco un mero nativo (en el sentido otorgado por la antropología). Conocía la región pero no lograba entender- intuía a lo sumo- el por qué conviven con un conflicto armado que constituye una parte sustancial de su acervo de conocimientos.

Al principio, mi presencia generó cierta tensión y ansiedad entre algunas de las personas que participaron en el estudio³⁷. Algunas veces pude observar una implícita resistencia,

³⁶ De igual modo, se revisó el significado de casos marginales. Esta estrategia buscó incrementar la validez de los resultados obtenidos, mediante la revisión de casos que no ‘encajaban’ con la línea analítica o interpretativa, es decir, el empleo de lo “contrafactual”. Estos ‘casos desviantes’ o ‘marginales’ pueden referirse a personas, situaciones, comentarios, tratamientos, eventos, etc. Por ejemplo, campesinos que no apoyan a la guerrilla pese a su hegemonía en zona rural, o viceversa, el de los sindicalistas en la zona del casco urbano que son voces relativamente críticas en un mundo donde los paras y narcos hacen peligrar sus vidas. Y es importante analizarlos para verificar si representan realmente casos atípicos, incluso pueden dar indicios de dimensiones del problema no consideradas en el análisis, tal como ya se señaló.

³⁷ Cabe remarcar algunas consideraciones sobre los papeles que tuve como entrevistador en relación con los entrevistados. Se hizo énfasis en el carácter confidencial de la información. Sin embargo, más allá de la confidencialidad de las fuentes, en el municipio, corregimientos y veredas se expresó abiertamente que nuestra presencia se debía a un interés por el carácter festivo del mes de agosto, una investigación que intentaba indagar en la gastronomía y las costumbres de los habitantes de la zona. Treinta y cinco personas- a las que les estoy agradecido por su valor-referenciadas personalmente por el boca a boca de mis dos informantes claves, se abrieron un poco más aunque fueran percibiendo durante la entrevista que no solamente se estaba preguntando por festividades, comidas y prácticas sociales, sino que ya me estaba entrometiendo en la “cocina” de su mundo social municipal, es decir, estaba escudriñando al interior de los

cuando se desconfía o sospecha del trabajo de investigación y se percibe al investigador como alguien externo aún viniendo recomendado por los informantes claves³⁸. Otros individuos consideraban que la presencia de un escritor que iba a redactar un libro sobre las fiestas y comidas de la zona, ya llevaba sospechosamente mucho tiempo³⁹. En ese momento, la intuición me llevó a salir de ahí.

Al contrario de la sensación de complicidad con sus poblaciones observadas que han señalado diversos antropólogos en sus periodos de campo (lo que los ha llevado a manifestar sentirse parte del mundo social de los “nativos”), el desarrollo de este trabajo me llevó a lo opuesto: a sentir una especie de “vergüenza ajena” por una situación que no puede producir orgullo alguno.

Sin embargo, he mantenido el control de las opiniones (y sentimientos) con respecto a la situación estudiada y además, operado de manera flexible y creativa (eso espero), con el fin de obtener provecho de todas las oportunidades de observación presentes durante la recolección de datos en el campo. Esto implicó un permanente esfuerzo para estar consciente de la forma como mis valores personales como investigador, podían distorsionar lo que observaba, lo que oía y registraba, así como las decisiones sobre el análisis y la interpretación de la información. Aunque no hay complicidad o empatía, se comprenden y entienden las dinámicas de interacción sui géneris. Pese a ello, mal haría en reducir el conflicto armado colombiano a un escenario de víctimas y victimarios, o de buenos y malos como cierta tendencia investigativa o accionar de ONGS ha llevado a cabo en dicho país. Y de acuerdo a lo que se leerá en el trabajo en cuestión, decidí no

procesos de violencia que se viven en la interacción cotidiana de sus mundos sociales. Indudablemente, el hecho de no haber reflejado el verdadero interés del estudio pudo pesar en la investigación, pues nunca hubo negociaciones previas con nadie (mientras menos supieran para qué se iba a utilizar la información mejor para ellos y para mí).

³⁸ Un ejemplo claro de ello fue el del dueño de un establecimiento de comidas que se rehusó varias veces a ser entrevistado, aún cuando se le dijera que se trataba de un estudio sobre las fiestas del retorno. En otros casos los entrevistados trataron de no comunicar sus intereses completamente o de responder con ciertas evasivas, tal fue el caso de uno de los escasos profesionales de la zona.

³⁹ De ahí que al final del trabajo de campo, uno de nuestros vecinos, Mauricio “el lavaperro” me lanzó una propuesta directa y sin “anestesia”: el de hacer de contacto o “mula” para llevar un encargo de “mercancía” a México, dado que me consideraban residente mexicano (y por tanto sería fácil colaborarles) y que además ya había ganado la confianza de muchas personas de la comunidad. El pago por “transportista” superaba mi año de becario, lo que me llevó a recordar esa frase de una vecina- declarada cristiana ella-, “encantadora” ancianita y “muy devota” por cierto, pero también legitimadora de las justicias privadas presentes en la zona: “los ricos no estudian. ¿Para qué estudiar tanto?”

hacerme ni el ciego, ni el sordo y mucho menos el mudo. Aunque eso me pueda costar perder el reingreso a la zona estudiada.

La investigación aquí presentada, constituye un proceso de “entradas múltiples” que fueron retroalimentadas con la experiencia y el conocimiento que se fue adquiriendo de la situación. Cuando los datos recolectados llegaron a un punto de saturación, fue pertinente suspender al filo del mes de julio la indagación adicional del mismo para evitar datos en exceso, los cuales no aportan elementos analíticos reales y hacen más dispendioso el manejo de datos que son de por sí voluminosos. De igual modo, fueron apareciendo rasgos nuevos del fenómeno de la interacción que requirieron pistas para comprenderlo. Un ejemplo de ello fue la consideración de la posición de las mujeres jóvenes en la “reputación” de actores armados narcotraficantes y paramilitares. De igual manera, se fueron planeando sesiones de recolección de datos de acuerdo con las pistas que fueron surgiendo en el proceso, con el fin de controlar la indagación.

CAPITULO 2: Colombia, un mundo social incierto, frágil y sui géneris

III Actores armados y dinámicas territoriales

A nosotros no nos cabe que perro que ladra no muerde ya que demostramos que ladramos y mordemos. Frase de los paramilitares en Trujillo Valle del Cauca, el día del descuartizamiento de sesenta campesinos en ese municipio del occidente colombiano. Atehortúa, Adolfo. **El poder y la sangre. Las historias de Trujillo, Valle**

En este epígrafe presentaré, por una parte, un breve abordaje histórico-político sobre los tres grupos armados ilegales (FARC, AUC y cartel del norte del Valle), por una parte y, por la otra, una referencia especialmente dirigida a exponer la responsabilidad histórica del Estado colombiano en la creación y consolidación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, que siniestramente han “apoyado” al ejército y la policía colombiana en la “guerra sucia” de las tres últimas décadas, a modo de política “contrainsurgente”, carente de reglas de juego y respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Lo anterior, es decir, la responsabilidad del Estado colombiano, es particularmente relevante cuando se haga referencia a torturas, ejecuciones extrasumarias, desapariciones, violación del Habeas Corpus, configuración de largos periodos de “estado de sitio” (especialmente en los ochenta) y, como si esto no bastara, la conformación de una nueva “cruzada” anti-insurgente, comandada por el actual presidente Álvaro Uribe Vélez, a través de la puesta en marcha de la polémica Ley de “Justicia y Paz”. Finalmente, se visibilizará las relaciones cercanas y cómplices entre el

narcotráfico (carteles) y el paramilitarismo colombiano (y por ende la relación triangular Estado-paras-narcotráfico).

a. *Las Farc o la persistencia de la lucha guerrillera*

Surgidas en 1964, las FARC son actualmente la guerrilla más grande y antigua del hemisferio occidental, con más de 15.000 hombres curtidos en las montañas y selvas colombianas. Cabe aquí reseñar los mitos fundacionales de las FARC, así como su surgimiento a partir de luchas agrarias.

El 27 de mayo de 1964 tiene lugar una avanzada militar, denominada “Operación Marquetalia”, cuyo objetivo era el de recuperar para el Estado colombiano una remota región ubicada entre el sur del Tolima y el norte del Huila, llamada Marquetalia. Para el establecimiento militar, dicha región constituía “el último reducto” de la Violencia y el bandolerismo de los años cincuenta que había que aniquilar, las llamadas “repúblicas independientes”(pequeños refugios de campesinos liberales y comunistas que existían mas allá del dominio del Estado). Esta visión contrastaba, por supuesto, con la que los campesinos tenían de sí mismos como guerrilleros desmovilizados, refugiados del gobierno de Rojas Pinilla, dedicados ahora a pacíficas tareas comunitarias. Desde sus agudas miradas, Sánchez y Sánchez consideran que la operación, “*presentada por el Ejército como una intervención de carácter cívico-militar era denunciada por el núcleo de autodefensa campesina como una agresión exclusivamente bélica*” (2004: 102). El Ejército tomó control de la región, mientras que 48 campesinos lograron resistir y evadir el cerco militar.

La salida apresurada de cuarenta y ocho hombres y sus familias, liderados por Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”⁴⁰, fue en junio de 1964. Sus largas marchas por una geografía que no le importaba al resto del país, así como su afianzamiento en regiones de colonización, provocaron un fenómeno insurgente que hace tiempo superó los 15000 combatientes. En ese proceso, hay toda una larga historia de supervivencia, a pesar de la presión de la doctrina del enemigo interior que se reproducía en toda Latinoamérica.

Esos 48 “héroes” de Marquetalia, según la mitología guerrillera, fundaron luego, en mayo de 1966, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En la misma época, pero en el nororiente del país (en la frontera con Venezuela), un pequeño grupo de hombres armados tomó la población de Simacota, en Santander, y proclamó la aparición del ELN

⁴⁰ Tal como se le conoce y nombra, “Don Manuel” Marulanda o “Tirofijo” ya es una “leyenda” para muchos, un “monstruo terrorista” para otros. Sigue siendo uno de los líderes de las FARC, con 43 años de experiencia guerrillera. A sus setenta años, es un referente de la resistencia campesina en Colombia.

(Ejército de Liberación Nacional, pro castrista-guevarista). En un periodo cercano, aparecen el M-19 (Movimiento 19 de abril, nacional popular), el EPL (Ejército Popular de Liberación, de línea china-promaoísta) y el Quintín Lame (guerrilla indígena del departamento del Cauca), por mencionar solamente las cinco guerrillas más conocidas.

Cuatro décadas después, el enorme crecimiento militar y territorial de las FARC se refleja en cifras: pasaron de 32 frentes y 3.500 guerrilleros en 1986, a más de 60 “Frentes”⁴¹ y 15.000 combatientes en 1995 (mientras que en el mismo periodo el ELN pasó de 11 a 32 frentes y de 800 a 5200 guerrilleros). Dicho crecimiento no provocó en las FARC una atomización “anárquica” de sus frentes, por el contrario, actualmente controlan la mayor parte del sur del país, han derrotado a unidades élite del ejército regular y han mantenido la iniciativa militar en los últimos años (Salazar y Castillo, 2001: 103).

A partir de la Sexta Conferencia⁴², en 1978, la guerrilla -con más de mil hombres en ese entonces-, presentó una nueva visión política y estratégica de sus acciones: se plantea por primera vez la conformación de un ejército revolucionario, se organiza la actividad política en las áreas guerrilleras y se delinea un plan nacional militar bajo la responsabilidad de los recién creados Estados Mayores de Frentes. Posteriormente, en la Séptima Conferencia de 1982, (ya con 24 frentes), se formaliza un ejército revolucionario bajo el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), y se lanzan dos afirmaciones: la primera, que existen “*asomos de una situación revolucionaria en el país*”, para lo cual deben redefinirse la estrategia y la táctica de la organización; la segunda, que “*nadie debe llamarse a engaño, creyendo que aquí en Colombia puede producirse una apertura hacia la democracia burguesa*”⁴³.

⁴¹ Cada “Frente” (con más o menos 200 a 300 hombres) se compone de “columnas”, que son grupos operativos pequeños, cuyo emplazamiento por selvas y montañas, trocha arriba o río abajo, son más fáciles de llevar a cabo. Cada “Frente” guerrillero lleva por homenaje un nombre de algún líder o mártir de las luchas campesinas, sindicales, estudiantiles, etc. Por el contrario, en el caso Paramilitar, se habla de “Bloques”, los cuales también tienen nombres de batalla, pero generalmente son los de las regiones donde cometen sus acciones.

⁴² Se trata de sendos encuentros clandestinos de jefes guerrilleros y mandos medios, el cual se produce cada 3 años aproximadamente en alguna región del país, bajo estrictas medidas de resguardo, salvo que condiciones urgentes ameriten encuentros nacionales inmediatos de los comandantes de todos los “Frentes”.

⁴³ En el caso de las FARC fue indudable que hasta los años ochenta su visión política era influenciada por un Partido Comunista particularmente ortodoxo pero, por otra parte, sus orígenes históricos en la época de “La violencia” de los sesenta condicionaron el divorcio con sus bases políticas, lo cual entrañó una muy temprana experiencia de “combinación de formas de lucha”, que terminó limitando a la dirección comunista. La política de sostener simultáneamente varias lógicas de acción se convirtió en una contradicción insoluble. Si se buscaban nuevos espacios políticos para ampliar su base social en las ciudades debían sacrificar su aparato armado y, por tanto, su perspectiva estratégica de acceder al poder por esta vía si las condiciones políticas lo permitían. Y si se comprometían en la guerra total, colocaban en vilo la supervivencia de sus aparatos políticos y sociales. Necesariamente, este movimiento insurgente fue condenando en

Aún en ese momento de crecimiento, las Farc no podían sustraerse a las visiones y sentimientos de una territorialidad inseparable de sus peculiares orígenes campesinos, que les dificultaba, en grado sumo, asimilar un concepto de lucha revolucionaria centrado en las “zonas liberadas” propias de las históricas guerras de liberación nacional y de los movimientos insurreccionales socialistas. En lugar de este precepto de toma del poder, para sustituir el régimen capitalista colombiano por uno socialista, las Farc, sin dejar de lado esta retórica, se han orientado de hecho hacia una construcción de poder local, como alternativa para la reconstitución de su economía campesina descompuesta por los excesos del capitalismo latifundista. De esta forma, en lugar del progresivo avance del campo sobre las ciudades, en el cual las ganancias y controles territoriales son simples recursos tácticos para el asalto final contra el Estado burgués, los combatientes de las Farc han preferido condiciones reales e inmediatas que les aseguren un territorio, una circunscripción jurídica, una economía propia. Poderes regionales, como lo atestiguan su predominio en el sur colombiano.

Por ello, la guerrilla colombiana ha representado sólo una guerra periférica, sin llegar a ser un factor de poder alternativo (Pizarro: 1996: 31). En un país en el cual el Estado se articula como dominación de la ciudad sobre el campo, con una importante concentración urbana, se requeriría un ejército insurgente de un tamaño muy significativo para pensar siquiera en cercar la ciudad desde el campo. O, en su defecto, un alto nivel de organización urbana muy motivada que acompañase las campañas guerrilleras con procesos insurreccionales urbanos, como ocurrió en Nicaragua en 1979 (Pizarro, 1996: 32)

En cuanto hace a la alta densidad urbana del país, es importante subrayar que este factor incidió en hacer de la guerrilla un hecho relativamente marginal, salvo cuando los grupos insurgentes lograron actuar con eficacia en el espacio urbano, por ejemplo con la toma de la embajada de la República Dominicana por parte del M-19 en 1980.

Mientras que el movimiento insurgente ha sido marginal, por ejemplo, en las zonas cafeteras, asiento de una intensa labor paraestatal de la federación Nacional de

forma lenta, pero inexorable a una ambivalencia persistente, que consistió en mantener simultáneamente espacios de diálogo y espacios de guerra con predominio progresivo de estos últimos. En efecto la política de combinación exigía intentar una acumulación simultánea de poder político y de poder militar. Sin embargo, debido a factores tales como el exterminio perpetrado por los servicios de inteligencia del Estado y los grupos paramilitares contra su frente de masas, la Unión Patriótica, pues más de cinco mil militantes fueron asesinados o desaparecidos en la guerra sucia de los ochenta, provocando así un desbalance en dicha década, a favor de la salida armada y en detrimento de la acción política-electoral.

Cafeteros en obras de infraestructura, ha logrado un mayor arraigo en las zonas de colonización⁴⁴ (Caquetá, Putumayo, Sur del Huila, Guainía, etcétera) en las cuales se presenta o una ausencia persistente del Estado o su presencia traumática. También la guerra tiene fuerte presencia en el Cauca, centro y sur del Valle del Cauca, Tolima, Arauca y Santander.

Las variables fundamentales que determinan las relaciones con el territorio de uno u otro proyecto guerrillero son, en primer término, las de movilidad o pertenencia. El nomadismo o la movilidad de las Farc en la zona de estudio que aquí nos ocupa, conduce a sus portadores a sostener una actitud propia de una guerrilla de corte militar-foquista, pero dirigida a consolidar poderes regionales y locales. Por ello, apuestan por construir bases de legalidad paraestatal.

El gramaje a campesinos, así como el impuesto colocado a los laboratorios, pistas y embarques de drogas ilegales de los narcotraficantes, se tornó en otra fuente de ingreso importante. Un estudio reciente muestra que, por diferentes mecanismos ilegales, la guerrilla obtuvo entre 1991 y 1996, un total de 3.6 billones de pesos (aproximadamente \$ 2.400 millones de dólares), equivalente al 5.25% del PIB de Colombia. Este diagnóstico tiene repercusiones políticas significativas frente a la comunidad internacional⁴⁵. Si se reconoce que los cultivos de coca y amapola se han venido convirtiendo en una alternativa a la crisis social en que se encuentra el campo colombiano, su tratamiento indiscriminado, en forma de represión estatal, conduce aún más a una polarización social.

⁴⁴ La guerra de guerrillas se ha podido mantener en vastas zonas del país, debido al apoyo social de sectores campesinos, así como simpatías encubiertas por parte de diversos movimientos sociales y populares, étnicos, sindicales, estudiantiles, etc. De igual modo, también cabe señalar que la guerrilla recibe críticas y rechazo de gran parte de la población urbana colombiana, (y esas posiciones han traído la terrible "legitimización" del paramilitarismo y los escuadrones de la muerte), produciendo entonces esta situación (apoyo-rechazo) una trágica polarización que ha desangrado al país.

⁴⁵ La guerra y, dentro de ella, el rol financiero de los ilícitos, limita a la insurgencia en el desarrollo de propuestas específicas con una presentación decorosa ante la comunidad internacional sobre la construcción de alternativas de desarrollo para las regiones productoras de amapola (para procesar heroína) o de coca (para cocaína). En este sentido las FARC han oscilado entre una refutación contraproducente de su relación con el fenómeno y un vacío de propuestas específicas, que contrasta con su potencial estratégico de ser tal vez la principal fuerza garante de un principio de solución a la problemática de los cultivos ilícitos. Este vacío se explica en parte por su comportamiento pragmático, atizado por la confrontación armada, que lleva a sistemas impositivos a productores y comerciantes.

En lo que atañe a territorios de dominio o de mayor presencia paramilitar, cabe señalar la concordancia entre su nominación y el tipo de violencia ejercida desde ellos, ya que cualquier objetivo de “sustitución social “ queda excluido, de hecho, frente a un proyecto político–militar, cuya estrategia apoya la naturaleza del Estado capitalista y su régimen político de democracia liberal. Lo que se proclama desde el paramilitarismo es la defensa del Status quo, mediante compromisos de salvaguardia de los sectores de mayores ingresos, así como la propiedad privada como bandera política, amenazada por la guerrilla.

En la zona de estudio, los “farianos” o “los muchachos”, es decir, los guerrilleros de las FARC, proceden de una base social campesina, lo cual históricamente le ha “colgado una lápida al cuello” a todos los campesinos- colaboradores o ajenos a ella- por parte de las fuerzas oscuras del establecimiento⁴⁶, a través del abuso de poder del ejército, así como de la indiscriminada acción de los paramilitares, quienes han construido la “imagen” de que en todo campesino, hay un potencial “auxiliador” de las FARC⁴⁷.

Lo anterior es pertinente de resaltar. Porque en el señalamiento de las fuerzas estatales se esconde un proceso represivo y militarista, que constriñe el accionar de organizaciones sociales, pero también amenaza a quienes, sin pertenecer a ninguna organización ni tampoco estar alineados con ningún actor armado, se encuentran en el “ojo del huracán”. En este caso, los campesinos, se encuentran en el teatro de operaciones de la guerra: la zona rural.

Detrás de ese “señalamiento” (sesgado y peligroso sin dudas), es decir, que todo campesino es un guerrillero “potencial” (por acción, complicidad o simpatía), se esconden los verdaderos propósitos del ejército y del paramilitarismo: por el lado del ejército, el “despeje” territorial para cercar a la guerrilla, el amedentramiento y la búsqueda de la “delación” y entrega de información para capturar guerrilleros y, por el lado del paramilitarismo (y los narcotraficantes que se esconden en sus liderazgos⁴⁸), el afán de

⁴⁶ Me refiero a los siniestros servicios de “inteligencia” colombianos dependientes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y al F2 (policía judicial), así como a los escuadrones de la muerte derivados de estos, los cuales evidencian complicidades/alianzas con fuerzas paramilitares.

⁴⁷ Para tener una idea de la dimensión de las guerrillas más antiguas del continente, según algunas fuentes las FARC cuentan con 16.000 combatientes y el EIn con cerca de 5,000, aunque esta última guerrilla (declarada guevarista y de origen urbana-universitaria) se encuentra debilitada y ad portas de negociar un proceso de paz con el gobierno (Rangel, 2005; Molano, 1996).

⁴⁸ Enfatizo “se esconden” porque, para buscar el favor político de la comunidad nacional e internacional, se asumen como paramilitares que luchan contra la “amenaza terrorista”, reiterando

apoderarse de millones de hectáreas, ubicadas en las zonas más fértiles y ricas, con el objeto de incrementar el precio de la tierra y, por ende, consolidar un amplio proceso de enriquecimiento ilícito, llevado a cabo durante las dos últimas décadas especialmente.

Richani (2002) caracteriza a las FARC, como un movimiento armado campesino, por razón de la ventajas sociales y geográficas, que le permitieron hacerse tradicionalmente fuerte en zonas de colonización campesina, del aprovechamiento a su favor del gran cambio introducido por el narcotráfico desde mediados de los años setenta, para generar así una “economía política positiva” en el cultivo y comercio de drogas ilícitas, y de sus planteamientos ideológicos que no interpretan bien los problemas de la población urbana.

b. AUC o paramilitares como paladines del Status quo

Una historia del paramilitarismo en Colombia se podría sintetizar en los siguientes periodos.

En 1968 se expide la Ley 48, que autoriza al Gobierno para crear autodefensas.

En 1983, en el municipio de Puerto Boyacá empiezan a operar grupos civiles con el Ejército. Desde 1984 hasta el año 2000, se producen las peores arremetidas y masacres paramilitares, “neutralizando” a la guerrilla en algunas regiones del país. En 1988, por ejemplo, las autodefensas del Magdalena Medio participan en las masacres de Urabá y el nordeste antioqueño.

En 1991, en el acuerdo de paz con el ELN, los paramilitares de Fidel Castaño se repliegan en Córdoba. En 1995 se produce la primera cumbre de las llamadas “Autodefensas”. Allí, sus miembros anuncian su unión para combatir a las Farc y el ELN a nivel nacional. El Gobierno autoriza la creación de las cooperativas “Convivir”, que en realidad son un modelo copiado de las Rondas campesinas “antisenderistas” promovidas por el régimen fujimorista (represor y totalitario) en el Perú.

La opción paramilitar entonces se consolidó, tanto con el “modelo Puerto Boyacá”, como en la manera adoptada por los hermanos Castaño⁴⁹, así como las modificaciones que le

de paso que no son narcos, afirmación que sólo los más ingenuos creen.

⁴⁹ Fidel Castaño era el hermano mayor, creador material del paramilitarismo en Antioquia. Carlos y Vicente los hermanos menores, quienes lideraron a las AUC tras el asesinato del primero (siempre se sospechó que fue el propio Carlos, pero nunca se comprobó). En el año 2004, Carlos Castaño fue “desaparecido”. A mediados del 2006 se encontró su cuerpo descompuesto y con signos de tortura en una tumba escondida. Y en el presente año, diversas voces del paramilitarismo han señalado que fue el propio Vicente Castaño, quien envió a treinta sicarios a silenciar mortalmente a su hermano, pues éste (Carlos) se encontraba ad portas de una negociación (y delación) por su cuenta con la DEA y el Gobierno norteamericano. Carlos asesinó a Fidel y Vicente a su vez

van introduciendo: practicar la guerra irregular, atacando el eslabón débil de las guerrillas: su red de apoyo (como lo indican estadísticas de diversos estudios, las confrontaciones directas son escasas) utilizando en todo caso, sus métodos y las ventajas de su organigrama y de sus tácticas, y disputando metódicamente sus bases sociales, lo cual les ha dado óptimas rentabilidades y máximos dividendos políticos. (Rangel, 2005: 244)

En un trabajo reciente, Kalyvas y Arjona (2005), nos brindan una tipología del paramilitarismo, de la que cabe resaltar dos dimensiones esenciales: la territorial (local o supralocal) y la del tamaño (pequeño o grande). De esta tipología se derivan cuatro tipos de paramilitarismo: 1) Vigilantes, 2) Escuadrones de la muerte, 3) Guardianes y 4) milicias y ejércitos paramilitares (Kalyvas y Arjona, 2005: 25). Igualmente, cabe abordar la variación en los tipos de paramilitarismo. Es pertinente al respecto hacer precisiones conceptuales. Varios términos tales como paramilitares, milicias, grupos de autodefensa, escuadrones de la muerte, “vigilantes”, etc., son usados, tanto en el lenguaje cotidiano como en discursos académicos, para describir el multifacético y nebuloso fenómeno del paramilitarismo (Kalyvas y Arjona, 2005: 26).

Al definir los escuadrones de la muerte, Kalyvas y Arjona (2005, 26) argumentan que:

“Son organizaciones clandestinas y usualmente irregulares, con frecuencia de naturaleza paramilitar, las cuales llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales y otros actos violentos (torturas, violaciones, incendios intencionados, bombardeos, etcétera), en contra de individuos o grupos de personas específicos. Los asesinatos son su actividad principal y en algunos casos la única. Excepto en los pocos casos en que grupos insurgentes los crean, los escuadrones de la muerte operan con total apoyo, complicidad o consentimiento del Estado o por lo menos de algunas partes de él”

Según Warren (1998, 89), en algunos casos, un porcentaje significativo de la población, se puede ver involucrada en varios tipos de actividades paramilitares, como fue el caso de Guatemala, donde se estima que para el año 1985, un millón de habitantes rurales estaba involucrado en actividades de “vigilancia militarizada” en sus comunidades con las Patrullas de Autodefensa Civil (PACS, equivalentes a los paramilitares o autodefensas en Colombia)⁵⁰.

contrató a terceros para que asesinaran a Carlos. Qué joyitas de hermanos. Caín y Abel en versión paramilitar.

⁵⁰ Los escuadrones de la muerte también han sido rigurosamente estudiados en Perú, donde las organizaciones paramilitares en los años sesenta, ochenta y noventa, fueron conformadas por sectores militares que cometían diferentes tipos de abusos (Poole y Renique, 1992:8) Se dice que las instituciones del Estado estaban altamente involucradas (Manitzas, 1991:85). Sin embargo, el CRF (Comando Rodrigo Franco) estuvo formado por peruanos que no pertenecían a las fuerzas militares y que decían “estar haciendo lo que el Estado no hacía”; este comando

En su afán de “legitimar” su proyecto de “Seguridad Democrática”⁵¹ - que no es más que la institucionalización de la violación de los Derechos Humanos y evidente persecución a la oposición política, el actual presidente Uribe le “apostó” a la salida militar, por encima de la negociación política con las guerrillas. Y un aspecto pertinente de señalar acá es la peligrosa –por no decir además “fascista”- promoción de una política estatal de fomentar un millón de “soldados campesinos” para-según el gobierno actual- equilibrar en el campo el pulso de la guerra con la guerrilla. Palabras más, palabras menos, “echarle leña al fuego”⁵².

De lo que se trata con el proyecto de “Seguridad Democrática”, es “armar” a un millón de jóvenes campesinos y colocarlos al servicio de la “inteligencia” militar, así como función de patrullaje en sus zonas rurales. Esto- que todavía no se ha implementado totalmente sino en algunos otros lugares del país, con no pocos reveses- es, ni más ni menos, que una copia del modelo de las patrullas “anti-senderistas”, extraídos de la época de Fujimori en Perú, o la de las PACS⁵³ en la guerra guatemalteca. Fascismo y “mano dura” en contraposición a la posibilidad de negociaciones políticas como mecanismos para obtener la paz.

Para Rangel (2005, 34-35), la formación de los grupos paramilitares está directamente relacionada con la construcción del Estado. Los Estados fuertes no necesitan privatizar la violencia o contratar a terceros (outsourcing), para que la ejerzan, ya que pueden controlar de manera efectiva o reprimir las amenazas internas usando su aparato policial

operaba a nivel supralocal dirigiendo sus acciones contra diferentes personas incluyendo políticos y periodistas (Manitzas, 2002:88). Obviamente, sería muy ingenuo pensar que se trataba de un grupo “autónomo” del Estado peruano. Militares y “civiles militarizados” se encuentran en simbiosis. También cabe señalar las milicias de autodefensa local o guardianes; aunque forman parte de una red mucho más extensa, normalmente coordinada por el Ejército, son instituciones locales que operan a tiempo parcial. Por lo general, se conforman a nivel local (involucrando sólo a personas del mismo pueblo) y están compuestos por hombres cuyas actividades están fuertemente ligadas a su comunidad. Los guardianes son una institución política más que militar. Son parte de una estrategia local de gobierno y de construcción de Estado (Kalyvas y Arjona, 2005: 36). En Guatemala el objetivo principal de las patrullas civiles, conocidas como milicias, fue “informar acerca de los simpatizantes de la guerrilla dentro de la comunidad” (Carmack, 1991:63)

⁵¹ Una especie de “Doctrina de Seguridad Nacional” pero retocada o “maquillada” en la actual postguerra fría.

⁵² Otro asunto pertinente: las continuas y peligrosas fricciones que se producen en las fronteras colombianas, con las Fuerzas policiales y militares de los vecinos países, tanto la de la República Bolivariana de Venezuela como la del Ecuador del presidente Correa. Un peligroso contexto, si recordamos aquí la guerra entre Ecuador y Perú, que le sirvió de excusa a Fujimori para levantar su caída popular interna. O, retrocediendo aún más al mes de abril de 1982, la Junta Militar Argentina cuando llevó a cabo la suicida (pero instrumental) invasión a las islas Malvinas para intentar apagar el fuego de la situación desgastada de su autoritario régimen.

⁵³ PACS: Patrullas de Autodefensa Civil.

normal. Los Estados débiles, por otra parte, afrontan estas amenazas internas apelando a la privatización de la fuerza⁵⁴.

Los actuales grupos paramilitares en Colombia tienen, según Rangel (2005), cinco características distintivas: son contrainsurgentes, civiles, autónomos del Estado, están fuertemente penetrados por el narcotráfico y tienen estructuras complejas. Siguiendo entonces a Rangel, estas características los hacen diferentes de otros casos de grupos paramilitares que han surgido en conflictos armados de distintos países. La otra característica peculiar del paramilitarismo en Colombia, es su estrecha vinculación con el narcotráfico.

Sin embargo, difiero total y enérgicamente de la tercera característica presentada por el profesor Alfredo Rangel, cuando afirma que el paramilitarismo es “autónomo” de las Fuerzas Estatales. Este es un aspecto controversial viniendo de quien viene, pues el propio Rangel forma parte de la élite académica cercana al gobierno Uribe (y, por ende, favorabilidad al proyecto paramilitar). Los paramilitares no son autónomos del Estado. Por eso, los círculos gubernamentales insisten en hacer referencia a la sigla “Autodefensas” y no a “paramilitares”⁵⁵ pues ello los vincularía precisamente con los militares. La afirmación de este académico, intenta eximir de sus responsabilidades y complicidades a los militares, en la lógica perversa que se ha querido implantar en la última década (a modo de “justificación”), acerca de que las violaciones de los Derechos Humanos -en las que se han encontrado culpables a oficiales del ejército colombiano-, es el accionar “aislado” de algunas “manzanas podridas” pero no una “política” (clandestina claro está) de las Fuerzas Armadas⁵⁶.

Al contrario de esta pantalla gubernamental, considero que no hay frutas aisladamente podridas, sino que “todo” el huerto de las manzanas está podrido, es decir, la complicidad de las Fuerzas Militares y el paramilitarismo es total, basada en la colaboración, la estrecha relación estratégica y el fomento del trabajo sucio de unos (paras), que los otros

⁵⁴ Los dictadores que enfrentan insurgencias o anticipan movilizaciones populares masivas, también suelen apelar a escuadrones de la muerte. Dos ejemplos son la guerra sucia en Argentina y la operación chilena “Cóndor”. Afirmar que los paramilitares surgen en situaciones de cambios internos del Estado, no implica sostener que sean estructuras puramente defensivas (Rangel, 2005: 36). En Colombia, ciertos grupos paramilitares fueron conformados explícitamente para incrementar el precio de las tierras abandonadas, luego que los hermanos Castaño se apropiaran de ellas.

⁵⁵ Por ello, los paramilitares se presentan como “Autodefensas Unidas de Colombia”.

⁵⁶ En las dictaduras militares del cono Sur, la “justificación” planteada era que los militares violadores de Derechos Humanos, habían actuado bajo “Obediencia Debida”.

(milicia), no pueden realizar abiertamente. Por tanto, la definición de “autonomía” de los paras que realiza el profesor Rangel es sesgada a todas luces, e insulta la inteligencia de los colombianos⁵⁷.

Muchos de los principales impulsores del paramilitarismo fueron primero narcotraficantes y posteriormente, sin abandonar esa actividad, se convirtieron en paramilitares. Estos vínculos con la producción y venta de drogas ilícitas le han otorgado a los grupos paramilitares una inmensa disponibilidad de recursos económicos, pero al mismo tiempo lo han contagiado de cierta lógica mafiosa en la que prevalece el interés individual de los jefes, la desconfianza entre grupos, las disputas por territorios, mercados y zonas de influencia, los ajustes de cuentas violentos y la imposibilidad de tener un proyecto político colectivo“ (Rangel, 2005:12).

Los “vigilantes“, con un radio de acción localizada pero con presencia nacional, constituyen un fenómeno predominantemente urbano, pues son los encargados de controlar el crimen y de hacer justicia por su propia mano, vale decir, escuadrones de la muerte con una cobertura supralocal y dedicados al asesinato selectivo; autodefensas rurales, con gente de la zona y uno de cuyos propósitos fundamentales es controlar la población. Todos estos grupos paramilitares, se multiplicaron y fortalecieron en la segunda mitad de los años noventa, con un ritmo de crecimiento que superó al de los grupos guerrilleros, pues llegaron a ser el segundo grupo irregular en el país, con un tamaño equivalente al 80% de las FARC, principal grupo insurgente, y tres veces más grande que el segundo grupo guerrillero, el ELN (Rangel, 2005). Estos grupos han adquirido una importante capacidad de confrontación militar, a pesar de no tener la larga experiencia de la guerrilla.

Aunque el paramilitarismo es un fenómeno sumamente abigarrado - debido a su carácter regional o localista⁵⁸- exhibe algunas constantes. Una de ellas es el tipo de coalición que soporta a los paramilitares. Es prácticamente imposible, por ejemplo, encontrar un evento de paramilitarismo sin el apoyo firme y organizado de sectores ganaderos. Eso no es difícil de comprender, puesto que ellos (ganaderos) estuvieron en la primera línea de enfrentamiento con la guerrilla, y fueron desde el principio una de las

⁵⁷ Me tomaré el atrevimiento de afirmar, que si Uribe ha sido re-elegido, es un fuerte indicador de un sentir social a todas luces centrada en el autoritarismo, el irrespeto a los valores de la diversidad política y en suma, una precaria cultura política de los colombianos, que se refleja en la búsqueda de un mesías que ha incrementado la militarización de la vida social y política en este país andino.

⁵⁸ Ello en ningún momento quiere decir que se nieguen las evidentes conexiones de ese localismo con un fenómeno global como es el tráfico internacional de drogas.

principales víctimas del secuestro, un crimen que en Colombia adquirió proporciones industriales. Y obviamente, el accionar paramilitar no podría haberse consolidado sin el “OK” de las fuerzas Militares, es decir, el propio Estado.

Es pertinente hacer una aclaración. Si bien la presencia de los paramilitares es nacional, sus radios de acción/represión son localizados, es decir, llevados a cabo por “Bloques”, que actúan en ámbitos locales y regionales exclusivamente, con independencia entre uno y otro bloque, pues se han presentado no pocos enfrentamientos de corte “mafioso” entre ellos, cuando de cargamentos de cocaína se trata, es decir, cuando se disputan sus réditos. Por ejemplo: el bloque Nutibara en Antioquia, el Bloque Calima en el Valle del Cauca, el Bloque Centauros en Villavicencio, el Bloque Catatumbo en Norte de Santander, etc. Lo anterior hace que sus poderes se anclen en la búsqueda de los controles regionales, especialmente en aquellas zonas donde existen más recursos para la extorsión, defensa o “cartelización” (por ejemplo, banano en el Urabá, Coca en Huila, Valle del Cauca, Antioquia y costa Atlántica, petróleo en Saravena y Arauca; palma de cera en el Chocó; esmeraldas en Boyacá, amapola para heroína en el Cauca, etcétera).

Además, es evidente que en el fenómeno paramilitar, hay una fuerte articulación de poderes fácticos y dominios *locales*, paralelos a la presencia y fuerza de los grupos de presión y lobbys *nacionales*, así como vínculos con redes *internacionales* de las drogas. A nivel local/regional, controlando el presupuesto municipal, así como el cultivo y tránsito de drogas ilícitas, protegiendo con sus ejércitos a los carteles y sacando evidente partido de sus beneficios económicos. A nivel nacional, en el Congreso de la República y en la presencia inocultable con los partidos que rodean al presidente Uribe y, a nivel internacional, con fuertes lazos con los carteles de las drogas mexicanos, así como con los distribuidores mayoristas de cocaína y heroína en Estados Unidos y Europa. Esta confluencia local-nacional-internacional, no impide el señalar que su interés primario son los poderes locales, pues ahí se encuentra la posibilidad de configurar el proceso.

Lo anterior también se aproxima a una situación que cobija a los otros actores armados: los conflictos armados actuales se han independizado de los Estados nacionales, obteniendo recursos económicos, a través de intercambios legales e ilegales a escala mundial, antes impensables. Los paramilitares, las FARC, el Eln⁵⁹ y, con mayor razón,

⁵⁹ Por ejemplo, es interesante observar qué bien configurados y presentados se encuentran los portales web de las FARC y el Eln, así como las impresionantes redes e interconexiones que la insurgencia colombiana establece con cientos de organizaciones y movimientos sociales en todo el mundo. Este fenómeno de solidaridad mundial, que siempre existió en la izquierda, nunca ha sido un fenómeno nuevo (es más, la solidaridad es parte de la esencia en la izquierda). Sin

los narcotraficantes, participan de forma activa de esa nueva economía global, que traspasa las fronteras y que los convierte en actores dentro de la geopolítica mundial actual. Ya no se trata solamente de rebeldes armados o de grupos al margen de la ley, que enfrentan a un Estado o a un gobierno que consideran ilegítimo, sino de organizaciones armadas con fuertes vínculos con la economía mundial, que se han beneficiado en forma notable de las nuevas oportunidades de intercambios transnacionales y de tributación sobre esas actividades, ya sean legales o ilegales⁶⁰. Asistimos además a la proliferación de redes de organizaciones no armadas, que apoyan a los actores armados, sean de izquierda o de derecha.

Un número significativo de estudios recientes, han comenzado a caracterizar las autodefensas o paramilitares como parte del sistema, es decir, “paladines del status quo”, en su función de “defender” a la sociedad de la guerrilla, no como un agente marginal en las relaciones de poder. Siguiendo a Duncan:

“En los municipios de Colombia donde ejercen su dominio, los jefes de las autodefensas (paramilitares) son los dueños absolutos del Estado. Regular y extraen tributos a las transacciones económicas, amenazan y protegen a las comunidades, moldean la justicia y el orden político de acuerdo a su conveniencia, y poseen el control, y por consiguiente las mayores ganancias, del tráfico de drogas. Durante más de una década la expansión geográfica de estos ejércitos de señores de la guerra ha ido en ascenso, hasta llegar a convertirse en parte importante de la estructura de poder político en las zonas semiurbanas y rurales del país” (Duncan, 2005: 291)

La justificación de la defensa propia y la función complementaria a la tarea de seguridad a cargo de la Fuerza Pública crearon, al parecer, un espacio de tolerancia pública hacia las autodefensas. Más adelante, en el nuevo escenario de la elección de alcaldes, sobrevino el fenómeno del clientelismo armado, mediante el cual, tanto guerrillas como paramilitares, pasaron a controlar a políticos locales en sus respectivas áreas de

embargo, con las nuevas tecnologías de la información, léase Internet, las comunicaciones y redes son más complejas y diversificadas. Por otra parte, recordemos, además, la captura de tres activistas del IRA en el departamento del Caquetá, sindicados de estar ofreciendo capacitación en configuración de bombas, con el objetivo que se han planteado las FARC de iniciar en los cinco últimos años, un proceso más agresivo en las ciudades colombianas. De igual modo, las conexiones con la ETA, con el EZLN, con movimientos islámicos, han sido reseñados por diversos estudios de organismos internacionales de inteligencia, publicados permanentemente en los diarios de circulación nacional, especialmente “El Tiempo” y “Espectador”.

⁶⁰ Como lo plantea Mark Duffield (1999), el desconocer esta situación ha llegado a seguir pensando los conflictos armados de hoy como el resultado de una combinación perversa de irracionalidad, de pobreza, instituciones débiles y poco crecimiento económico. (Cfr Salazar y Castillo, 2001:21)

influencia⁶¹ y, luego, a extender su influencia al Congreso, como lo han mostrado Salvatore Mancuso⁶² y otros jefes paramilitares.

Es decir, de la acción local y regional “focalizada”, se complementa el proyecto paramilitar con un fuerte proceso de lobby político que incide en temas neurálgicos como son la extradición, la extinción de dominio (expropiación de bienes ilícitos) y de las campañas de legitimación en la lucha histórica a las guerrillas (tal como está sucediendo con las PACS en Guatemala)

Una diferencia importante en el perfil de los paramilitares, es el proyecto político que configuran y defienden. Además, las Farc no tienen acceso público para defender su doctrina política en el propio Congreso Nacional como sí lo han “gozado” -descarada y abiertamente- los paramilitares. Adicional a esto, la “piedra en el zapato” que no le permite al propio Departamento de Estado Norteamericano hacerse el de la “vista corta” (aunque estos paras hubieran combatido a los denominados por aquellos como “terroristas” de las Farc), es la evidente conexión entre los paras y el lavado de dinero, proveniente de mercados internacionales de la droga, la debilidad de las jerarquías y su dependencia de clientes narcotraficantes- disgregados después del colapso de los carteles de Medellín y del Valle-, lo que hace difícil (a los políticos norteamericanos) mirar para otro lado y dejar que el tiempo (y el olvido) borren los “expedientes” judiciales.

Una similitud, inocultable tanto en la actividad de las autodefensas paramilitares como en la de las FARC, estaría en el aprovechamiento del sistema financiero para la inversión de cuantiosos activos líquidos provenientes de actividades criminales⁶³. Según Duncan:

⁶¹ La guerrilla controla los presupuestos y lineamientos de los políticos locales en el sur del país Putumayo, Caquetá, Huila, Guainía, Cauca, etc), mientras que los paramilitares dominan a su antojo a los alcaldes y gobernadores en la costa Atlántica caribe.

⁶² En un país con escasa migración europea, este apellido llama mucho más la atención. Mancuso, descendiente de una familia de italianos que llegaron a mediados del siglo XX a Colombia, y que lograron fortuna en haciendas y ganadería, es un monteriano (oriundo de Montería, zona del Atlántico, Norte de Colombia) que constituye un caso diferenciado. Siendo una persona que ha vivido infancia y juventud en la riqueza, y que ha tenido oportunidad de acceso a educación superior, se “fue en ruta” hacia el liderazgo de las AUC paramilitares, para “defender” a las clases dirigentes de la costa Atlántica de lo que él denominó como “práctica irritante del secuestro”. No solamente es uno de los más sangrientos asesinos paramilitares, responsable de cerca de treinta masacres en Antioquia, Córdoba, Valledupar, Norte de Santander, etcétera, sino que ahora es tristemente famoso porque todos los días sale en los diarios, ya que actualmente está en “prisión” bajo la modalidad de la Ley de Justicia y Paz, haciendo fuertes declaraciones que están involucrando a toda la clase política, empresarial y dirigente colombiana. Ver portales de diarios del país en: <http://www.eltiempo.com/>; así como: <http://www.elespectador.com/>.

⁶³ Y en particular, los ingresos que se resguardan en el sistema financiero, provienen- en el caso paramilitar- de las drogas ilícitas, del contrabando en los Sanandresitos, de las enormes redes de la prostitución, del dominio en sectores del transporte, de los réditos otorgados por los ganaderos

El sentido de la apropiación desmedida de tierras por parte de los señores de la guerra guarda una racionalidad política antes que económica. La rentabilidad de los grandes latifundios es pobre cuando se compara con otros negocios como el narcotráfico y la extorsión (...). El objetivo de las facciones lideradas por los señores autodefensas de la guerra o redes de crimen organizado no es la toma del Estado sino la posibilidad de disponer de santuarios comunes al control de los modernos Estados Nación desde donde negociar con los grandes mercados internacionales. (Duncan, 2005: 292)

Los proyectos, visiones o modelos de desarrollo rural de las guerrillas y los paramilitares difieren: el de las guerrillas está basado en la pequeña propiedad campesina y el de los paramilitares, en la gran propiedad terrateniente. Además, existe una lucha por la propiedad de la tierra y el control de territorios que tiene móviles y propósitos diferentes. Para la guerrilla el control territorial es funcional y coadyuva a su proyecto de expansión político – militar, mientras que la propiedad de la tierra es un tema de su plataforma política que debe ser resuelto por medio de una reforma agraria. Para los paramilitares, el control de territorios va muy ligado a su voracidad para hacerse pronto a la propiedad de la tierra: el primero cumple propósitos contrainsurgentes y de seguridad personal, la segunda es una vía de acumulación y blanqueo de capitales particulares adquiridos por medios ilícitos y violentos. Al respecto, ahora sí consideramos acertado el comentario de nuestro ya cuestionado profesor Alfredo Rangel, cuando hace referencia a las tácticas y estrategias paramilitares:

“Su estrategia contrainsurgente se basa en el principio de aislar a la guerrilla, de “quitarle el agua al pez” por medio de una guerra sucia inmisericorde, ha sido muy “exitosa” en ciertas zonas del país. De esta manera, sin enfrentarse directamente contra la guerrilla en el plano militar, donde los paramilitares tienen desventaja, ha logrado debilitarla expulsándola de territorios, restándole el acceso a fuentes de rentas económicas, debilitando sus bases sociales y destruyendo sus estructuras de apoyo (Rangel, 2005: 14)

Según cierta mirada, ingenuamente construida en los últimos dos años, las circunstancias para los paramilitares han cambiado en cuanto a tolerancia social (interna y externamente)⁶⁴. Según esta “optimista” perspectiva, las exigencias de verdad, justicia y

colombianos, de los lavados de dinero que se retroalimenta del proceso desde el primer Mundo, etcétera. En el caso guerrillero, los recursos provienen del gramaje al tránsito de productos ilícitos, de los secuestros y extorsiones a ganaderos y comerciantes, de su infiltración en el uso de los presupuestos locales, etcétera.

⁶⁴ En la provincia y pequeños poblados como el que constituye esta investigación, no hay tal “desprestigio” de las estrategias de mano dura de los paramilitares. Ni tampoco grandes cuestionamientos a su accionar y responsabilidad en la degradación del conflicto armado. Muchas poblaciones en diversas partes del país (especialmente el Norte de Colombia), participan y apoyan directamente con causas paramilitares. No así en el sur del país, donde predomina la influencia guerrillera. En el centro y occidente del país (como es el caso que aquí nos ocupa del Valle del Cauca) se da una disputa entre guerrilleros, por una parte, y ejército, paras y narcos, por la otra. Una mezcla explosiva.

reparación que llovieron desde algunos sectores críticos de la sociedad civil debieron caer como baldes de agua fría en las cálidas expectativas de perdón y olvido que inspiraron el inicio del proceso de diálogos con el Gobierno colombiano. La desmovilización no sería entonces un camino de rosas hacia la reconciliación nacional, sino un tortuoso camino de juicios, cárceles, delaciones, expropiaciones y una permanente incertidumbre frente a las solicitudes de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, consideramos que la impunidad es el cuadro que acompaña a la relativa desmovilización, según lo señalan los más recientes y rigurosos reportajes periodísticos en zonas de influencia paramilitar (ver sección Anexos “Reportes periodísticos”).

En el inicio del gobierno Uribe, los paramilitares de las AUC⁶⁵ expresaron sus intenciones de negociar su desmovilización, lo que el gobierno concretó en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito en julio de 2003, del cual emergió la denominada “Ley de Justicia y Paz”⁶⁶, (criticada por organizaciones de DDHH y gobiernos europeos occidentales, preocupados por la impunidad que ampara a los paramilitares), la cual configura las condiciones jurídicas para la desmovilización de estos. Para establecer las condiciones de verdad, justicia y reparación que reclaman tanto la comunidad nacional como la internacional hay que tener presente, en todo caso, que esta negociación se realiza porque el Estado no ha podido ganar la guerra y las guerrillas no la han perdido, vale decir, prevalece un claro empate militar.

Además, el principal motivo de la desmovilización paramilitar, es que el gobierno Uribe es considerado el de mano “más dura” de los últimos veinte años en el país, de ahí que industriales, ganaderos y comerciantes consideran que “ahora sí el Estado es fuerte”, según circula en el sentido común de las élites colombianas. Por eso, si el Estado es fuerte- léase militarizado en extremo- entonces se pierde la razón de ser del paramilitarismo. Esa razón y no la capacidad política del actual gobernante para doblegar y hacer rendir al paramilitarismo- como afirma en su discurso ante foros internacionales Uribe- ha llevado a un proceso desmovilizador reciente que esconde más inquietudes y suspicacias que certezas.

⁶⁵ Autodefensas Unidas de Colombia. Antes eran llamadas “Autodefensas Unidas de Urabá y Córdoba”

⁶⁶ El error de cálculo de los paramilitares tiene una historia similar: no esperaban que su desmovilización tuviera que realizarse bajo los principios de verdad, justicia y reparación. Mucho menos que la extradición se mantuviera como una espada de Damocles. No obstante, en un conflicto tan atravesado por el narcotráfico, no tiene ningún sentido exigir credenciales de limpieza previa o actual sobre el tema a quienes están dispuestos a firmar la paz. Pocos (¿o ninguno?) la podrían presentar.

De lo anterior, se deriva un aspecto muy importante, que requiere una breve y concreta precisión analítica inmediata. Si los paramilitares “fueron” funcionales a los entes gubernamentales, a los ganaderos, a los industriales, al propio ejército, y ya no lo son, es porque su compleja y polémica “independencia” del Estado⁶⁷ es semejante a la radicalización de un “Frankenstein”⁶⁸ que se siente abandonado por su padre⁶⁹ y creador, es decir, herido en su “amor propio” por ser abandonado (aparentemente), a su suerte (entiéndase posibles extradiciones a Estados Unidos), pero que ahora están dirigiendo todo su accionar hacia la “mina de los huevos de oro”: la rentabilidad del tráfico de cocaína y heroína, es decir, su ya no disimulada articulación con los carteles de la droga más fuertes actualmente, como es el caso del más temido cartel de cocaína en Latinoamérica: el del Norte del Valle, justamente el que actúa en la región donde se desarrolla esta investigación. La desmovilización de las estructuras de las autodefensas (paramilitares)⁷⁰, ha dado paso a varios cuestionamientos acerca de la seguridad en las zonas donde ésta ocurre, ya que siempre queda la pregunta de si estas realmente se están produciendo. Y ello es así, porque el conflicto armado colombiano no se produce entre un Estado versus todos los grupos irregulares, sino entre un Estado represor -junto a paramilitares “narcotraficantes”- y una “larga” insurgencia guerrillera.

Las desmovilizaciones en algunas zonas del país, han provocado una serie de problemáticas, como es el caso del alza en las actividades de la delincuencia común, las

⁶⁷ Para muchos ciudadanos –relativamente más críticos de esta farsa desmovilizadora- esa independencia es relativa, porque los paramilitares terminarán “reciclados” tanto en las Fuerzas Armadas, como en grupos de vigilancia privada. Un Frankenstein reciclado, en suma, pero bajo otro nombre.

⁶⁸ Con el perdón de Frankenstein.

⁶⁹ Por eso amenazan constantemente a las élites, a las Fuerzas Armadas y al gobierno Uribe, de “cantar” ante los Estados Unidos, si los envían en extradición a dicho país.

⁷⁰ Para comenzar, hay que tomar lo sucedido con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (BCN) el 25 de noviembre de 2003 en Medellín . De acuerdo con declaraciones del alto comisionado, el 27 de septiembre de 2004, sólo el 30% de las 855 personas que depusieron las armas en realidad eran paramilitares. La siguiente desmovilización fue el 25 de noviembre de 2004 y correspondió a 447 hombres del Bloque Bananero. La seguridad de la zona de Urabá antioqueño - en términos de evitar una ofensiva por parte de las guerrillas -donde este bloque operaba, ha sido garantizada por algunas estructuras paramilitares que forman una especie de anillo sobre esta región. En diciembre de 2004 se produjo la desmovilización de 147 paramilitares de las Autodefensas de Cundinamarca, al mando de Cifuentes (alias “El Aguila”). La desmovilización del Bloque Catatumbo en diciembre de 2004 trajo consigo la expectativa sobre la situación de seguridad de la región, así como cuestionamientos acerca de si los paramilitares habían abandonado realmente la zona y si la guerrilla intentaría copar territorios que se encontraban bajo dominio de las autodefensas. De los desmovilizados, 410 se han radicado en el departamento Norte de Santander, según lo estableció un estudio de acompañamiento adelantado por la Oficina del Alto Comisionado. Según versiones, estas personas estarían dedicadas actualmente a la extorsión, el hurto de vehículos, la piratería y otras modalidades delictuales (Rangel, 2005: 86)

incursiones de la guerrilla e incluso la reactivación de nuevos grupos delincuenciales. En la zona de estudio (Valle del Cauca), el 18 de diciembre de 2004, se produjo la desmovilización de 557 hombres del denominado Bloque Calima de las AUC. Si se hace un ejercicio simple de sumar el número de hombres que, según la Tercera Brigada, tenía dicho grupo en el Valle, daría como resultado 900 combatientes y, descontándoles los 100 del Pacífico esta cifra sería de 800.

Como se mencionó, los desmovilizados fueron 557; habría que preguntarse entonces por la suerte de los 243 restantes. Lo que sucedió es que parte de la estructura del Bloque Calima (especialmente “mandos medios”), sigue operando de manera “informal” en la región, manteniendo relaciones con algunos mafiosos del norte del Valle y actuando como una red que procura garantizar la seguridad en algunas zonas donde la avanzada guerrillera se mantiene latente. No hay que descartar, además, que parte de los combatientes de estas organizaciones paramilitares hayan sido reclutados por estructuras sicariales.

Son los “mandos medios”, entonces, quienes más se resisten a entregarse y desmovilizarse y, en cambio, se reagrupan en nuevos grupos paramilitares o se articulan de plano con carteles de la cocaína y heroína. Pero, ¿cómo explicar que los altos mandos y cientos de paras rasos sí se acogen a la “Ley de Justicia y Paz” y no así los mandos medios? Tal vez –si se me permite el atrevimiento⁷¹- podría arriesgar aquí una posible explicación. Mi tesis en este aspecto (resistencia a desmovilizarse), estaría en el hecho de que los mandos medios ya han transitado por toda una especie de “rito de pasaje” (siguiendo a Turner)⁷². Estos mandos medios son conocidos en el ambiente colombiano como “lavaperros” y “traquetos”, que, en calidad de lugartenientes, son, siguiendo el legado de la obra de Turner, personas liminares o seres transicionales. La conducta de la persona liminar es normalmente pasiva o humilde, por ello los lavaperros han “soportado” durante años, todo tipo de riesgos y peligros, han obedecido ciegamente a los “jefes” paramilitares y a los “capos” de los carteles. A modo de sicarios “neófitos”, su relación con sus “patrones” estuvo siempre caracterizada por la más completa obediencia y sumisión.

Estos lavaperros y traquetos, al momento de la desmovilización de sus jefes (año 2003), no eran paras o guardaespaldas rasos, sino que ya habían cambiado de estado, pero se

⁷¹ O la ignorancia. Tal vez por ello se afirma que la ignorancia es atrevida.

⁷² Tal vez esté forzando las ideas de Turner en esta explicación, pero si asumimos que las estructuras sicariales y gansteriles, tienen sus propios procesos y rituales de iniciación, entonces es posible dar cuenta de esta interesante negación de los mandos medios a entregar las armas.

encontraban en su fase “liminar”. Siendo personas liminares, para llegar a ser capos, tuvieron que haber sido (al ingresar al paramilitarismo o a los carteles) “empleaduchos rasos”, pero se encontraban transitando por el rito de pasaje, con una experiencia acumulada para enfrentar su futura y anhelada situación, en el que irían a gozar de nuevos poderes: ser el patrón, el capo. En el ritual de pasaje, estos traquetos y lavaperros están en un periodo de transición, no exento de conflicto, lo cual se evidencia en los homicidios provocados entre aspirantes al mando de organizaciones delictivas (como carteles y grupos paramilitares). El traqueto y lavaperro, entendido así como individuo liminal, se mueve hacia un status superior, en un ritual que viene dictado por los requisitos de su organización criminal (lealtad, sagacidad, frialdad, ambición, destreza y crueldad).

Un ejemplo del ritual, es la obligación que asumen narcos y paras, de cometer algún homicidio, bajo un procedimiento extremo, con el ánimo de “demostrar” la valentía requerida como cortar en trozos a un prisionero, violar una mujer, asesinar niños), para luego convertirse en jefe. Una crónica, recientemente publicada en la página web del diario argentino Clarín, presenta en el ámbito coyuntural del escándalo de la “parapolítica”, un testimonio de un mando medio “para”:

Nos hacen descuartizar a prisioneros y beber su sangre”, dijo un ex paramilitar. En “La barbarie de la guerra en Colombia

*A veces nos obligaban a tomar la sangre de ellos (las víctimas), y **cuando no había carne para comer la sacaban de los muertos**”. Este es parte del testimonio de un ex miembro de los paramilitares colombianos que actuaron en el suroeste del país, donde se han exhumado los restos de más de 200 de esas víctimas, muchas de ellas desmembradas*

La narración es la de un joven de 26 años que ingresó a los 20 a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que actúa como mando medio en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador.

Confeso asesino de guerrilleros y campesinos, este mando medio paramilitar, cuya identidad se mantiene en reserva, describió la barbarie de la guerra de los paramilitares contra las guerrillas izquierdistas

Hasta ahora, la Fiscalía ha logrado exhumar 700 cadáveres de esas víctimas en todo el país, según informó recientemente el fiscal general Mario Iguarán, al reportar el hallazgo de 105 cuerpos en 65 fosas comunes descubiertas en el Putumayo, con lo que ascienden a 211 las fosas comunes encontrados en esa región.

El joven negro y oriundo del empobrecido departamento de Chocó, asegura que cuando ingresó al grupo de las AUC que combatían en la región sur de Putumayo, la instrucción que recibió fue aprender a matar y cortar en pedazos a las víctimas.

“Ellos, los comandantes, los traían atados de pies y manos. Para que no

gritaran mucho le cortaban aquí —dice señalando la vena yugular—, entonces, algunas veces, antes de cortarles la cabeza, el comandante ponía un vaso y nos hacía tomar la sangre”.

“Nos decía que era para que cogiéramos valor”, agrega, para seguidamente asegurar que “uno de los comandantes, al que le decían ‘Muelarica’, a veces cortaba carne de las nalgas de las víctimas y nos la hacía comer para que no nos muriéramos de hambre”.

“A las mujeres que capturaban las amarraban con la piernas abiertas y las violaban. Una vez una guerrillera que capturamos, que le decían ‘Daniela’ y tenía como 17 años, gritaba que la mataran mientras la violaban”, continuó relatando, casi impávido, mientras se frotaba nerviosamente las manos.

Describió también una especie de ritual para sepultar a las víctimas: “Las fosas se cavaban de unos 70 cm de profundidad, por eso los cuerpos se picaban bien para que cupieran”.

*Tras admitir su participación en varias matanzas, el joven afirma no saber cuántas personas asesinó su grupo, limitándose a decir que fueron “muchas las personas que matamos”, puntualizando que la mayoría eran guerrilleros, pero reconociendo: “**también matamos a muchos inocentes**”⁷³*

*“En El Tigre, departamento del Putumayo, una vez, me contaron los compañeros que mataron a entre 80 y 100 personas, entre ellos 45 niños. Ese día el río estaba sucio, las aguas que bajaban **eran pura sangre**”⁷⁴”, concluyó el ex paramilitar (Clarín, 12/05/2007)⁷⁵*

Es decir, en un momento crucial, cuando estaban a punto (o relativamente cerca) de asumir nuevos status (ascender a jefes), se presenta la particular desmovilización paramilitar (2004). Por eso muchos, más de cinco mil según Organismos de Derechos Humanos, no acatan el proceso: como paras “mandos medios”, han arriesgado sus vidas y, como si fuera poco, apostado todas sus fichas, es decir, puesto todas sus ambiciones (ilusiones) en el enriquecimiento ilícito a cualquier precio. Por ello, se resisten a abandonar la actividad delictiva, rearmándose con nuevos grupos de paras y narcos (el más conocido grupo “neopara” actualmente, es uno compuesto por cuatro mil combatientes llamado “Águilas Negras”). He aquí un cuello de botella (uno más en la guerra colombiana), que no permite ser optimista –para nada- respecto a la desmovilización –sería, confiable, duradera- de estos paramilitares, además de los vicios de impunidad que rodean al proceso y que he señalado reiteradamente.

Adicional a esta explicación, se encuentra el hecho que, ante la incertidumbre de entrar en un proceso de desmovilización sin un marco judicial concreto y con un nivel de incentivos económicos bajo en relación con los ingresos percibidos de las prácticas

⁷³ El resaltado en “negrita” es mío. Aquí se percibe la construcción del “otro”, es decir, la configuración del “bien” y del “mal”, que señalo también en el tercer capítulo, cuando hago referencia en un epígrafe a las “Justicias Paraestatales”.

⁷⁴ Idem

⁷⁵ En: <http://www.clarin.com/12052007>. Sección “El Mundo”

ilícitas-como la extorsión o el narcotráfico-, es evidente que estos paras “mandos medios”, no se han integrado al proceso de reincorporación a la vida civil⁷⁶. Este ultimo escenario parece afirmarse con la ocurrencia de algunas acciones delictivas en la zona (desde el puerto de Buenaventura hasta Cartago), que tienen como protagonistas a paras no desmovilizados. Algunas versiones señalan que, mientras los carteles del norte del Valle ofrecían a los miembros de sus estructuras un salario de un millón de pesos colombianos mensuales (500 U\$D)⁷⁷, el pago que recibían los combatientes por parte de las autodefensas paramilitares era de 350.000 pesos colombianos al mes (unos 150 dólares estadounidenses): esto evidentemente ha generado deserciones y cambios de bando en los frentes paramilitares.

c. La responsabilidad histórica del Estado colombiano en la formación del paramilitarismo y en la permisividad con el narcotráfico

En el inicio del epígrafe anterior, señalé una cronología de la formación del paramilitarismo. En ella, el Estado colombiano está presente, tanto en la configuración y “legitimación”, como en el apoyo y permisividad.

Por ejemplo, en 1995, se produce la primera cumbre de las autodefensas paramilitares. Allí, sus miembros anuncian su unión para combatir a las Farc y el Eln a nivel nacional. El Gobierno autoriza la creación de las Convivir (grupos de civiles armados al servicio de defensa de intereses ganaderos, que se mimetizarán como paramilitares) en el departamento de Antioquia, cuyo gobernador en ese año era Alvaro Uribe Vélez, actual presidente. Las casualidades no existen, las causalidades sí.

Tres años después, es decir, en 1998, se firma el acuerdo del Nudo de Paramillo, entre las Auc, el Consejo Nacional de Paz y la sociedad civil. A los meses, los paramilitares incumplen casi todos los puntos de acuerdo.

Es en julio de 2003, cuando el Gobierno y las Auc firmaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, Córdoba, para desmovilizarse gradualmente hasta 2005. Gran parte de la

⁷⁶ Como diversos pobladores lo han manifestado en sus testimonios.

⁷⁷ Veamos una interesante comparación. Ese es el sueldo (500 U\$D), que se gana un profesional recién graduado o con los primeros años de experiencia en Colombia. He aquí una profunda disconformidad que ha sido escasamente investigada en Colombia, pues dicha situación es- para muchos- un verdadero “caldo de cultivo” para la tentación de la ilegalidad: la vergonzosa equiparación de los ingresos de un paramilitar raso (que generalmente ni la primaria ha concluido), con los de un licenciado que ingresa al mercado laboral y observa impávido, con esfuerzo y no pocas frustraciones, que sus cinco años universitarios no valen más que la opción de la vida fácil elegida por los “guardianes del establecimiento”.

comunidad internacional no creyó (ni cree) en el proceso. Solamente el 60% de los paramilitares se presentaron. El 40% restante ha conformado otros grupos de autodefensas paramilitares. Y del grupo que aparentemente se “acogió” al desarme, se confirmó que no hay cuentas claras respecto a armas y bienes entregados.

De ahí que en el año 2006 estallara el escándalo de la “Para-política”. Actualmente, mientras en el país emergen nuevos grupos de paramilitares, los altos mandos que se han desmovilizado, siguen “chantajeando” al gobierno, a las Fuerzas Militares y a los empresarios, por “cantar” todo lo que saben⁷⁸.

La sistemática y generalizada violación a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia, ha hecho parte de una estrategia contrainsurgente que, sustentada en la Doctrina de Seguridad Nacional, ha sido impulsada por el Estado colombiano desde la década de los sesenta. Sus fundamentos legales se encuentran en el Decreto 3398 de 1966, convertida en legislación permanente con la Ley 48 de 1968, que sirvió para que la Fuerza Pública organizara la “defensa nacional” y entrenara, dotara de armas y adoctrinara habitantes en zonas de conflicto, con la finalidad de involucrarlos directamente en la confrontación y lucha contrainsurgente.

Esta doctrina ha combinado diversas estrategias de represión, con el objetivo de enfrentar el conflicto social, mediante la eliminación de los movimientos sociales y populares, así como de todo inconforme con las políticas del establecimiento, los cuales son considerados como fachada de la “subversión”, o como lo dijo insensata y peligrosamente el presidente Uribe recientemente “politiqueros al servicio del terrorismo”. Bajo estas siniestras premisas, la destrucción y eliminación de la oposición (política o militar, no importa esa línea divisoria), se convirtió en el fin del Estado y, de esa manera, se ha buscado garantizar y procurar el control social, político, económico y territorial.

Tal como lo señala la investigadora Soraya Gutiérrez (2005, 46):

Dichas estrategias de represión se han llevado a cabo, mediante la conjugación de diversos mecanismos legales e ilegales, tales como: la concentración de poderes en el Ejecutivo y en las Fuerzas Militares, criminalización de la protesta social y de la oposición política y la creación y mantenimiento de grupos paramilitares, encargados de la ejecución de una “Guerra sucia” y encubierta, dirigida contra miles de personas pertenecientes a movimientos cívicos, populares, sindicales, campesinos, estudiantiles, indígenas, afrodescendientes y defensores de los Derechos Humanos, entre otros.

⁷⁸ Si se desea observar con mayor detenimiento este “circo” político y mediático, se recomienda al lector ir a los archivos periodísticos en la sección “Anexos”

Estos mecanismos sistemáticos de represión se han logrado aplicar, gracias a que, quienes planificaron y ejecutaron (y siguen ejecutando) estos crímenes, tienen la certeza que pueden imponer un sistema de impunidad que los proteja. Por esta razón la impunidad es un componente y una condición necesaria que ha hecho posible la ejecución y repetición de estos crímenes.

Desde 1990 hasta la actualidad, los grupos paramilitares en connivencia, complicidad, tolerancia, consentimiento, colaboración, apoyo, protección e incluso unidad de acción con fuerzas de seguridad estatales han sido responsables de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado, etc. Según la investigación “Paramilitarismo de Estado”, publicado por el Banco de Datos del Cinep⁷⁹ entre 1998 y el 2003, las víctimas mortales superan la cifra de las 45,763 personas y la mayoría de las investigaciones penales y disciplinarias adelantadas por estos crímenes se encuentran en la más absoluta impunidad.

El actual gobierno en cabeza del presidente Alvaro Uribe Vélez, desconociendo los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que lo obligan a investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de estos crímenes y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, pretende legalizar la impunidad que ha cobijado a estos crímenes y asegurar el proceso de parainstitucionalización y consolidación del paramilitarismo en Colombia.

El paramilitarismo en Colombia, es una respuesta armada inscrita en su origen en la Doctrina de la Seguridad Nacional, de carácter ilegal, profundamente enraizada con poderes económicos regionales privados de orden legal o ilegal y que coincide o se motiva en modelos contrainsurgentes. La violencia parainstitucional garantiza, complementa y transforma los mecanismos que posibilitan la estructuración de un patrón de sociedad que se afirma en los poderes privados cuando el Estado se convierte en un obstáculo o se reconocen limitaciones en las funciones de garante de los procesos violentos de acumulación.

Como discurso con pretensiones de legitimación, el paramilitarismo se asocia a un tipo de respuesta que se justifica por las atrocidades de las guerrillas y sus excesos como poder armado regional, correlacionado con el reconocimiento de la impotencia del

⁷⁹ Centro de investigaciones de Educación Popular, con sede en Bogotá y a cargo de valientes y rigurosos grupos de intelectuales jesuitas, al igual que los departamentos de investigación social que conforman la Universidad Javeriana en la capital colombiana.

Estado para controlar el peso militar y la hegemonía pragmática de los alzados en armas. Sin embargo, el paramilitarismo genera o dinamiza otros procesos de trascendencia estratégica que generalmente se mantienen ocultos y que sólo se develan en el nivel regional. Me refiero aquí a su ambición desmedida por tierras y por el control de los negocios de las drogas.

En primer lugar, contiene en su interior un proceso de contrarreforma agraria que se estimula con el proceso de inversiones del capitalismo gangsteril, que busca lavar dólares y favorecer una dinámica de inserción encaminada a la legalización de los nuevos sectores sociales emergentes. En segundo lugar, se inscribe en una dinámica de control territorial en donde se instaura un poder basado en el terror, que intenta justificarse y legitimarse desde la necesidad de las élites regionales, especialmente comerciantes, industriales y ganaderos, por “contrarestar” la presencia guerrillera. Este control territorial ha conducido- desde los años ochenta hacia acá-, a una dinámica de incidencia política, social y cultural, que se establece en el contexto regional, expresándose en reconocimientos y un aval de diversos sectores y núcleos sociales dominantes o con expectativas de control territorial a nivel regional. Tercero, la relativa autonomía del fenómeno paramilitar -que no es tal pues recibe el “guiño” no oficial de parte del Estado-, surge de la pregunta por los niveles de instrumentalización del proyecto que agencia de cara a la capacidad para crear, en sí mismo, un modelo regional de desarrollo. Es más claro que el paramilitarismo, visto en el mediano y largo plazo, es un instrumento manejado por los poderes económicos, generalmente asociados al latifundio ganadero, a la agricultura comercial o a sectores con grandes expectativas de inversión, así aparezca en el corto plazo como un movimiento político con pretensiones de autonomía, cuando de todos es conocido que es el brazo armado ilegal del Estado y de poderosos grupos económicos que implementan una “guerra sucia”, sin quedar ellos manchados o salpicados de la sangre de la (“incómoda”) oposición política. Por lo tanto, en la estrategia paramilitar se esconde un grupo armado con intereses que no se reconocen inmediatamente como responsables del conflicto, en donde se expresan sectores que hacen parte de los aparatos de seguridad del Estado y de los intereses económicos que han venido desarrollando una dinámica violenta de acumulación terrateniente.

Y si el origen del paramilitarismo atañe al Estado como responsable histórico y político de estos escuadrones de la muerte o “vigilantes”, también cabe una enorme responsabilidad estatal en la permisividad con la aparición y consolidación del narcotráfico.

Respecto a dicha permisividad, es claro señalar inicialmente que en el presente estudio, se evidencia el papel excepcionalmente protagónico de los narcotraficantes en esta guerra colombiana contemporánea. Habría que responder, por lo tanto, a la pregunta ¿Cuándo y cómo se articularon las economías ilegales al proceso de la guerra? En “Narcotráfico, ilegalidad y conflicto en Colombia”, López Restrepo (2006: 129) nos ofrece una respuesta que aquí seguiremos:

“El narcotráfico se instala en la sociedad y en la política colombiana al triple amparo de centenares prácticas de contrabando, de la renuencia del Estado a asumir el control total de la explotación de ciertos recursos minerales (esmeraldas) y de la violencia que azotó al país a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Altos niveles de tolerancia de la sociedad a la ilegalidad, llevaron a que con el tiempo las fronteras entre ésta y la violencia se fueran borrando, sin que esta circunstancia se percibiera como una amenaza al orden político democrático”.

Veamos ahora cómo operan los carteles del narcotráfico, con el objeto de adquirir mayores herramientas para entender la interacción entre actores armados-narcotráfico-población desarmada. El solo tamaño de las operaciones de la mafia requiere de la coordinación explícita de muchas transacciones, así como un sistema de recolección de información y registro de datos. Las bandas de la cocaína son demasiado grandes y complejas como para no ser “descubiertas” por el Estado y demasiado vulnerables a la infiltración de las fuerzas del orden (vía corrupción y clientelismo a través de los partidos políticos en los que se han infiltrado). Por lo tanto, los narcos pagan grandes sobornos a las autoridades para proteger sus laboratorios y rutas de contrabando y para mantener libres a sus altos “ejecutivos”. Los últimos siete gobiernos colombianos⁸⁰ no pueden pretender convencer a la opinión pública internacional que ellos no han tenido complicidades con el crecimiento de los carteles y que no tienen responsabilidades históricas en su consolidación. Los diversos escándalos que han salpicado a gobiernos como el de Turbay Ayala, Gaviria, Samper y el actual de Uribe Vélez han comprobado una verdad que es del sentido común: la infiltración del narcotráfico en los diversos poderes locales, regionales y nacionales.

El sistema de protección del narcotráfico en Colombia incluye una extensa red de inteligencia que alcanza las fuerzas del orden (y las burocracias de alto rango) y también,

⁸⁰ Con el objeto de ilustrar a los lectores no colombianos: el “liberal” Turbay Ayala (1978-1982), Belisario Betancur del partido Conservador (1982-1986), Virgilio Barco del partido “liberal” (1986-1990), el líder del partido “liberal” César Gaviria, (1990-1994), quien fue Secretario General de la OEA del 2000 al 2004, el “liberal” Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana del partido conservador (1998-2002) y quien además es hijo del expresidente Misael Pastrana (principios años 70’), el primer gobierno del disidente “liberal” Alvaro Uribe Vélez (2002-2006) y actualmente, el segundo mandato de Uribe (2006 hasta el 2010).

como lo ha señalado Renseelaer (1992), las embajadas de los Estados Unidos en los países productores de la droga⁸¹.

Los sindicatos de la mafia también tienen capacidad de violencia. Esta violencia, o las amenazas, se utilizan para disciplinar a los empleados, hacer cumplir los contratos con los socios del negocio y exterminar a los traficantes rivales. En Colombia, la violencia también es un medio de influir sobre los resultados judiciales - la alternativa de “plomo o plata – y de formular la política total del gobierno sobre control de drogas (Reenselaer, 1992: 151). La serie de ataques patrocinados por la mafia en los últimos años contra jueces que no colaboraban, funcionarios oficiales y periodistas, no tiene parangón en América Latina o en los Estados Unidos.

El poder de la mafia es extraordinario. Enrique Parejo, Ministro de Justicia de Colombia bajo Belisario Betancur, comentaba: “En algún momento y de una u otra forma, todas las entidades estatales han padecido la corrupción de los narcotraficantes“. El mismo ex presidente conservador Belisario Betancur llamó recientemente a la mafia “una organización mas fuerte que el Estado”.

La enorme red de relaciones protectoras de la mafia dificulta mucho el trabajo de las fuerzas del orden. Según Parejo, “aquí en Colombia vemos a reconocidos narcotraficantes caminar como si fueran dueños de todo“. Hasta 1988 no se había encarcelado a ningún narcotraficante importante en Colombia. Algunos líderes del narcotráfico –Jorge Luís Ochoa, Gilberto Orejuela y Evaristo Porras- fueron arrestados en 1986 y 1987, pero luego fueron puestos en libertad por los jueces penales. Los grandes capos, en otras palabras, operan en una especie de dimensión desconocida. Mientras se muestra “formalmente” que son criminales buscados, a la vez son una “especie” protegida. Y, además, los narcotraficantes que extradita masivamente el actual gobierno de Uribe (al igual que su par Calderón en México), son solamente mandos “medios”, pero no se han concretado extradiciones (por lo menos en el caso colombiano) de los grandes líderes. Cabe preguntarse ¿Se trata de incompetencia o complicidad?

En muchos aspectos, las mafias suramericanas de la cocaína se comportan como las organizaciones criminales de los Estados Unidos, es decir, detrás de un bajo o moderado perfil. Sin embargo, los suramericanos parecen haber penetrado más el

⁸¹ En una rigurosa investigación que le llevó 3 años en Colombia, Renseelaer Lee formuló en su libro “El laberinto blanco” (1992, editorial Cerec, Bogotá), las condiciones y complicidades de los diferentes gobiernos colombianos que en las dos últimas décadas han colaborado y enmascarado a la mafia de la cocaína.

mundo político. Han contribuido con millones de dólares a las campañas electorales nacionales, han establecido organizaciones políticas populares, han sido candidatos a puestos públicos e inclusive se han ofrecido a pagar parte de la deuda externa de sus países. Para los barones suramericanos de la droga, el dinero no es solo capital de trabajo o un medio para adquirir lujos; es también un instrumento poderoso para influir en los procesos y resultados políticos.

La estructura del negocio de la cocaína difiere mucho de un país a otro. En Colombia, el grueso del negocio está controlado por coaliciones de familias de delincuentes con sede en Medellín y Cali, la segunda y tercera ciudades del país respectivamente (según informes recientes, hay 35 de estas familias en Medellín). Las redes Medellín – Cali compran la cocaína en crudo (pasta o base) en el Perú y Bolivia, la refinan en laboratorios en Colombia y, finalmente, la exportan al norte del continente.

Los barones de la droga en Sur América, han ido desarrollando con el tiempo una especie de “filosofía” política y social para dar un aura de legitimidad a sus actividades en el narcotráfico: se hacen pasar por defensores de los valores nacionales, como líderes cívicos y abanderados del progreso; se esfuerzan por transmitir el mensaje de que el control a las drogas es “anti-latino”, es decir, una violación a la “soberanía nacional” y una amenaza a la libertad individual. Argumentan abiertamente que los narcotraficantes son esenciales para la estabilidad económica y para el bienestar público; critican a determinados gobiernos y aún a ciertos tipos de regímenes, pero no necesariamente al status quo político.

Este sentido “nacionalista” lo reseñó muy bien Renseelaer (1992: 138) en la investigación mencionada:

“Los capos de la droga en Sudamérica son primordialmente nacionalistas. Su nacionalismo puede estar ligado a un aspecto específico de la política estadounidense del control de drogas. Por ejemplo, en Colombia, el tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia se ha convertido en el principal estamento de la cocaína. Carlos Lehder escribía en 1982 en el periódico “El Colombiano” de Medellín: “Desde cualquier punto de vista, la extradición de nacionales no tiene razón de ser y menos aún existe razones para hacer un tratado con un país que no tiene fronteras con Colombia y cuyas costumbres no tienen ni jota de afinidad con nosotros” (Renseelaer, 1992: 138)

Y algo más importante para señalar aquí, que se deriva de la investigación de Renseelaer, es que los carteles de la droga, aunque producen dificultades y hacen peligrar la estabilidad de los sistemas democráticos, no traen consigo un carácter “anti-sistémico”.

Con el ánimo que no se vaya a tergiversar o malinterpretar que aquí estamos igualando a las guerrillas con los narcotraficantes, vale decir lo siguiente, a modo de aclaración. Las guerrillas latinoamericanas surgieron, se fortalecieron y algunas entraron en procesos de reinserción a los sistemas electorales como movimientos políticos (caso del M- 19), pero nunca dejaron de tener un proyecto político. Es válido y pertinente criticar fuertemente su accionar y metodología de violencia–indiscriminada en algunas ocasiones y que produce rechazos relativamente tibios pero en ningún momento masivos como es el caso de la sociedad española frente a ETA- pero, más allá de consideraciones como su carácter foquista-militar o el distanciamiento que tuvieron y que las actuales siguen teniendo respecto a sus bases, lo cierto es que poseen un proyecto político, así se esté o no de acuerdo con el y las formas de lucha por el poder, con sus dogmatismos y cegueras, con sus visiones totalitarias o las complejidades que encierra una cúpula que está enviando a sus militantes de base a caer acribillados, masacrados y desaparecidos⁸², a causa de miopes directrices, que aquí en este estudio no alcanzaríamos a reseñar.

Lo anterior viene a colación porque, actualmente, el gobierno norteamericano intenta desvirtuar el carácter político-insurgente de las guerrillas colombianas, ubicándolas bajo el nuevo “rótulo” de “narco-terroristas”, carácter que adquiere un sentido estratégico en el contexto internacional posterior a los sucesos del 11 de septiembre del 2001. Realmente el rótulo de “narcoterroristas” no es apropiado para caracterizar a las Farc, pues no es lo que se visualiza en la vida cotidiana colombiana. Si bien (las Farc) cobran “impuestos” y “cuotas” a narcotraficantes y gramaje a los campesinos que cultivan amapola y hoja de coca, lo cierto que de ahí a tacharlos como simples “narco-terroristas” hay un abismo muy grande. Sin embargo, tampoco es posible asimilarlas como un movimiento armado que goza del apoyo popular de las masas (especialmente de zonas urbanas)⁸³ ni menos caer en la tentación romántica de que pueden llegar al poder político si no cuentan con amplio respaldo social (como sucedió efectivamente con las revoluciones cubana y nicaragüense).

⁸² Vale aclarar al lector que, no siendo colombiano, sin embargo lo ha observado en otras latitudes latinoamericanas. Me refiero a los “milicianos” urbanos de las Farc, es decir, militantes políticos relativamente “clandestinos”, que caen todos los días en sindicatos, universidades, organizaciones sociales, etc. Inmerso en ámbitos universitarios, he sido testigo de permanentes angustias por la desaparición de jóvenes estudiantes, los cuales son tristemente “relativizados” por sus propios compañeros de aulas, lo cual me llevó a enfatizar esa indiferencia en el propio título de un estudio hace seis años, con el ánimo de entender este fenómeno de silenciamiento, complicidad, oscuridad, superficialidad y relatividad. Ver: D’abbraccio, Guillermo (2001). “¿Y eso a mí qué me importa? Representaciones sociales sobre el conflicto armado en estudiantes de licenciatura en Caldas”. Mimeo interno de cátedra. Grupo de Trabajo académico en Gestión Cultural. Manizales

⁸³ De hecho, el gobierno actual (Uribe), ganó la contienda electoral del año 2002 bajo las banderas de “Mano dura, corazón grande”, así como el de negociar con la guerrilla, pero no “claudicar” a ella (en clara alusión al gobierno de su predecesor Andrés Pastrana, señalado como “blando”).

La “tesis de la narcoguerrilla”, repito, se ha vuelto muy difícil de sostener a la luz de acontecimientos como el del despeje de San Vicente del Caguán⁸⁴ en los diálogos con el gobierno Pastrana entre el año 2000 y el 2002. Es cierto que las Farc todavía dominan ciertas regiones donde predominan cultivos de coca. Muchos de los sesenta y siete “Frentes” de las Farc se sostienen con los impuestos y en algunos casos con el peaje o pago de “cuota” de los transportistas narcotraficantes por los territorios que ellos dominan, así como pagos recibidos por las instalaciones de procesamiento de cocaína. No obstante, la industria colombiana de refinamiento de la coca – el aspecto más lucrativo del comercio de cocaína – no está controlado por las Farc, sino que está en manos de las poderosas bandas de traficantes que han desplazado hombres, armas y recursos contra la guerrilla comunista, y en general son hostiles a la izquierda colombiana. Y ahí sí están involucrados los paramilitares y algunas facciones más radicales del Ejército colombiano.

Volveré entonces a la discusión planteada en las páginas anteriores sobre el carácter de relaciones políticas entre el narcotráfico y el Estado colombiano. ¿Es la mafia de la cocaína una fuerza conservadora o revolucionaria en las sociedades latinoamericanas? ¿Representa una amenaza a los sistemas y valores democráticos del hemisferio? En Colombia y el Perú, estas preguntas adquieren especial urgencia debido a la presencia de poderosos carteles y grupos de presión, quienes intentan otorgar un carácter “seudo-ideológico” a los grupos políticos cercanos al narcotráfico, sí tienen algunas connotaciones contra el sistema: se concentran en la dependencia económica y política de Latinoamérica con los Estados Unidos, en las desigualdades sociales y en la incapacidad de los gobiernos para suministrar servicios a los pobres. Pero, a pesar de todo esto, la mayoría de los traficantes de cocaína, aunque no son exactamente pilares de la sociedad, son realmente conservadores políticamente hablando. En este sentido, Renseelaer (1992: 174) realiza un comentario muy interesante que cabe presentar:

“Las figuras del narcotráfico en América Latina se parecen a las estereotipadas de la mafia en Sicilia y en los Estados Unidos. Por ejemplo, el rey del crimen de Norteamérica, Al Capone, denunciaba al “bolchevismo”, elogiaba el sistema de libre empresa y apoyaba los valores de la familia (Alguna vez Al Capone anotó que si Norteamérica tuviera un líder como Mussolini, “podría conquistar al mundo”). Muchos barones suramericanos de la droga, al parecer están hechos del mismo molde”. (Renseelaer, 1992: 174)

En 1984, un memorándum de 100 destacados capos del narcotráfico al procurador General Carlos Jiménez Gómez afirmaba:

⁸⁴ En el departamento del Caquetá, al sur de Colombia.

“No tenemos conexión, ni aceptamos conexión alguna, con la guerrilla armada. Nuestras actividades nunca han intentado reemplazar la forma democrática y republicana de gobierno” (Renseelaer, 1992: 181)

La nueva aristocracia terrateniente de la mafia colombiana, no solamente se ha negado a pagar impuestos a la guerrilla, sino que ha usado sus ejércitos privados para encabezar autodefensas locales y destruir las redes de apoyo político a la guerrilla. En su “labor de limpieza social”, – como macabramente lo denominan en Colombia- , han recibido el apoyo de grupos terratenientes tradicionales, políticos conservadores y del ejército colombiano, así como el silencio de la Jerarquía de la Iglesia Católica.

Además, y con el ánimo de enfatizar las relaciones de los Carteles del narcotráfico con el Estado Colombiano, vale señalar que los traficantes de cocaína utilizan una combinación de la zanahoria y el garrote, e insisten en influir sobre las políticas de control de droga en sus países. Como sus contrapartes en otros lugares, las mafias colombianas utilizan tácticas coercitivas contra los funcionarios que “no colaboran” o que públicamente condenan sus actividades. En un principio, los traficantes prefieren utilizar halagos financieros – sobornos, donaciones y obras de caridad – para lograr sus propósitos; la violencia es por lo general el último recurso; es decir, se utiliza contra los policías, jueces o políticos que no se pueden comprar. Mensajes específicos, contundentes y aterradores pueden ser reseñados aquí. Para no abusar del espacio concedido en la presente tesis, señalaremos un solo ejemplo, el de una carta enviada por “Los Extraditables” a varios miembros de la Corte Suprema de Justicia, fechada en diciembre de 1986, la cual decía lo siguiente:

“Declaramos la guerra contra usted. Declaramos la guerra contra todos los miembros de su familia. Como usted puede suponerlo, sabemos exactamente donde están; acabaremos con toda su familia. No tenemos ninguna compasión, somos capaces de cualquier cosa, de absolutamente cualquier cosa. Nosotros también tenemos familia. Botero⁸⁵ también tenía familia, esposa, hijos, padres y hermanos. El era un miserable pelele del gobierno, y era un anti- nacionalista, pro-yanqui traidor a su país” (Bagley, 1998: 71).

Uno de los resultados de este baño de sangre, fue la destrucción de la confianza de los colombianos en sus instituciones políticas. Una encuesta nacional, realizada en marzo de 1987, informaba que casi la mitad de la población creía que los narcotraficantes eran demasiado poderosos para combatirlos. Adicionalmente, en una entrevista que data de

⁸⁵ Botero, un juez de la Corte Suprema asesinado a principios de ese año. Un apellido muy común en Colombia, de ahí que no tenga nada que ver con el famoso pintor colombiano.

1988, el ex – presidente Belisario Betancour decía, refiriéndose a la mafia de la droga:
“Estamos enfrentados a una organización más fuerte que el Estado”⁸⁶

d. La negación del conflicto durante el gobierno de “Mano dura” de Uribe: armas y represión para “echarle leña al fuego”

“Si por guerra se entiende el enfrentamiento de dos mitades de una sociedad, quizás desde la Guerra de los Mil Días en Colombia no ha habido guerras. En el periodo más reciente, hasta los sesenta y ochenta, se puede hablar de un conflicto, pero en la última década han predominado las acciones terroristas” Palabras de Santiago Montenegro, director del Departamento de Planeación Nacional en el acto de presentación pública del Informe Nacional de Desarrollo Humano “El conflicto callejón con salida”.

“Negar el conflicto significa renunciar a un abanico de opciones de política adecuadas para acortar su duración. De ahí que su designación como una mera amenaza terrorista trasciende el debate semántico para convertirse en un nuevo episodio de desatención estatal”. Mauricio Uribe López. Sangre, sudor y tiempo: la prolongación de la guerra en Colombia.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, los nuevos (pero afortunadamente escasos) gobiernos de “mano dura” en Latinoamérica, interpretaron la nueva doctrina contra el “terrorismo” como un “cheque en blanco”, es decir, de apoyo irrestricto por parte del gobierno norteamericano. Uno de ellos llegó al poder en Colombia al año siguiente: Álvaro Uribe Vélez. Lo demás ya es noticia y de conocimiento regional: alineamiento incondicional a Bush, apoyo a la invasión a Iraq, configuración del proyecto de “seguridad democrática” (símil contemporáneo de las Doctrinas de Seguridad Nacional de los setenta, pero con gobierno “democrático”), así como señalamientos impulsivos pero tenebrosos del presidente a las ONGs, defensores de Derechos Humanos y al principal partido de oposición⁸⁷.

“Mesías” surgido como por milagro para enfrentar la crisis en el año 2002, el presidente Uribe se cree el “único” que sabe qué hacer. Es el centro de la política colombiana de la primera década del siglo XXI. Se rodea de técnicos “incontaminados de política” y ciegos

⁸⁶ “Comienza a destaparse la “olla mágica”. El Espectador, marzo 3 de 1988

⁸⁷ De algunas Fundaciones y Ongs, Uribe ha dicho que son peligrosos “escuderos” de las guerrillas; de Organismos de Derechos Humanos en particular, señaló que son obstaculizadores del proceso “democrático” de su gobierno y, la perla más reciente, del partido opositor, el Polo Democrático Alternativo, Uribe los estigmatizó al afirmar que se trata de “terroristas de civil”. Además, Uribe fustigó como “apátridas” y “guerrilleros con visa americana” a dos valientes y brillantes senadores de este partido, Petro y Robledo, tras una visita a congresistas Demócratas en Estados Unidos en abril de 2007, con el objeto de denunciar la cruda realidad colombiana, la violación de Derechos Humanos, el amenazante contexto a la oposición, etc. El temor de Uribe, obviamente, es que tras la salida del deplorable gobierno Bush, la situación cambie drásticamente si los Demócratas llegan a la presidencia, sumado a la mayoría que ya gozan actualmente en el Congreso. El cielo está nublado, pues el Uribismo tendrá que soportar el aluvión que se le puede venir sin su aliado saliente.

al descontento social que sus medidas de política económicas “de choque” provocan. El presidente se aísla en su templo de sabiduría, y responde por todo. Es el único presidente que en las tres últimas décadas de la política colombiana, mantiene su índice de popularidad luego de su primer gobierno, y, vale señalar, el primero que preparó el escenario jurídico de la reelección, obteniendo como si esto fuera poco un segundo mandato, superando en una verdadera paliza electoral a una izquierda colombiana que, a pesar del revés, por primera vez en muchos años obtuvo un alto caudal electoral (en mayo de 2006, el Partido Polo Democrático Alternativo obtuvo dos millones y medio de votos, una cifra nunca antes obtenida por fuerzas diferentes a los dos partidos tradicionales).

Consecuente con la consigna de derrotar a la guerrilla (bandera electoral que lo llevó al poder en su primer mandato en el 2002)⁸⁸, Álvaro Uribe se fijó un “propósito supremo”: ganar la guerra. En contraste con la infructuosa permisividad de su antecesor, la inmediata recuperación de la seguridad en las carreteras y la ofensiva del ejército contra las FARC, obraron como un aparente “bálsamo” en los colombianos en los centros urbanos. “Sensación” de seguridad y confianza en el futuro, que se tradujeron en índices de popularidad presidencial sin paralelo en nuestra historia reciente.

Un logro inaugural del gobierno Uribe, fue el vuelco “psicológico” que el nuevo clima de seguridad produjo en la ciudadanía, reflejados en las numerosas encuestas que señalan un enorme apoyo a su política represiva⁸⁹. Sin embargo, los apresurados cantos de victoria de los mandos militares sobre las guerrillas en el 2002 y 2003 respondían – sobretodo- a un repliegue estratégico de éstas, las cuales aguantaron agazapadas (pero nunca derrotadas) ante el agresivo crecimiento del presupuesto militar y del pié de fuerza (el ejército más numeroso de la región andina). Tal situación ha bastado para agigantar la imagen del presidente, en un pueblo saturado de violencia y anhelante de un “Mesías”.

Sin embargo, ni el ímpetu victorioso ni el crecimiento en un 200% del presupuesto militar desde su primer gobierno, ha podido menguar la fuerza, ni menos vencer la resistencia de las Farc. A cinco años de su primera elección, un nuevo despertar de esta guerrilla ha sembrado dudas sobre la eficacia de la política de “Seguridad Democrática” (semejante a la Doctrina de la Seguridad Nacional de la guerra fría, pero atravesada por mayores “controles” internacionales), la cual pondría en entredicho la premisa uribista de que en

⁸⁸ Uno de los lemas de campaña electoral de Uribe Vélez fue “*mano fuerte, corazón grande*”. Hasta el momento, sólo hemos visto en Colombia la mano fuerte.

⁸⁹ Recordemos además que en la campaña para la reelección, Uribe Vélez “barrió” en la primera vuelta en mayo de 2006. Un reflejo de lo ciegos que están los colombianos.

Colombia, en vez de conflicto armado, habría una amenaza permanente del “terrorismo” sobre un Estado democrático.

Cabe también señalar el dominio concreto y amplio de Uribe sobre los medios de comunicación, oficiales y privados, ya sean complacientes o atemorizados⁹⁰, de los cuales hay un modelo tan caricaturesco como la Italia de Berlusconi. Al final de los cuatro años de la reelección de Uribe (2010) habrá poco que decir en términos de creación de empleo, disminución de la pobreza, desarrollo equilibrado, etc. Tal vez se hubiera podido insistir más en el hecho de que este gobierno, como todos sus predecesores, aplica unas recetas a un país cuya realidad económica se les escapa por completo por pertenecer la economía (y también lo social, lo político, lo militar), al mundo del tráfico de drogas.

A partir de señalamientos y estigmatizaciones a sus críticos, aumentó en los últimos cuatro años el peligro del silenciamiento, hostigamiento o desaparición a opositores, prendiendo las alarmas y medidas de prevención necesarias para un prudente accionar frente a las amenazas del Poder Ejecutivo, justamente en un país como Colombia, donde la concentración del poder político presidencialista, le deja menor margen de maniobra al Poder Legislativo⁹¹ y Judicial.

En “unidad inquebrantable contra la insurgencia, la corrupción y la politiquería”, como rezaba un slogan de su campaña, sin tolerar fisuras ni deslices, con la llegada de Uribe Vélez al poder, el cuerpo de ciudadanos “de bien” se habría adueñado, por fin, de su destino. Alrededor de su caudillo y por encima del Congreso, de partidos, sindicatos y cuanto de organizado queda en la sociedad civil (¿aún queda algo, más allá de los muertos, los silencios y las tímidas voces?), desde el sitio mismo del poder local reunido en consejos comunales que Uribe realiza cada sábado en agotadoras jornadas de más de 6 horas (para colmo del sopor, televisadas por el canal institucional)⁹² en las que el presidente, “escucha a las comunidades”⁹³.

⁹⁰ En marzo de 2007, en la página web del organismo internacional Human Wrighths, apareció una caricatura que señalaba la “subordinación” y “complicidad” del gobierno Uribe con los grupos paramilitares. El presidente Uribe reaccionó airadamente y descalificó a tal organismo internacional al indicar que le estaba “haciendo el juego” a los “narco-terroristas”. Las permanentes reacciones a la defensiva del primer mandatario colombiano son moneda corriente. Me hacen recordar que, en pleno mundial de fútbol en 1978, la Junta Militar argentina se defendía de las críticas internacionales bajo la cínica frase: “los argentinos somos “derechos” y “humanos”. Trágicamente, al tiempo que la muchedumbre en las calles celebraba el título mundial obtenido por la selección argentina, miles de militantes opositores al régimen eran desaparecidos ante una sociedad que se hacía “la que no sabía nada”.

⁹¹ Además, los partidos de la mayoría en el Congreso son Uribistas: Partido de la U, Partido conservador colombiano y Cambio Radical.

⁹² Bienaventurados los que tienen capacidad de consumo para leer, asistir al ritual del cine, viajar

Nada más cercano a un nuevo corte neopopular pero al estilo Fujimori, declarándose Uribe como el “menos político de los políticos” y el “salvador de la patria”. Deliberadamente, el líder y su aparato de poder explotan aquella necesidad inconsciente que tanto se parece a la búsqueda de Dios. Recordemos aquí al Iván de los Hermanos Karamazov, quien manifestaba que la peor carga del hombre es lidiar con su propia libertad⁹⁴:

“No hay desvelo más continuo y doloroso para el hombre que, apenas deja la libertad, busca a toda prisa a quien adorar. Pero busca inclinarse ante aquello que ya es indiscutible, tan indiscutible, que todo el mundo, de repente, ha convenido en su general adoración (...). Hay tres fuerzas poderosas que dominan la conciencia del hombre: el milagro, el misterio, la autoridad. Y en esa seducción convierte (a los hombres) en un rebaño. El ansia de empeñar la libertad se une al ansia de unirse a todos los demás, en común adoración, como un hormiguero...” Dostoievsky. Los hermanos Karamazov

En el año 2002, Uribe llegó al poder con un estilo rígido de hacer política, centrando su atención al tema de la seguridad y dejando desplazada la apuesta por reducir las deudas históricas en política social. Para lograr su cometido, parece bastar el apoyo popular y un buen recurso a la tecnocracia. Toda organización de la sociedad civil, sobra. El caudillo florece, justamente, allí donde se ha desactivado a la sociedad civil. El ciego alineamiento de Uribe con el gobierno de Estados Unidos (al igual que sus arrodillados colegas Fox y Calderón en México) y su condescendencia con las políticas del FMI, se asocian al propósito supremo que lo llevó al poder: ganarle la guerra a la guerrilla. El problema es que no es tan fácil. Una historia y una tradición guerrillera tan fuerte en la historia coral de los colombianos no es sencillo de borrar de la noche a la mañana, lo cual desborda el voluntarismo de la mano fuerte de un presidente autoritario, convertido en adalid salvador de la derecha colombiana. Y es por ello que el castillo de naipes del optimismo desbordante- que se construyó con el ascenso al poder de Uribe Vélez-, parece caerse. Las Farc no son una guerrilla fácil de infiltrar y por ende, derrotar (43

o pagar servicio de cable televisión. De lo contrario, a soportar el discurso oficial por la televisión abierta.

⁹³ En realidad, es un monólogo tan divertido como una ceremonia litúrgica.

⁹⁴ El caudillismo pega allí donde la sociedad civil no ofrece todavía instituciones políticas sólidas, o allí donde, habiendo instituciones, el líder las desmonta para gobernar a sus anchas y según su personalísimo interés. El Caudillo es, siempre, un sustituto de la institución. Nuestra historia enseña que siempre (el caudillo) desconfía de los partidos y movimientos políticos, pues en ellos ve una amenaza al monopolio del poder personal que él encarna. Lo que más se acerca al caudillismo son las dictaduras unipersonales, y el mesianismo, que se aprovecha de la necesidad anímica de las gentes por entregarse ciegamente a la voluntad del caudillo.

años de lucha lo atestiguan), así como tampoco las recompensas y delaciones en las que se apoyó Uribe al comienzo de su mandato, están dando resultados⁹⁵.

De ahí que las Farc “se la juegan” en la resistencia permanente al gobierno Uribe, al que han tildado de “Fujimori pequeño a lo colombiano”, pero del que no pierden oportunidad de burlarse de su proyecto político de Seguridad Democrática, en cada combate o en cada victoria guerrillera (ver recortes periodísticos en los anexos). Sin embargo, tampoco las Farc han podido acceder al poder central (como sí lo hicieron los sandinistas en plena guerra fría, pero Nicaragua es otro país y el tiempo histórico es también diferente), tal como se lo han propuesto desde hace cuatro décadas. La situación de la guerra en Colombia en realidad es un juego de suma cero, en el que se observa un evidente empate militar.

En la frase del investigador Mauricio Uribe que inicia este epígrafe, es posible percibir un factor neurálgico para entender la actualidad política colombiana: el gobierno del reelegido Álvaro Uribe ha “negado” tajantemente que en Colombia exista un conflicto armado, tal como lo señala (en la otra cita del comienzo de este epígrafe) uno de sus alfiles políticos, Santiago Montenegro.

Para este mandatario, en cambio, lo que existe en Colombia es un amenaza “narcoterrorista” y no una guerra civil, tal como le impone en su discurso la agenda internacional, en el que tiene enorme incidencia los Estados Unidos: la “negación” del discurso político insurgente que promueven las Farc y su invisibilidad y estigmatización, a la luz del orden mundial que se reconfigura, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001⁹⁶

⁹⁵ Una pregunta “gruesa” y “compleja” al respecto, ¿Por qué en el Perú gobernado por Fujimori, las recompensas por “delatar” dieron considerables resultados en la captura de mandos medios y altos de Sendero Luminoso, y, en el caso colombiano, no han dado resultados con las FARC? Esta pregunta desborda nuestras posibilidades espaciales y temporales, pero cabe formularla, aunque sea para quedarnos con la inquietud. Podría limitarme a intuir o especular que la larga, fuerte y consolidada tradición guerrillera de las FARC es “infranqueable” y que tal vez las bases sociales guerrilleras han podido ser más sólidas en Colombia que en Perú. Pero no estoy seguro si ese es o no la razón. Ello ameritaría un largo análisis, quizás –tentativamente- propicie una próxima investigación.

⁹⁶ Durante el año 2006, el presidente Uribe Vélez se pronunció ante los medios masivos de comunicación, solicitándoles a los periodistas de medios impresos, radiales y televisivos que no pronunciaran la palabra “conflicto armado” pues, según el mandatario, lo que sucede en Colombia es, lisa y llanamente, una amenaza “narcoterrorista”. De igual modo, conminó a sus ministros, asesores y congresistas de bancada a que no hicieran uso de esta “categoría” que no refleja –según Uribe- lo que sucede en Colombia. En el fondo, de lo que se trata es de negar el carácter político de las acciones guerrilleras, para así intentar deslegitimarlas ante la comunidad internacional (al exterior) o invisibilizar la base social de las Farc y el Eln (al interior).

Conexo a este tema es el del sinuoso trato con los llamados paramilitares. Allí sí se camina en un museo del surrealismo. ¿Con quiénes se negocia? ¿Es creíble una negociación con “aliados” y “cómplices” del terrorismo de Estado?, es decir, ¿Cómo se “negocia” la paz y el desarme de los “amigos”? ¿Cómo se puede creer que se vaya a “reparar” el daño causado? ¿Cómo se puede pensar en un proceso limpio, si el Estado promueve paralelamente nuevos paramilitares mientras simula negociar y condenar a los antiguos? ¿Cómo apreciar lo que se calla o disimula? Cabe o urge señalar en estos procesos viciados, posiblemente mucho más que la simple desmovilización de estos milicianos.

Elocuente ha sido el esfuerzo permanente de Uribe, por justificar la acción militar contra la insurgencia guerrillera, porque sirve también a un estilo de gobierno personalista y des-institucionalizado, de evidentes rasgos autoritarios. Señalaré especialmente aquí la intención de armar a un “millón de soldados campesinos” para apoyar la acción de las Fuerzas Armadas. Un cierto “tufillo”⁹⁷ autoritario recuerda aquí el programa de “armar” a la población civil que llevó a cabo Fujimori en la sangrienta lucha anti-insurgente en Perú. Las rondas campesinas fueron el ingrediente básico de la “estrategia antisubversiva” que terminó por desarticular a la guerrilla maoísta en dicho país andino. Por medio de ellas, un sector significativo del campesinado se “incorporó” directamente al conflicto armado. El estado peruano las reorganizó, armó, adiestró y otorgó la logística necesaria para derrotar a las guerrillas. En contrapartida, las “Rondas campesinas” aceptaron el control y vigilancia del Estado. Los originarios comités de autodefensa civil, derivaron en una fuerza armada por el Estado. La represión y la guerra sucia se incrementaron y el conflicto armado entró en un escenario dramático en el Perú de los noventa.

Un aspecto pertinente de analizar aquí es el de las retóricas y discursos gubernamentales que se plantean para configurar un espectro de apoyo social para rechazar al peligro del “terrorismo”. Sin embargo, detrás de estas iniciativas se esconden formas sutiles- y no tan sutiles como han sido los casos latinoamericanos- de polarizar políticamente (y por lo tanto socialmente) a las sociedades. Dos ejemplos interesantes son los del Perú y el que aquí analizo, Colombia.

Veamos brevemente, a modo de referencia, el caso peruano, siguiendo algunos estudios e investigaciones realizadas en ese país andino por intelectuales de la talla de De Gregori, o Poole y Renique.

⁹⁷ Aliento

Diversas medidas de los gobiernos peruanos de los años ochenta y noventa (el más notorio fue el de Alberto Fujimori), tuvieron un efecto de polarizar el país, al estilo “quien no está conmigo, está contra mí”. La primera medida consistió en definir el terrorismo como una forma especial de crimen sujeto a la jurisdicción militar. Cualquier acto considerado como “apología o apoyo” a grupos opositores al oficialismo, llegó a ser utilizado estratégicamente y hasta procesados como “terrorismo”. En los años siguientes, continuaron otras medidas que privaron legalmente a los numerosos acusados de “terrorismo” de las garantías del debido proceso; e implantaron los juicios sumarios en tribunales militares sin rostro, cuya reglamentación hacía prescindible toda forma de evidencia punible para condenar al acusado.

Líderes de base y funcionarios electos pertenecientes a la coalición peruana Izquierda Unida (en aquel momento la segunda fuerza electoral más importante del país), fueron acusados de “terroristas”. Una verdadera caza de brujas, que derivó en la más agresiva legislación represiva de América Latina, en la que también se llegó a estigmatizar a «cholos» e «indios» de piel oscura considerados por el Estado como aliados «naturales» de Sendero Luminoso.

Para Poole y Renique (2004)⁹⁸, durante la siguiente década, la “guerra popular” de Sendero Luminoso abrió aún más esta “caja de Pandora” de violencia y conflicto político:

“En las ciudades, la guerra obligó a sus pobladores a ajustar sus vidas cotidianas a las frecuentes explosiones de bombas, a los apagones y a las batidas policiales. En los Andes, la lucha armada del Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso marcó un nuevo momento en la historia de la población indígena. Atrapados entre el fuego cruzado de «terroristas» y «antiterroristas», los campesinos apropiadamente denominaron a estos tiempos como mancha y tiempo o «tiempo de miedo». A pesar de que el miedo y la violencia han estado siempre presentes en su historia y su memoria, el miedo generado durante este tiempo fue de muchas maneras único. Por un lado, éste resultó más extremo y, por otro, más arbitrario y por lo tanto más polarizante. Esta última característica es a su vez exacerbada por el rol central y la cualidad metafísica asignadas a la violencia en el discurso e historicismo del Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso” (Poole y Renique, 2004: 67).

⁹⁸ De estos reconocidos investigadores, ver también Poole, Deborah y Rénique, Gerardo (2000) *Popular Movements, the Legacy of the left, and the Fall of Fujimori*. In *Socialism and Democracy* N° 14 pp 53-74, así como Poole y Renique (1992) *Peru Time of Fear: Latin American Bureau*. New York

Con Uribe Vélez en Colombia (al igual que sucedió con Fujimori en Perú⁹⁹), las élites respiran tranquilas, pues pueden vivir con “cierto sosiego” en las cuatro primeras ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla (donde están concentradas las más fuertes industrias, así como las mejores universidades), se puede viajar en plan de turismo al caribe, la inversión extranjera sigue llegando, las carreteras a los principales lugares de recreación están siendo fuertemente custodiadas por el ejército y, además, se cuenta con grupos paramilitares que apoyan el “trabajo sucio” del ejército. Por eso no importa a muchos que dos tercios del territorio colombiano estén siendo disputados por la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo. Esos siempre fueron “tierra de nadie”, “otro país”, léase “otra Colombia”.

e. De la escenografía de la impunidad (la Ley de Justicia y Paz, 2003) al escándalo de la “parapolítica” del 2007

Con el objetivo de abrir paso a la negociación con los Grupos Paramilitares, el Gobierno Nacional decidió modificar la Ley 418 y para tal efecto expidió la Ley 782 del 2002, en donde les otorgó “estatus político” a los paras, cuando es de todos conocido que el accionar criminal de éstos, bajo ninguna circunstancia puede ser catalogada como “política”, ya que no se han alzado en armas “contra” el Estado sino, por el contrario, sus crímenes han sido parte de una estrategia represiva del Estado contra la población civil no combatiente y sectores sociales organizados que han reivindicado derechos.

Posteriormente, se expidieron otros decretos, entre ellos el 128 del 22 de enero del 2003, reglamentario de la ley 78, el cual ha sido la piedra angular para garantizar la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por estos grupos paramilitares. Un ejemplo claro es que consagra que los “desmovilizados” tendrían derecho a indulto, solamente con certificación expedida por el “Comité operativo para la dejación de armas” (CODA), que establece la pertenencia de cada “para” a una organización armada y la voluntad de abandonarla.

⁹⁹ Comprensible entonces es no sólo la facilidad con la que un Fujimori se hizo reelegir, apoyado como venía en la derrota de Sendero Luminoso, en la eficacia de las medidas para controlar la inflación y en la inicial sensación de bienestar que la invasión masiva de artículos extranjeros trajo, al amparo de la apertura económica. Al poco tiempo se demostraría, empero, que estas mieles no eran sino cantos de sirena. El nuevo modelo económico haría estragos, también en el Perú, y comprometería el tercer intento de reelección de Fujimori en 1997. En el caso colombiano, como bien señala la politóloga Cristina De La Torre (2005): *“Difícil le resultará al presidente convencer a los colombianos que su tono social de última hora interpreta un viraje hacia lo social que requiere nuestra endeble democracia. Es que en 2004 el índice de pobreza en Colombia superaba el 65%, y el de la indigencia se acercaba al 26% (once millones de colombianos). Además, Uribe encarna un neopopulismo estilo Fujimori que, lejos del sentido nacionalista, industrializador y redistributivo del populismo clásico, prolonga los principios y políticas de los consensos de Washington, enmarcados en la defensa a ultranza del modelo neoliberal”*.

En el proyecto de la Ley de “Justicia y Paz”, tanto para dictar resolución inhibitoria, preclusión de la Investigación o cesación de procedimiento, no se exige confesión de los paramilitares, sino solamente que el sindicado haya sido indagado, que haya entregado los bienes obtenidos ilícitamente¹⁰⁰ o que estén a nombres de terceros y que hubiera colaborado de “buena fe” con la justicia.

La investigadora Soraya Gutiérrez (2005: 67), ha sintetizado rigurosamente los alcances y “trampas” de este singular proceso:

“Se establece que las personas que no reúnan los requisitos para que se les profiera auto inhibitorio, preclusión o cesación de procedimiento, podrán de una parte ser favorecidos con la acumulación jurídica de las penas, incluso de aquellas impuestas antes de las celebración del acuerdo de paz, siempre que los delitos cometidos (no importa si se trata de crímenes de lesa humanidad), hayan sido cometidos con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado y en consecuencia se harán acreedores a la libertad condicional, antes de la libertad definitiva, cuando hayan cumplido las 2/5 partes de la pena privativa de la libertad. Claramente se define que el tiempo de privación de la libertad en un establecimiento de reclusión no podrá exceder de 10 años, ni inferior a 5 años. Pero expresamente se contempla que si la pena con rebajas y beneficios de acuerdo al código penal es inferior a cinco años, ese será el período que se aplicará como pena efectiva”.

De otra parte se señala que el Gobierno Nacional determinará el establecimiento de reclusión y el tiempo en que cada paramilitar haya permanecido en la zona de reubicación.

Un primer elemento de análisis, es el tema de la llamada “confesión” y “actos de buena fe”, que se establecen como “condiciones” para hacerse acreedores a los beneficios, con el cual se pretende “esclarecer la responsabilidad frente a algunos hechos” y, seguramente, como lo vuelve a señalar Soraya Gutiérrez:

“.....lo máximo que entrarán a reconocer los victimarios es su pertenencia al grupo paramilitar, pero no su responsabilidad frente a los crímenes cometidos. Tampoco se establecerá la “verdad de los hechos”, que desvele la sistematicidad de los crímenes, los móviles, estructuras, intereses y proyectos que los inspiraron, las responsabilidades estatales en su ejecución, los nombres de los planificadores, financiadores,

¹⁰⁰ Uno de los puntos más difíciles de resolver: los paramilitares no están dispuestos a ceder, es decir, devolver la “totalidad” de los bienes raíces robados, los cuales ascienden a cuatro millones de hectáreas (ver “reportes periodísticos” en la sección Anexos)

encubridores y beneficiarios de las estructuras paramilitares, los métodos y mecanismos de impunidad implementados” (Gutiérrez, 2005: 70).

Esto último se debe a que ninguno de los puntos de la Ley de Justicia y Paz, establece mecanismos efectivos para que la confesión y reparación sea exigible y real, como tampoco se señalan los elementos para establecer quiénes han sido las personas, comunidades y organizaciones perjudicadas, así como las razones por las cuales fueron y continúan siendo atacadas.

Con la polémica Ley de Justicia y Paz, los más ingenuos consideraron que Uribe Vélez iba a poder dar fin al fenómeno paramilitar. Sólo fue un espejismo. La desmovilización de cientos de combatientes no ha impedido que se sigan formando nuevos grupos paramilitares¹⁰¹. Y eso porque justamente el Estado nunca los ha combatido, sino que históricamente los ha fomentado.

Pero el alivio de la impunidad cobijó a los combatientes de los paramilitares de la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). ¿Por qué hago referencia aquí a la palabra impunidad? Pues porque los paramilitares no tendrán que pagar condenas anteriores. Era el tema más polémico porque la primera interpretación que se dio del fallo, suponía que los condenados por procesos anteriores a la Ley de Justicia y Paz tenían que pagar las penas completas¹⁰².

El texto del fallo explica que las condenas anteriores no desaparecen, pero que sí pueden ser objeto de penas alternativas de entre cinco y ocho años. La Corte advierte, eso sí, que si el desmovilizado que obtenga beneficios penales incumple los compromisos adquiridos durante el proceso o vuelve a delinquir, tendrá que pagar la pena completa. El tiempo en Ralito (el sitio de supuesta “reclusión”) no les descuenta prisión. Se trata de un “borrón y cuenta nueva”. Se ha manifestado también que lo que en realidad se busca es “reubicar” a los paramilitares en las Fuerzas Armadas, concentrándose en una sola

¹⁰¹ Esto es muy importante para resaltar, puesto que desde el gobierno se está vendiendo la idea al exterior, que “ya no hay más paramilitares”, o que “se acabó el paramilitarismo”, cuando en la vida diaria de los colombianos esto no es así.

¹⁰² Ver diario El Tiempo “Así quedaron los puntos polémicos de la sentencia de Justicia y Paz”, Bogotá, julio 13 de 2006. p. 4a

fuerza. También los sistemas de seguridad privada han visto acrecentados la llegada de paras que no se acogieron a este proceso, por más que los beneficia a todas luces.

Otra de las aspiraciones de los jefes 'paramilitares' era que el tiempo que estuvieron en Ralito y en otras regiones, coordinando la supuesta farsa "desmovilizadora" de sus grupos, contara como pena efectiva. La Corte Suprema de Justicia reiteró que las condiciones bajo las que estuvieron en la zona de diálogo no son comparables a las de una detención y que por lo tanto la parte de la ley que les permitía descontar hasta 18 meses (de la pena máxima de ocho años)¹⁰³, no aplica. La Corte afirmó que quienes estuvieron en la zona lo hicieron por voluntad propia. Responderán incluso con sus propiedades 'limpias'.

Este punto, que ha generado gran molestia entre los jefes de las autodefensas, incluso podría ser más drástico. Los seis magistrados que votaron por la exequibilidad de la ley, señalaron que no hay razón para que los 'paramilitares' no respondan por los daños que causaron incluso con sus bienes legalmente adquiridos.

Además, la sentencia autoriza a que sobre esos bienes se apliquen medidas cautelares como ocupación, incautación y embargo para asegurar que responderán por sus actos. Todos los de un grupo responden con sus bienes. La Corte Suprema de Justicia en Colombia "aclaró" que la responsabilidad solidaria en la reparación por los crímenes cometidos por los paramilitares, dependerá de que exista un fallo de la justicia sobre esos mismos hechos.

Los miembros de cada organización responden por ella en sus zonas. Por ejemplo, los 'paras' del 'Bloque Catatumbo' deben reparar a sus víctimas en Norte de Santander, pero no responden por los crímenes cometidos por otros grupos del 'Bloque Norte' de las Auc, del cual dependían militarmente.

¿Qué ha pasado al respecto en nuestra zona de estudio? (Valle). Pues que el escenario teatral de la desmovilización paramilitar en el corregimiento de Galicia¹⁰⁴ en el año 2004, fue todo un "montaje", puesto que la mitad de los combatientes terminaron dirigiéndose a

¹⁰³ Ocho años de prisión para asesinos paramilitares responsables de miles de personas asesinadas, dos millones de campesinos, desplazados y ultrajados, cientos de indígenas masacrados o amenazados, así como cerca de ocho mil desaparecidos (militantes y críticos del sistema) y un número no cuantificable de exiliados. Si eso no es impunidad, ¿entonces qué es? En Colombia, la mal llamada "opinión pública" no se escandaliza por penas tan irrisorias a los asesinos (paramilitares) de miles de colombianos. En contraste, dicha sociedad se "horroriza" porque a Garavito- el "asesino en serie de los niños"-, se le rebajó de 40 a 13 años por favorabilidades del Derecho Penal Colombiano.

¹⁰⁴ Donde se realizaron 4 de las entrevistas correspondientes a la zona rural.

la conformación de nuevos grupos paramilitares con mayor articulación con el Cartel del Norte del Valle, a través de la “fachada” nominada como “Autodefensas Unidas del Norte del Valle” o el nuevo grupo paramilitar conocido como “Águilas negras”. Puros sofismas de distracción. Afortunadamente, cierto sector de la prensa crítica (el escaso que aún queda en Colombia), así como veedores de organismos internacionales de Derechos Humanos, han señalado las evidentes incongruencias, falsificaciones, montajes, violaciones, etcétera, que se han producido en la sarcástica Ley de Justicia y Paz en el Norte del Valle. Una piedra en el zapato que incomoda al gobierno actual.

Sin embargo, durante todo el 2006, existió una fuerte “lucha de poderes” para retocar la Ley de Justicia y Paz, así como un choque de trenes, en el que está involucrada en la confrontación los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, con algunos jueces cercanos al gobierno y otros con una posición crítica al proceso de impunidad impulsada por el gobierno Uribe.

Cabe señalar que el afán paramilitar para que sus atrocidades y masacres fueran declaradas como “delitos políticos”, se cayó en el ámbito legislativo colombiano solo por “errores de trámite”. La aprobación del artículo 71, que equiparaba el paramilitarismo al delito de sedición, no cumplió con los parámetros establecidos en la Constitución y en el Reglamento Interno del Congreso. El tema fue incluido en el segundo debate en la Cámara de Representantes, a pesar de que no estaba en la ponencia inicial. Por lo tanto, no cumplió con los cuatro debates legales. Esto significa que en otro proyecto de ley, el Gobierno podría revivir el estatus político para los paramilitares. Eso fue lo que sucedió en realidad desde diciembre de 2006, pues los paramilitares han amenazado con “hablar” o “cantar” si el gobierno de Uribe incumple su “promesa” de no extraditarlos a los Estados Unidos. De eso se tratan los escándalos de la denominada “para-política” del presente año 2007.

En un artículo recientemente publicado en el diario mexicano “La Jornada”, su corresponsal colombiano- Jorge Enrique Botero-, presenta de manera aguda el escándalo político que sacude a Colombia en el actual 2007. En su reporte hace referencia Botero a las revelaciones de los jefes paramilitares que no quieren ser extraditados a Estados Unidos porque, según ellos, ya habían “negociado” su impunidad ante el gobierno Uribe, olvidando que en el juego político hay diversas presiones en lidia,

en este caso, la de los organismos internacionales de Derechos Humanos y la posición – así sea ambivalente y cambiante- del gobierno norteamericano¹⁰⁵

Este corresponsal de “La Jornada” sintetiza el “enrarecido” clima político colombiano del 2007:

Denominado genéricamente “el escándalo de la parapolítica”, este episodio involucra- hasta el momento- a media docena de senadores, otros tantos representantes a la cámara, gobernadores y exgobernadores, ministros y exministros, alcaldes, militares de todos los rangos, desde generales a soldados rasos; fiscales, jueces, altos funcionarios, entre ellos el exdirector de la policía secreta y varios embajadores y empleados del servicio diplomático. Sin embargo, expertos en temas judiciales y analistas políticos aseguran que, de llegar al fondo, las investigaciones podrían salpicar a la mitad del parlamento y desatar un verdadero cisma en las fuerzas militares. (La Jornada, 24/01/2007: 35)

En el tire y afloje entre el gobierno¹⁰⁶ y los jefes paramilitares, estos amenazaron (chantajearon) con revelar toda la información de sus vínculos con empresarios, ganaderos, jefes políticos y mandos militares, dando algunas puntadas que han servido para desenredar la compleja red de “socios” que se unieron para poner en marcha la tenebrosa maquinaria de muerte desde comienzo de los años ochenta. Volvamos a citar al corresponsal Botero:

¹⁰⁵ Proceder norteamericano que “juega el juego político” con astucia, sagacidad y capacidad de presión puesto que, si bien por una parte patrocinó golpes de Estado en la guerra fría pero aún invade naciones en su postguerra (arrogándose el papel de “paladines de la democracia”), por otra parte impone fuertes controles tanto a grupos de insurgencia como contrainsugencia, reservándose el poder de señalar quién es o no “terrorista” en estos tiempos actuales. Obviamente, tras la consolidación de la mayoría Demócrata en el Congreso y la inminente victoria presidencial de ese partido en las próximas elecciones norteamericanas, el panorama de “apoyo incondicional” que había desarrollado Bush, podría cambiar radicalmente.

¹⁰⁶ Repito- porque vale la pena reiterarlo- que el gobierno colombiano se siente “presionado” por organizaciones mundiales de Derechos Humanos, la Unión Europea y el propio Departamento de Estado norteamericano a no “aflojar” ante el chantaje paramilitar, pues la preocupación por la violación de los Derechos Humanos es clave en la agenda internacional. Si a pesar de ello la violación de los derechos Humanos se sigue produciendo, podría uno preguntarse - ¿ingenuamente?- cómo sería la situación de estos (Derechos) si no existiera esa presión “externa”?

“Al iniciar el proceso de desmovilización con el gobierno, Salvatore Mancuso, principal cabeza visible de los paras, solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, reveló que por lo menos un 40% de los parlamentarios, había sido elegido por su apoyo, y advirtió que no estaba dispuesto a pagar ante la justicia por delitos que habían sido cometidos con el concurso de muchos sectores de la sociedad¹⁰⁷. Al amparo de una Ley denominada “Justicia y Paz”, Mancuso ha confesado algunos crímenes, pero expertos consideran que no ha dicho ni 10 % de lo que sabe. Otra pieza clave en las revelaciones que sacuden por estos días a Colombia, ha sido Rafael García, exdirector de informática del DAS (principal organismo de inteligencia del Estado) quien ha asegurado que el exdirector Jorge Noguera, no sólo permitió la infiltración del paramilitarismo, sino que trabajó junto con los jefes paras en la compra de votos y la realización de un inmenso fraude en las elecciones del 2002, para contribuir de manera definitiva a la victoria del entonces candidato Álvaro Uribe sobre su contendiente Horacio Serpa” (La Jornada, 24/01/2007: 35)

f. Viejos y nuevos narcos: de los carteles de Cali y Medellín al del Norte del Valle

Al iniciar este epígrafe, es pertinente preguntarse ¿A qué se hace referencia con “viejos” y “nuevos” narcos? La respuesta requiere un breve abordaje histórico: se trata de la transición mafiosa entre el periodo de fuerte presencia y visibilidad de los narcos en los años ochenta, en el que el precio de la cocaína alcanzó un boom impresionante en los mercados ilegales internacionales, por una parte, y la emergencia de un nuevo perfil de narcotraficantes, dispersos en múltiples grupos, por otra parte.

Hacia principios de los noventa, el cartel de Cali asumió el liderazgo del crimen organizado, tras el declive y desintegración del cartel de Medellín (por la muerte de Pablo Escobar). Tras la captura posterior de los hermanos Rodríguez Orejuela (Cali) y su extradición a Estados Unidos a principios de este siglo XXI, emergen diversos carteles de menor tamaño y cuya característica es que tienen un perfil más bajo en los centros urbanos, una mayor presencia en predios rurales, articulación con los grupos paramilitares y, finalmente, un poder de lobby en el Congreso de la República, a partir de

¹⁰⁷ El subrayado es mío.

infiltración en partidos políticos aliados del actual presidente Uribe Vélez, como es el caso de Cambio Radical, Partido de la “U” y el partido Conservador colombiano.

Pero vayamos por partes, con el ánimo de descifrar las posibles similitudes o diferencias que se encuentran entre los carteles de Cali y Medellín (viejos narcos ya “extinguidos”) y los carteles emergentes, cuya avanzada más notoria se encuentra justamente en la región (Valle) que presentamos en el estudio (nuevos narcos en complicidad con paramilitares).

Si el boom de la marihuana marcó los años setenta, el de la cocaína atravesó y permeó los ochenta. A partir de 1982, comienza a visibilizarse en el congreso de la Nación, la presencia de representantes a la cámara de diputados y senadores con mayores cercanías a los dos carteles de la droga emergentes en esa década: el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y Ledher, por una parte, así como el cartel de Cali, comandado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, así como los miembros de su propia familia.

A mediados de los ochenta, los carteles- especialmente el de Medellín- demostraron su poder de intimidación y fuego al arrinconar -literalmente hablando-, al Estado colombiano en su tibia iniciativa de promulgar la extradición de colombianos a cárceles norteamericanas. Entre 1986 y 1990 se produjeron más de 80 atentados con bombas, asesinatos selectivos o indiscriminados, como lo fueron los tristemente célebres casos de la explosión de una bomba en pleno vuelo, en un avión de la línea aérea Avianca (todos los pasajeros y tripulación perecieron: 215 muertos), o las bombas que destruyeron el edificio del Departamento Administrativo de seguridad (DAS) y el del principal diario de oposición, “El Espectador”¹⁰⁸, así como el exterminio sistemático de 4500 militantes de la organización partidista de izquierda Unión Patriótica (acribillados a lo largo de tres años sin que el Estado hiciera nada por ellos), por sólo nombrar cuatro de los hechos más notorios. Entre 1986 a 1990, se produjeron cientos de desapariciones, listas negras, fosas comunes, masacres diarias, llevando a un clima de ansiedad cotidiana en las grandes ciudades, lo cual reflejaba el itinerario de terror en el que los narcotraficantes del Cartel de Medellín, hicieron arrodillar a las fuerzas del orden, con el objeto de detener la temida extradición a los Estados Unidos de Norteamérica.

¹⁰⁸ El Espectador” es si lugar a dudas el diario más crítico de la historia colombiana reciente. Su planta de periodistas fue (y es) la más selecta intelectualmente hablando. Desde los años ochenta y noventa ha sido blanco de narcotraficantes, así como de injurias y amenazas de paramilitares y políticos que se han sentido incómodos con el control que ejerce el periodismo punzante pero inteligente de este medio de comunicación.

Esos años ochenta fueron tenebrosos. Varios analistas –académicos y periodistas- lo denominaron como los años del “colapso del Estado”, los del “chantaje de los carteles” o los de la “década sangrienta”. En todo caso se trató de una década descontrolada, si es que acaso se puede decir que en Colombia hubo control de la deriva nacional. El cartel de Cali observaba un perfil más “bajo” en relación con el de Medellín, al cual sin embargo enfrentó en repetidas ocasiones, como lo atestigua la conformación de un famoso escuadrón de la muerte denominado los “PEPES” (perseguidos por Pablo Escobar)¹⁰⁹, el cual tuvo el contraste de la alianza entre el cartel de Cali y sectores agroindustriales del Valle del Cauca, en el afán de detener la embestida por la búsqueda del monopolio del tráfico de estupefacientes por parte de Pablo Escobar y sus secuaces “paisas¹¹⁰” del cartel de Medellín, peyorativamente señalados como de extracción popular en contraste con narcotraficantes provenientes de una clase media alta empresarial como lo eran los hermanos Rodríguez Orejuela¹¹¹

La muerte de Pablo Escobar en 1993 y la captura de los jefes del cartel de Cali en 1995 (hermanos Rodríguez Orejuela, actualmente presos en EEUU), marcaron un cambio definitivo en la forma de las organizaciones narcotraficantes del país, que conduciría hacia el desmantelamiento de los grandes carteles de la droga, o, lo que es lo mismo, hacia una recomposición de las empresas oligopólicas descritas por Krauthausen y Sarmiento (1991). Los grandes empresarios y grupos dedicados al tráfico de drogas pasaron entonces, a mediados de los noventa, de una estructura de redes organizadas jerárquicamente a una estructura de redes atomizada, menos visible a la persecución de las autoridades y más re-adaptable frente a los golpes recibidos por las fuerzas de seguridad u otros competidores. Gustavo Duncan (2006: 52) lo describe acertadamente:

“En la medida en que se daban estos cambios en su estructura organizativa, ocurrían también cambios radicales en los requerimientos de “coerción y protección” del narcotráfico. El perfil más bajo de los nuevos empresarios los

¹⁰⁹ Choques y enfrentamientos diarios entre los carteles de Medellín y Cali.

¹¹⁰ Antioqueños, oriundos del departamento de Antioquia.

¹¹¹ Se hacía una referencia surrealista en los años ochenta, que consistía en señalar a los narcos del cartel de Medellín como “sanguinarios” e “ignorantes” por ser de origen popular (Pablo Escobar) en contraste con cierta extracción “de clase alta” de los “empresarios” (narcotraficantes) Rodríguez Orejuela, más ligados a la gente “de bien” del empresariado caleño y vallecaucano. Todo un signo de la doble moral manifiesta en nuestras élites industriales y empresariales colombianas: Narcos “cultos” versus narcos “populares”. Recordemos que los hijos y sobrinos de los “cultos” Rodríguez Orejuela, estudiaron en universidades tan prestigiosas como Harvard, MIT, Yale, entre otras, pero a pesar de ello fueron incluidos en la temida “Lista Clinton” y sus empresas-farmacéuticas y químicas- han sido objeto de persecución y embargos reiterados.

hacía menos visibles pero a la vez eran más vulnerables a la violencia ejercida por grupos armados de izquierda o derecha. El alcance de su infiltración en las agencias del Estado se redujo luego que se destaparan las redes políticas que habían sido cooptadas por los anteriores oligopolios de la droga, por lo que su influencia en las decisiones políticas nacionales se vio tan limitado que no pudieron evitar el renacimiento legal de la extradición. En consecuencia, como ya no contaban con los aparatos armados que en su época ostentaran Escobar o Rodríguez Gacha, ni con la red de influencias sobre la clase política que tejieron los miembros del cartel de Cali, sus requerimientos de “coerción y protección” quedaban ahora en manos de grupos de autodefensas paramilitares que controlaban el poder local donde estaban ubicadas las posesiones de los narcotraficantes y los sitios de producción y transacción de drogas”

El historiador e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, Adolfo León Atehortua, presentó en un evento académico en Francia (año 2000), una ponencia titulada “Narcotráfico y paramilitares: la articulación de las violencias en el Valle del Cauca”. En dicha ponencia, Atehortua identifica “veinte o más grupos” en el Norte del Valle, con posterioridad a la desarticulación del cartel de Cali, aunque a la postre, y, como producto de la propia confrontación, se han aglutinado en torno a dos capos en la contienda por el dominio territorial regional. Aun cuando es mucho lo que se desconoce, una de las características que les permitió medrar desde el principio a estas organizaciones fue su bajo perfil, así como su acentuada paramilitarización para acrecentar su red de apoyo y anillos de seguridad. Vale señalar que los expedientes de inteligencia policial y antinarcóticos que se han realizado acerca de Víctor Patiño Fómeque, Henry Loaiza, Don Diego o Wilmer Varela¹¹², indica que los núcleos de sus respectivos grupos lo constituyen clanes de sus propias familias, los cuales a su vez son testaferros o prestanombres.

En el Valle, luego de la desmovilización de los frentes Cacique Calarcá y farallones, que hacían parte del Bloque Conjunto Calima, aún se mantiene activo el Frente Pacífico, cuyo comandante es Francisco Javier Zuluaga Lindo (alias “Gordo Lindo”),

¹¹² Estas cuatro criaturas son los líderes de las diferentes facciones del cartel del Norte del Valle, responsables de cientos de asesinados en la región.

narcotraficante señalado por algunas versiones de haber “comprado” esta estructura¹¹³, la cual tiene presencia en la costa Pacífica, especialmente en el sur de Chocó, el municipio de Buenaventura (Valle) y parte de la costa caucana. En estas zonas se viene registrando una fuerte confrontación entre los narcotraficantes del norte del departamento del Valle, Wilber Varela¹¹⁴ (alias “Jabón”) y Diego Montoya (alias “Don Diego”)¹¹⁵, con el enfrentamiento de sus enormes ejércitos privados (“Los rastros” y “Los machos”, respectivamente): esto en parte le ha quitado protagonismo a las estructuras paramilitares que se encuentran en la mesa de negociación, aunque de acuerdo con versiones de habitantes de la región, se han configurado alianzas, lo que ha llevado a nuevos grupos paramilitares, disfrazados en el ropaje de nuevas “Cooperativas” de Autodefensas. Un estudio reciente y riguroso, lo constituye el del profesor de la Universidad de Los Andes, Eric Lair (2003):

“La intensa disputa entre los capos Wilber Varela y Diego Montoya parece haberse esparcido hacia el eje cafetero y habría que considerar la participación de los paramilitares a favor de alguno de los bandos. Como sucedió en el pasado, mafiosos del Valle, sus socios e incluso sus familias han buscado guarecerse en esta zona, buscando protegerse de la intensa confrontación entre capos. Es de tal magnitud la situación que casi 10 años después de que el Bloque de Búsqueda llegara a su fin luego de la detención de los antiguos líderes del cartel de Cali, el director de la Policía nacional, general Jorge Daniel Castro, dispuso la reaparición de este grupo con el objetivo de combatir a los narcotraficantes. Luego de la “desaparición” de los carteles más grandes, así como la captura y entrega de algunos de sus capos, las autoridades pensaron que esta problemática estaba resuelta, sin embargo diez años más tarde el fenómeno se encuentra muy activo,

¹¹³ Como si se vendiera un negocio de un particular a otro. También aquí vale señalar que los que “heredan” el negocio son los mandos “militares” medios, hombres que oscilan entre treinta y cuarenta años, jóvenes pero con amplia experiencia mafiosa, quienes se sienten aún muy “vitales” para retirarse de la actividad criminal.

¹¹⁴ Wilber Varela, alias “Jabón” del cartel del Norte del Valle, es un temido ex-oficial de policía que, “cansado” de los bajos salarios de su Institución, abandonó su cargo hace ya quince años y pasó a “mejor vida”, es decir, se convirtió en uno de los más grandes capos del narcotráfico del mundo. Más de cinco veces se le ha dado periódicamente por muerto, pero las falsas alarmas no han hecho sino aumentar su “fama” en el Valle del Cauca.

¹¹⁵ “Don Diego” es el narcotraficante más buscado por la DEA actualmente en América del Sur, desplazando a sus “colegas” brasileños. Es pertinente señalar que “Don Diego, en asocio con paramilitares, fue el responsable de la tortura, descuartizamiento y consiguiente asesinato de 85 campesinos en el año 1988, en la tristemente célebre masacre de Trujillo (Valle del Cauca), municipio ubicado a sólo 30 kilómetros montaña arriba de nuestra zona de estudio.

resurgiendo, consolidándose y asumiendo formas cada vez mas complejas.” (Lair, 2003: 123-124)

El hecho de que el narcotráfico, en primera instancia, funcionara bajo el mando de los grandes carteles urbanos (Duncan, 2006: 53), que luego fueron desmantelados, y actualmente se encuentra diseminado en pequeños carteles y células operativas subordinadas a ejércitos rurales, responde a toda una lógica económica y sociológica. En las ciudades era donde existía un aparato económico lo suficientemente grande para absorber los ingresos del narcotráfico, pero en el largo plazo la visibilidad y la competencia con proyectos de modernización que eran excluyentes con proyectos criminales, hacía vulnerables a los jefes de los carteles. El mantenimiento de una supremacía en el poder del negocio ilegal de las drogas no dependía solamente de la mayor acumulación de capital, sino también de las condiciones sociales que determinaban la forma que adoptaban las empresas privadas de “coerción y protección”, encargadas de regular el narcotráfico. Involucrarse con el narcotráfico no fue una opción: los paramilitares (y en parte la propia guerrilla, así sea a través de cobro de “tránsito” de estupefacientes) lo hicieron para garantizar los flujos de recursos, que les permitieran la financiación de sus ejércitos, una condición indispensable para sobrevivir como organización en la guerra.

Las mafias colombianas han penetrado fuertemente el mundo político, contribuyendo no solamente con millones de dólares a las campañas electorales nacionales, sino también fungiendo como “líderes cívicos”, filántropos, fomentando organizaciones políticas populares, han sido candidatos a puestos públicos e inclusive los del cartel de Cali le ofrecieron al gobierno de Betancur pagar parte de la deuda externa. Para los “capos” de la cocaína en Colombia, el dinero no es sólo capital de trabajo, sino además una poderosa vía para influir en los procesos y resultados políticos.

La estructura del negocio de la cocaína en Colombia está concentrado en clanes familiares, cuya mayor presencia se encuentra en los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia, quienes compran la cocaína en crudo (pasta o base) en el Perú y Bolivia, la refinan en laboratorios en Colombia, y, finalmente, la exportan procesada y refinada a los Estados Unidos (como mayoristas) y algunos, con sus redes de distribuidores en las calles de ciudades norteamericanas.

Los capos de la droga tratan de probar el argumento de que la industria de narcóticos genera progreso y empleo. Escobar dijo alguna vez que los dólares de la droga evitaron

que Colombia sufriese “una grave crisis similar a la de otras sociedades latinoamericanas” y también dijo que el dinero de la droga genera nuevos empleos para el pueblo colombiano. De manera similar, Carlos Lehder (actualmente condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos) manifestó en una ocasión (1990) que “si no fuera por estos dólares calientes, Colombia estaría en una situación peor que la de Argentina”¹¹⁶.

Además, los traficantes más destacados -como Carlos Lehder, Roberto Suárez, Pablo Escobar y González Rodríguez Gacha (alias “El mexicano”)– se ganaron desde los años ochenta el corazón y la mente de las clases populares locales por su “generosidad” personal; también financiaron una larga serie de servicios sociales en sus pueblos y regiones natales, por ejemplo, proyectos de vivienda, estadios deportivos, escuelas, carreteras e instalaciones sanitarias. Tales actividades de “narco- bienestar” son parte del folklore colombiano, construyendo así una imagen de “Robin Hood narcos” que es su mayor escudo protector.

El dinero es el arma política más importante de la mafia, pues con éste compra protección de las fuerzas del orden, corrompe al establecimiento político y obtiene el apoyo del público, especialmente de las clases populares; la violencia es por lo general el último recurso; es decir, se utiliza contra los policías, jueces o políticos que no se pueden comprar. La mafia colombiana tiene cómplices e informantes entre las Fuerzas del orden, en los ministerios claves del gobierno (tales como Justicia, Defensa y Relaciones Exteriores), en la comunidad diplomática colombiana y en los medios de comunicación locales-regionales y nacionales. Los traficantes de cocaína representan lo que un sociólogo colombiano (Alfredo Molano) ha llamado una “nueva burguesía ilegal”. En un sentido estrictamente económico, los narcotraficantes son una de las grandes historias de éxito de Sudamérica: la versión más pura de una clase capitalista “autóctona” del continente. No sorprende que los traficantes se describan a sí mismos no como criminales, sino como empresarios con éxito dechado de virtud capitalista¹¹⁷.

No obstante, la leyenda de la mafia está basada en algo más que una actividad empresarial que lleva de la pobreza a la riqueza. Los caudillos de la mafia, como

¹¹⁶ Refiriéndose a la Argentina de la hiperinflación alfonsinista, así como a la que acabó de destruir económica (y políticamente) el desastroso gobierno menemista.

¹¹⁷ Al respecto, ir a Bagley, Bruce (2004) “The Colombian Connection: The Impact on Drug Traffic on Colombia” en VVAA (2004). “Coca and Cocaine”. Columbia University Press. Pp.97-98.

Escobar, Lehder y Suárez, han hecho un esfuerzo consciente para comprar el apoyo político de los pobres en zonas urbanas y rurales. Se han ganado la gratitud de los residentes locales y simpatía por la industria de la cocaína proporcionando servicios de bienestar social a las comunidades pobres donde el gobierno no alcanza a llegar. Esta narco – filantropía, representa una minúscula fracción del total de las ganancias ilegales de los traficantes, pero es más que un mero estímulo; de todas maneras, el rendimiento político que da esta inversión relativamente pequeña, es incalculablemente mayor. Aún la Iglesia, que de ninguna manera está a favor de la droga, ha recibido dineros de la industria. Como lo manifestó el Obispo de la ciudad de Pereira en una entrevista en 1984: *“Yo personalmente he recibido dinero de los narcotraficantes y lo he distribuido a los pobres; las manos de Dios no se ensucian cuando reciben dinero de la mafia”*¹¹⁸.

El narcotraficante Evaristo Porras giró cheques en Leticia a ciudadanos necesitados y logró que los enfermos recibieran atención médica en los hospitales locales. En una de las propiedades de la familia Escobar (la tristemente famosa hacienda “Nápoles”), se regalaban 5000 juguetes en Navidad a los hijos de familias necesitadas en el valle del Magdalena Medio. En una tónica un poco más altruista, Carlos Lehder también distribuyó dinero en efectivo y medicamentos a los habitantes de Popayán después del terremoto de marzo de 1983. Escobar fue un “evangelizador de la generosidad”, que se dedicó a colaborar con los habitantes de los barrios marginales de Medellín y los campesinos pobres de las aldeas cercanas.

g. ¿Compadres y aliados o los mismos actores pero “maquillados”? : narcos y paramilitares, dos caras de la misma moneda

Existe suficiente evidencia y documentación sobre la forma en la que el narcotráfico- entendido como actividad delictual- empató con la mediación clientelista que existía para acceder al Estado y con la manera violenta como se regulaban las transacciones sociales en muchas regiones del país¹¹⁹. Durante todo ese proceso, el negocio de las

¹¹⁸ Sugiero acudir al artículo periodístico completo. Ver “Colombian Bishop Says He Took Money from Drug Traffickers”, Reuters North American Service, julio 17 de 1984.

¹¹⁹ Existe una amplia bibliografía reciente acerca de esta relación. Ver: Stathis Kalyvas (2004) *“La ontología de la “violencia política”: acción e identidad en las guerras civiles”*, en Análisis Político, Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, No.52, septiembre/diciembre; Pizarro, Eduardo (2004). *“Una Democracia Asediada: balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia”*, Bogotá: Grupo Editorial Norma. Especialmente el Capítulo II, sección: *“Los grupos paramilitares: ¿Actores políticos o señores de la guerra?”*; Duncan, Gustavo (2005), *Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra*. Bogotá: Universidad de los Andes. Centro de Estudios sobre el desarrollo económico, <http://www.economia.uniandes.edu.co/economia/archivos/temporal/d2005-02.pdf>; García-Peña, Daniel (2005), *“La relación del estado colombiano con el fenómeno*

drogas se transformó en un fenómeno que rápidamente alcanzó dimensiones políticas, pero que a la vez quedó atrapado dentro de las tensiones políticas que caracterizan la historia de Colombia desde finales de “la violencia” clásica, al punto que los empresarios de las drogas terminarían subordinados a aquellos actores que ejercen el poder local a través de la fuerza de sus aparatos armados.

Intentaré sintetizar en las dos páginas siguientes la relación histórica entre paramilitares y narcotraficantes, la cual se asocia al negocio de las esmeraldas (Boyacá), la contraofensiva a las extorsiones de las Farc en el Magdalena Medio, la respuesta de los ganaderos ante el acoso de las guerrillas en el departamento de Córdoba y, finalmente, la creación del tenebroso MAS (“Muerte a secuestradores”) por parte de la alianza cartel de Medellín- paramilitares a mediados de los años ochenta, como respuesta al secuestro de una hermana del clan de los Ochoa.

Los orígenes de la relación entre el narcotráfico y el paramilitarismo, han estado ligados a diversos momentos históricos que señalan de la misma manera varios “nacimientos”. Como un antecedente se suele citar la experiencia de los llamados “pájaros”, durante la época de la Violencia. Estas bandas armadas al servicio del Partido Conservador llevaron a cabo una persecución contra los miembros del Partido Liberal, con complacencia y respaldo del establecimiento. Otros analistas se remiten al Decreto Legislativo 3398 de 1965, en el cual se establecía el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas. Sin ignorar esto, algunos académicos se han centrado en lo ocurrido en la década de los ochenta, principalmente en el departamento de Córdoba donde las elites regionales reaccionaron a la intervención del Estado central – desde donde se comenzó a promocionar la reforma agraria -, así como las actividades de extracción de recursos de la insurgencia como la extorsión y el secuestro.

paramilitar: por el esclarecimiento histórico en Revista Análisis Político, Bogotá: Instituto de Estudios políticos y relaciones Internacionales, Universidad nacional, No.53, enero- marzo; Leal, Francisco (2002), *La seguridad nacional a la deriva; Del Frente nacional a la posguerra fría*, Bogotá: Alfaomega, Uniandes, Flacso; Romero, Mauricio (2000) “*Changing Identities and Contested Setting: Regional Elite and the paramilitarises in Colombia*” en International Journal of Politics, Culture, and Society, vol.14 No.1; Reno, William (2000). “*Shadow States and the Political Economy of civil wars*” en Mats Berdal, & David malone, Greed and Grievance, Economic Agendas in civil Wars, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo/Rienner; Robinson, Major T.P /2001) “*Twenty – Firts Century Warlors: Diagnosis and Treatment?*”, en Defense Studies, Vol.1 No.1, Spring.

A comienzo de los años setenta, se formaron en Boyacá, grupos armados alrededor del negocio de las esmeraldas. Se extiende, paralelamente al auge de la minería clandestina, la consolidación de un grupo armado que tenía como funciones: garantizar la explotación de las minas a través de la intimidación a campesinos o propietarios de fincas que tuvieran vetas; limitar la competencia en un ambiente difícil y con niveles pronunciados de violencia; así como limpiar la zona de delincuentes y otros actores que perturbaran el desarrollo de las actividades extractivas y de comercialización. Esta empresa fue constituida por los ocho capos sobrevivientes de la denominada “guerra verde”, dentro de los cuales se encontraba Víctor Carranza, el “Rey” del negocio de las esmeraldas en Boyacá.

Esto generó una confrontación abierta, que fue potenciada por el poder del narcotráfico, especialmente por la creciente presencia de Gonzalo Rodríguez Gacha (alias “El Mexicano”) en el Magdalena Medio. Aunque en un principio se dio una alianza entre sectores de esmeralderos y Rodríguez Gacha -quien se valió del enfrentamiento entre estos para entrar en la zona-, la alianza se rompió y “El Mexicano” se erige de ahí en más como jefe de los grupos paramilitares que se asentaban en Puerto Boyacá, Yacopí, Puerto Salgar y Pacho, los cuales se basaban en el pie de fuerza existente de las estructuras armadas de los esmeralderos. Rodríguez Gacha se encargó de facilitar la entrada de una serie de narcotraficantes al Magdalena medio y de esta manera el cartel de Medellín fue ampliando su dominio, consolidándose la alianza y simbiosis paramilitares-narcos.

Paralelamente a este proceso, a comienzos de la década de los ochenta, el desdoblamiento del frente 4 de las Farc y la presencia del Frente 11 en la zona, llevaron a las mafias esmeralderas a realizar alianzas y a enfrentar a la organización insurgente, que comenzaba a disputarle poder en esta región, zona de gran importancia estratégica por una cantidad de tierras de propiedad de esmeralderos y narcotraficantes, ganado y posteriormente laboratorios, cultivos de coca y pistas de embarque. El paramilitarismo, adelantado por el narcotráfico, encontró en el departamento de Boyacá el referente y el respaldo para la expansión del poder de las mafias de las esmeraldas.

Si bien es en el departamento de Boyacá y la zona del Magdalena Medio en donde se produce el proceso fundador, el hecho fundante será la retaliación a un secuestro de una hermana de un capo del cartel de Medellín. En “La Historia de las guerras”, el ex ministro de Defensa del gobierno Samper, Rafael Pardo sintetiza lo que para él constituye el “mito fundador” de la simbiosis narco-paramilitar:

“.....con un evento que puede parecer episódico, pero que marcó una tendencia determinante al escalamiento del narco-paramilitarismo, el secuestro por parte del M-19 de Martha Nieves Ochoa, miembro de la familia Ochoa, que tenía a varios hermanos en el cartel de Medellín. Tras este hecho aparece el movimiento “Muerte a Secuestradores” (MAS) bajo el liderazgo de los hermanos Ochoa -Juan David y Jorge Luis-, Santiago Ocampo, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder, Jairo Correa Alzate, entre otros narcotraficantes. El MAS se hizo público con un folleto repartido en el estadio de Cali durante un partido de fútbol el 2 de diciembre de 1981, donde anunciaban que 200 personas -vinculadas supuestamente con el narcotráfico- habían organizado esta estructura. Los desencuentros con la insurgencia y el narcotráfico tuvieron razones principalmente económicas -- más que políticas-. La subversión comenzó a cobrar impuestos a la producción y comercialización de la droga” (Pardo, 2004:61).

2.2 Caracterización de la zona de estudio: el centro y norte del Valle del Cauca

El departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicado al suroccidente de Colombia. Su capital es Santiago de Cali (conocida como Cali, ciudad que cuenta con una población aproximada de tres millones de personas) y sus ciudades secundarias son Buenaventura, Tulúa, Palmira, Jamundí y Cartago. Un aspecto central a enfatizar fuertemente es la presencia del narcotráfico en la vida social de este departamento.

Con el objeto de identificar las características geográficas, administrativas-políticas y territoriales de la región de estudio, es pertinente acudir a una breve reseña que presenta la enciclopedia Encarta (2006):

El departamento del Valle tiene una extensión total de 22.140 km², lo cual constituye el 1,9% del total de la superficie del territorio nacional.

Los accidentes orográficos más importantes de la región son los farallones de Cali, la cordillera de Paramillo, los páramos de Barragán, Miraflores y Pijao y los cerros de Calima, Juanambú, Pan de Azúcar, Paramillo y Tres Cruces. En el Valle del Cauca hay dos sistemas hidrográficos: el primero tributa sus aguas al océano Pacífico y el segundo al río Cauca. Algunos ríos que bañan el departamento son: Barragán, Cali, Mayorquin, Párraga, San Juan, Toche, Tuluá y Zabaleta. Cuenta con dos bahías principales, la de Málaga y la de Buenaventura.

Estos datos son pertinentes en tanto permiten visualizar en los dos mapas siguientes (de la misma fuente), tanto al departamento del Valle del Cauca (en el primer mapa alrededor de la ciudad de Cali) como en un sentido más reducido y concreto los municipios señalados en el estudio (segundo mapa), enfatizando en la cercanía con el océano pacífico (tránsito estratégico para la “salida” de los cargamentos de drogas hacia el norte)

y, de igual modo, la “frontera” con los otros “departamentos”¹²⁰, unos con mayor presencia guerrillera (desplazándose hacia el sur y un poco más al centro) o dominio paramilitar (el norte y oriente del país) o en casi todo el país, de los carteles de la droga (en el caso de este estudio, el del cartel del Norte del Valle)



Con el objeto de hacer algunas precisiones, bien vale la pena hacer un alto en el camino. En este mapa que presenta a toda la República de Colombia, los paramilitares mantienen un dominio absoluto en la costa caribeña que da cara al océano Atlántico, en la que podemos ubicar a ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Sincelejo, Montería y Valledupar, sedes principales de los escándalos de la “para-política” (que por fortuna están publicando masivamente los principales diarios del mundo).

De igual modo, en la zona sur, en las que el lector puede visualizar los nombres de ciudades y regiones como Florencia (capital del departamento de Caquetá), San José del Guaviare, Neiva, Guainía, Meta, Popayán (capital del departamento del Cauca), el dominio territorial es eminentemente guerrillero. En ese enorme territorio del sur y suroccidente del país se encuentran resguardados los miembros del Secretariado de las Farc¹²¹, gracias a una enorme muralla de defensa caracterizada por una agreste vegetación y cadenas montañosas que cubren más de trescientos veinte mil kilómetros

¹²⁰ **Departamento:** es la nominación que en Colombia se da a las divisiones administrativas de las regiones, lo que equivale a “Estados” en México, Venezuela y Brasil, “provincias” en Argentina y Ecuador o “Regiones” en Chile, por ejemplo.

¹²¹ En los anexos, ver foto del “Secretariado Central” de las Farc en un impreso publicado en el diario capitalino “El Espectador”, con fecha domingo 18 de marzo de 2007.

cuadrados, un territorio mayor a Corea del Norte y Corea del Sur y equivalente al de toda la República de Vietnam¹²² (si se me permite la comparación). Este comentario sobre dichas Repúblicas asiáticas, viene a colación, dadas las múltiples (e irresponsables) especulaciones periodísticas que durante muchas décadas se formularon (también por políticos y dirigentes “radicales” anti-insurgentes), sobre “inminentes” intervenciones militares norteamericanas durante la guerra fría con el fin de “apoyar” al gobierno colombiano¹²³. No se trata de una región de fácil acceso.

Pasemos ahora a un segundo mapa, un poco más “específico” en lo que atañe al estudio, pues ahí se encuentra la región investigada: la del departamento del Valle del Cauca, cuya capital como ya se ha señalado es la ciudad de Cali.



¹²² El territorio de Corea del Norte es de 120.538 km², Corea del Sur 99.268 km² y Vietnam 331.390 km². Datos extraídos de la Biblioteca Premium Encarta 2006. Microsoft.

¹²³ Vale aclarar que el apoyo norteamericano siempre ha existido en instructores, técnicos y oficiales militares y policiales, investigadores, funcionarios de la Dea, así como en aviones y helicópteros de última generación, capacitación y adiestramiento y, obviamente, grandes recursos en millones de dólares para financiar los ataques a la insurgencia. Los últimos dos grandes proyectos lo constituyen el ya famoso “Plan Colombia” (1998-2006) y el “Plan Patriota” desde el año 2002 (80 mil soldados combatiendo en la zona sur con el objeto de capturar a los líderes de las Farc, es decir, el Secretariado central). Ambas iniciativas militares han sido un verdadero fiasco: enorme despilfarro de recursos y la imposibilidad de capturar a los comandantes guerrilleros. Las Farc- tal como he repetido a lo largo del estudio- es una guerrilla experimentada, curtida en mil batallas, que goza de apoyo social aún cuando el gobierno Uribe se niegue a reconocerlo públicamente y, sin duda alguna, bastión de lucha que lleva consigo las banderas de una larga tradición histórica guerrillera que no solamente deviene de 1964 (fundado por los “héroes de Marquetalia”), sino que posee antecedentes en los grupos campesinos guerrilleros del siglo XIX y las Ligas campesinas Liberales de los siglos XIX y XX.

La región objeto de estudio (Valle), se encuentra ubicada entre el “corredor” geográfico que parte del centro del departamento (municipios de Tulúa, Bugalagrande y Sevilla), hacia el norte (Zarzal, Roldanillo, La Unión, Cartago), colindante con el eje cafetero.

El Valle del Cauca es una región famosa por sus plantaciones de caña de azúcar, que se encuentra articulada por una red vial a la Carretera Panamericana, presenta una urbanización creciente y zona de surgimiento de dos grandes carteles de la droga en Colombia: el cartel de Cali (desmantelado puesto que sus jefes máximos fueron extraditados a los Estados Unidos) y el emergente y sólido cartel del centro del Valle (nueva “generación” de la mafia en la zona centro y norte del departamento). La proximidad con el Océano Pacífico, especialmente con el puerto de Buenaventura, lo hace proclive estratégicamente al tráfico de drogas, lo cual ha provocado en las dos últimas décadas, un fuerte incremento de la violencia, debido a las disputas territoriales de narcos y paramilitares en el dominio del transporte y comercialización de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa. La asociación de narcotraficantes y paramilitares es de tal magnitud, que existen fuertes divisiones entre grupos paramilitares por el control de zonas de tránsito de estupefacientes, a tal punto que los bloques “paras” se enfrentan entre sí por el dominio del negocio (ver al respecto los reportes periodísticos en la sección anexos).

Lo que ocurre actualmente en diversos municipios del Valle del Cauca, es una pugna por el control de la producción, tránsito y comercialización de la cocaína y heroína por parte de narcotraficantes y paramilitares. Sumado a ello, se encuentra la represión estatal a toda señal de oposición política al “establecimiento” por parte de organizaciones sociales, principalmente de la izquierda colombiana, la cual es silenciada o condenada al ostracismo.

De acuerdo con estudios realizados, la presencia de la guerrilla es muy marcada en la Botacaucana y el centro del Cauca, mientras que la del narcotráfico y los paramilitares se concentra en el centro del Valle, el norte y el sur del departamento y el norte del Cauca. Como actor contendiente, los conflictos públicos implican al Estado y a actores provenientes de las Autodefensa Unidas de Colombia (denominado “Bloque Calima”), los diversos frentes guerrilleros, así como los narcotraficantes del cartel del centro y norte del Valle (los que “llegaron” a reemplazar al cartel de Medellín y al cartel de Cali). Algunos núcleos guerrilleros de las FARC (el frente treinta) operan en la cordillera del Sur del Valle (montañas de Florida, Corinto y Palmira), en donde tiene asiento la comunidad indígena Páez hace 40 años. Otra, el ELN, tiene presencia en el Cañón del Dagua, donde

la base social guerrillera es inmigrante y donde se asienta una población con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas. Otra parte, se ubica en el Cañón de Garrapatas, sitio donde opera el Cartel del Norte del Valle y es uno de los mayores centros de procesamiento de la cocaína.

Desde el 2002 hasta la actualidad, se presenta un fuerte reposicionamiento y escalada guerrillera en el Valle del Cauca. En una nota periodística publicada el 9 de abril de 2006 en el diario “El País de Cali”, se presentaba la siguiente noticia: *“Mil quinientos hombres de las Farc, apostados en las dos cordilleras que surcan el Valle del Cauca, tienen en alerta a las autoridades militares y policiales del departamento”* Ello implica que las FARC, están reorientando sus tropas desde el Tolima y el Sumapaz hacia esta región, consolidando una presencia en zonas rurales del departamento. Según este artículo, tanto la policía como fuentes de inteligencia del Estado, consideran que la intención de la guerrilla es conectar un corredor geográfico que una al Valle del Cauca con los departamentos de Chocó, Tolima, Risaralda y el norte del Valle (es decir, hacia el eje cafetero), con el fin- según la perspectiva estatal- de acondicionar sus laboratorios de droga y competir por el negocio (o aliarse) con los grupos o bandas del cartel del Norte del Valle.

La ruta del Océano Pacífico, un corredor selvático apto en particular como vía de exportación de droga, se ha hecho tan rentable en los últimos años (estimativos gruesos de las agencias norteamericanas hablan del 70% del volumen total), y tan funcional para el negocio, que sus distintas vías de acceso se convierten en territorios preferenciales a ser controlados, y por lo demás, la crisis cafetera que afecta con intensidad a algunos de los municipios y a las regiones adyacentes, proporciona un contingente creciente a los narcotraficantes y grupos paramilitares.

¿Cuáles son los sentidos de la acción de los grupos armados? Es pertinente desarrollar a continuación los significados de dichas acciones.

En primera instancia, el narcotráfico no presenta ningún proyecto político y social, más allá que- de la boca para afuera- se declaren “nacionalistas”. En el fondo, la supuesta posición antinorteamericana no es tal. Realmente su rechazo es específicamente a la política estadounidense de recibir criminales colombianos en extradición, debido a que las penas son más severas que en Colombia. La acción social del narcotráfico solo está mediada por el afán de enriquecimiento ilícito, la filantropía “disfrazada” con el fin de obtener apoyo popular y réditos políticos, la conformación de todo un organigrama de pasos dedicados a chantajear al Estado (con la información sobre sus vínculos y

relaciones con la dirigencia política que se “lava las manos” cual Herodes contemporáneo), la configuración de un ámbito de protección en el que se han articulado eficientemente con el paramilitarismo, así como con el propio ejército colombiano (tal como lo ha demostrado recientemente la masacre de Jamundí en el Valle del Cauca).

En segunda instancia, el sentido de la acción paramilitar ha desbordado los límites de la mera “defensa” ante la arremetida guerrillera en la región. De hecho, los paramilitares resguardan al cartel de Norte del Valle y han configurado nuevos grupos de autodefensas para camuflarse ante las apariencias de desarme, promovidas por la Ley de “Justicia y Paz”. Controlan todos los negocios de apuestas ilegales, centros clandestinos de peleas de gallos, prostíbulos y burdeles, tienen intereses en el sector transportador, gozan de alianzas con grupos políticos afines al gobierno Uribe y, finalmente, reciben temporalmente a mercenarios e “Instructores” israelitas desde hace muchos años (los cuales llevan a cabo capacitaciones y adiestramiento en el arte de la represión). Adicionalmente, se consideran el apéndice y el brazo aliado del ejército en su lucha anti insurgente.

En tercera instancia, las Farc en el centro y norte del Valle, constituye una guerrilla móvil principalmente, pero que configura una cierta base social de apoyo en la región, a través de varios Frentes y columnas que atraviesan permanentemente la zona, en el modus operandi propio de la combinación de todas las formas de lucha, de los manuales de guerra de guerrillas: ataque y repliegue, encuentros sorpresa y retiradas inmediatas para evitar que los batallones de la zona puedan arrinconarlos. Pese a ello, la acción social de las Farc remite a la conformación de redes de apoyo, publicidad permanente y búsqueda de cooperación e información por parte de la población, acerca de los constantes movimientos del ejército y paramilitares, especialmente de los campesinos que son los que habitan los corregimientos y las veredas de la zona. En las zonas urbanas el apoyo es significativamente menor, en todo caso silencioso y de bajo perfil, dado la mayor influencia paramilitar y presencia de organismos de seguridad e “inteligencia” del Estado, pero, así mismo, a la legitimidad con que cuenta Uribe Vélez, lo cual se reflejó en los resultados electorales del 2006, en las que ciudades como Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Armenia, Montería, Sincelejo, Santa Marta, Barranquilla, le dieron al candidato de la ultraderecha, el mayor caudal de votos. Justamente, las ciudades con mayor sentido conservador en el país. Precisamente, los centros urbanos donde se evidencia una mayor influencia del narcotráfico y paramilitarismo. Caso contrario a Bogotá, la ciudad capital, donde se ha evidenciado históricamente un mayor compromiso con la democracia participativa, un mayor nivel educativo y un más fuerte espacio de crítica al

autoritarismo uribista.

El interés de la presente investigación, se ubicó en el centro y norte del Valle del Cauca, en la zona comprendida entre las pequeñas ciudades de Tulúa (centro del Valle) y Cartago (Norte del Valle)¹²⁴, enmarcado en los también pequeños municipios de Bugalagrande, Zarzal, Roldanillo y Andalucía¹²⁵, entre otros. Dicho perímetro de municipios muy cercanos y estrechamente articulados con la Carretera Panamericana refleja la presencia (en sus corregimientos y veredas, es decir, su zona rural) de dos “frentes” de las FARC en la “cabecera” (periferia) rural del municipio, así como de paramilitares pertenecientes al recientemente desmovilizado “Bloque Calima” del Valle del Cauca, que circulan permanentemente en el centro del municipio y que se han “reciclado” en nuevos grupos paras (ahora llamados “Águilas Negras”) “apoyando” así labores represivas del ejército y la policía y, finalmente, los sanguinarios miembros de las temidas bandas narcotraficantes conocidas como “Los Rastrojos” y “Los Machos” del cartel del Norte del Valle (cuyo “epicentro” es el ya mencionado municipio de Cartago a 60 kilómetros de allí).

Si geográficamente la subregión del Norte del Valle esta conformada por 23 municipios, son 14 de ellos los que presentan una tasa de homicidios especialmente alta: según cálculos departamentales, del grupo de los 21 municipios de toda Colombia con las tasas más altas en el periodo 2002-04, 14 están ubicados en el Norte del Valle (Camacho, 2004:6). Y en la crónica policial y judicial regional aparecen reiteradamente los nombres de Roldanillo, Trujillo y Zarzal, epicentro de dichas organizaciones de narcotraficantes.

Tal violencia, expresada en amenazas, persecuciones, detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y masacres por parte de los grupos paramilitares como fuerzas oscuras afín al proyecto represor estatal, se manifiesta adicionalmente en el desplazamiento forzado por la acción deliberada de actores armados, en particular los grupos paramilitares, lo mismo que el exilio forzado debido al temor de sufrir actos represivos. En esta evolución contemporánea en el Valle del Cauca está predominando el desplazamiento forzado de la población rural; situación en la que han cobrado vigencia la estigmatización, amenaza, persecución, judicialización y exterminio de promotores y defensores de los derechos humanos y, en general, de toda persona que opine o manifieste alguna actitud frente al conflicto, sus consecuencias y sus actores o, simplemente, a la problemática en general.

¹²⁴ Tanto Tulúa como Cartago, cuentan con un promedio de cien mil habitantes cada una.

¹²⁵ Con un promedio entre cinco mil a quince mil habitantes.

Por razones obvias, no se pretende abarcar toda la gama de conflictos presente a lo largo y ancho del departamento. En primer lugar, el Valle posee zonas profundamente diferenciadas en las tipologías de conflictos y, en términos incluso geográficos y culturales, resulta difícil y complicado encontrar semejanzas, por ejemplo, entre la costa pacífica (Buenaventura), los municipios cafeteros ubicados en la Cordillera Occidental y la convulsionada y metropolitana ciudad de Cali.

En la región se constata el ir y venir de varias organizaciones delincuenciales aglutinadas en torno a los dos “capos” del cartel del Norte del Valle, ampliamente señalados por la DEA: Wilber Varela (alias “Jabón”) y Diego Henao (“Don Diego”), quienes son “perseguidos”¹²⁶ por organismos internacionales como la Interpol y la Dea, así como por la Oficina de estupefacientes y los Bloques de Búsqueda en Colombia y, sin embargo, entran como “Pedro por su casa” en la zona de este estudio, convenciendo a propios y extraños de que no solamente hay inoperancia de las autoridades, sino una fuerte corrupción y complicidades institucionales y redes sociales que a lo largo de este trabajo se irán desenmascarando. Se trata de veinte organizaciones delincuenciales conteniendo entre sí, aglutinadas en torno a estos dos mafiosos mencionados anteriormente, lo que determina una situación fluctuante, muy inestable, con alianzas inesperadas y con una lucha intensa por el control territorial, lo cual se refleja en el aumento de indicadores de tasas de homicidios en el norte del Valle¹²⁷. Al respecto, es pertinente invitar al lector a darse un recorrido por los reportes periodísticos que se presentan en la sección anexos al final del estudio.

Lo que está en juego entonces en este contexto regional del norte vallecaucano, es en efecto un desplazamiento del volumen del negocio de la cocaína y la ubicación en un área geográfica relativamente reducida de laboratorios, rutas de salida e inversiones masivas del capital originado en el negocio de la droga. Y todo ello determina una mayor complejidad en las alianzas y, en conjunto, una mayor inestabilidad.

¹²⁶ La palabra va “entre comillas” porque parece un chiste de mal gusto insinuar que realmente se les persigue. El gobierno Uribe ha extraditado a decenas de pequeños narcos a Estados Unidos, pero a los grandes capos no los ha tocado. Ello va en correlación con la historia –ligada obviamente al narcotráfico– de la familia del actual presidente colombiano: su padre (asesinado por las FARC), sus hermanos (señalados por diversas investigaciones que no hacen nunca “mella”), sus más de veinte “angelicales” primos (por parte de la Familia Ochoa Uribe, del cartel de Medellín), algunos de ellos purgaron condena en Estados Unidos por tráfico de drogas, en fin, una historia familiar digna de ser abordada literaria y documentalmente hablando como propia de una “Sagrada Familia”.

¹²⁷ Es decir, desde la ciudad de Tuluá hacia el norte (vía eje cafetero: Pereira, Manizales y Armenia)

Aunque la ley del Derecho Penal estatal es sinónimo de autoridad arbitraria en la región, esta resulta susceptible de ser burlada, esto es, corrompida. Para los paramilitares, narcotraficantes y sus testaferros (“lavaperros”) la burla hacia la justicia es efectiva, lo cual consolida el desprecio por la ley que se encuentra en el ambiente social. Y esa actitud típica de sobornar o intimidar se refleja en la forma en que los paramilitares¹²⁸ negocian su sometimiento a la justicia, como lo ha sido la polémica Ley de Justicia y Paz (que desarrollé anteriormente en uno de los epígrafes del capítulo dos). Desde la mentalidad de estos sujetos (paras y narcos), la ley es lo transable mediante la amenaza de la violencia o el soborno. No se hacen a una idea de la ley como algo distinto que la expresión genérica de intereses de un grupo.

Un rápido examen de las situaciones de violencia por las que atraviesa el departamento del Valle, nos obliga una vez más a pensar en su diversidad subregional. De manera evidente, el narcotráfico aparece como eje articulador de la violencia en el área. El sicariato, los asesinatos colectivos, los ajustes de cuentas y la utilización sofisticada de vehículos, armas de fuego y recurrencia a la sevicia, poseen mayor estadística en Cali, el centro y el norte del Valle. En este último escenario, la violencia presentó además un componente significativo de premeditación y búsqueda de efectos demostrativos por parte de los victimarios.

En el centro y norte del departamento Valle del Cauca, a su vez, el nivel de organización militar de los aparatos del crimen, así como su crueldad, anonimato e impunidad han sido superiores. No puede ignorarse el incremento de los homicidios en algunos municipios, como por ejemplo Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, Bugalagrande, El Dovio, La Victoria, Riofrio, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Florida, Restrepo y San Pedro, los cuales figuran entre los municipios cuyo número de homicidios, y por consiguiente su tasa, ha aumentado vertiginosamente en los últimos quince años, los cuales coinciden con la consolidación de las redes del narcotráfico en la región. En el caso concreto de Ansermanuevo, por ejemplo, entre 1995 y 1996, su incremento en el número de homicidios alcanzó el 180 por ciento (Camacho, 2002: 195)

La presencia de actores armados es heterogénea y diversa, a saber:

- 1) El crimen organizado por el narcotráfico, es decir, el cartel del Norte del Valle, con dos bandas ampliamente conocidas, como son “Los Machos” y “Los rastrojos”, señaladas y suficientemente documentadas por la propia DEA en su portal web.

¹²⁸ Y narcotraficantes que se hacen pasar por meros paramilitares, para gozar de los beneficios de impunidad de dicha Ley

2) Los bloques Calima de las Autodefensas Paramilitares y los nuevos grupos paramilitares “Águilas Negras” y las “Autodefensas campesinas del Norte del Valle” (lo de llamarse “campesinas” en realidad es un disfraz para ocultar su accionar de escuadrones de la muerte bajo la máscara de “asociaciones de seguridad”)

3) El frente 30 de las Farc

4) Los regimientos de las Fuerzas Armadas y batallones de alta Montaña (comandos contraaguerrilleros) con sede en los cuarteles de Cartago (a 60 kilómetros al norte de ahí), Palmira (a 55 kilómetros al sur), el batallón Farallones en la ciudad de Cali (a unos 75 kilómetros, con capacidad de movilización de infantería y aviación) y presencia de grupos de inteligencia adscritos al DAS (Departamento Administrativo de seguridad),

En la zona estudiada, centro y norte del Valle del Cauca, se evidencia una característica interesante: no se trata de una región paupérrima, ni la que tiene los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas en el país. Al contrario: es una región agroindustrial, con un nivel de vida relativamente más alto que el promedio nacional (agregado a ello: lavado de dineros del narcotráfico) y sin embargo, persiste la violencia y continúan incursionando guerrilleros y paramilitares en la zona, contradiciendo las lógicas que le darían justificación a la presencia de movimientos armados, como son la de los guerrilleros en la “cabecera” rural y los paramilitares y las Fuerzas Armadas en el “casco” urbano. Como un dato no menor, en el “casco” urbano se encuentra ubicada la central industrial de producción de la transnacional de origen suizo Nestlé¹²⁹, principal factor de concentración de la mano de obra del municipio mencionado y de la región rural circundante a los municipios de Andalucía, Toro, Roldanillo, etcétera (las otras organizaciones que más “empleo” ofrecen son los mismos grupos armados, pues incentivan económicamente a sus integrantes).

¹²⁹ El caso del sindicato de la transnacional Nestlé en la zona ha sido objeto del interés de organismos internacionales de Derechos Humanos, pues en los últimos 5 años han sido asesinados 7 líderes sindicales y se han exiliado otros 10. Las amenazas provienen de grupos paramilitares y presiones de los servicios de inteligencia colombianos (Departamento Administrativo de Seguridad DAS), los cuales conforman escuadrones de la muerte en la zona. Los nombres de Alfonso Espinoza, Rogelio Sánchez, Onofre Esquivel y Fredy Ocoro, entre otros han aparecido en diversos panfletos amenazantes de los paramilitares AUC en el municipio. Veamos el siguiente panfleto de amenaza a los sindicalistas: *“En el centro del Valle existen personas que se oponen a estos (SIC) cambios políticos y económicos, es por esto que son personas que no ayudan y se oponen al desarrollo. Por todo esto se han denominado objetivo político por nuestra organización y han sido objeto de seguimiento. Es nuestro deber como organización política y armada de este país, “limpiar” y proteger nuestra Colombia. Si estas personas continúan en oposición ya sabrán lo que pasará.”* (el subrayado es mío). Ver: Mejía, H (2002) *“Los defensores de los Derechos Humanos: estigmatización–eliminación: el caso de la Nestlé Bugalagrande”*. Documento Equipo NIZKOR Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh). Organización Mundial Contra la Tortura (Omct). Nota: el subrayado es mío.

Es preciso indicar que los sindicalistas de la Nestlé, afiliados a SINTRAINCOL (Sindicato de trabajadores de la industria colombiana), han señalado a la propia fábrica transnacional como responsable de las alianzas con los paramilitares, “usando” el poder de amedrentar y aterrorizar que tienen estos escuadrones de la muerte como ejército irregular, haciendo el “trabajo sucio” que no “pueden” hacer abiertamente las Fuerzas Militares.

Correlativamente a la expansión urbana empresarial y agroindustrial que se produce en el Valle del Cauca en las dos últimas décadas, se da igualmente un aumento en las incursiones y re-posicionamiento de las guerrillas y los paramilitares en dicho departamento. Sin embargo, hacer uso de la problemática agraria ya no es una estrategia tan clara de convocatoria de las bases campesinas por parte de los grupos guerrilleros. Ya no es posible pensar en la tesis de la continuidad histórica de la violencia desde enfoques estructurales, porque se observa que, a pesar de las diferentes épocas de crecimiento o estancamiento económico, sigue aumentando el número de grupos involucrados en el conflicto armado (“bloques” paramilitares y “frentes” guerrilleros).

En efecto, un estrecho vínculo de causalidad parece existir entre, por una parte, la concentración de paramilitares en esta región y, de otra parte, la implantación o la posible implementación en el Valle del Cauca de proyectos industriales o agroindustriales y “mega-proyectos” (grandes obras públicas), lo mismo que con el cultivo, procesamiento y exportación de drogas ilícitas. ¿Por qué se afirma esta vinculación? Porque se observa - en las dos últimas décadas- cómo los paramilitares se han tomado el control de negocios lucrativos como el cultivo y procesamiento de palma de cera “africana”, el procesamiento de azúcar refinada (y derivación en azúcar “morena” y “light”) y el dominio en la producción de minas de carbón, oro y diamantes. Y paralelamente a ello, desde el año 2002 se construye una de las más grandes obras públicas de la Colombia reciente: la autopista del Valle, con siete estaciones de “peaje” o “cuota” en apenas 220 kilómetros, carga impositiva que va directo a la financiación de las Fuerzas Armadas, es decir, a financiar una costosa guerra en detrimento de la inversión social.

Además, como si fuera poco, los paramilitares se han “tomado” el poder de los negocios de apuestas ilegales, todas las casas de prostitución de la región (“comprando” por la fuerza a los antiguos proxenetas) y dominan, como si no les bastara lo anterior, el negocio de “prestamistas”, es decir, el ámbito de los usureros y agiotistas, a través del

negocio popularmente conocido en Colombia como del “gota a gota”¹³⁰, mecanismo para nada invisible de incrementar sus ingresos a través del préstamo de dinero a grandes tasas de interés, pero que se deben pagar “día a día” (de ahí el nombre “gota a gota”). Esta “evolución” del re-posicionamiento territorial de los actores armados, revela una franca degradación del conflicto, con una predominante "interposición de actores" y escasa confrontación real entre contendientes, puesto que ya es evidente que en el conflicto predominan las agresiones a civiles indefensos y el desplazamiento forzado de la población rural.

La irrupción de los paramilitares (AUC) en el Norte del Valle, a mediados de los noventa del siglo XX, cambió el panorama regional de un modo drástico, pues no se trató de una mera incursión, sino de la implantación abrupta de una organigrama complejo, diseñado en función del control territorial más amplio, con un número significativo de hombres en armas y un propósito si no de copar, sí como mínimo de controlar las principales vías de acceso. Como si se propusieran ilustrar el significado de las interacciones estratégicas, y en respuesta al crecimiento sostenido que habían mostrado las FARC desde 1988. A la organización paramilitar que buscó y consiguió implantarse se le dio el ostentoso nombre de “Bloque Conjunto Calima”. Lo paradójico es que “Calima” era el nombre de uno de los grupos indígenas que existían por la región en la colonia. Y bien se conoce de asesinatos, masacres, acosos, amenazas, así como el saqueo de sus tierras de las que han sido víctimas las comunidades indígenas¹³¹ por parte de grupos paramilitares.

¿Cuáles son las condiciones que posibilitan la presencia de estos grupos en esas zonas? La respuesta se puede ir bosquejando en el evidente afán de la guerrilla y los paras por controlar las poblaciones, los presupuestos y la mediación en políticas públicas (en la presión que sienten de resolver ciertas contingencias como son las necesidades del financiamiento de sus acciones), así como una alineación evidente de las autodefensas o sectores paramilitares cercanos a los intereses de los ganaderos y agroindustriales. Hay también quienes señalan que el “incremento” guerrillero de las dos últimas décadas se

¹³⁰ Se trata del pago diario de “contribuciones” y de intereses exagerados por préstamos a particulares, por fuera del sistema financiero. Ver al respecto en anexos, los reportes periodísticos “Guerra entre paras por los negocios ilícitos” y “1, 2, 3” de Alfredo Molano.

¹³¹ Los pueblos indígenas equivalen al 0.2% de la población colombiana. Sin embargo, su nivel de organización política ha sido enorme, lo cual –afortunadamente- ha sido tan eficiente que han establecido redes de comunicación permanente con organismos de Derechos Humanos en todo el planeta. Organizaciones como el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), son un verdadero ejemplo de coordinación logística y de acción permanente ante el acoso de los actores armados. Además, durante décadas, de las comunidades indígenas paeces y guambianos, surgió una guerrilla (una verdadera “Autodefensa” pero popular y de carácter étnico) conocida como movimiento armado “Quintín Lame”

debe a una falta de estrategia militar departamental para enfrentar su penetración en la zona y, finalmente, quienes prefieren ubicar la respuesta en la incapacidad del Estado para crear condiciones de desarrollo social. De igual modo, la consolidación de las AUC (paramilitares bloque Calima) se debe, como he dicho unas líneas atrás, a una respuesta “defensiva” de las élites agroindustriales y ganaderas de la región, quienes se consolidaron en el Valle del Cauca tras el crecimiento del secuestro entre 1992 y 1993.

Capítulo 3 ¿Por quién se “silencian” las campanas? Colorario normativo en el mundo de la vida vallecaucana: las justicias paraestatales

En el mundo social Vallecaucano, tanto la guerrilla como los paras y los propios narcos imponen deberes y obligaciones a los habitantes de la zona e imparten justicia. Ello no solamente refleja la precariedad y debilidad del Estado, sino también una especie de ciudadanía aleatoria, donde la violencia que trae la seguridad de un grupo armado (hoy la guerrilla, mañana el paramilitarismo, pasado mañana el ejército, y luego “vuelve y juega”), es un bien en transacción permanente. Lo anterior se expresa en el hecho de que la autoridad del Estado, la aceptación de las reglas institucionales, la adhesión compartida a una misma visión simbólica de la unidad nacional se encuentran sometidas a numerosas eventualidades o brillan por su ausencia. Apelar entonces a la “ciudadanía” es un intento vacío de todo contenido, pues los procedimientos de resolución de conflictos colectivos no alcanzan un nivel suficiente de institucionalización como para prevenir el recurso a la fuerza bruta.

El recurso a la violencia es, precisamente, uno de los recursos más corrientes que se encuentran a disposición de los actores en el conjunto de sus estrategias de transacción. Como bien afirmó un poblador extranjero: *“La violencia es lo más democrático que hay en Colombia, pues todo el mundo la ejerce”*. En una sociedad fragmentada, desprovista de una simbología nacional, con inmensas desigualdades, marcada por la desconfianza respecto al Estado, la violencia constituye el único recurso que unos actores, social y políticamente desiguales, pueden utilizar de manera similar. La mayor parte de los conflictos sociales y políticos, operan sobre la base del recurso, real o potencial, de la violencia para el logro de una transacción. El dominio de las organizaciones armadas sobre las poblaciones, da cuenta entonces, del predominio de esta transacción. La adhesión ideológica se impone raramente. Por tanto, más bien se trata de órdenes fácticos de dominación con escasa legitimidad, por lo menos entre el grueso de la población civil o no armada). Existe entonces una forma de intercambio, a través de la cual se garantiza la protección de ciertos intereses como contrapartida a la sumisión. La costumbre de las transacciones, ciertamente, ha jugado en el pasado un rol, en el sentido

de que las transacciones asociadas a la violencia parecen inscritas en el orden de las cosas y banalizan los fenómenos de violencia.

Cabe señalar la existencia de procedimientos que, sin tener carácter legal, operan como si la tuvieran. En adelante, a estos procedimientos los ubicaré en este trabajo bajo la denominación de “justicias paraestatales” o códigos impuestos de conductas. Son estas las reglas informales e implícitas, que también interactúan con las reglas del juego y afectan las relaciones sociales.

Es decir, que en la zona de estudio se percibieron instancias paraestatales de resolución de conflictos, es decir, instancias de expresión de los sentidos y valores de justicia: implican la argumentación y defensa a menudo explícitas de lo que es justo y la manera de conseguirlo, revelando las normatividades y el repertorio de recursos estratégicos y morales que usan e invocan los actores de la zona. Se trata de justicias paralelas, en las antípodas del Derecho Penal estatal, en la medida en que la resolución alternativa de conflictos es parte de un enfrentamiento político más general. Estas justicias paralelas regulan normativamente comportamientos sociales. La población que voluntaria o involuntariamente acude a ellas encuentra en el desempeño de estas instancias la fuente posible de seguridad y solución de litigios que el derecho estatal no garantiza. Estamos, pues, frente a una situación de poder dual. Las instancias de solución de conflictos aquí analizadas son parte integrante de estructuras de poder paralelas al poder del Estado. Cabe señalar que existe una fuerte relación entre ambas.

Debido a su extremismo, estas formas de justicia paralela revelan complejas inter-legalidades que, paradójicamente, no sólo “unen” sino que también “fragmentan” a las sociedades regionales en Colombia. Estas formas de justicia paralela, se basan en una distinción básica entre el enemigo político y la población civil. El enemigo político es tratado- en el caso de la guerrilla- según los criterios de la “justicia revolucionaria”. En algunas circunstancias, se observan “préstamos”, reproducciones o imitaciones normativas del derecho oficial colombiano, así como también el compartir valores básicos entre enemigos en el conflicto político.

La contradicción o violación de la ley del Estado no existe sin ésta última. De ahí, que la “irregularidad” e “informalidad” de estructuras “paralelas” es completamente funcional para las estructuras del poder del Estado. El ejemplo de ello, lo constituye la concepción de propiedad privada desde el paramilitarismo, semejante a la que subyace en el derecho oficial, del tipo “la propiedad de otros se respeta”, siendo ésta una frase del

sentido común regional, aunque esas propiedades se hubieran obtenido a través del narcotráfico. Igualmente, la guerrilla defiende las propiedades de los campesinos, pero no como un bien colectivo, sino como expresión de los esfuerzos particulares de los individuos.

La perspectiva de los guerreros como propios reguladores, nos evidencia una cierta ambigüedad y discrecionalidad en la “aplicación” de justicia: las soluciones no son estables, es decir, la respuesta a cada situación puede ser discrecional de acuerdo al protagonista de la interacción (y su cercanía o distancia respecto al grupo armado). La inestabilidad de las soluciones, empuja a todos los actores no armados a acomodarse a las expectativas de cumplimiento o incumplimiento mutuo de acuerdo a quien posea el pre-dominio militar en ese tiempo y lugar.

Contrario a un caso de hegemonía (a lo Gramsciano) y de legitimidad (a lo Weberiano), que necesariamente suponen adhesiones ideológicas, el material empírico que en esta región se halló, demuestra, a grosso modo, que, exceptuando a los guerreros mismos y algunos otros actores ideológicamente convencidos de las bondades de la Justicia Paraestatal (de uno u otro bando), la mayoría de la población (especialmente la urbana con paras) respeta y obedece el orden social impuesto, no por convicción, sino por coerción y amenaza permanente de la violencia.

Lo que aquí se evidencia, es que no hay hegemonía sino predominio militar, no hay legitimidades sino imposiciones-vía el terror-, y, en síntesis, que no hay órdenes consensuales sino órdenes fácticos (en este caso, las Justicias paraestatales lo reflejan).

3.1 La ley del monte o justicia guerrillera: el sentir campesino

En la esquizofrenia de la represalia/contrarrepresalia de nuestra zona de estudio las relaciones de las Farc con los campesinos son esenciales: o encuentran un apoyo espontáneo (ideológico o por intereses), o lo buscan mediante la intimidación. Las Farc han construido tres aparatos: en primer término un aparato militar que ofrece protección de los accesos de un enemigo a su zona de influencia; en segundo término, un aparato de justicia o de policía que mantiene el orden interno, dirime los conflictos y castiga a los culpables de quebrar la normatividad que rige en el área.

Se trata, claramente, de una legalidad alternativa que intenta limitar (es decir, no permitir), la intromisión del Estado pero coincide con las lógicas normativas de éste. Y en tercer término, tal como ya lo señaló Pizarro (2004: 60) un aparato impositivo que

define la contribución de cada uno de los miembros de la zona bajo control al sostenimiento del aparato del poder existente. En otras palabras, la guerrilla en el Valle del Cauca, como cualquier Estado, pero en una menor dimensión y en ocasiones en forma muy porosa, configura en el “adentro” de su zona de influencia una función policial e impositiva, y en el “afuera” una función militar.

De lo anterior se deduce que, efectivamente, la “legalidad paralela” que implanta la guerrilla en la zona de estudio, coincide con las normas del Estado, es más, no sería atrevido ni errado plantear que lo que se observa en tales circunstancias es la formación de un Estado. Por eso, en la zona de estudio los campesinos resuelven sus conflictos a través del arbitraje de la guerrilla, experiencia judicial denominada como “ley del monte” o “ley de los muchachos”. Al ser las Farc- a diferencia del Eln o el ex M-19- una guerrilla de mayor perfil campesino, sus normas originales desde los años sesenta han sido muy elementales : no robar, no matar, no violar, no quitarle la mujer al otro. Después del ataque a Marquetalia, y a pesar de la influencia intelectual del Partido Comunista, aún hoy día sigue prevaleciendo en ellos un concepto muy pragmático del derecho (Molano: 2002: 332). Tienen tres códigos o grupos de normas: el primero para la guerrilla, contiene los reglamentos internos o normas disciplinarias. El segundo son los llamados Estatutos, donde están consignados los deberes y derechos de los combatientes. Y el tercero, unas normas de la Comandancia guerrillera sobre cómo debe ser el comportamiento de los grupos guerrilleros ante la población civil.

Adicionalmente, se puede hacer referencia a lo que la guerrilla denomina “Normas de convivencia Ciudadana”, que se pegan en las tiendas, en los billares y en los caminos de la zona y que la gente debe obedecer. Entre dichas normas cabe reseñar: 1) No robar 2) No matar 3) No injuriar ni calumniar 4) No entablar relaciones amistosas ni sentimentales con funcionarios del Estado (policía y ejército); 5) No se permiten la usura y el agiotismo; 6) No pueden ingresar menores de edad a bares, cantinas y prostíbulos; 7) Se prohíbe la venta de alcohol a menores de edad y se penalizará a los padres si fomentan el consumo de estas bebidas en sus hijos; 8) No dar ninguna declaración a funcionarios del Estado o medios de comunicación, acerca de las acciones revolucionarias; 9) Se prohíbe la circulación de pobladores después de las 10 de la noche¹³². A esa hora deberán cerrar bares, cantinas y prostíbulos; 10) Cualquier denuncia por conflictos por linderos de terrenos y bienes, confrontaciones por violencia intrafamiliar

¹³² Vale recordar que se trata de la zona rural, no el casco urbano que controlan los paramilitares.

y discusiones entre familias, así como abuso de parte de compañeros guerrilleros a la población, deberá ser llevado al Comité de Quejas y Reclamos.

El anterior decálogo es una manera de sujetar a los sujetos, es decir, controlar sus vidas cotidianas. Las normas disciplinarias tienen que ver con un cierto aspecto militar y deben ser obedecidas por todos, pobladores y combatientes. Para los “simpatizantes” de la guerrilla las normas son más laxas, pero se les aplica el reglamento interno cuando la persona toma las armas. Tal como señala Alfredo Molano, quizás el investigador que mejor ha indagado en la situación:

“Tanto en las Farc como en el ELN, el código guerrillero tiene como objetivo inicial conservar la fuerza militar en las regiones donde operan mientras consolidan su presencia y autoridad. A partir de este momento nace la necesidad de formular unas normas para el tratamiento con los civiles, lo que para la guerrilla significa un gran reto porque sus conceptos, de carácter netamente militar, no son aplicables a la población civil” (Molano, 2002: 333)

El ofrecimiento a las comunidades, de “servicios” como seguridad y justicia, es uno de los factores que contribuye a explicar el crecimiento territorial de las Farc por las montañas del Valle del Cauca. Las prácticas judiciales de los grupos guerrilleros, han sido tan importantes para su proceso de expansión, como para el incremento de sus ingresos económicos lo ha sido el dinero obtenido del narcotráfico, del secuestro o de su sistema de tributación (Aguilera, 2003: 389).

La justicia guerrillera es penal, esto es, una justicia de castigo. El control de un espacio, implica que este grupo armado construye unos anillos de seguridad con el fin de establecer un orden, tanto para la defensa como para la guerra, penalizando implacablemente las infracciones. En cambio, cuando interviene en los conflictos entre los campesinos, lo hace tratando de dirimir desavenencias o reconciliando intereses encontrados entre partes. Sus prácticas de justicia oscilan entre los campos militar y político¹³³. Las primeras tienen como objetivo, la vigilancia y el ordenamiento del territorio

¹³³ Es pertinente traer aquí a colación un estudio sobre justicias revolucionarias realizadas por el profesor Aguilera, quien presenta el ejemplo de los tupamaros en Uruguay, donde la justicia guerrillera se denominó “justicia popular o revolucionaria”. Este autor señala tres ideas sobre dicha “justicia”: 1) su origen se entiende como una respuesta a la “farsa de una justicia burguesa”, que se define como clasista en cuanto sirve a los intereses de unos pocos y porque se ensaña contra los “luchadores sociales”. 2) Se trata de una justicia que penaliza y en esa medida se convierte en un medio de defensa del “pueblo” para responder a la “violencia reaccionaria con lucha revolucionaria”. 3) Se considera que es un medio de lucha que debe estar articulado al movimiento social y que apunta a demostrar que se trata de la prefiguración de un poder paralelo que puede desarrollarse y llegar a constituir una alternativa para sustituir al existente. (Aguilera, 2002: 404). Las dos primeras ideas se pueden constatar en el comunicado del comando Mario Robaiana Méndez en el que se daba a conocer la retención, en agosto de 1968, de Ulyses

a fin de garantizar la seguridad del aparato armado y su disposición para generar respuestas a las diferentes formas de la guerra. Las segundas pretenden configurar una base social, al ofrecer solución a los conflictos de intereses que se presentan entre miembros de la población civil, o al atender algunos de los problemas de las comunidades. La justicia guerrillera aplica diversas penas, que van desde las multas, el resarcimiento del daño y el trabajo comunitario, hasta el destierro. Cabe aquí citar al profesor Aguilera, quien junto a Molano, son los que más han estudiado este aspecto en Colombia. Para Aguilera (2003:393):

“La justicia guerrillera nunca ha perdido su esencia instrumental. Su justicia es un método de guerra: de un lado, porque funciona para enfrentar o suprimir al enemigo político, y de otro, porque intenta construir ordenes o poderes políticos locales, por lo menos parcialmente, mediante el uso de un rigorismo penal desproporcionado en relación con los “delitos” o con los problemas que se pretenden resolver. Además, dentro de sus prácticas judiciales existen tratamientos desiguales para los procesados y posiciones parcializadas por razones de conveniencia política. Los pobladores no tienen completa claridad sobre las normas, procedimientos y medios de defensa”

La guerrilla provoca entonces tres tipos de situaciones sucesivas: “ordena” el entorno para mantener su seguridad, sustituye funcionarios del Estado en relación con las tareas propias de sus cargos y ofrece justicia y seguridad a los campesinos. Además, han ido más allá de las penas estipuladas por el Estado al castigar con pena de muerte a delincuentes menores que tenían fama de atentar contra tres pilares del orden social; la propiedad, la vida y el honor sexual.

¿Cómo castiga las infracciones la guerrilla? Se aplica la pena capital a “soplones”, delatores e infiltrados. Las acusaciones y peticiones de castigo son formuladas por los mismos campesinos, y en ello coinciden tanto el hacendado acomodado como el

Pereyra Reverbel, director de la UNISAS y Teléfonos del Estado, y asesor del presidente de Uruguay, Pacheco Areco. La tercera se planteó en la entrevista a algunos integrantes de la dirección del movimiento Tupamaros en “Los Tupamaros, hacia una alternativa de poder” citado por Train (2004)

pequeño propietario, coincidencia que indica el interés de los pobladores por instaurar un orden mínimo en regiones apartadas, pero que también resulta de la desconfianza en la acción de la justicia penal del Estado. La ejecución procede luego de un llamado de atención, pero siempre que el delincuente no diera señales de querer corregirse. A cambio de esas tareas, el grupo guerrillero exige silencio, colaboración e impuestos. El preponderante ordenamiento de la guerra en función del poder local, ha hecho más evidente la centralización de la lucha guerrillera en la zona rural donde asume la fiscalización de la administración municipal, como cuando obliga al alcalde a rendir cuentas sobre asuntos importantes, tales como el cumplimiento de los programas de gobierno, las inversiones y sobre el manejo de los dineros del Estado¹³⁴.

La guerrilla, judicialmente, actúa según dos modalidades: como árbitro en los conflictos entre los pobladores, y como actor regulador de relaciones sociales y económicas de la comunidad. Según la primera modalidad, la guerrilla soluciona conflictos jurídicos de diverso tipo entre los moradores (penal, policial, familiar civil, laboral, etcétera). Es usual que la guerrilla (o el comandante a nombre de un "Frente"), actúe a petición del interesado, es decir, que resuelva los conflictos en equidad más que en derecho. Esa forma de terminación de los juicios, ha adquirido una considerable importancia en los últimos años, debido a que, por razones de seguridad, la guerrilla evita el resentimiento de alguno de los contendientes, puesto que su actitud puede llevarlo a colaborar posteriormente con el enemigo, es decir, los paras o el ejército.

No obstante, sus resoluciones tienen una profunda discrecionalidad en sus peculiares "fallos", pues se tiene en cuenta la conveniencia política, es decir, quién es el "demandante" o el "demandado", su posición en el pueblo, su cercanía o lejanía en colaboración con ellos (Farc). Eso se percibió especialmente en lo que atañe a beneficios a los "sapos" e informantes del propio bando.

¹³⁴ La vigilancia sobre el manejo político local puede conducir al secuestro del investigado, que ellos llaman "retención", a fin de que haga entrega de informes, explicaciones o cuentas de su gestión. No es tarea fácil acceder a información sobre dichos procedimientos. Los campesinos no hablan al respecto, sino que por fragmentos es posible unir los pedazos de tal rompecabezas. Los retenidos, al ser liberados, no entran en detalles, y por lo general dicen que salieron bien librados del juicio guerrillero. Así mismo, los "farianos" o "Farcos" realizan "juicios revolucionarios" por enriquecimiento ilícito de dineros provenientes de las arcas de Estado. La pena principal implica al mismo tiempo la obligación de renunciar al cargo y como medida accesoria la prohibición perpetua de acceder a cargos públicos, so pena de llegar a ser señalado como "objetivo militar", algo así como un potencial sentenciado a la pena de muerte.

Se han dado casos, en que se sentencia con una indemnización de los victimarios a la familia de la víctima, y con la imposición de penas accesorias como la realización de trabajos comunitarios; igualmente se escuchó que, en otras oportunidades, los campesinos han solicitado a las Farc para que se hiciera entrega del homicida a la Fiscalía General de la Nación. Para las lesiones personales, se dispone que tanto el agresor como sus cómplices deben responsabilizarse de los gastos médicos y hospitalarios, de la droga y el resarcimiento del tiempo perdido por el lesionado.

La represión al hurto es “ejemplarizante”, pues lo consideran más grave que el delito de peculado (robo a patrimonios o recursos del Estado), pese a que los bienes afectados por el primer delito son individuales, mientras que el segundo se trata de bienes colectivos, que supuestamente deberían ser considerados como de mayor jerarquía y protección. Esta incongruencia y desproporción con que se castiga el hurto, ha sido explicado por Aguilera y Molano respecto a otras regiones, en la acogida en el medio campesino a las soluciones rápidas a sus problemas de seguridad, así sea con la aplicación de la pena capital.

En asuntos civiles, los guerrilleros cobran deudas y exigen el cumplimiento de contratos. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones son perentorios, se fija un plazo máximo de 90 días para que se resuelvan problemas, con la advertencia de que, si no se cumple, “actuaremos con rigor”. También incursiona la guerrilla en conflictos intrafamiliares. La violencia contra uno de los cónyuges, la infidelidad, la irresponsabilidad de los padres y hasta la desobediencia y la falta de respeto de los hijos para con los padres, pueden ser objeto de un llamado de atención. Si persiste la mala conducta, los guerrilleros aplican una sanción leve¹³⁵. Igualmente advierten que realizarán “permanentes observaciones” a todo consumidor de “vicios” (drogas o alcohol) alertando que actuarán con firmeza en caso de reincidencia.

Muchos pobladores consienten y “aprueban” dichos controles. En la zona rural, don Lucas nos explicó cómo están de acuerdo muchos campesinos con este orden “moralizador”:

¹³⁵ En casos de infidelidad o de maltrato contra la esposa o compañera, en algunas zonas del país tanto las Farc como el Eln penalizan dicha conducta “enganchando” en la guerrilla al imputado por unos días y obligándolo a caminar descalzo. La reincidencia puede llevar al destierro definitivo y en algunas circunstancias al fusilamiento. Ver D’abbraccio, Guillermo (2000). “Cosmovisión jurídica guerrillera en zonas de conflicto: el caso del Cauca, Caquetá y Putumayo”. Mimeo documento interno del programa de Antropología Jurídica. Universidad del Cauca. Popayán.

“Es que hoy en día muchos jóvenes pueden tentarse con las drogas y la prostitución, pero cuando las cosas empiezan a irse de las manos de las familias, pues los farianos ponen orden y los van obligando a dejar esos vicios y portarse como corresponde” (Don Lucas, poblador rural)

Los guerrilleros, al igual que los paramilitares, han promulgado medidas de tipo policial para controlar el funcionamiento de cantinas, (y, en el casco urbano, los paras lo hacen en el prostíbulo y las dos discotecas). Para esos establecimientos ordenan horarios de atención teniendo en cuenta las costumbres de la región.

Las normas de control urbano, refrendan el mandato estatal de no permitir la entrada de menores de edad a estos establecimientos, de prohibir en los mismos el “porte de armas” y la obligación de los proxenetas de mantener vigentes los certificados de salud de las prostitutas. El castigo para los infractores es variable, pero en general a las personas que se les sorprende bebiendo por fuera de los horarios establecidos, se les obliga a laborar por un día en una obra comunitaria.

La justicia guerrillera está condenada a ser embrionaria: primero, por su situación de inestabilidad, y porque no puede proteger realmente ni los bienes jurídicos puestos en juego en cada contienda judicial, ni garantizar la vigencia de los derechos humanos. Y segundo, porque no logra delinear claramente formas jurídicas propias y sobrepasar los principios y los procedimientos de la justicia estatal.

Existen castigos compensatorios, que se le imponen tanto a los guerrilleros como a los civiles. En el caso de infracciones cometidas por miembros de la comunidad, por ejemplo, un ladrón puede ser sancionado con la construcción de la escuela del pueblo o vereda. Dentro de las normas de la guerrilla, la violación es fuertemente castigada. Un violador queda “marcado” y su destino es la pena de muerte por parte de la guerrilla (los paras también “liquidan” a violadores marcándolos como “desviados” sociales), si es que antes no lo linchan los pobladores. La colaboración voluntaria con el enemigo, la violación y el robo, son actos graves.

3.2 Justicia paramilitar y códigos de narcos: de refuerzo del Estado a “depredadores” con intereses privados

En la otra orilla, encontramos la peculiar Justicia Paraestatal (JP) configurada por los paramilitares. En este apartado, explicitaré los códigos y normas de esta JP, asumiendo una premisa pertinente al lector no colombiano: se trata de una JP que refuerza al Derecho Penal Estatal en su acción represiva y que presenta puntos de convergencia con los códigos de honor de los “narcos”.

Dado el apoyo de una cierta base social a la guerrilla en la zona rural (veredas y corregimientos), el contrapeso del paramilitarismo (si lo observamos desde su base social y apoyos), se ha construido en zonas urbanas y en las periferias de las ciudades y municipios. De ahí que las relaciones de los Paras con la población de municipios tan pequeños como los aquí estudiados (menores a seis mil habitantes), es fundamental para establecer los “anillos de seguridad”

Se percibe un apoyo espontáneo, especialmente de parte de los hacendados, los empresarios de la caña de azúcar, medianos y grandes finqueros, los dueños de cafetales, por una parte, quienes pagan una cuota mensual, a modo de “contribución”, es decir, como aporte para complementar la seguridad que les ofrece la policía y el ejército. Estaríamos hablando de una especie de “impuesto de guerra o “impuesto de seguridad”.

Por otra parte, hay un fuerte apoyo por parte de pobladores “urbanos”¹³⁶, pero también existe una gran parte de los habitantes de los cascos municipales, que no profesan lealtad ante nadie y solamente se acogen a quien posea el predominio militar en un momento dado.

Pero y entonces, ¿Cómo regulan las conductas cotidianas?

Los paras tienen tres modos de control sobre la población:

- 1) Control sobre el presupuesto municipal, el cual se evidencia en la partida presupuestal anual, así como interferencia en los recursos de la salud (desviando fondos), incidencia en obras públicas de la zona y en una veeduría u observación permanente de las acciones de los alcaldes de la zona.
- 2) Por las cuotas de seguridad que pagan mensualmente aquellos que tienen mayor capacidad adquisitivo y de consumo.
- 3) Control sobre los cuerpos, es decir, sobre prostitución de mujeres, así como control sobre los horarios de cierre de establecimientos nocturnos, sobre el tránsito y circulación de personas, sobre los controles de precios y de ingreso a bares, prostíbulos y lugares de apuestas, entre otros.

En este tercer aspecto, cabe enfatizar que se restringen las fiestas de todos, menos las fiestas de narcos y paras, quienes no tienen limitaciones de horarios para sus

¹³⁶ Reitero- como lo he señalado en otros capítulos-, que se trata de zonas urbanas muy pequeñas, de apenas cuatro a seis mil habitantes (denominado “municipios” y “pueblos en el sentido popular), y que sólo existen en la región vallecaucana, además de la capital departamental Cali, cuatro ciudades “grandes” pero ninguna supera los cien mil habitantes: Palmira, Tulúa, Cartago y Buga, entre otros. Ver mapas en el capítulo dos.

celebraciones de matrimonios, bautismos, quince años, cumpleaños, etcétera. La restricción de los límites de horarios nocturnos, afecta en gran medida a los jóvenes de los municipios. Una de las entrevistadas, Valentina (22 años), nos relata cómo se siente el acoso de la limitación de horarios nocturnos por parte de los paramilitares, así como las estigmatizaciones que le caen a los que son señalados de “ladrones”, “viciosos” o consumidores de drogas y a todo aquel que “atente contra las buenas costumbres”, según la particular justicia paramilitar:

“Hace unos años para acá, la situación con los jóvenes cambió mucho. Nos controlan los horarios de fiestas y de consumo de alcohol. A los que tildan de ladrones y viciosos, a esos los sacan, tienen que irse. También los muchachos jóvenes que son atractivos y no están con los paras, también son amenazados, porque compiten con ellos por las mujeres bonitas del pueblo. A un grupito de jóvenes hace unos cinco años los paramilitares los acabaron. A ese grupo se les conocía como “Los calvos” porque todos estaban rapados y era un grupo grande, más de veinte que salían con muchachas y empezaron a conseguir dinero rápido con minoristas y consumidores de drogas, pero llamaron mucho la atención, yo diría demasiado y entonces empezaron a ser integrados en las listas negras de los paramilitares, quienes los amenazaron porque se estaban metiendo en cosas raras, drogas y alcohol, y entonces empezaron a aparecer muchachos de este grupo muertos y después de varias amenazas los pocos que quedaron se fueron del pueblo y el grupo ese se desintegró. Y eran listas negras que todo el mundo conocía. Los calvos terminaron y pues de esa historia todo el mundo aquí se acuerda”.

El por qué se van a interesar estos paras en “limpiar” a un pueblo, es porque el jefe o patrón, es decir el más duro, pues se siente con tanto poder que ya empieza a creer que está haciendo una labor social (sic), es decir, “limpiar” el pueblo de pandillitas o grupos juveniles, de pordioseros y mendigos, y entonces los matan o los expulsan del pueblo” (Valentina, 22 años, zona urbana)

De los aspectos visibles de la Justicia Paraestatal Paramilitar se evidencia que, al igual que las FARC, pero con otras características, los AUC paras también han construido aparatos: uno militar, otro de justicia y el tercero político o de intromisión en las partidas presupuestales de la región

La justicia “para” es penal, o sea que ahí coincide con la JP guerrillera, es decir, una justicia de castigo. El control de un espacio, implica que este grupo armado construye unos anillos de seguridad, con el fin de establecer un orden tanto para la defensa como para enfrentar a la guerrilla (o “reprimir” a sus bases de apoyo de esta). En la represión a sindicalistas y campesinos, se filtran posibles ingresos de dicha base (Izquierdista y cercana a la guerrilla) a los ámbitos predominio paramilitar. Esa es una “frontera” que los paras intentan que no se traspase.

A diferencia de los guerrilleros, la JP paramilitar presenta prácticas de justicia que no tienen un componente político, sino exclusivamente militar. Sin embargo, si se agudiza la mirada, sí se podría considerar político en la medida en que la acción paramilitar busca la defensa del Status quo¹³⁷

La peculiar “justicia” paramilitar es, qué duda cabe, el establecimiento más o menos “ordenado” del terror, es decir, el de la realización del trabajo sucio que no pueden realizar las fuerzas legales del orden. Y en esa lógica, esta justicia tiene un fuerte carácter instrumental (así como los guerrilleros) pero, a diferencia de las arbitrariedades del dogmatismo guerrillero, las (arbitrariedades) paramilitares son propias de mercenarios ávidos de satisfacer sus intereses privados. Este aspecto diferenciador es neurálgico, pues aún en su mirada cerrada (y dogmática), en los guerrilleros prevalece una mirada comunitaria, de corte romántico como afirman sus detractores “pragmáticos”, pero respetada por los campesinos. En cambio, el acatamiento de la Justicia Paramilitar se basa en la coerción¹³⁸.

En las afueras de los municipios y zonas urbanas pequeñas (Tulúa, Zarzal, Cartago, Andalucía, Sevilla, Trujillo, Buga, Palmira, entre otros), los paras cuentan con el apoyo de informantes acerca de la entrada de personas sospechosas. De igual modo, los paras (con la vista corta y guiño de la Brigada de Infantería de Tulúa), lleva a cabo “retenes” y paradas obligatorias de transeúntes, para solicitar documentos de identidad a los viajeros de automóviles particulares y autobuses de transporte intermunicipal. Esto les permite cerrar los espacios de entrada y buscar posibles infiltrados. Obviamente, al igual que les sucede a la contraparte guerrillera, no es posible controlar “todo” el perímetro de entrada

¹³⁷ Quiero decir, que en sí mismo su accionar de “vigilantes” y “escuadrones de la muerte” no presenta un proyecto político como el de los guerrilleros. El proyecto político es de la derecha colombiana, un proyecto reaccionario, con amplias restricciones a la participación sindical, a las reivindicaciones de los campesinos, a la libertad de expresión, a la oposición política, etcétera.

¹³⁸ Vale aclarar que muchos campesinos entrevistados (y algunos con los que se conversó informalmente), no perciben en la Justicia guerrillera una forma de “coerción”, sino una debida regulación de la vida. La aceptan y muchos están de acuerdo con los controles establecidos, con la subordinación propia de un ethos más cercano a una vida de disciplina, de trabajo de sol a sol, de luchas y reivindicaciones. Tal vez, es realmente uno como investigador, forastero, extraño o ciudadano, quien percibe desde otra mirada, que existen también en las regulaciones guerrilleras grados de arbitrariedad y coerción en algunos casos extremos (por ejemplo, en la prohibición del cabello largo, que no se percibe ni en los jóvenes campesinos, así como la estigmatización y señalamiento de consumidores de alcohol, drogas y homosexuales, lo cual está en contravía de la defensa de la diversidad, el respeto a la diferencia que en toda circunstancia la izquierda pregona como una bandera política). Pero es una apreciación del investigador, no una opinión ni percepción de los campesinos. Y como lo que importa aquí es indagar más en la mirada de “ellos” y no limitarse en la mía, cabe reservarse esta perspectiva, aunque no archivarla siendo una mirada “de afuera”.

a municipios, veredas y corregimientos, es decir, se les puede pasar por alto personas camufladas y ello hace parte de los riesgos que ellos corren¹³⁹

La “legalidad paralela” que implantan las Autodefensas Paramilitares en la zona de estudio, no se produce con el ánimo de “reemplazar” las normas estatales, sino de “reforzarlas”

Pero, entonces, ¿En qué “refuerzan” al Estado y su aparato legal de fuerza (Ejército y policías)? ¿Qué dinámicas diferentes o agregadas a los de las fuerzas legales del orden, establecen los paras? Es decir, algo los diferencia, pero ¿Qué es?

De entrada, es preciso considerar que los paras defienden los dos derechos liberales por antonomasia: el derecho a la vida y el de propiedad privada, siendo éste último referencia sustancial del sistema capitalista

El desconcierto puede desequilibrar al lector. Ya pareciera que pudiera colmar su paciencia: ¿Paras defendiendo el “derecho a la vida”? Por supuesto, pero es que hay “excepciones” en su aplicación de “defensores”, las cuales se producen por arbitrariedades y discrecionalidades: no se defiende la vida de todos, sino los de la “gente de bien”.

Pero, seguirá preguntándose con escozor el lector intrigado, ¿Quiénes son esos seres “de bien”? ¿Cómo y con qué criterio deciden los paras quienes son los de “bien” y quienes los de “mal”?

El contrapeso entre el “bien” y el “mal”, es, ni más ni menos, quienes los apoyan y quienes los combaten. Los que simpatizan con el modelo de “Seguridad Democrática” del presidente Uribe, están en la franja de los ciudadanos de “bien” y los otros, identificados como las “Fuerzas del mal”.

¿Qué roles cumplen los paras en la resolución de conflictos? ¿Hasta dónde actúan?, es decir, ¿Cuál es el límite al que llegan ellos y cuál es aquel en el que actúan las fuerzas estatales y los jueces?

¹³⁹ Al igual que las FARC, quienes no pueden cubrir totalmente los perímetros rurales

Al contrario de la experiencia judicial que señalé en las FARC (la “Ley del monte” o “ley de los muchachos”), en el caso específico de los paramilitares en el casco urbano, se observó que las conductas castigadas o penadas tienen que ver mayormente con tres grandes ejes “prohibidos”:

1) Agredir o atentar contra la propiedad privada, sea esta un bien raíz o “la mujer” de otro hombre. Las figuras femeninas merecen “respeto”: la esposa o amante, la madre, la hermana y la hija. Esto refuerza nuestras percepciones acerca del “machismo” disfrazado de “protección hacia el sexo débil” que se encuentra presente en la zona (que por las instrumentalizaciones que se observan a lo largo y ancho de este estudio, no reflejan precisamente que sea “débil”).

2) El delatar es imperdonable: se respeta más al enemigo, que al propio “Judas” que traiciona ante la DEA: el “sapo”, chismoso o delator informante del otro bando (sea la oficina antinarcóticos norteamericana o la propia guerrilla), paga caro su afrenta con la muerte. Aquí en este aspecto, es posible visualizar que la extradición a Estados Unidos es un temor “compartido” entre narcos y paramilitares, de ahí que se tiende a reafirmar lo que a lo largo de este estudio se ha enfatizado: la simbiosis entre paramilitares y narcotraficantes es mayor de lo que diversas investigaciones Colombia han señalado.

3) Ciertas conductas o prácticas sociales son considerados “inmorales” como: a) la homosexualidad (entendida como “enfermedad” incurable, lo cual deviene de la clara influencia de las propias iglesias), b) ser visibilizados como gente “dañada” o “desechable”, es decir los mendigos, “pervertidos” violadores y consumidores de drogas psicoactivas¹⁴⁰, c) el robo menor.

En asuntos civiles, los paramilitares ejercen fuertes presiones para cobrar deudas y exigen el cumplimiento de contratos. Así mismo, los paramilitares promulgan edictos de control, que dejan pegados a modo de afiches en postes de luz y en las paredes del casco urbano, en el que estipulan los horarios de apertura y cierre del prostíbulo y las dos

¹⁴⁰ Cabe señalar la aparente incongruencia que refleja el caso (b), es decir, el de castigar a los consumidores de drogas, sabiendo que se trata de grupos armados que trafican y sacan partido del cultivo, transporte y venta de cocaína (o en el caso de las Farc, el cobro de “gramaje” en el tránsito de ésta). Resulta interesante escuchar que la máxima que circula frecuentemente es “la droga es para que la consuman los gringos”, lo cual refleja un cierto control en el consumo: hay un límite que no se debe traspasar, el del vicio o adicción “no controlable”, aunque suene incongruente (una cosa es un consumidor socialmente controlado y otra un adicto “degenerado” y por tanto “incontrolable”). El comentario que nos permite entender esta lógica de todas formas ambigua y discrecional fue el de Tiberio: *“Es que una cosa es el negocio de vender merca a los usa (sic) y otro es que se nos dañen los jóvenes por acá. En seguida empiezan a meter coca se enician y nos perjudican el negocio. Por eso los tienen controlados de todas partes, o los paras, la guerrilla o los propios traquetos (sic)”*

discotecas. También es común dejar pegados en las paredes afiches que contienen las famosas “listas negras”¹⁴¹

Es evidente, entonces, que los paras son violadores de la autonomía de los proyectos y decisiones de las mujeres (situación de machismo¹⁴² y misoginia)¹⁴³. También evidencian subestimación de lo académico y de los intelectuales (“estudiar es dispendioso y no da dinero”), el castigo a los delincuentes (reemplazo del “lento” derecho penal estatal por una especie de “justicia express”), la subvaloración del esfuerzo y del trabajo (enriquecimiento ilícito), etcétera.

¿Qué castigos o sanciones llevan a cabo los paramilitares en la zona del casco urbano? Existen fuertes castigos, de los que los más drásticos son los que se aplican a: 1) robos o abigeatos; 2) secuestros; 3) Violación de menores. En los tres casos se aplica la muerte directa del osado “infractor”¹⁴⁴

Es preciso detenernos un momento y considerar un aspecto fundamental aquí. El método de la “tortura”, como práctica y método cruel realizado por grupos paramilitares y militares (DAS como servicio de inteligencia)¹⁴⁵, es un mecanismo que en Colombia deviene del entrenamiento y adiestramiento de mandos medios y altos en los cursos de

¹⁴¹ Sobre las “Listas negras”, recomiendo al lector ir al capítulo dos, en la referencia a Paramilitarismo, escuadrones de la muerte y “Terrorismo” de Estado

¹⁴² La infidelidad masculina es castigada por la guerrilla, más no por el paramilitarismo y el narcotráfico. En cambio, la infidelidad femenina recibe reprobaciones de todos los grupos armados.

¹⁴³ Cuando señalo aquí lo referente a restricción a la autonomía de las mujeres, considero que el reflejo más claro se encuentra en la acción paramilitar y narcotraficante, al constreñir a las mujeres a denigrantes “objetos” de deseo y satisfacción sexual de estos siniestros personajes. Pero, lamentablemente, a ese juego también “juegan” esas jóvenes mujeres, que saben muy bien que sus siluetas esbeltas y seductores cuerpos constituyen la “carnada”, para encontrar a un hombre “con poder”, que les permita obtener por atajos lo que por vía de esfuerzos legales sería más lento y dispendioso: dinero, fama y una supuesta “estabilidad” socioeconómica. Respecto a la intolerancia hacia los homosexuales, es pertinente señalar que la homofobia también está presente en las bases guerrilleras. En zonas rurales no es “bien visto” que existan gays o lesbianas, pues el carácter de “lo normal” según se señala es la heterosexualidad. Lo contrario (homosexualidad) sería “enfermedad”, tal como ha influenciado en esta percepción, las doctrinas que se hacen llamar “católicas” o “cristianas” en sus concepciones de lo que es natural y, por ende, permitido “a ojos de Dios”.

¹⁴⁴ Observé (con enorme impotencia) que, en dos oportunidades y en plena calle, se llevaron por la fuerza a dos personas sindicadas de ser “ladrones” y “viciosos”. Y escuché que la suerte que les venía encima no era envidiable: Tortura y muerte del “infractor” o “violador” del orden social. También se dan amenazas y posteriores “destierros”, especialmente en el caso de los sindicalistas.

¹⁴⁵ Igualmente, cabe señalar a la tenebrosa policía Judicial (F2) quien se encargó durante muchos años, de hacer el seguimiento y detención clandestina de militantes de izquierda en Colombia, así como simpatizantes campesinos de las Farc (y desaparición de los cuerpos torturados y masacrados en las tenebrosas “Fosas comunes”). Numerosos casos de centros de torturas clandestinos se han descubierto en Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Ibagué, Bucaramanga y Bogotá, a través del accionar e intromisión efectiva de parte de Organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos (Ver reportes periodísticos en “Anexos”).

contrainsurgencia de la “Escuela de las Américas” en Panamá. ¿El objetivo?: extraer datos a los prisioneros torturados, arrancándole el máximo de información posible para “el bien de la patria” como señalan cínicamente los torturadores. Aunque hay miles y miles de víctimas en el conflicto armado colombiano, pareciera como si los más de ocho mil desaparecidos según organismos de Derechos Humanos¹⁴⁶, no pesaran tanto para la crónica de la guerra permanente, tal vez porque la guerra no ha terminado y los procedimientos de la “guerra sucia” siguen vigentes desde el terrorismo de Estado (las cifras del gobierno lo reducen a 2,000, pues señalan estas fuentes del gobierno, tal es el caso del DAS, con evidente sarcasmo, que es posible que muchos estén exiliados fuera del país pero no estén registrados porque saben que “algo hicieron”¹⁴⁷)

Cabe enfatizar entonces que la tortura es un método macabro que sólo es llevado a cabo por los servicios de inteligencia colombianos y los paramilitares. No así la guerrilla, quien a pesar de sus métodos de intimidación y violencia, no acude a torturar a sus secuestrados y retenidos.

También cabe señalar que, al contrario de la guerrilla de las Farc, en la peculiar justicia paramilitar no hay un código de conducta escrito y además existe “discrecionalidad” en lo prohibido y permitido, así como a quién/quienes se castiga y de qué manera (esto se desarrollará a continuación en los siguientes punto “c” y “d”). Por ejemplo, no todos los propietarios que se “resisten” a vender (baratas) sus tierras a los paramilitares son torturados y asesinados, sino que a partir de la amenaza a sus familias, los paras (y narcos) acceden a títulos de propiedad por menor precio que los que realmente fija el mercado de bienes raíces. Un campesino que nos pidió el anonimato comenta que cuando vivió en el departamento de Sucre, los paras le “sugirieron” que les vendiera su finca. Cuando el campesino se negó, en la segunda visita los paras le hicieron una “generosa” propuesta de compra-venta. “O nos vende la tierra usted o se la compramos más barata a su viuda”. Un sólido argumento para no resistirse, dirían los más pragmáticos. En resumen, actos como la tortura, las amenazas y acosos, listas negras, persecuciones, apropiación de tierras, son cometidos por los paramilitares, con la

¹⁴⁶ Recordemos aquí los casos del cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay, enmarcados en el proceso sistemático de desaparición de personas, la cual muy rigurosa y detalladamente fue desenmascarada por sendas comisiones de la verdad. Cabe señalar a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP en Argentina, que en un arduo pero meritorio trabajo, consignó entre 17,000 a 20,000 desaparecidos por el terrorismo de Estado, personificado en la tenebrosa Junta Militar.

¹⁴⁷ Similar a la cómoda y “cómplice” mirada de la clase media argentina, ante los claros indicios que publicaba la prensa internacional acerca de los miles de desaparecidos, torturados y asesinados en la “guerra sucia” que se estaba produciendo durante la época de la dictadura militar (1976-1983). Las frases al respecto son muy fuertes: “por algo habrá sido”, “algo debían”, etcétera.

anuencia de las Fuerzas militares y policiales (es decir, el Estado), que se hacen los de la vista corta.

Finalmente, y a modo de cierre de este punto “b”, cabe decir que la justicia paramilitar se caracteriza por ser instrumental, es decir, es un claro método para ganar la guerra, mediante la implantación del “terror”, el cual es funcional a través de dos efectos:

- 1) Al perseguir, controlar y reprimir a los opositores al gobierno, así como a los señalados posibles simpatizantes y “base social” de la guerrilla, es decir, los campesinos. Al cortar las rutas de abastecimiento de alimentos, drogas, etcétera, por el cual los habitantes rurales proveen a las FARC, intentan aislar a los guerrilleros y dejarlos bien lejos, “a resguardo” en zona rural, disminuyendo el potencial peligro a ganaderos, comerciantes y demás redes del paramilitarismo.
- 2) Construir un poder y un orden fáctico local, a partir de “ordenar” las zonas de su influencia, organizar la “seguridad”, presionar a funcionarios locales y resguardar la vida de familiares de los sectores que les cancelan sus cuotas mensuales de vigilancia.

3.3 Las “listas negras” como reflejo de la represión y control paramilitar

Los sindicalistas de la Nestlé y los de los Ingenios Azucareros constituyen, junto a simpatizantes del Partido de Izquierda Polo Democrático, los blancos más frágiles ante los escuadrones de la muerte. A diferencia de los testaferros y lavaperros, que están del bando paramilitar, su nivel de riesgo es mucho mayor que los beneficios obtenidos. Permanentemente son señalados y estigmatizados a través de “listas negras”, perseguidos, asesinados o desaparecidos. Si no es que antes no caen acribillados, es decir, si corren con suerte, parten al exilio, como ha sucedido con 14 de ellos en la zona en la última década (Sintraincol: 2005: 33). En efecto, la lista de estos “amenazados” que han abandonado el país a raíz de estas famosas condenas ha ido creciendo con el tiempo. Amenazas localizadas en sectores específicos que cambian, al parecer, según las coyunturas que a su vez van identificando y transformando el (los) enemigos, real (es) o imaginario (s) de los grupos armados y otras “Fuerzas oscuras”. Los sindicalistas en toda Colombia, junto a políticos de los partidos de izquierda, periodistas e intelectuales, constituyen una gama amplia de “condenados a muerte”: jueces, líderes de izquierda, miembros de organizaciones de derechos humanos, maestros, periodistas, académicos, etc. Estas amenazas cobran toda su significación frente a los precedentes de quienes,

por distintas razones, no abandonaron el país, pues la lista de asesinados, previamente amenazados, también ha crecido de modo considerable en estos últimos años¹⁴⁸.

Una de las modalidades utilizadas por los victimarios, paramilitares y organismos estatales, es la aparición de las llamadas “listas negras”, que pudimos constatar en el mes de julio pasado en pleno trabajo de campo. Se circuló el rumor de una nueva “barrida” hacia el sindicato y sabemos que el rumor es un mecanismo poderoso de difusión y de guerra psicológica ¿Quién elabora las listas negras sino los propios organismos de seguridad, que “filtran” informaciones para sembrar zozobra y el terror?

Si bien la guerrilla no plantea listas negras a la población, sí envía periódicamente a pobladores autoridades, sendos comunicados “avisando” (entiéndase amenazando) a todo aquel que colabore o suministre información al bando contrario, el cual será “ajusticiado” según los parámetros revolucionarios.

En efecto, un aspecto interesante del rumor es que aunque la transmisión en cadena que lo caracteriza parte de un hecho real, en el camino se va distorsionando. Y nacen así deformaciones y mentiras que recorren los mismos caminos del rumor, donde el miedo hace frágil una situación social. El rumor, al conectar una lógica posible con el acontecimiento, tiene base para ser aceptado, pues se da dentro de una disposición para creer.

Así, la base para que un rumor crezca es que (el hecho que se narra) sea posible. No obstante, al permanecer el grupo social alterado, muchas cosas imposibles parecen totalmente posibles. Esto ha ocurrido en la zona con las famosas listas negras. Aunque pocos han tenido verdadero acceso a ellas, ya que solo circulaba la información y el rumor, en la zona se ha visto caer a decenas de pobladores que “engrosaban” esas

¹⁴⁸ Entre los amenazados, mis colegas de la Universidad Nacional de Colombia no han sido la excepción. Por el contrario, en los últimos años -desde 1995 a la fecha- se ha visto aumentar la lista de profesores en el exterior. Este exilio recuerda otra coyuntura no menos brutal a fines de los años ochenta, cuando fueron asesinados varios profesores por grupos paramilitares y escuadrones de la muerte derivados del terrorismo de Estado, pero esta otra etapa correspondió principalmente a docentes de la Universidad de Antioquia: el doctor Hector Abad Gomez, Leonardo Betancur, Pedro Luis Valencia, Luis Fernando Vélez. Coyuntura que se revivió con el asesinato de mi querido profesor Hernán Henao, director del Iner, el 4 de mayo de 1999, y un poco después, en septiembre del mismo año, con el asesinato del ilustre investigador Jesús Antonio Bejarano, en los predios de la Universidad Nacional en Bogotá. Sin olvidar, por supuesto, el salvaje asesinato de Darío Betancur otro valiente y extraordinario profesor (esta vez de la Universidad Pedagógica en Bogotá), cuyos restos, literalmente hablando, permitieron su identificación muchos meses después de su desaparición. A ellos, mis queridos colegas, a quienes tuve el inmenso honor de conocer, va dedicado este proyecto de investigación.

listas de muerte. El uso de esas formas macabras de comunicación también constituye un símbolo de muerte, puesto que son mensajeras del terror. Las listas de la muerte siguen transmitiendo el mismo mensaje aniquilador de los “panfletos” amenazantes de los años cincuenta. Estas listas se utilizaron en los años ochenta en asesinatos selectivos en las ciudades.

Más recientemente, estas listas han sido un mecanismo utilizado por los grupos armados paramilitares, en las masacres de campesinos que han llevado a cabo. El “modus operandi” es siempre igual: llegan a un pueblo o municipio con listas en la mano y basta que la víctima haga parte de ellas para ser ejecutada, sin más. Cuando un sindicalista o profesor/a está en una lista negra, ya queda “marcado”, y tal vez pueda escapar del país. A los campesinos/as, en cambio, por no estar en mayor contacto con ONGS y gobiernos de otros países, indefectiblemente no hay nada que hacer si aparecen sus nombres en listas “negras”, pues probablemente el tiempo ya no les alcance para buscar alguna salida.

Por lo anterior, los “desplazados” por la guerra en Colombia (que según cifras “optimistas” alcanzan el millón y medio, mientras los “pesimistas” se arriesgan a decir que superan los dos millones de personas), engrosan los cinturones de miseria en las grandes ciudades: se trata de campesinos que llevan consigo a familias numerosas, generalmente iletrados, sin capital educativo ni económico, a la intemperie y sumando sus desgracias a la mendicidad y miserias colombianas. Una deuda social que ningún gobierno colombiano ha saldado, pues la clase dirigente y empresarial ha sido el propio “sponsor” de los paramilitares, es decir, los artífices del desplazamiento forzado. Cabe entonces enfatizar que los grandes responsables del desplazamiento forzado son los grupos paramilitares, pues las cuatro millones de hectáreas saqueadas, robadas y ultrajadas a los campesinos desplazados, constituyen un imperativo político insalvable que el propio Estado ha ido esquivando (jurídicamente hablando) a partir de la ley de Justicia y Paz, que refleja las complicidades entre el Estado y sus organismos de Defensa Nacional (Ejército, policía y grupos de “inteligencia” militar) con el paramilitarismo que han fomentado y apoyado¹⁴⁹.

¿Qué piensan los entrevistados sobre las listas negras? ¿Cuál es la imagen que tienen los pobladores de los sindicalistas? Estas dos preguntas pueden parecer descabelladas o un poco fuera de todo orden en el desarrollo de esta tesis, pero demostraré que hay un cierto “consenso” cruel, despiadado, indiferente, estigmatizador, respecto a los

¹⁴⁹ Vuelve y juega: se recomienda al lector ir a los reportes periodísticos al final de los anexos, en los que se encuentran interesantes reportajes y crónicas sobre dicha situación.

sindicalistas en el casco urbano del municipio, que crece con los prejuicios y rumores y que a su vez en nada contribuye al aumento de la tasa de sindicalización en Colombia, que como se afirmó en otro lugar de esta investigación, es una de las más bajas tasas de América Latina.

Sólo cuatro de los treinta y cinco entrevistados dieron una opinión al respecto, y esas cuatro voces (precisamente las cuatro), afirmaron que no creían en los sindicalistas y que si fueron asesinados y desaparecidos era porque en “algo estaban metidos” o “algo debían”. De igual modo, se percibe cierta “envidia” en las voces de los entrevistados, respecto a la situación de exilio de tres sindicalistas que en la última década se fueron a Inglaterra y Canadá bajo amenazas de muerte. Pero primero vayamos a leer juntos lo que me manifestó Tomás sobre dicha situación:

“Hace como diez años el sindicato aquí tuvo mucha fuerza, pero eso ha sido la causa que aquí la empresa¹⁵⁰ no haya progresado en la región, cada vez que pedían aumentos se lo daban, siempre tuvieron nexos con la violencia, con la guerrilla, pero todo mundo sabía que hace unos años la cooperativa sindical manejaba plata de la guerrilla, eran muy cercanos a la guerrilla.

Es imposible creer en esos líderes sindicales que se llenaron de plata, pues yo nunca he creído mucho en aquellos que lograron obtener el estatus de perseguidos. La gente aquí se pregunta si algunos realmente han sido amenazados o no. Si están dizque perseguidos y ahora viviendo sabroso en Canadá o en Inglaterra. Uno a veces se pregunta que por qué se escapa fulanito de tal y es porque era auxiliador de la guerrilla.....a un muchacho Roberto lo cogieron¹⁵¹ (sic) una vez en una camioneta con fusiles Ak 47 y no se qué más, lo cogieron los paras y lo torturaron y luego no apareció.....y luego a dos muchachos del sindicato los mataron por liderar marchas, pero uno sabe que los líderes del sindicato pues lo único que quieren es acomodarse para conseguir pasajes a Bogotá, obtener viáticos y pasarlo bueno, pues qué conciencia ni que nada, el que consiguió llegar a la cúpula pues se llenó de plata, lo de las amenazas es puro cuento, se aprovechan de ello para salir exiliados del país. Pues uno de ellos está en Inglaterra y todo el mundo se preguntaba que por qué y dizque lo amenazaron y lo iban a matar, no creo mucho eso, aunque puede ser, uno no sabe todo, pues puede ser, pero no creo mucho en esas versiones”

Respecto al testimonio anterior, resulta contradictorio afirmar que hay sindicalistas asesinados y desaparecidos, por una parte, pero a su vez que las amenazas contra los líderes sindicales son aprovechadas por estos para sacarle provecho a un exilio sin causa alguna. En el anterior testimonio uno no sabe si se trata de ambigüedad, contradicción o cinismo puro del parte del entrevistado. Se podría deducir, aunque se

¹⁵⁰ Se refiere a la transnacional suiza Nestlé, acusada por el sindicato no solamente de haber entregado cuotas o sumas altas de dinero a paramilitares para que expulsaran a sindicalistas, sino también de haber provocado una sensación de que la ausencia de inversión social en la zona es causada por culpa de los “sindicalistas pro guerrilleros”.

¹⁵¹ Lo “cogieron” equivale a “lo agarraron” o “lo atraparon”

requeriría indagar más en ello, que existe una amplia sensación de envidia y frustración en las voces de muchos entrevistados de este tenor¹⁵².

3.4. Justicia discrecional y arbitraria versus manual de convivencia y reparación. Diferencias de las Justicias paralelas FARC y AUC

A continuación, compararé semejanzas y diferencias de ambas Justicias Paraestatales (la de la guerrilla y la de los paramilitares), colocando especial énfasis en el traslape de tipicidades, recetas y habitus que son funcionalmente equivalentes, en cierta medida, para los diferentes órdenes de las Justicias Paraestatales, a pesar de los cambios de dominación en la región

La principal diferencia de las dos Justicias Paraestatales, es que, mientras los guerrilleros tienen claro normas y castigos respectivos a los delitos o irregularidades, los paras, en cambio, resuelven querellas, conflictos y violación de “actos prohibidos” con diferentes varas y medidas, es decir, que la justicia paramilitar es arbitraria y discrecional, por lo que se encuentra en un limbo de incertidumbre: de acuerdo a la cercanía o lejanía del “infractor” respecto a los paras (los informantes están cerca, los simpatizantes en el medio y los indiferentes están tan lejos que deben “portarse bien”).

Pero desglosemos las diferencias en dos puntos claves:

1) Los paras no tienen códigos o reglamentos internos o normas disciplinarias. Tampoco existe en el caso paramilitar Estatutos como los que han formulado los guerrilleros, es decir, donde están consignados los deberes y derechos de los combatientes.

No existen tampoco normas de la Comandancia paramilitar. Los comandantes paras, si acaso, consultan en algunas circunstancias complejas con los grandes ganaderos (en el caso de abigeato), o, por asuntos de inteligencia militar, algunas veces no atrapan a alguien hasta no haber coordinado con sus aliados castrenses todo el proceso y asegurarse del siguiente paso. Tampoco existen códigos como en el caso de las FARC para regular los “excesos” de sus miembros rasos. Si ese “exceso” llegase a comprometer a todo el Bloque, entonces la solución es expedita: se asesina al infractor. Pero la decisión recae sobre el comandante, quien da la última palabra. Es decir, nos encontramos ante una “personalización” de la decisión, no ante unos criterios establecidos previamente.

¹⁵² Fuera de grabación, el entrevistado cuyo seudónimo aquí se presenta como “Tomás”, comentó que nunca ha salido de su municipio, no ha viajado en avión y tampoco conoce el mar (a pesar que el puerto de Buenaventura está a 400 kilómetros apenas).

2) Los guerrilleros y paras difieren en la percepción sobre la prostitución, la infidelidad y la violencia intrafamiliar.

Veamos esta peculiar diferencia. Mientras los paramilitares “administran” y “gerencian” burdeles y prostíbulos, y están inmersos en las redes internacionales de proxenetas (especialmente con proxenetas mexicanos hacia el norte, o con redes de proxenetas españoles con el objeto de llevar mujeres al continente europeo), las FARC se han manifestado en contra de la prostitución, pero no han podido eliminar este fenómeno extenso al que acuden semanalmente los campesinos.

Cabe ser claros: en las veredas y corregimientos donde ejercen su predominio militar los guerrilleros, NO hay burdeles ni prostíbulos, pero los campesinos “bajan” de sus montañas y cerros a los municipios y cascos “urbanos”, a satisfacer sus deseos sexuales, a pesar de que en su gran mayoría, todos son casados. Este particular aspecto lo reseñó la recientemente fallecida antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda en uno de sus libros más referenciados “La Familia en Colombia”, al señalar que en las zonas andinas, donde predominan familias nucleares, el hombre campesino observa a su mujer como persona “correcta” con la que solo tiene hijos. En cambio, la figura de la “prostituta”¹⁵³ emerge como imagen de satisfacción de fantasías y deseos no cumplidos, es decir, reprimidos. Según Gutiérrez de Pineda (2003: 210), la propia Iglesia Católica en las zonas rurales colombianas, en su afán de “preservar” la familia nuclear “a toda costa” (como Dios manda” dice el dicho popular), es decir, evitar los divorcios y separaciones, promovió durante todo el siglo XIX y parte del XX, la “necesidad” de la prostitución como mal menor. Eso sí: los burdeles tenían que ser ubicados, según la peculiar presión de la Institución católica, en zonas separadas de los centros habitacionales o populares. De ahí surgieron las denominadas “zonas de tolerancia”, en donde se situaron burdeles y prostíbulos. De todos modos, y aunque a nivel de movimiento armado se declaren en contra de la prostitución, eso no impide que se observe el ingreso de sindicalistas o campesinos al burdel más grande del municipio, “El Recreo”.

Respecto a la infidelidad, aquí hay diferencias sustanciales, porque mientras las FARC castigan la infidelidad matrimonial, los paras solo castigan la infidelidad femenina, con la salvedad que si la mujer casada comete adulterio con algún para, entonces no se recibe castigo (arbitrariedad y discrecionalidad “moral”), y, en cambio, si el esposo “perjudicado”

¹⁵³ La nominación “prostituta” puede sonar fuerte, pero en Colombia no se hace mención a “sexo-servidoras” como en México. En ningún momento esta nominación usada en el estudio, tiene la intención de ignorar las reivindicaciones femeninas, en aras de eliminar la prostitución como ámbito de degradación de las mujeres en nuestras sociedades.

es de una red cercana o afín a los paras, la mujer “infidel” puede llegar a ser golpeada, asesinada o enviada al exilio “municipal”. Para la JP guerrillera, en cambio, la infidelidad masculina y femenina son rechazadas por igual, sin distinción de género agresor o perjudicado.

Finalmente, en la violencia intrafamiliar hay un aspecto interesante. Según la peculiar mirada paramilitar, dicha violencia se asume cuando el hombre “golpea” a la mujer, es decir, cuando hay “signos visibles”. La violencia que trasciende la agresión física, es decir, la que se expresa en gritos, amenazas, insultos, subestimación, etcétera, por parte del hombre a la mujer, “no es”- a ojos paramilitares- violencia intrafamiliar. Si no hay moretones, no hay violencia, aunque la mujer denuncie agresión no física. De igual modo, los “paras” entienden por violencia intrafamiliar la producida por un hombre a una mujer. Nunca se presenta al revés, es decir, de una mujer a un hombre, pues eso sería un motivo de burla hacia los hombres “violentados”.

Por el contrario, para los guerrilleros, la concepción de violencia intrafamiliar es más amplia, pues incluye para ellos gritos, agresión, negación de los padres en el mantenimiento de los hijos y de las cuotas alimenticias, además de los consabidos golpes. Por lo tanto, como se dice en el argot guerrillero, para que un hecho sea catalogado como “violento” no necesita que presente como prueba “sangre”. Así mismo, a juicio de las FARC, una mujer que le pega o arremete contra el marido, también comete violencia intrafamiliar.

Los tres aspectos anteriores denotan, qué duda cabe, una expresión explícita de machismo, patriarcalismo, intolerancia y primitivismo en la Justicia Paramilitar.

3.5 Contribuciones impositivas, regulaciones morales y poder para enviar a dormir temprano a todos. Acerca de las similitudes de las Justicias Paralelas FARC y AUC

Es evidente, por otra parte, que hay similitudes en los diferentes códigos de conducta que imponen los distintos actores armados a los pobladores civiles, porque esta adaptación al nuevo orden de la justicia (pasar del dominio de paras al de guerrilleros o viceversa) refleja homologías en los órdenes impuestos por lo guerreros y en sus códigos de conducta.

Paras, guerrilleros, narcos, así como los mismos pobladores (y los funcionarios del Estado), comparten espacios de creencias y prácticas comunes, más cercanas a un

mundo premoderno (si pensáramos en Habermas) y a un habitus intergrupal compartido (si pensáramos en Bourdieu)¹⁵⁴

¿A cuáles homologías en los órdenes nos estamos refiriendo? Veamos: tanto los guerrilleros y los paramilitares rechazan las conductas sexuales contrarias a la heterosexualidad (situación de “homofobia”), reprimen el consumo de alcohol y drogas en la zona controlada, restringen las opiniones contrarias a sus acciones, cobran cuotas mensuales (la guerrilla extorsiona a los ganaderos, pero los paras les cobran a estos para defenderlos de aquellos), los pobladores se someten a horarios, etcétera.

Las similitudes pueden ser resumidas en apenas cuatro aspectos siguientes:

1) Ambos llevan a cabo regulaciones de corte “moral” acerca de conductas de convivencia, tales como: consumo de alcohol y drogas, represión a violadores, regulación de críticas y oposición a sus decisiones, prohibición de ingreso de menores de edad a bares, cantinas y prostíbulos. Se prohíbe la circulación de pobladores después de cierta hora de la noche, los guerrilleros hasta las 10 de la noche, los paras en cambio, son más relajados y fiesteros cuando de sus bacanales juergas se trata, pero impiden la circulación de personas después de las 12 de la noche (medianoche), hora en la que no solamente se deben cerrar bares, cantinas, juegos de billar, naipes y burdeles, sino que todos se deben ir a la cama a esa hora.

2) La prohibición de robar es un punto de confluencia entre paras y guerrilleros. Mientras para los campesinos, el robo es una afrenta, pues se valora el esfuerzo cotidiano en las cosechas y en el cuidado del campo, el ladrón es asumido como un “vago” que no se esfuerza como ellos. Por otro lado, pobladores urbanos sienten que robar es una verdadera “vergüenza”. Aquí obviamente hay una doble moral por parte de los habitantes de los pequeños cascos urbanos, pues se sabe que los paramilitares saquean y depredan los campos, robándole literalmente hablando sus tierras a los campesinos (especialmente en zonas rurales donde las FARC no hacen fuerte presencia y por tanto, no pueden defenderlos), obligándolos a su desplazamiento a las ciudades. En ello pueden dar fe dos millones de desplazados por la guerra, una cifra cercana a países

¹⁵⁴ Agradezco (como en todas las puertas de este sendero) a mi director-copiloto, por una observación que oportunamente me hizo caer en cuenta, acerca del habitus compartido entre guerreros y población civil desarmada, lo cual en cierta medida permite que los códigos de conducta se configuren en diversas hegemonías de guerreros, a través de prohibiciones comunes a ambos. Un ejemplo de ello es la prohibición del pelo largo en los hombres como señal de “escasa masculinidad”, lo cual denotaría la homofobia presente tanto en el paramilitarismo, narcotráfico y guerrilla, siendo en esta última donde más se extrañaría dicho accionar. Sin embargo - ya lo hemos señalado antes-, la base social de la guerrilla (y un gran porcentaje de sus líderes) es campesina y comparte habitus comunes con sus contrapares guerreros, como es el prejuicio que los hombres “son hombres” solamente si usan el cabello corto y las mujeres largo, en una separación rígida y autoritaria del arreglo del cabello, por dar solamente aquí un ejemplo.

africanos como Sudán y Ruanda, entre otros. Desplazados que han sido despojados de más de cuatro millones de hectáreas, según cálculos de organismos como ACNUR, OIM y Amnistía Internacional (al respecto, ver en anexos “archivos periodísticos”).

3) Otra semejanza es la resolución por denuncias de conflictos por linderos de terrenos y bienes. Pero mientras los guerrilleros resuelven querellas menores, entre parcelas de minifundio, los paras salen a defender a ganaderos en sus litigios con los peones, en lo que concierne a conflictos por salarios o prestaciones sociales (el pago de salud, que obviamente es “evadido” por los patrones de haciendas y fincas, que todavía tienen mentalidad feudal), así como también conflictos por linderos con pequeños hacendados, los cuales llevan las de perder con los grandes finqueros que aportan contribuciones más generosas a los paras. En fin, guerrilleros y paramilitares se aproximan relativamente en cuanto resuelven querellas sobre linderos de terrenos, pero atención: se trata de diferentes circunstancias y con valores completamente opuestos (defensa del campesino versus defensa de hacendados y ganaderos).

4) Ambos grupos armados llevan a cabo un sistema de “recaudo impositivo”, es decir, de regulación de ingresos, para solventar sus acciones en la zona y en toda la región. La diferencia que cabe señalar acá, es que mientras la presión de los paras por las cuotas mensuales a ganaderos y comerciantes es recibida por éstos últimos como un mal menor (preferencia que los cuiden estos paras así sean con altos costos y con arbitrariedades, a que los “secuestren” los guerrilleros), en el caso de las FARC si se trata de una presión vía extorsión y secuestro. Obviamente, al tener a los paras, los ganaderos y comerciantes se niegan a pagar a las FARC y regulan sus salidas (y las de sus familiares) en la región. Si llegan a salir de la zona, son fuertemente custodiados. Y esto es más evidente en el caso de empresarios extranjeros que visitan esporádicamente la zona. Se manejan bajos perfiles, como cuando llegan financistas europeos, o cuando hubo gerentes españoles, mexicanos o suizos en la transnacional Nestlé.

Aquí cabe señalar que no se entrevistó a ningún empresario de la región, ni menos a sus familiares (Ingenio Río Paila, Nestlé, Transportadores Occidente y Empresa “Trejos”, “Café Mariscal”, “Empresas Palmira”, etcétera), pues yo sabía que no iba a poder franquear el anillo de seguridad de éstos y, además, si intentaba una entrevista, iba a quedar en evidencia ante tiros y troyanos: los informantes de las Farc, me iban a referenciar como posible “filtro” o un tipo sospechoso que ingresa a empresas y, por otro lado, los paras, servicios de inteligencia y fuerzas del orden iban a estar a la expectativa por saber quién era ese sujeto que iba a entrevistarlos y a razón de qué. Demasiados problemas e inconvenientes (en logística, planeación, tiempo invertido y sobre todo, riesgos, y por otro lado, tal vez muy raquíticos serían los réditos o beneficios), me

hicieron desistir desde el mismo momento en que configuré el andamiaje metodológico y de recolección de información. El ofrecimiento a ganaderos y comerciantes de bienes tan preciados por estos como “seguridad” de sus familias y “protección” integral de sus bienes, es el factor neurálgico que posibilita explicar el crecimiento, presencia y dominio territorial de los paramilitares en la región.

De todo lo dicho hasta aquí de esos corolarios normativos impuestos por las justicias paraestatales de paras, guerrilleros y narcos, podríamos preguntarnos qué entienden los pobladores por seguridad y protección ¿Se sienten realmente seguros cuando un grupo armado establece su “orden” social? El pasaje que va del terror a la “seguridad impuesta” por los actores armados, refleja la capacidad que tiene la violencia de bloquear formas de relaciones y solidaridades a través del miedo como mediador. Por ello, los pobladores se relacionan de una forma particular con la violencia y por ende, con la muerte: por un lado, la temen y, por el otro, se sienten fascinados con el poder de los guerreros de decidir la administración de la vida y de la muerte.

Capítulo 4 En un puente estrecho se recomienda no asustarse. Un abordaje fenomenológico de la interacción entre pobladores y guerreros

A principios de los noventa, una delegada suiza de la Cruz Roja, relataba sus impresiones el día del arribo de ese organismo internacional municipio de Mapiripán, donde los paramilitares torturaron, descuartizaron y asesinaron a más de 80 campesinos y provocaron el desplazamiento forzado de otros doscientos más. Afirmaba la delegada Anne Sylver Lander: *“Nunca había encontrado un país donde la gente tuviera tanto miedo a hablar, a pesar que he trabajado hasta hoy en Croacia, Azerbaiyán y Cisjordania”* (El Tiempo: 1993)

En ese orden fáctico que se ha observado aquí, tan peculiar y ajeno del resto del continente, conviene detenerse en dos fenómenos que tipifican ese mundo social en guerra: por una parte, la forma o el modo como se “construye” y “significa” al otro como “alter ego” y, por la otra, la pregunta por la “rareza” (o el “milagro diario”, diría un “forastero”), que significa sobrevivir o llevar la vida a cuesta, en un ambiente de absoluta “desconfianza”.

Veamos el primer fenómeno, el de la construcción de la alteridad en este entramado complejo. Tanto el guerrillero, paramilitar, narcotraficante o militar, construyen al “otro” como “nadie”, es decir, al ignorarlo como ser humano lo “demonizan” para deshumanizarlo y así eliminarlo (Moore: 2001). Tal actitud de negación de la otredad, habilita a la deshumanización que señalaba Hannah Arendt y, por lo tanto, a la “legitimación” de la violencia. Lo anterior produce mayor vulnerabilidad de los actores no

armados, sumada a la inoperancia del Estado para defenderlos, lo cual complica las salidas posibles del laberinto de la guerra en Colombia (Molano,1990: 27; 1996: 89). La cuestión problemática aquí es que *“el significado que doy a las vivencias de otro no puede ser exactamente el mismo que el significado que les da el otro cuando procede a interpretarlas”* (Schutz,1993: 129). A partir de este proceso de deshumanización, podemos entender los modos de control social que establecen los actores armados, tema que fue eje de análisis del capítulo anterior (justicias paraestatales).

El segundo fenómeno consiste en que la interacción cotidiana en dicha zona refleja que las “bases de confianza” se han roto (desde cuándo, tal vez nunca lo sabremos con precisión, o tal vez siempre ha sido así) y, por lo tanto, la interacción del mundo “natural” se establece sin ella necesariamente. Si la confianza reduce la complejidad social, siguiendo a Luhmann, es decir, simplifica la vida por medio de la aceptación del riesgo, en el caso colombiano lo que se observa entonces sería, forzando un poco el término, una “cultura de la desconfianza”. Si la disposición para la confianza está faltando o si la confianza es expresamente negada, el problema no se soluciona (Luhmann,1996: 123).

La confianza, en el más amplio sentido de la fe en las expectativas de uno, es un hecho básico de la vida social, pues su ausencia convierte al hombre en

“víctima de un sentido vago de miedo y de temores paralizantes. Incluso no sería capaz de formular una desconfianza definitiva y de hacer de ello un fundamento para medidas preventivas, ya que esto presupondría confianza en otras direcciones.....Tal confrontación abrupta con la complejidad del mundo al grado máximo es más de lo que soporta el ser humano” (Luhmann,1996: 124).

Cuando se confía, se produce un aumento de posibilidades para la experiencia y la acción, es decir, hay un aumento de la complejidad del sistema social y también del número de posibilidades que pueden reconciliarse con su estructura, porque la confianza constituye una forma más efectiva de reducción de la complejidad.

La protección de un actor X, en estas circunstancias, logra sacar beneficio de la desconfianza, satisfaciendo de este modo las “necesidades” e “intereses” de unos, o el silencio sepulcral de otros.

Es por esta clara ausencia de confianza, que los pobladores establecen sus estrategias de interacción conforme a los espacios de control o de mayor o menor posibilidad de desenvolverse sin dificultades. Es por esta carencia de bases de confianza que la estrategia del ciego, sordo y mudo (CSM), la cual desarrollaré más adelante, ofrece luces

sobre el cinismo y el pragmatismo de pobladores que hacen uso de sus acervos de conocimientos, para poder vivir, dormir y levantarse al día siguiente y seguir así sus rutinas.

4.1 Estrategias de sobrevivencia e instrumentalizaciones como recetas y acervos de conocimiento

En el capítulo anterior, presenté la reflexión sobre las normas establecidas en las Justicias Paraestatales, tan propias de ese orden fáctico que se establece en cada zona, reforzado por predomios militares que subyugan a los habitantes en su cotidianidad, pero del que estos [pobladores] también sacan provecho en sus demandas o, así mismo, algunos se sienten seguros y por tanto aprueban estas formas de justicias paraestatales. Aplicando esto a la totalidad de la pauta cultural de la vida del municipio, podemos decir que la actuación del miembro del endogrupo, (siguiendo el término que emplea Schutz en “El forastero”), muestra todos los signos de lo habitual, es decir, de su “mundo de la vida”:

“Esto es posible porque la pauta cultural, mediante sus recetas, brinda a actores típicos soluciones típicas para problemas típicos. En otras palabras, la probabilidad de obtener el resultado estandarizado que se busca mediante una receta estandarizada es una probabilidad objetiva, abierta a todo el que se conduzca como el tipo anónimo requerido por la receta. Por ello, el actor que sigue una receta no necesita verificar si su probabilidad objetiva coincide con una probabilidad subjetiva; es decir, con una probabilidad abierta para él, el individuo, en razón de sus circunstancias y facultades personales, probabilidad que subsiste al margen de la cuestión de si otras personas, en situaciones similares, podrían o no actuar del mismo modo con la misma probabilidad” (Schutz, 1974:55).

Todos los individuos presuponen que los otros actúen o reaccionen de manera “típica”. Los pobladores han crecido otorgando significados socialmente compartidos (y algunos competidos) dentro del marco de una pauta cultural, la cual incluye no solamente recetas eficaces para su vida cotidiana, sino también actitudes típicas y anónimas no cuestionadas y que les otorgan seguridad y tranquilidad. En otras palabras; esas actitudes, por su mismo carácter anónimo y típico, no están colocadas dentro del estrato de significatividad del actor que exige conocimiento explícito de algo, sino en la región del mero trato directo.

De acuerdo a esta perspectiva, los pobladores del Valle del Cauca, amplían y ajustan su acervo de experiencias (y de conocimientos), al definir la llegada e irrupción de un nuevo grupo armado que “depone” o “desplaza” al que poseía el predominio militar anterior. De esta manera, esa nueva situación de recambio de actor militar predominante en su campo social, permite resignificar y adecuar sus conductas de acuerdo a los esquemas

de interpretación del mundo de la vida, haciéndolo así compatible y coherente con su experiencia y significado.

La significatividad presente en los acervos de conocimiento de los pobladores en un conflicto armado como el colombiano, implica proximidades pero también fuertes recelos entre unos actores y otros. Teniendo en cuenta la relación planteada por Schutz entre la significatividad, por una parte, y lo típico y lo anónimo, por la otra, se deduce que el forastero (en este caso el investigador, pero también puede asumirse un actor/poblador cuando traspasa las fronteras de su “anillo de seguridad” cotidiana), utiliza una medida de la anonimidad y tipicidad de los actos sociales que no es la de los miembros del endogrupo (Schutz: 1974).

La situación biográfica se caracteriza fundamentalmente por el hecho de que el individuo dispone, en cualquier momento de su vida, de lo que Schutz denomina un “acervo de conocimiento a mano” (*stock of knowledge*), integrado por tipificaciones del mundo del sentido común. Desde la infancia, los pobladores han amasado gran cantidad de *recetas* que luego utilizan como técnicas para comprender, o al menos controlar, aspectos de su experiencia. Las miles de situaciones problemáticas concretas que se plantean en el curso de los asuntos cotidianos, y que es necesario encarar de alguna manera, son percibidas e inicialmente formuladas, en términos de acervo de conocimiento que el individuo tiene a mano. El caudal de su experiencia típicamente aprehendida e interpretada sirve de base a su acción subsiguiente. Un ejemplo de ello, que a todas luces es visible en la zona, es la consideración de cuándo y cómo hablar, cuándo callar, cuándo hacerse “el de la vista corta” y cuándo se puede acudir o no a que un grupo armado “resuelva” una querrela personal, como puede ser un problema de violencia intrafamiliar (en el caso de la guerrilla), o el cobro forzado de un deudor renuente (en el caso de los paras), o la situación del robo sostenido de vacas y terneros que lleva a que un ganadero busque a los narcos como sus más cercanos aliados para frenar el abigeato (robo de ganado).

Las “características” del mundo social de estos pobladores, pueden ser explicados como “destrezas”, “habilidades” o “competencias cognitivas”, ya sea si se trata de callarse pero escuchar, espiar, mantenerse en la sombra, soportar la violencia o participar en ella, ser indiferente o cómplice. De igual modo, vivir así, a la expectativa de la vida propia y la de los otros, tal vez genere tensión en forasteros (y hasta en ellos mismos pero lo “procesan” de otra forma), pero, en ese mundo peculiar, sus habitantes se preguntan

diariamente si pueden o no confiar en ese otro que se les acerca a conversarles, así parezca en un principio que [el otro] sólo viene a preguntarles inocentemente por la cosecha, los hijos o el clima.

Las tipificaciones que abarcan el acervo de conocimientos surgen de una estructura social. Aquí, como en todas partes, el conocimiento tiene origen social, está socialmente distribuido e informado. No obstante, su expresión individualizada depende de la situación exclusiva que ocupa el individuo en el mundo social. Y en ese sentido, no es lo mismo ser simpatizante, o colaborador de un grupo armado, que ser un poblador a secas que no tiene posibilidades de acceder y ser escuchado por un grupo armado.

Características de la interacción pobladores municipales y actores armados

Un aspecto neurálgico que configura y atraviesa la interacción que establecen los pobladores del casco urbano municipal es que asumen la protección -que requieren de un actor paramilitar para “defenderse” del otro actor guerrillero- como una auténtica mercancía.

En “La mafia siciliana. El negocio de la protección privada”, el investigador Diego Gambetta (2007), aunque analiza al mundo mafioso del sur italiano, me provoca la tentación – obvia y relativamente certera- de asimilar ese Palermo y Sicilia de la *Cossa Nostra* con ese mundo “narco-para-mafioso” de regiones como Antioquia, Magdalena Medio, Norte de Santander o Valle del Cauca. Sitúa su primera premisa este profesor de la universidad de Oxford, en lo que él denomina “expectativas mutuas de poca confianza”

“Hay expectativas mutuas de poca confianza que generan una demanda de garantías para ambas partes, y ahí está Peppe, un hombre para satisfacer esta demanda y en quien confían tanto el carnicero como el vaccaro, como alguien capaz de cumplirla” (Gambetta, 2007:43):

Siendo la tesis de Gambetta que el principal mercado de servicios de la mafia, se encuentra en transacciones inestables en las que la confianza es escasa y frágil, encuentro fuertes similitudes con este mundo observado, pues lo que todos los pobladores demandan en el Valle (y la mayor parte de Colombia) es, palabras más, palabras menos, protección

Pero, ¿llamar o recibir a un actor armado “Z” para que le dé protección, si se puede intuir que al tiempo le quitan tranquilidad? Cabe analizar este aspecto. Por una parte, algunos pobladores municipales, sobre todo los más prestantes que viven ahí, y que poseen

negocios en la planicie rural (como es el caso de los ganaderos, industriales y comerciantes), son los más interesados en que los paras realicen el “cerco” municipal, para proteger a sus hijos, pero también- en el caso de ganaderos- a sus reses, automóviles y haciendas, es decir, todo su mundo. Y otra parte de la población, aunque no toda, recibe complacida a este actor, aunque posteriormente los abusos y violaciones a sus derechos les hagan preguntarse si acaso el remedio resultó peor que la enfermedad.

En la otra orilla, pero interconectados pues todos van de un lado a otro¹⁵⁵, se encuentran los campesinos. Ellos también quieren “comprar” la mercancía de la protección, esto es, la que les “ofrece” la guerrilla, para defenderlos del espanto paramilitar y el terrorismo de Estado, quienes, históricamente, han sido la punta de lanza de los ganaderos, vale aclarar, los primeros depredadores que ansían las tierras del campesinado.

Los paramilitares acuden al “rescate” de las neurosis de seguridad de los pobladores del casco urbano y colocan a raya a los guerrilleros. Por otra parte, estos últimos ofrecen “protección” y defienden a los campesinos en su histórica reivindicación por la tierra, por la conquista de una reforma agraria esquiva

Lo anterior refleja un símil de la situación de una partida de ajedrez, donde se mezclan táctica y estrategia, y en la que las neurosis de unos se cruzan a veces con las necesidades de otros. Y donde la oferta y la demanda se establece, a pesar que los excesos de oferta (vía violaciones de Derechos Humanos), superen la demanda original. Vale preguntarse ¿Sería posible dar por terminado unilateralmente el contrato de protección? Por supuesto que no.

En aras de precisar los procesos de interacción de pobladores desarmados con actores armados, se requiere “desagregar” a continuación las relaciones producidas en el casco “urbano”

Relación pobladores urbanos con narcos y paras

La expansión de las redes del narcotráfico en la zona, dependen fuertemente de varios factores: parentesco, amistad, colaboraciones y silencios ante posibles arribos de autoridades antinarcóticos.

¹⁵⁵ Con prevenciones, pero van y vienen.

Acudir al factor explicativo de la coerción suena fácil, y aunque no es errado decir que existe [coerción], sí lo es [errado] descartar de plano que hay motivaciones personales e intereses en juego -así como algunos respaldos por factores ideológicos-, en la relación de pobladores con los traquetos, lavaperros y capos del cartel regional. Es decir, el argumento de la mera coerción no es suficiente para explicar la interacción de pobladores con estos, aunque el [argumento] de la mera confluencia de intereses y ambiciones, tampoco lo es. Se trataría, en suma, de ambos entremezclados en un mundo social particular.

Además, como el lector ha podido observar a lo largo del estudio, paras y narcos comparten intereses comunes, ambiciones y motivaciones semejantes, siendo para muchos prácticamente un solo grupo. La diferencia entre ellos se encontraría en que, mientras los paramilitares quieren establecer un orden fáctico, es decir, una justicia paraestatal, los narcos, aún compartiendo y aprobando este orden social, buscan predominantemente la extensión y éxito de sus negocios.

Los miembros del cartel del Norte del Valle, se encuentran articulados con la economía local, participan en ceremonias religiosas, envían a sus hijos a las escuelas, “invierten” en los municipios, apoyan a un candidato de sus preferencias en las elecciones locales (y adivinen quién triunfa), solucionan problemas familiares, reconviene a los adolescentes que contestan “airadamente” a sus madres (pues “madre hay una sola” y además, son “santas”), ofrecen “empleo”, cancelan los velorios y las cuentas de servicios atrasados de sus grupos de allegados, hacen donativos, etcétera.

Por ello, en la relación de los pobladores municipales con los narcos, hay de todo “como en botica”, es decir, que se entremezclan intereses por una recomendación laboral, buscarlos para que le “sugieran” a cierto profesor no ser tan drástico en el curso de álgebra con los adolescentes de la escuela, o proponer que se construyan canchas deportivas para que los muchachos no caigan en “malos pasos” como la drogadicción.

Lo del caso del rendimiento académico, trasciende el nivel de anécdota para convertirse en un claro indicador de la “presión” que ejercen los narcos (y paras también), en el imaginario de los municipios del norte del Valle. Escuché en una oportunidad, que es común el caso de estudiantes que sutilmente “amenazan” a los profesores, “recordándoles” desde un principio del calendario académico, sus vínculos familiares o de “amistad” con narcos o paramilitares. Una profesora con la cual conversé, me comentó que en ese mismo periodo escolar, una tierna y encantadora colegiala de

apenas 12 años, le dijo, justo antes de la fecha de exámenes, que ella es “ahijada” de un miembro de la banda “Los Rastrojos”, es decir, que su “padrino” de primera comunión era un conocido personaje de ese grupo.

No tuvo que decir más. La profesora, que intuía que el nivel académico de esta jovencita no le iba a alcanzar para aprobar su año escolar, no pudo conciliar el sueño durante algunas noches, pues no sabía qué decisión tomar. La chica aprobó. Y la vida continúa. La profesora pudo dormir tranquila.

Veamos adicionalmente un pequeño ejemplo de las motivaciones que se articulan en las relaciones narcos-paras con la población municipal. En varios entierros de guardaespaldas, traquetos y demás personajes de “Los Rastrojos” y “Los machos”, pude observar que asistía cerca del 70% de las poblaciones. Tras enterarme de varias ceremonias de personas asesinadas por enfrentamientos entre grupos, decidí “acompañar” diversos recorridos fúnebres de los “dolientes familiares”, amigos y conocidos, desde los velatorios, pasando por la Iglesia y llegando a los cementerios

Un traqueto que murió, paradójicamente, de muerte natural (y si, señores lectores, los narcos también se mueren de infartos), fue enterrado en el municipio de Zarzal. Viajé a tal municipio y encontré varias pistas interesantes. La gente hacía referencia a la bondad del difunto, a que era una “pérdida” para el pueblo, que había hecho más que los propios representantes del Estado, etcétera¹⁵⁶.

Relación pobladores municipales- ejército y policía

Es una relación “mínima, es decir, con lo necesario. Percibí que la gente admira más a los narcos y paras, que a los propios funcionarios del Estado

Los asuntos “menores” son delegados a los funcionarios policiales, así como acompañamiento en acciones, secundando a los paras. Entre los primeros, es decir, los

¹⁵⁶ También se observó una fila interminable de personas que llevaban sus coronas fúnebres en automóviles, otros a carreta tirada por caballos y, los más, las llevaban caminando, pues del cementerio de Zarzal hasta su parroquia hay apenas doce calles. La ceremonia duró por lo menos tres horas, teniendo en cuenta que una misa lleva aproximadamente cuarenta y cinco minutos y que el recorrido se hizo lento y dispendioso para todos. Los sollozos y lamentaciones, los “hasta luego, amigo”, los repetidos y ensordecedores disparos al aire y el paso de botellas de ron, aguardiente y guarapo entre los asistentes, se mezclaban con el fuerte ruido que producía un grupo de músicos mariachis que entonaban canciones de Vicente y Alejandro Fernández, Pedro Infante, Antonio Aguilar y José Alfredo Jiménez, entre otros, confirmando la admiración y simpatía de este mundo social por estos cantantes mexicanos.

menores, se encuentran el de asistir a los esporádicos choques de automóviles con motocicletas, atropello de ciclistas, etcétera.

En los segundos asuntos, los de respaldo de paras, se encuentra la vigilancia de casas y piscinas públicas (albercas), custodia adicional a los paras en las fiestas, reinados y demás celebraciones.

Los militares no “secundan” a los paras, sino que se encuentran articulados en sus acciones represivas. Sin embargo, lo paradójico es que los pobladores prefieren ir a “quejarse” de alguna irregularidad, desvío de conductas o problemas, a un jefe paramilitar, en vez de ir al comandante del ejército, la policía o al alcalde directamente. Y aunque los paramilitares son- en sus orígenes diversos y complejos- antiguos militares y policías expulsados de la institución por “violación de Derechos Humanos”, mercenarios, delincuentes comunes en ascenso social, traquetos militarizados, etcétera, los pobladores consideran que su particular resolución de “Justicia Express”- rápida y expedita- es un atajo preferido a tener que lidiar con procesos jurídicos largos e inciertos.

Una relación muy interesante es la que establecen los funcionarios de la salud con los actores armados, la cual al principio no sabía si entenderla como propia del “respeto” o la “necesidad”. Posteriormente, encontré que es más la segunda que la primera.

El puesto de salud del Hospital municipal se encuentra conformado por dos médicos, un odontólogo y dos enfermeras. Dichos funcionarios de la salud son más respetados que la policía y el ejército. La población toma en cuenta a los médicos, enfermeras y odontólogos y los respeta (y admira) en gran medida. Pero la policía se percibe en la zona como una figura “decorativa”. Bien vale aquí traer un interesante testimonio de una entrevistada que he denominado como “Risueña” (debido a su contagiosa risa), en el que describe el día en que llegó a la zona. “Risueña”, es una funcionaria de la salud proveniente de otra región del país (donde también hay conflicto armado), que labora en el hospital municipal:

Desde que yo pisé este pueblo, todo el mundo sabía todo de mí. Enseguida llegué, todo el mundo sabía quién era yo. Desde el momento que bajé del bus, un señor estaba pendiente mirándome. Y cuando llegué al hospital, el mismo señor estaba cerca de mí, pues sabían todo de mí. Ya me estaban haciendo inteligencia. Y se preguntaban pues si esa mujer vino a lo que vino o no. Después, es que yo me vine a dar cuenta. Me dijeron después cuando ya tenía amigos en el pueblo: “ya sabíamos todo de usted, quién era, qué hacía, de dónde venía, que iba a trabajar como enfermera”. Y pues, qué hago pues todo el mundo sabía (se ríe a carcajadas).

Cuando salíamos del pueblo a atender emergencias, pues yo era muy inocente, yo a todo el mundo los veía como “normales”, ¿entiendes? A mi me decían, mucho cuidado con lo que habla, usted no puede soltar la lengua, cálese, no hable. Pues, claro, uno aprende a callar, el miedo lo hace callar a uno. Eh, si, ¿sabes por qué? Porque uno no quiere hablar ni preguntar, aquí tenemos que estar muy calladitos, mira que una amiga funcionaria de salud me comentaba que a aquel lo habían saqueado, que uno de aquella familia lo habían desaparecido, que esto y aquello (Risueña, funcionaria de la salud)

De las palabras de esta entrevistada, se deduce un aspecto importante de resaltar: las implicancias cotidianas de las labores de “inteligencia militar” (articulado con los rastreos y búsquedas de información de los paramilitares). He aquí un fundamento del control de los pobladores, especialmente de la zona urbana, que es donde pueden ejercer su predominio militar y estratégico. Al llegar una persona “forastera”, ya se sabe su perfil, su pasado, su currículum, a qué viene, quién la recomendó, qué funciones cumplirá, etcétera.

Por otra parte y haciendo referencia a los funcionarios de salud, ¿Cómo es su relación con los guerrilleros? Primero que todo, digamos que es respetuosa y cordial, aunque con una salvedad, que en realidad no es poca cosa. En algunas circunstancias, guerrilleros del Frente 30 que circulan en el Valle, se llevan “retenido” para sus Frentes y columnas a un médico/a, enfermera u odontólogo/a, para que les presten servicios de urgencias a heridos o guerrilleros con algún malestar. Vale la pena leer nuevamente a la funcionaria de salud mencionada:

En el sector salud uno conoce mucha gente, campesinos, desplazados, pobladores urbanos. Los médicos y enfermeras de las brigadas de salud vemos muchas cosas. Que heridos leves, que heridos de consideración, que hemorragias, también atender a muchos campesinos y guerrilleros con asuntos como por ejemplo, enfermedades (baja la voz) venéreas, de transmisión sexual. A veces una mañana no aparecía un compañero enfermero o médico y nos preocupábamos, pero aparecía al día siguiente. Todas y todos les preguntábamos, “¿qué te pasó?.....Pues nos llevaron (los guerrilleros) para desenterrarles una uñita encarnada que tenía uno de ellos. Y entonces nosotros los atendemos y nos dicen, “doctor o doctora, muchísimas gracias”. Afortunadamente ellos tienen mucho respeto por la función médica. Ellos dicen, pues, “hágame este favor”. No sé, siempre para patologías, algunas sencillas y otras complicadas, patologías pues que uno no habla mucho, pero nosotras si somos reservadas y muy cuidadosas en ese sentido. Pero es que (se ríe) después cuando entre nosotras hablamos tomándonos cervezas, pues nos reímos mucho de ellos.

Los guerrilleros y paramilitares en general sí consultan muchos los servicios médicos por patologías de transmisión sexual, así como servicios odontológicos, pues es natural que tengan problemas de caries. Y también lo típico para los médicos que los atienden, las uñitas encarnadas después de mucho caminar y recorrer montaña”. (Risueña, funcionaria de la salud)

De igual modo, ese “respeto” por “necesidad” que les profesan los guerrilleros y paramilitares a médicos, odontólogos y enfermeras, se convierte en una especie de “talismán”, que les otorga a éstos últimos cierta inmunidad: nadie se mete con ellos, nadie los puede tocar. El poder de aliviar el dolor los hace invulnerables, pues los actores armados los necesitan diariamente. De igual modo, cabe señalar que los funcionarios de salud tienen una relación de mayor confraternidad con los policías que con el ejército. Aunque nunca pude desentrañar el por qué esta diferenciación, es posible configurar dos posibles explicaciones al respecto: 1) el “puesto” o centro de policía está ubicado en pleno centro del municipio, en los CAI (Centro de Atención Inmediata), por lo que la interacción entre los funcionarios de salud y policías es más íntima, que la que desarrollan los militares (ubicados en batallones fuera del perímetro central) con odontólogos, médicos y enfermeras y 2) Podría ser, tal como se me ha sugerido¹⁵⁷, que ello se explique en el hecho de que los militares tienen sus propias unidades médicas que los atienden.

Veamos entonces esta íntima relación de funcionarios de la salud con los policías, siguiendo a la mencionada entrevistada:

“Nosotras en el puesto de salud somos muy amigas de los policías. Y nos encontramos mucho con ellos a ver televisión, a comer, a charlar. Una vez nos mostraron un video de ellos...¿qué mostraba ese video? Pues a compañeros de ellos asesinados, documentales de ataques guerrilleros. Y entonces nos comentaban los policías cuáles eran los errores de táctica que les habían propinado derrotas frente a los guerrilleros, porque comentaban que una brigada de ellos bajaban a los pueblos en un determinado día y a una determinada hora y claro, pues los guerrilleros los estaban esperando.

Ellos mostrándonos el video nos decían: “ese era compañero nuestro”. El cadáver, descompuesto, mostraba partes del cuerpo que estaban desmembrados. Y los propios policías nos confesaban que ellos se imaginaban en sus sueños, que ellos también quedaban desmembrados, cortados o rebanados por los ataques de la guerrilla.” (Risueña, funcionaria de la salud)

Características de la interacción campesinos y actores armados

La guerra en Colombia se enfoca (o concentra) en el sector rural. Ahí surgió la guerrilla, ahí mismo se sintieron “amenazados” los ganaderos y fomentaron la contrainsurgencia a través del paramilitarismo y de ahí también emergieron los primeros clanes que conformaron los denominados carteles de Cali y Medellín.

¹⁵⁷ Una observación ofrecida por el profesor Marco Estrada al respecto, vino a rescatarme a tiempo, pues no atinaba a darle sentido a esta particularidad, haciendo entonces posible considerar la explicación de esta relación más íntima y amistosa entre funcionarios de salud municipal y policías, que no se presenta con las unidades del ejército.

El campo colombiano entonces es el escenario de la guerra, dadas las evidencias. Y en dicho ámbito, los pobladores rurales, es decir, los campesinos, se han encontrado en el ojo del huracán.

La población campesina está siempre expuesta en mitad del fuego cruzado. Tanto los guerrilleros como paras y ejército los controlan y acosan. Los campesinos terminan inmersos en un verdadero círculo diabólico: o la represalia de la guerrilla si colaboran con su “enemigo” o la contrarrepresalia de las Fuerzas Armadas estatales y de sus aliados paramilitares si hacen lo mismo con la guerrilla. En esta dialéctica de la represalia/contrarrepresalia, las relaciones de la guerrilla con la población son esenciales para su supervivencia: o encuentran un apoyo voluntario por razones ideológicas o, por intereses específicos, o bien lo buscan mediante la intimidación.

Señalados como “guerrilleros camuflados” por el establecimiento y fuerzas castrenses, “bastiones” de las vanguardias revolucionarias por la propia guerrilla, como el “agua que permite moverse al pez” por parte de los paramilitares, o finalmente, como “productores útiles” por parte de los narcos, lo cierto es que la situación de los campesinos no es para nada óptima en el contexto de la guerra.

Para comprender este particular contexto, así como las formas de relaciones que se establecen, consideraré apropiado fragmentar la relación de los campesinos con cada uno de los grupos armados.

Campesinos y guerrilleros

En la zona las Farc presentan una fuerte movilidad, lo cual es parte de la lógica de la guerra de guerrillas: ataque por sorpresa y retirada. Y además cabe destacar que, debido a estas características de la estrategia revolucionaria, las FARC no han podido construir relaciones estables con el entorno geográfico del Valle del Cauca. Más allá de las Juntas de reclamos y de las redes sociales de informantes y delatores, o de los propios simpatizantes, se percibe cierta lealtad a la guerrilla¹⁵⁸, dadas sus orígenes en las luchas

¹⁵⁸ Respondiendo a un interrogante del profesor Alejandro Agudo, quisiera realizar aquí una pequeña elaboración para dar cuenta de lo que suena como contradicción. Si bien no considero que exista hegemonía- en el sentido gramsciano- por otra parte es cierto que el control territorial, reflejado en las Justicias Paraestatales (reseñadas, descritas y analizadas en el capítulo 3), generan ciertas simpatías en las poblaciones campesinas, pues sienten mayor identificación con las FARC que con los paramilitares, pues el hecho de que en la guerrilla se encuentren miles de campesinos combatientes procedentes de todo el país (mientras que en los “ paras” se concentran mercenarios y ex oficiales del ejército), conlleva una mayor adherencia. El caso es que- también- hay coerción, pues no todos los campesinos aceptan con agrado entregar sus gallinas y animales de cría con el objeto de servir de alimento a la propia guerrilla. En ello hay

campesinas (una identificación en sus mitos fundadores) pero, igualmente, se trata de una lealtad que tiene fragilidades puesto que la incertidumbre ante un cambio brusco en el predominio militar (el arribo de los “otros”) está a la orden del día. Además, vale remarcarlo y enfatizarlo, se trata de una guerrilla nómada en esta región occidental del país, pues “van y vuelven” de oriente a occidente, de sur a norte, a través de sus Frentes y columnas de choque. Transitan del Caquetá, Putumayo y Huila hacia el Cauca y Nariño, o desde el Valle hacia el Tolima, Antioquia o el eje cafetero.

A pesar de las incertidumbres y angustias ante futuros actores dominantes (militarmente hablando), los campesinos, en líneas generales, conocen más a los guerrilleros que a sus enemigos. Y aquí encontré una paradoja: aunque por una parte se sienten coercionados por las FARC, por la otra sienten un gran alivio de tenerlos cerca, porque entre los guerrilleros y los paramilitares, los campesinos prefieren a los primeros. Es decir, los guerrilleros serían “un mal menor” frente al terror que les producen los paramilitares.

¿A qué se debe esto? Revisaré los motivos encontrados:

- 1) Los paramilitares utilizan métodos de guerra sangrientos y despiadados: torturan, desfiguran a sus víctimas, los cortan en pedazos, violan campesinas (y guerrilleras), no respetan a niños (especialmente cuando encuentran a hijos de campesinos simpatizantes de guerrilleros o a los propios hijos de guerrilleros en zonas rurales), cercenan partes corporales a sus víctimas para mostrar ante poblados enteros de qué son “capaces”, lanzan esos trozos de cuerpos desfigurados por ríos, para que todos los lugareños “río abajo” se enteren de las masacres, etcétera. Los guerrilleros, en cambio, no hacen pasar a nadie por métodos de tortura. Y aunque cometen arbitrariedades e injusticias, reciben el “respeto” del campesino, pues no se “ensañan” con sus enemigos, ni tampoco con los simpatizantes de estos.

Es decir, que al “fusilar” a un “enemigo de la revolución”, las FARC tienden a provocar un acto “simple” y “directo”, que no provoque sufrimientos a la víctima. Los guerrilleros no asesinan niños y, en los casos donde llegasen a morir niños (como produjo el ELN en el incendio de Machuca, en el Departamento del Chocó),

coerción evidente. Y, siguiendo con las contrariedades, se refleja a su vez un ambiente coercitivo también en las limitaciones en la ingesta de alcohol y en las limitaciones de horarios, aunque existan unos campesinos que lo aprueben y otros que con su silencio reflejan su subordinación al respecto. Pareciera entonces que no es posible dilucidar en forma totalmente clara cuál es la frontera entre la coerción-terror-subordinación, por una parte, y la aprobación-lealtad- adhesión, por la otra.

piden disculpas públicas en los Medios masivos de comunicación, afirmando que se trató de un error “involuntario”. Así y todo, es un acto reprobable por el campesinado. Si un guerrillero, en un caso aislado, llegase a violar a una mujer, simpatizante o no del otro bando, recibe un “juicio revolucionario”, el cual, irremediablemente en estos casos, conduce al “deshonor”, es decir, al fusilamiento. Y ahí si recibe el beneplácito del campesinado, pues se “hizo justicia”.

- 2) La base social de los combatientes guerrilleros, como he dicho en otro capítulo de este estudio, es eminentemente campesina. No falta quien tenga un hijo/a, hermano/a, sobrino/a, combatiendo con las FARC o el ELN en otras zonas del país, o en su zona cercana. Los “muchachos”, como cariñosamente llaman algunos a los “Farianos” o “farcos” (Farc) o “Elenos” (Eln), reciben mejores atenciones en comida y bebidas que las que se entregan (obligatoriamente, claro está) al ejército y paramilitares cuando hacen “rastreos” por la zona. Aunque hay campesinos que no les agrada –para nada- tener que entregar sus gallinas, la leche de sus vacas o la pesca obtenida de los ríos (ni a guerrilleros ni a militares), es evidente que la coerción armada está presente, conllevando así una estela de abusos de poder, propio de todas las guerras. Pero también (paradójicamente), muchos campesinos aprueban ciertos controles- alcoholismo, drogadicción, horarios de menores, violencia intrafamiliar, conflictos por linderos y tierras, etcétera- de parte de los guerrilleros. Cabría preguntarse- forzando una hipotética situación- si el orden fáctico en sus veredas y corregimientos rurales fuera ejercido por los paramilitares, entonces ¿aprobarían dichos controles o simplemente agacharían las cabezas para seguir viviendo?
- 3) Ante la persistente e histórica “ausencia” o “indiferencia” de los gobiernos colombianos frente a sus necesidades y reivindicaciones (especialmente en lo que atañe a reforma agraria, carencia de créditos para trabajar la tierra, escaso acceso al sector educativo y deficiente cobertura en salud e intermitente presencia médica) los guerrilleros de las FARC constituyen su única referencia de un orden fáctico que establece normas, derechos y obligaciones. Y aunque exista una presión armada en el orden fáctico establecido por la guerrilla fariana, como señalé anteriormente, las FARC son un “mal menor” preferido a las fuerzas estatales o paramilitares.

En la zona, las FARC, tal como señalé en el epígrafe sobre la “Justicia guerrillera”, han construido tres aparatos interconectados: 1) un aparato militar que protege los anillos de

ingreso a las montañas de Trujillo, Andalucía, Buga, entre otros, 2) un aparato de justicia o de “policía” que establece un “orden interno” y resuelve diversos conflictos y 3) un aparato impositivo que regula los ingresos a través de la extorsión y el “boleteo”. Es decir, los guerrilleros configuran funciones policiales, impositivas y militares.

Relación campesinos- paramilitares

Además de ser una interacción mediada por el terror y la coerción, este vínculo es mínimo en zonas montañosas (donde predominan militarmente las FARC), pero es mayor en zonas de la altiplanicie, es decir, donde se encuentran ubicados haciendas ganaderas y de actividad agropecuaria. Aunque las actividades de ganadería extensiva, no provee muchos empleos, los pocos puestos de trabajo que se producen, corresponden a campesinos.

Los ganaderos- patrocinadores en su mayoría de grupos paramilitares- contratan campesinos/as, pero se cuidan en extremo, llevando a cabo minuciosas averiguaciones acerca de quiénes son los que, en sus haciendas, hacen labores de ordeñar, pastorear, limpiar, cocinar, etcétera, con el ánimo que no se les “infiltre” un simpatizante o informante de la guerrilla (por el temor a ser secuestrados ellos o sus hijos). Vale agregar que los empleados armados que vigilan sus cabezas de ganado, demás animales y automóviles, son mercenarios que proceden en mayor medida de pequeños municipios “urbanos”. Los campesinos – y sus mujeres-contratados, no mantienen relaciones amistosas con los lavaperros, traquetos y guardaespaldas. Sí una relación laboral “normal”, sin grandes manifestaciones de amistad. Sólo trabajo y nada más.

Aunque cabe señalar que el hecho de ser contratados y durar un largo tiempo con “patrones” ganaderos, los hace acercarse a vínculos más o menos cercanos con los paramilitares y, por ende, con narcotraficantes. Sea por necesidad, o por interés, o por temor (o todas las anteriores causas, entremezcladas), los campesinos que trabajan con estos personajes, terminan siendo posibles – y peligrosos- informantes del Estado y sus escuadrones de la muerte, cuando regresan por sus cortas vacaciones a sus veredas y resguardos. Sin embargo, allá (veredas y corregimientos), los otros campesinos no “tragan entero” con la presencia de estos vecinos campesinos que laboran en haciendas ganaderas: hay cierta prevención y desconfianza, lo cual provoca espacios de tensión entre los campesinos que trabajan sus propias tierras y aquellos que trabajan para ganaderos (y sus posibles aliados, obviamente).

Veamos otro caso, el de la relación de los campesinos con la policía o el ejército. Los campesinos son muy cautos en acercarse y entablar algún tipo de relación cuando otros actores armados, como el ejército, llegan a hacer presencia en la zona rural. Aquí resulta conveniente resaltar que las jóvenes y adolescentes campesinas son especialmente las reconvenidas por sus familias, por aquello de las posibles relaciones amorosas con los actores armados del Estado, pues estas relaciones son vistas por la guerrilla como posible “filtro” de información a la inteligencia militar. Se han conocido asesinatos de jóvenes adolescentes que se atrevieron a esta clase de acercamientos con policías y soldados, es decir, por entablar cercanas relaciones (afectivas) con miembros de la institución policial. Al finalizar el trabajo de campo (agosto del 2006), fui testigo de la presencia en plena calle (frente al hospital municipal), del cuerpo tirado de una joven de 19 años, asesinada por la guerrilla, debido a su relación amorosa con un oficial de policía.

4.2 Una tipología de la interacción y los interactores

El adecuado manejo de las recetas que componen el acervo de conocimientos a la hora de enfrentar situaciones problemáticas, se vuelve crucial para todos y cada uno de los habitantes del municipio que se encuentran sometidos a la coacción de los grupos armados. Aunque en el casco urbano y en la denominada cabecera municipal no existe el código de comportamientos que sí se ha establecido en la zona rural (en donde la guerrilla implementó las llamadas *leyes populares*), la coerción paramilitar también ha establecido códigos de conducta y ordenamiento social.

Es interesante ver cómo los pobladores desarmados son capaces de manejar formas de regulación propias –que van cambiando muy rápidamente- y de crear sus propias normas provisionales que garantizan formas de coexistencia. Se adaptan al actor que impone el orden fáctico de turno, sea la guerrilla, los paras o los narcos. En muchos casos, adopta como su propia estrategia individual una manera de replegarse sobre su vida privada, es decir, de no meterse en los asuntos generales, bajo la estrategia que aquí tipificaré de ahora en más como de los “ciegos, sordos y mudos” (CSM). Para mantenerse íntegramente, para salvar lo que pueda de su vida, cada cual tiene que pensar solamente en su ámbito privado. Dichas estrategias implican una presentación y metamorfosis muy peculiar en los modos del “nombrar”: caben allí los “sapos” (delatores), los “lavaperros” (testaferros), los “camaleones” (tránsfugas de bandos), así como los “lobos” disfrazados de “ovejas”. Sin embargo, señalaré también que nos encontramos frente a un conflicto de distribución de poderes y disputa por el predominio militar entre actores armados que tienen una representatividad muy precaria de los sectores de población que están bajo su control.

Las interacciones entre la población y los actores armados tienen además un carácter arbitrario en la medida en que está presente la represión paramilitar (o al menos se percibe en el ambiente social la amenaza de su utilización), lo cual pinta el panorama como de posible violencia indiscriminada o discrecional, sólo “limitada” cuando se trata de las “listas negras”. Forzando la comparación y en clave de términos bíblicos, “quien no está conmigo, está contra mí”. Por lo tanto, nos encontramos ante márgenes de arbitrariedad y niveles de estabilidad en las funciones de control social.

La relación espacio-temporal resulta igualmente sensible a los cambios que se operan en situaciones como esta. Para el habitante, la concepción y apropiación del tiempo y del espacio se presentan como variables bajo control, lo que confina a los sujetos a aquellos lugares que le representen seguridad. El grado de confianza y de espontaneidad, algo que podría “suponerse” típico en las relaciones cotidianas en otras sociedades del mundo, se muestra socavado. Las posibilidades de establecer lo que Schutz denomina la *relación cara a cara o relación Nosotros pura*, se reducen a un grupo muy específico de personas, por lo general los familiares y aquellas más íntimas a las que se conoce de tiempo atrás y, desde luego, que se pueda corroborar “en qué andan”, situación que marcará la pauta para quienes evaluarán sus comportamientos. El refrán popular “*dime con quién andas y te diré quién eres*”, resulta ilustrativo ante esta particular situación.

Lo anterior cuenta también como un factor generador de preocupación hacia aquellas personas conocidas. Con las que se compartió y siguen compartiéndose espacios de convivencia y que hoy se ven inmersas directamente en el conflicto; lo cual no implica que la relación desaparezca por completo, pero sí efectivamente, se evidencia un menor grado de interacción; por ejemplo, el trato resultará menos espontáneo, habrá preocupación, sobre todo si la persona trae consigo a un forastero, la conversación se entabla a partir de temas triviales (fútbol, modas, fiestas), y los encuentros se hacen cada vez menos casuales. Esta situación reduce aún más los lazos de amistad, tornando a los pobladores como sujetos selectivos, que deben asegurarse a quién llevan a sus casas pues las puertas no pueden abrirse para todos, menos ante la presencia de un desconocido.

Se observan en el escenario municipal entonces tres grados de interacción que configuran igual número de tipo de “interactores”:

- 1) Por interés o instrumentalización: los lavaperros, testafellos e informantes (sapos)

- 2) Por simpatía o convicción: Los simpatizantes de bajo perfil
- 3) Por sobrevivencia: Los ciegos, sordos y mudos.

Obviamente, no se trata de tipos “puros” e inmutables, debido a que un CSM puede llegar a ser un lavaperro o informante si logra ganarse la confianza del actor paramilitar y narco (lavaperro) o guerrillero (informante). Igualmente, el testaferrero, sapo e informante también es un CSM. En ese sentido, cualquier observador externo o forastero atónito podría preguntarse ¿cómo pueden convivir en ese mundo social el honorable doctor Jekyll y el siniestro Señor Hyde sin despeñarse por el abismo de la violencia? En un clima insurreccional es posible confluir en ambas personalidades. Se puede ser CSM y posteriormente ingresar a un grupo armado o devolverse a su “seguro de vida” si las condiciones de seguridad lo ameritan.

El tercer grupo constituye el “grueso” de la población, los que prefieren “llegar a viejos”, aunque es menester señalar que, en sentido estricto, los que están en 1) y 2) también hacen uso de la estrategia de no ver/no oír/ no hablar, pero en otra modalidad, pues si bien “vigilan”/“chismean” y “denuncian”, sólo lo hacen para su actor armado “proveedor”. En suma, el “grueso” de la población, está involucrado de una u otra manera.

Esta tipología me permitió la identificación de sus prácticas e interacciones, lo cual refleja metafóricamente una pérdida de los sentidos en el caso de los CSM que constituyen el “grueso” de los campesinos y pobladores urbanos. Sin embargo, ¿Tal vez podríamos afirmar que más que una pérdida, sería una atrofia de la capacidad de hacer uso de los sentidos: ver/observar; oír/escuchar y hablar/argumentar? No es posible deducir aquí una respuesta sencilla para esta pregunta compleja. De todos modos, no se percibe en el contexto aquí analizado, una actitud de reacción, crítica o distanciamiento de los procesos gansteriles ya señalados a lo largo del estudio. Lo contrario a la supuesta atrofia de los sentidos democráticos serían ciudadanos “empoderados” que observan, escuchan y argumentan. Pero sabemos que no es así. Sea el miedo a un grupo (o a todos) o la afiliación a otro (por simpatía, por interés), lo cierto es que no hay tal empoderamiento ni nada que se le parezca. En esas condiciones, hacer referencia a capital social parecería un mal chiste.

Respecto a lo que aquí he denominado como “instrumentalización” de la guerra, es pertinente señalar que hay mayor grado de compromiso o riesgo asumido por parte de los pobladores al estar más cercanos a la posibilidad de sacar provecho de la

colaboración con un grupo armado, especialmente con los narcos del cartel del norte del Valle.

Veamos entonces con un mayor tiempo y espacio a cada grupo de interactores. Intentemos indagar en sus dinámicas de interacción lo cual nos permitirá entender el mundo social que comparten con los “otros”.

*a) Interacción por interés o instrumentalización:
actores lavaperros, camaleones, testaferros y sapos¹⁵⁹*

Para intentar “comprender” a este grupo o “tipo” vale empezar con la premisa que para los pobladores de esta región (e intuimos que en otras también) la guerra es un trabajo como cualquiera. Es aquí donde se encuentra la fuente de la actual degradación del conflicto: convertido en una oportunidad y una forma de vida dentro del limitado conjunto de opciones del mundo social colombiano.

Este es el grupo de los que viven en la cuerda floja. Ahora gozan de status y mañana “Dios proveerá” o “lo que Dios quiera”, según dice el proverbio popular y que a estos les cabe como consuelo en el sincretismo sicarial-religioso que los lleva a creer en Dios (“A Dios rogando y con el arma matando”) mientras paralelamente actúan bajo el precepto “vive y goza la vida que quizás mañana te maten”.

Por ello, estafetas de las Farc e informantes del paramilitarismo constituyeron los actores renuentes a cuyos grupos se hizo imposible “entrar” en el proceso de campo (por seguridad, por hermetismo, por prevención, etc). En ese sentido, bien cabe señalar que aunque estos lobos se vistan de ovejas, “siguen siendo lobos”. De ahí la desconfianza que sin dudas se percibe en el ambiente y que como investigador “fisgón” me topé como obstáculo mayor.

Estos sujetos tienen un mayor grado de compromiso en cuanto al manejo de la información y la inteligencia (a modo de espionaje militar o guerrillero, de acuerdo a cómo se mire), son los llamados estafetas y milicianos para la insurgencia, por una parte, o los

¹⁵⁹ Tiene sentido aquí delimitarlos y “ubicarlos”: Lavaperros y traquetos del bando paramilitar, estafetas del lado guerrillero y los sapos o delatores que se encuentran en ambos lados. Un extremo de los sapos serían los “camaleones” que se ponen en evidencia al cambiar de bando en forma visible. Los sapos, en cambio, pueden ser delatores durante un tiempo largo sin ser descubiertos, aunque los riesgos que corren son enormes. Ser “sapo” es considerado más grave que ser enemigo.

informantes o “sapos” por parte del paramilitarismo o el Estado (a los que al fin y al cabo los une un enemigo en común).

La relación entre los frentes guerrilleros y la comunidad de base campesina nos reveló aspectos que tal vez sean del sentido común de los estudios sobre “sociologías de la guerrilla” (Barrington Moore, por señalar uno de los más reconocidos) como por ejemplo: la adopción de métodos que involucran a sectores de población que circunstancialmente y por la misma mecánica de la coexistencia con la guerrilla apoyan en la logística de transporte, alimentación, medicamentos, servicios financieros o información. Una aterradora constancia de tales recursos fue dada por el propio comandante paramilitar Carlos Castaño, uno de los “fundadores” del neoparamilitarismo, quien se “regocijó” por haber descubierto el “agua tibia”:

“De ahí surgió, sin que nadie nos lo enseñara, uno de los mejores mecanismos que hemos utilizado para la lucha antiguerrillera: si no los podíamos combatir donde estaban acantonados, sí podríamos en cambio neutralizar las personas que les llevaban comida, droga, razones, aguardiente, prostitutas y todo ese tipo de cosas que les llevan a ellos los campesinos. Y nos dimos cuenta que conseguíamos aislarlo y vimos que era una estrategia que daba muy buenos resultados. Increíble. Eso nadie nos lo enseñó. (Castaño; 2001: 57).

Recordemos y señalemos que, de ese modo, empezó a construirse el poder local de las autodefensas y así ha sido reconquistado por la guerrilla, según el círculo vicioso impuesto por la búsqueda de un monopolio que, como el del territorio, se caracteriza por su escasez: criminalizando, desde la normatividad de guerra asumida por cada uno de los contendientes, cualquier contacto voluntario o involuntario con el contrario.

De este grupo más “comprometido” emergen aquellos que “juegan con fuego”: los camaleones. Hacemos referencia a los que cambian de bando y se “venden al mejor postor”. Estos son aún más osados, malabaristas y suicidas que los comprometidos que no cambian de bando, aún a riesgo de perder sus vidas. Pero cabe señalar y enfatizar enérgicamente que los camaleones tienen más probabilidades de morir que los propios “comprometidos”: se “respeta” más al enemigo que al “sapo-traidor”.

Aunque los paras, guerrilleros y narcos, al igual que sus testaferros, lavaperros y “sapos” comparten un mismo habitus, un mismo horizonte cultural (Bourdieu: 2000), el “camaleón” -en contraposición a este enfoque teórico-, cambia no sólo de color sino de habitus adquirido. Si partieramos de Bourdieu, este intercambio de habitus que lleva a cabo el camaleón sería inconcebible, puesto que el habitus corresponde a las

condiciones de (re)producción de una posición (colectiva) social. Pero en el caso colombiano ello es posible debido al pragmatismo. Sin embargo, el camaleón se enfrenta a un doble riesgo: por un lado, ya “traicionó” a sus antiguos compañeros de andanzas y, por tanto, siempre tendrá el temor a que lo acribillen en un “ajuste de cuentas” y, por el otro, lo recibe un grupo “nuevo” que lo instrumentalizará (por información, por lo que sabe y por su experiencia de combate) pero no sin cierta sospecha, algo del tipo “¿nos irá a traicionar como lo hizo con los otros?”. Agregaríamos una pregunta fuerte aquí: ¿no será también posible insinuar que la población de la región tiene un cierto aire de camaleón?¹⁶⁰

Los que sacan provecho de la “comercialización de salida” en el proceso de drogas

Para entender dicha interacción, es pertinente partir de una idea fuerte: en esta región los intereses de apoyo, colaboración y simpatía se articulan a la búsqueda de beneficios personales. Obviamente, esos beneficios personales pueden mezclarse en contadas circunstancias a convicciones de índole político ideológico y religioso. Pero no siempre es claro de dilucidar esa relación “beneficios personales-adhesiones ideológicas”.

Un aspecto que, al igual que la zona rural, también se manifiesta en la zona “urbana”, es el de los intereses de pobladores en zonas municipales que participan en el reparto de excedentes del mercado de exportación de drogas a Estados Unidos y a Europa. En esa lógica, es importante previamente resaltar algunas características de la industria de las drogas ilegales que condicionan la forma como ésta penetra la sociedad regional que aquí se estudia:

¹⁶⁰ En la historia de los conflictos armados en Colombia, es posible rastrear múltiples casos de guerreros “camaleones”: esos personajes que actuaron a nombre de un grupo armado y posteriormente se trasladaron al otro. Para no retroceder demasiado en el amplio derrotero histórico de la guerra colombiana, recordemos aquí el caso de los guerrilleros desmovilizados del grupo de corte maoísta EPL (Ejército popular de liberación) que entregaron sus armas a finales de los ochenta y principios de los noventa, formando el grupo Esperanza, Paz y Libertad (Igualmente EPL). Se sabe que muchos de ellos engrosaron posteriormente las filas de sus propios victimarios (los paramilitares que fueron los causantes de su exterminio). Un caso pertinente de sacar a colación aquí (aunque provenga de otra región) es el del lugarteniente del ex jefe paramilitar Carlos Castaño. Dicho lugarteniente o “mano derecha” conocido como alias “Monoleche” asesinó a su propio jefe por encargo de otros narcos y paras. Pero lo más importante es que este señalado lugarteniente, antes de llegar a ese “cargo”, “vacante” o “puesto”, era un jefe guerrillero del EPL con amplia experiencia militar y curtido en mil batallas que, tras la desmovilización y entrega de armas por parte de dicha guerrilla en Urabá (Antioquia), se cambió radicalmente de bando: líder del paramilitarismo y activo jefe de escuadrones de la muerte cercanos al narcotráfico. De jefe guerrillero a jefe paramilitar. Un cambio muy brusco. Un camaleón que “cambió” de color ¿y los referentes ideológicos? Bien, gracias. Somos pragmáticos, no románticos, diría si se le preguntase o recriminase al camaleón: para él, esto es apenas un trabajo, una forma de vida, un habitus adquirido, un espacio de reconocimiento. Y punto.

a) En la región, la industria ilegal es diversificada e integrada. Se producen diversos insumos vegetales: coca y marihuana; se manufactura opio, heroína, pasta de coca, base de cocaína (que mezclada con el tabaco produce bazuco) y se exportan los productos a diversos mercados del mundo;

b) Para poder operar toda industria ilegal requiere desarrollar *redes de apoyo social* que protejan de la acción de la DEA o las propias oficinas de Antinarcóticos colombianos, a pesar que es “vox populi” que en el propio Estado colombiano se encuentran decenas de funcionarios cómplices y corruptos que “alertan” a los narcos de los procedimientos de control y persecución que se llevarán a cabo, de tal modo que es posible escapar ilesos¹⁶¹.

Las redes de amistad, colaboración y confianza de los narcotraficantes se desarrollan por medio de grandes incentivos: quienes apoyan la industria reciben grandes beneficios, pero quienes la traicionan sufren también grandes consecuencias. La industria se basa en lealtades fuertes por lo cual generalmente involucran a parientes, amigos de infancia, compañeros de colegio y, en general, personas con quienes se haya compartido una cotidianidad.

El apoyo social a la guerrilla evidenciado en estafetas e informantes

Reorientemos ahora la mirada a la relación campesinos- Farc. Cabe preguntarse ¿cuáles son las modalidades de legitimación de las Farc frente a aquellos? ¿Cómo logran las Farc en la zona de estudio el apoyo social a sus acciones? Es decir, indagemos en dos aspectos: 1) las relaciones de convivencia y normatividad entre campesinos y guerrilla; 2) Los mecanismos que utilizan los “farianos” o “Farcos” para ganar adhesión social.

Detrás del apoyo social a las FARC, se encuentra la ya mencionada relación vincular del movimiento guerrillero a las reivindicaciones campesinas, así como los mitos fundadores de esta ya madura formación insurgente en el imaginario campesino. Hay quienes

¹⁶¹ Esa “permissividad” gubernamental deviene de los años ochenta, se consolida en los noventa y se intenta “maquillar” groseramente (porque es una voz de ofensa o grosera hacia la inteligencia de los colombianos). Los propios gobiernos de Turbay Ayala, Virgilio Barco, César Gaviria, Andrés Pastrana y aún más el actual de Uribe Vélez, han sido extrañamente “permissivos” con la presencia de los capitales e influencias de los carteles de Cali y Medellín en los ochenta y noventa, fomentando la narcopolítica aún a pesar de intentar “cubrir” la responsabilidad estatal con acciones represivas esporádicas contra estas organizaciones mafiosas, con tal de quedar bien ante el Departamento de Estado Norteamericano, organismos internacionales de Derechos Humanos (como Amnistía Internacional, por ejemplo) y las autoridades de la Unión Europea.

pretende justificar a los guerrilleros, mediante la marcación de diferencias entre el accionar de unos y otros, como estableciendo una frontera entre las atrocidades de los paramilitares y las ejecuciones defensores de las necesidades campesinas de otros. Como nos los comentó don Eustagio.:

La guerrilla habrá hecho cosas muy malas, y habrá matado gente, pero no han cometido las viles y atroces atrocidades (sic) que han hecho los paramilitares. Si a la guerrilla no la atacan ellos no atacan a nadie (sic). En este momento, no nos podemos decir mentiras, el presidente es el responsable del crecimiento paramilitar....es el gran culpable. El padre de Alvaro Uribe fue un gran narcotraficante, fue de los primeros narcotraficantes y de los más grandes y que él ahoritica (sic) diga que quiere tomar venganza es mentira, lo que quiere Uribe es la guerra y codicia, el le ha dado más pie a la guerra y al desplazamiento y nadie cae en cuenta de eso....porque se pone una máscara para hablar en televisión, le estamos dando votos a Uribe y le estamos más votos a la guerra, le estamos dando permiso para que siga la guerra....y cuando lleguemos al segundo bloque (periodo) no va quedar nada aquí. Sería mejor, elegir directamente a un presidente militar que reelegir a este presidente paramilitar

El que es cómplice de la guerrilla es víctima del paramilitarismo, ejército y policía es decir, tres enemigos atrás por verlo hablar con un guerrillero y viceversa si usted habla con un paramilitar, soldado o policía. Estamos en un cruce de fuego donde no hay escapación (sic) de nadie, no nos podemos escapar de nadie. Es porque la misma ley está acá metida (sic) y como ley no mata ley, entonces es que mandan a que se enfrenten paramilitares o guerrilla y matan campesinos, y el ejército agarra a los campesinos muertos y les coloca uniformes de la guerrilla y los anuncia como bajas de la guerrilla pero no es verdad

La guerrilla si matan paramilitares y los paramilitares si matan guerrilleros, pero entre ellos realmente tampoco se quieren enfrentar. Pero además el paramilitarismo no es capaz con la guerrilla. La guerrilla es más fuerte, tiene más fogueo, tiene más experiencia, los guerrilleros se conocen los montes y los bosques completitos. El paramilitarismo viene de los mismo ejércitos y trae mucha gente de la ciudad y ellos no se conocen bien todo esto (Don Eustagio, poblador rural)

Un aspecto muy importante cuando de comprender las interacciones de los armados con los campesinos, es el de los cultivos y manufacturas de drogas ilegales, pues en la zona se cultivan amapola (para heroína) y coca (para cocaína). Las redes de apoyo necesarias para el cultivo involucran a campesinos, pero también algunos pobladores urbanos que participan en el proceso. El desarrollo de éstos cultivos se ha facilitado en la región debido a sus características geográficas y al aislamiento de muchas veredas y corregimientos que se encuentran muy distantes montaña arriba de los centros semi-urbanos, dificultando así las posibles incursiones de la DEA y el gobierno. Además, la corrupción generada por la industria en sus etapas agrícolas, manufacturera y exportadora tiende a presentar características locales con fuertes conexiones nacionales e internacionales.

Por lo anterior, cabe señalar que la relación de las Farc con los campesinos, también se cruza peligrosamente con la que establecen los paras y campesinos. Y el punto de confluencia que los paramilitares establecen con los pobladores del campo es a través de los laboratorios de drogas. En torno del negocio del narcotráfico se ha venido configurando entonces en la región (y en el país en general) una nueva fracción de clase¹⁶² que, gracias a sus gigantescas acumulaciones y los procesos de lavados de capitales, tiende a solidificarse como una fuerza cuyo peso en la estructura social no se puede desconocer¹⁶³.

Ha sido bien notoria la predilección de paramilitares y narcotraficantes por la posesión de tierras, y de allí la importancia de considerar la situación particular de este recurso en las diferentes zonas de implantación. En la zona del Centro y norte del Valle, los agudos conflictos por la tenencia de tierras se “resuelven” a partir del sacarse de encima al denunciante o al denunciado a manos de los grupos armados que proceden a eliminarlos físicamente. De otra parte, aunque ciertamente el despilfarro atenta contra una verdadera práctica capitalista “pura”, no es menos cierto que éste desempeña funciones específicas destinadas a propiciar la legitimidad; en efecto, al despilfarrar se redistribuyen ingresos, se exhiben sentimientos filantrópicos, se ganan admiraciones y, lo mas importante, adhesiones y lealtades necesarias frente a un eventual represión por parte de las autoridades o en casos de conflictos con enemigos. El despilfarro de los paras y narcos en esta zona de estudio adquiere un sentido estratégico político y cultural, al incrementar redes sociales por la diversificación de las inversiones en el lavado de capitales.

¹⁶² En otras palabras, en este proceso se tienden a consolidar clases sociales que, enriquecidas en la ilegalidad, la barbarie y la violencia, aspiran a convertirse en nuevas clases dirigentes. (Camacho: 1990: 208). En otra investigación más reciente, el mismo Camacho plantea como tesis (Camacho:2002: 5) que es muy probable que en Colombia algunos de los empresarios del narcotráfico en el mediano plazo se irán transformando de jefes o miembros de bandas delincuenciales en actores sociales legitimados localmente, a través de la utilización legal de sus capitales y del abandono de la actividad delictiva. En el proceso, no exento de contradicciones y conflictos como está sucediendo con la “fachada” desmovilizadora de paramilitares que en el fondo nadie se cree, algunos narcotraficantes tenderán a reciclarse primero en su papel de empresarios legales, lo cual les permitiría constituirse en una nueva elite empresarial para luego, debidamente “lavados” sus pasados y aceptados en las estructuras social y política local y regional, entrar a formar parte de las clases dirigentes locales. Existen serias dificultades para que el Estado pueda probar concluyentemente que los supuestos narcotraficantes son tales, a pesar de que en las respectivas regiones de residencia sea *vox populi* que sí lo son.

¹⁶³ No es de extrañar que a la “permisividad” y “alta legitimidad” que en algunas regiones gozan quienes se enriquecieron de manera rápida e ilícita, se sume la legalización de esa fracción de clase y la ocupación de posiciones de prestigio y poder que hoy le son negadas en virtud de su ilegalidad.

b) Interacción por simpatía o convicción: actores de “bajo perfil”

Por valores o convicción sería una segunda forma de adhesión. Los valores definen otra forma de adhesión. Y aquí podemos ubicar a los “simpatizantes de bajo perfil”, pues en el caso de los que se adhieren a las FARC, se cuidan de no quedar marcados o señalados bajo su bandera. Tales precauciones no están de más, pues en el momento que los de la vereda de enfrente (paras) ingresen a su zona, su alineación puede costarles la vida, aún cuando tengan el apoyo guerrillero, por la sencilla razón que éstos (los guerrilleros) tienen muchos flancos de ataque y defensa para ocuparse y no pueden quedarse simple y llanamente “protegiendo” a sus simpatizantes y colaboradores. De ahí que la “carne de cañón” del conflicto sean aquellos campesinos o sindicalistas que han dado sus voces de aliento- con todo y bajo perfil- a las causas guerrilleras. Tras la salida de sus “benefactores”, puede sobrevenir un periodo de terror y, con ellas, las sombras del paramilitarismo

Relación sindicalistas- FARC

Cabe señalar que los simpatizantes de “bajo perfil” son sujetos que saben que los órdenes fácticos cambian radicalmente y, por ende, el rumbo de la guerra puede deparar terribles sorpresas, aunque sean coyunturales. Para rastrear el botón de la muestra, recordemos que en el corregimiento de Galicia, hace 12 años, la guerrilla era hegemónica. Luego llegaron los paras del Bloque Calima e hicieron una “barrida”, exterminio selectivo y desplazamiento de aquellos pobladores que habían simpatizado y apoyado abiertamente a la guerrilla. Se habló extraoficialmente de más de doscientos cincuenta personas acribilladas durante un lapso de 9 meses, señaladas como “auxiliadores de la guerrilla” en una zona geográfica relativamente pequeña, es decir, casi una persona asesinada por día a manos de los paras ¿Quiénes dieron dicha información? Los delatores y “camaleones” que venden datos al mejor postor. Lo complejo aquí es que en numerosas ocasiones la información es falseada por un “sapo”, es decir, que aquel que señalan (los sapos) como enemigo del otro bando puede ser un deudor (o acreedor) del pasado reciente o presente del “sapo” delator, y por lo tanto al señalarlo como “simpatizante del otro bando”, lo que hacen es sacarse de encima a un deudor o acreedor. Esta situación de “desembarazarse” de una presión cotidiana como es una deuda o un cobro, es común en situaciones de guerra civil, en los que se mezclan situaciones, lealtades, se confunden afiliaciones, se hacen señalamientos apresurados pero malintencionados y se acude a “trabajos sucios” para cobrar no sólo deudas, sino venganzas y retaliaciones de órdenes personales.

Los sindicalistas constituyen, por tanto, “carne de cañón” expuesta a la intemperie, sólo plausible de encontrar una salida mediante el exilio. Sin embargo, debido a los contactos y redes que los sindicalistas mantienen con sus colegas en todo el planeta, es factible escaparse a tiempo si las precauciones se extreman. En ese sentido, los recursos que brinda la red Internet han traído beneficios a los obreros sindicalizados perseguidos por escuadrones de la muerte. Suerte que los campesinos no corren, cuando se exponen a un cambio drástico del actor armado predominante en sus veredas. A lo sumo, el campesino puede llegar a ser desplazado a las ciudades, para engrosar los cinturones de miseria y marginalidad que se ha evidenciado especialmente desde las trágicas arremetidas paramilitares de principios de los ochenta hasta la actualidad. Es decir, que las condiciones precarias y de extremo peligro son aún mayores para los campesinos que para los sindicalistas, sin que ello signifique que la situación de los segundos sea óptima.

Los simpatizantes de bajo perfil de los paras en el casco urbano

Si lo observamos desde el apoyo a las fuerzas militares, policiales y de inteligencia estatales, así como al paramilitarismo, los simpatizantes de bajo perfil constituyen un amplio grupo, pues la gran mayoría de la zona urbana votó por Uribe. Los dogmáticos y precavidos uribistas pululan por doquier. Todos son fervorosos apologistas de la “mano dura”, la pena de muerte y el control paramilitar.

¿Quiénes son estos simpatizantes del paramilitarismo que manejan un bajo perfil? Aquí se encuentra una heterogénea gama de personas e intereses. Desde el personal administrativo de la alcaldía y el concejo municipal, hasta personal gerencial y mandos medios de las empresas de la zona, que pagan cuotas mensuales a los paras, pero que se cuidan de quedar en evidencia pública, pues la “contra-inteligencia” guerrillera está en todas partes: hay ojos y oídos dispuestos a ver y escuchar más de la cuenta, por lo tanto, es vox populi el apoyo, aunque no sea tan sencillo que se evidencie los apoyos, por el mismo motivo que en las zonas rurales: aunque es más difícil que la guerrilla se “tome” o “apropie” de forma indefinida las pequeñas ciudades de Tulúa, Zarzal, Roldanillo, etcétera (debido a la resistencia y enorme presencia militar-paramilitar y narcotraficante), sí es más factible arremetidas guerrilleras por sorpresa, o ataques específicos contra tal o cual persona o familia (y no contra todo el perímetro urbano, más difícil de “copar” territorialmente hablando) o, en casos más reiterados, secuestros o extorsiones. De ahí que la amplia y heterogénea gama de perfiles bajos, sea precavida en sus manifestaciones públicas. Aún el día que Uribe fue reelegido, las manifestaciones públicas fueron discretas, es decir, realizadas en ámbitos particulares, vale decir, al

interior de los hogares. Alegría de los simpatizantes por el triunfo del proyecto de “mano dura” de la derecha colombiana, pero llevado a cabo en una discreta algarabía al calor de las cuatro paredes de cada cual.

Estos simpatizantes del proyecto político uribista y orden fáctico paramilitar, constituyen un número no desdeñable en los cascos urbanos. No es posible pensar lo contrario, desde que los resultados electorales arrojaron un fuerte apoyo a la reelección uribista en mayo de 2006, un domingo que la derecha colombiana catapultó como verdadera “tabla rasa” sobre la oposición de los partidos liberal y el izquierdista Polo Democrático Alternativo. Sin embargo, cabe también destacar la abstención electoral, que implica una incógnita tal vez indescifrable: ¿cuántos de los que no salieron a votar simpatizan con uno u otro bando pero no lo hicieron por temor a ser identificados? (aún siendo el voto “secreto”)

Una gran parte de estos simpatizantes de bajo perfil, sacan provecho en mayor o menor medida de la “bonanza” coquera y amapolera, pues el mercado interno que constituyen las tiendas de abarrotes, estaciones de venta de gasolina, centros de venta de repuestos, talleres de mano de obra mecánica¹⁶⁴, provisión de “empleos” (aún siendo informales pero bien pagos), bares y cantinas, prostíbulos, talleres mecánicos, aún siendo pueblos urbanos de pequeña envergadura, sí provoca la circulación de altas sumas de dinero, construcción de enormes y fastuosas casas y una sensación de riqueza desmedida, que llevan a la ambición, avaricia y envidia, así como un cómodo y cómplice silencio: si ellos mueven todo el mercado interno de la zona, y “todos estamos beneficiándonos” de ello (y además, mantienen a raya a los guerrilleros), entonces la situación tiende a ser de apoyo, aunque más no sea sino con un perfil bajo y moderado.

c) Interacción por la sobrevivencia: actores ciegos, sordos y mudos.

Aquí como ya lo mencioné anteriormente, se encuentra el “grueso” de la población). Por intimidación o miedo se alcanza la obediencia debido a razones de seguridad o de supervivencia. Como afirma el historiador Hobsbawm (2002:25), gran conocedor e investigador de la realidad colombiana: *“guerrilleros y bandidos dependen de la absoluta complicidad de la población local y allí donde (...) la población se les muestre hostil, se obtiene fácilmente su silencio por el terror”*.

¹⁶⁴ Dada la exposición permanente de automóviles lujosos y camionetas 4x 4 de vidrios polarizados. Cuando se trata de mantenimiento mecánico, pues se está fomentando un enorme caudal de mano de obra en la región.

Siendo un espacio de tensa relación frente a los actores armados, los pobladores interiorizan la estrategia del “no querer saber de más”, no hablar ni preguntar nada, y mucho menos detenerse ante cualquier evento violento. Ello lleva a una escenografía tensa, en el que se puede hablar de fiesta, fútbol y del clima, pero no de política ni de violencia (es decir, de guerra).

Respecto a las relaciones de convivencia, es pertinente señalar que los campesinos, a pesar de los entrecruzamientos de la guerra, tienen una experiencia acumulada que les hace identificar (o sospechar la identidad) de tal o cual grupo, a pesar de los camuflajes utilizados o la “inteligencia militar” desplegada. Por ejemplo, cuando estos (campesinos) observan que a lo lejos viene un grupo de hombres armados, rápidamente deben utilizar su “olfato” para descifrar, en cuestión de pocos minutos (de segundos quizás) quiénes “son esos”.

De esa destreza para identificarlos se juega su propia vida y las de su familia: el tipo de vestimenta o las formas de caminar, el largo de las botas que usan los hombres, si tienen o no gorras militares, cómo tienen rasurado el cabello (hay guerrilleros con cabello corto y otros “rapados”, al igual que los paramilitares), si usan bigote o barba, si hay o no mujeres en sus filas, la edad de los que vienen marchando hacia ellos, etc. Y otra cuestión que vale también destacar hace referencia a las exigencias de hospedaje, alimentación y cuidados que se le plantea al dueño o trabajador de una pequeña o gran parcela (finca) con el objeto que “atienda” a guerrilleros, paramilitares o ejército. Pero aquí es mejor que la voz de un entrevistado, don Justo, tome la palabra:

“Uno ve pasar columnas y sabe con esa presencia que son ellos, la guerrilla de las Farc. Pero en general pasan y no se quedan. Eso sí, si quieren quedarse, toca dejarlos, si piden comida pues hay que darles comida y techo, y si pasa el ejército toca darles igual comida y techo, si ellos lo piden, toca. O sea que al campesino si pasa un grupo de tal o cual, le toca hacer lo que ellos quieren. Si el ejército dice que “vamos de paso” pues uno les deja su propia cama y el mejor cuarto (recámara). Uno no puede negarles nada...si uno dice que no, entonces empiezan a tenerlo en la mira y entonces lo pueden quebrar (sic).

A mí me han tocado pasar sustos cuando ya se presentan enfrentamientos, cuando ya se sienten los helicópteros y los aviones y uno siente los bombarderos, y no sabe uno a quién le van a matargrupos de campesinos cogiendo café y tramjji los masacran y listo...entonces la tranquilidad desaparece, vive uno en una zozobra.....

Inicialmente porque a mí me pasó, estaba yo arriba y empieza uno a ver una columna que viene armada, uno se pregunta primero entre nosotros quiénes soncuando empiezan a pasar empieza uno a ver caras, pero resulta que son muy tácticos, muy inteligentes porque mandan a un grupo de jovencitos adelante y uno empieza a ver atrás a los más viejos y empieza uno a ver que tienen peinilla, que andan con ollas, bueno eso lo cargan todo, pero.... uno ve

mujeres y entonces zas sabe uno que son guerrilleros. Eso sítodos con botas de caucho. Los paramilitares si andan más organizados que la misma guerrilla, se parecen al ejército, en realidad son del ejército.....porque todos son retirados del ejército y estuvieron en el ejército, ahí están repartidos, hay veteranos y gente joven, el paramilitar siempre tiene el pelo cortico. El soldado también tiene peluquiao (sic) bajito. De los guerrilleros uno ve a unos con uniforme de fatiga, uniforme verde caqui con cabello largo, barbados.... a la guerrilla usted siempre los ve generalmente vestidos de fatiga.....a ellos los ve con camuflado. Las Farc utilizan un brazalete. Pero ellos, los guerrilleros, se las conocen todas. Para el soldado que va recién salido del cuartel y está recién llegado sin experiencia, es muy jodido. La guerrilla se las huele, ya se conocen todas las tramas, se conocen todas las zonas. Aunque estén de civil (inteligencia militar). Ya también el campesino empieza a detectar....a detectar esa vaina” (Don Justo, poblador rural)

Quando hay algún problema que los involucren, los campesinos tienen dos opciones: o dan la cara o se escapan de la zona. La segunda opción les cierra las posibilidades de estar con sus familias o de trabajar la tierra que les pertenece. Si escogen la primera opción, deben tener gran precaución en lo que hacen, dicen o callan. Algunos, más experimentados y conocedores de la zona y de los guerrilleros, saben cómo manejar la situación. Veamos la anécdota que nos presenta un entrevistado, don Filomeno, que siempre ha tenido cierto liderazgo comunitario en la zona rural del centro y norte del Valle del Cauca:

“Estaba un día trabajando la granjita cuando me encontré con un señor amigo que al verme se asustó y al abrir esos ojos me di cuenta qué estaba pasando. El hombre me dijo: Filomeno, váyase, váyase hombre por favor que lo van a matar” ¿Pero qué pasa? Le pregunté. “El comandante Oscar dio la orden que lo mataran”. Ese era el nombre del comandante del Frente de las Farc de la zona. A mi se me puso el cuero de punta, se me nubló el corazón (sic), le dije yo a él pues que qué había hecho de malo, yo no he matado a nadie, no he robado a nadie, no he sapeado a nadie, lo único que he hecho es defender los derechos de los campesinos, hacer un sistema de riego y trabajar para la comunidad. Eso es lo único que he hecho acá, nada mal. Dime qué he hecho mal. Pero el hombre me insistió “Váyase, don Filomeno, no sea terco”. Y me escondí por unas semanas en otro pueblo mientras se aclaraban las cosas.

Unos días después la guerrilla subió y preguntó a los vecinos míos: ¿Qué hay de la vida de don Filomeno? “Vean, díganle a don Filomeno que no se meta en política, cero política y que abra el ojo que una vieja de Ceilán lo ensució con nosotros (sic) pero ya nosotros hemos averiguado todo y ya no tenemos nada contra él”. Pero si no me hubiera ido primero me hubieran matado antes de averiguar (Filomeno, poblador rural)

Quando se encuentran pobladores desarmados con guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes o miembros del ejército, la situación puede llegar a ser tensa, de acuerdo a muchos factores. Por ejemplo, el ejército hace “batidas”, es decir, retenes especiales en los que detienen a un autobús, hacen bajar a todos los pasajeros, solicitan documentos, “palpan” corporalmente a todos los presentes en tal medio de transporte, les revisan sus pertenencias personales, les hacen preguntas, en fin, todos requerimientos

aparentemente regulares, pero cargados de arbitrariedades y abuso de autoridad. De igual manera, la guerrilla también efectúa “retenes” especiales para verificar en las carreteras cercanas, especialmente las que comunican a pueblos, corregimientos y veredas de montaña, quien entra y quien sale de la zona. A su vez, los paramilitares vuelven a “solicitar” a los pasajeros de los buses sus cédulas y tarjetas de identidad. Paradójicamente, todos los grupos armados hacen este tipo de procedimiento, por lo que no es raro que en un mismo trayecto de 250 kilómetros, por ejemplo, entre la pequeña ciudad de Tulúa y Cali, en plena carretera, los pasajeros de un mismo medio de transporte tengan que detenerse para ser “controlados” en sus identidades y verificar “antecedentes” y ofrecer ciertas aclaraciones tanto a las Fuerzas Armadas, como a los narcos, paramilitares y guerrilleros. Veamos el siguiente testimonio de Dagoberto, un joven estudiante que a pesar de su corta edad, sabe cómo transitar, resguardarse y “comportarse” en este contexto:

“A veces los viajes intermunicipales que deberían ser cortos, se hacen eternos, porque en un viajecito en bus que no debe durar más de dos horas, llegamos en tres horas y media, pues a uno lo requisan todos esos tipos cuantas veces se les da la puta gana. Por ejemplo, cada 30 kilómetros montan de sorpresa un retén relámpago los paras o el ejército, piden papeles y buscan armas, luego a los quince minutos, nos detienen los guerrilleros y lo mismo. Y se queda uno con el presentimiento que no vaya a ser y nos asaltan delincuentes comunes en carretera. Ya sería el colmo que todo pasara en un solo día, pero no se extraña uno que puede pasar, eh? Pero bueno, ya estamos acostumbrados, aunque no deja uno de sentir temor, especialmente que lo lleguen a confundir a uno ¿no? Por ejemplo, no falta el que se parezca físicamente a otro y zas, lo van bajando, o los apellidos que son iguales ¿Cómo es que se le dicen? Ah, sí, los homónimos. Eso sí que es muy peligroso por aquí” (Dagoberto, estudiante, poblador urbano)

Y respecto a las actitudes de precaución y cautela ante un encuentro “cara a cara” con actores armados, vuelve a confesarnos Dagoberto su experiencia:

“Si yo me cruzo con estos traquetos y narcotraficantes, trato de venirme lo más suave posible, ni mirarlos a los ojos, ni conversar con ellos. Si uno los mira de frente, se sienten como desafiados, no les gusta que los miren, pienso que estas personas, narcotraficantes y paramilitares se creen que tienen mucho poder, pues tienen problemas psicológicos, ante ellos uno tiene que manejarse con cuidado, pues se creen lo máximo, son arrogantes y muy ignorantes”.

Pues con un guerrillero es como diferente, aunque no les digo que soy estudiante de universidad pública, pues de pronto me llevan o me secuestran pues porque uno les es útil (sic). Si me los encuentro en un bus, o en un retén guerrillero, les digo lo más normal que pueda, que soy un empleado de un supermercado, o algo así, aunque son más considerados con la gente. Pero no estoy siendo muy objetivo en eso, porque soy estudiante de universidad pública y pues uno tiene muchos compañeros estudiantes, como que he tenido más contacto con gente de izquierda” (Dagoberto)

Por ello, desconfiar es una virtud, condición mínima para seguir viviendo, en tanto las relaciones comunicativas se hacen cada vez más distantes. Las relaciones ya no se hallan mediatizadas por ninguna forma de simbolización, sino que se pasa a las formas de violencia directa. Vale la pena traer a colación aquí a Elsa Blair (2003: 23):

“La violencia es mucha, es excesiva, y muchos son los símbolos que la nombran pero ellos en su exceso no comunican. La violencia, a un nivel de excepcionalidad como el que padecemos en Colombia, provoca la negación de la violencia, su sustracción: es como si no estuviera ocurriendo o, peor aún, como si ella ocurriera en otra parte. Su exceso la vuelve improbable. Y la inflación del símbolo en la violencia hace que lo que está acaeciendo en la realidad no ocurra en la palabra y, en consecuencia, no se nombre, se niegue”

No ver lo que no conviene, no preguntar más de lo pertinente, no protestar en ámbitos de intereses de los armados, no escuchar donde no lo han llamado, entre otras prohibiciones municipales, constituyen experiencias socialmente aprendidas por pobladores urbanos y campesinos. Al taciturno y a veces complejo mundo campesino al que cuesta entrar si no se tiene un conocido que medie en la presentación del investigador, se suma el carácter reservado y desconfiado del hombre del campo, curtido en múltiples experiencias difíciles, violencias endémicas y guerras cíclicas que no terminan simplemente porque se firmen acuerdos de paz. El campesino duda en abrir sus corazas. Por su experiencia no se abre hasta no conocer al extraño, aunque el poblador urbano tampoco es precisamente abierto por sus propios temores y “fantasmas” construidos

Sin embargo, de puertas para adentro, en la intimidad del hogar, percibí que esta prevención de los ciegos, sordos y mudos se disipa. Aunque no se habla abiertamente frente a los hijos (pues se puede intuir aquí que, mientras menos información sobre tal o cual actor armado sepan ellos, menos errores cometerán en su diario acontecer), éstos saben e intuyen desde la distancia de sus recámaras lo que está sucediendo. En las conversaciones sostenidas, hemos percibido cierta complicidad- expresada a través del rumor y, paradójicamente, con cierta dosis de “humor”- entre cónyuges o adultos hermanos o adultos con sus padres ancianos. Burlarse del guerrillo o del paraco, o estar al día con el último chisme del pueblo, otorga una inmunidad puertas adentro que no podrían gozar en el exterior. Intuimos también (o especulamos también porque tal vez nunca lo sabremos realmente) que el rumor, el chisme y el humor se manifiestan como espacios “aliviadores” de las presiones cotidianas.

De ahí que sea pertinente señalar que la estrategia del CSM se lleva a cabo de puertas para afuera, en el peligro municipal del día a día. Es una estrategia implícita, no pactada

ni negociada entre los mismos pobladores, pero que sí es enseñada a los descendientes, a modo de “herencia social” o “conocimiento común” que los padres ofrecen a sus hijos a partir de cierta edad en que ya poseen cierto uso de razón para comprender lo que sucede a su alrededor.

El sistema de conocimiento que poseen los pobladores en el caso del municipio colombiano que aquí nos ocupa se presenta a modo de recetas -dignas de confianza o de desconfianza, según sea el caso- para interpretar el mundo social y manejarse en el día a día. Por un lado, dirá Schutz, la receta actúa como un precepto para las acciones y, de este modo, sirve como esquema de expresión: quien desee lograr determinado resultado debe proceder como lo indica la receta suministrada para este propósito. Por otra parte, la receta sirve como esquema de interpretación: se supone que quien procede como lo indica una receta específica procura alcanzar el resultado que se correlaciona con ella. Así, es función de la pauta cultural eliminar dificultosas indagaciones ofreciendo directivas ya listas para el uso (cotidiano).

De acuerdo a diversos testimonios recogidos, el Estado no está ausente pero su presencia es diferencial y desagregada, de manera que algunos de sus organismos de seguridad o de justicia establecen relaciones de cooperación y de complementariedad con algunas sociabilidades, incluso armadas o criminales (los paramilitares obviamente son los “aliados” del ejército y la policía). Es decir, siguiendo a María T. Uribe:

Ante la dificultad real por imponer, hacer reconocer y acatar el orden republicano ciudadano y por el camino de las transacciones y los acuerdos precarios, termina por negociarse el desorden dentro de ciertas reglas de juego y regularidades más o menos explícitas, que sólo existen como tales en esa zona difusa, semipública—semiprivada—donde los órdenes políticos institucionales y los ordenes sociales se entrecruzan, es decir, en los entrelazamientos, como diría O’ Donnell”. (Uribe :2002:170)

Paradójicamente, a pesar del desarrollo de una fuerte historia de negación de parte del ejército colombiano a los defensores de los Derechos Humanos (pues los “asocian” a fuerzas de izquierda y, tergiversando aún más la situación, como simpatizantes y colaboradores de la guerrilla), en Colombia se ha observado tradicionalmente una “subordinación” militar a las instituciones del régimen político de democracia representativa. Los pocos casos de amagos de intervención militar abiertas han sido típicamente defensivos, cuando la institución ha percibido una amenaza a los principios básicos que rigen su actividad. Esta subordinación no se puede explicar sin entender la identificación ideológica que tenían los militares con el bipartidismo tradicional (especialmente apoyando al partido Conservador), como parte del sentimiento de

pertenencia partidista que los colombianos mantuvieron claramente hasta los inicios del Frente Nacional”.

Dados los cambios de predominio militar de los “paras” y de los guerrilleros en la zona en diferentes momentos en los últimos años, los pobladores se adaptan a estos cambios de grupo guerrero “dominante” en aras de sobrevivir. Aquí cabe señalar, trayendo a colación los hallazgos del epígrafe anterior sobre las Justicias Paraestatales), la similitud de los diferentes códigos de conducta que imponen los distintos actores armados a los pobladores civiles, porque esta adaptación al nuevo orden de la justicia (pasar del dominio de paras al de guerrilleros o viceversa) indicaría homologías en los órdenes impuestos por lo guerreros y en sus códigos de conducta.

Todo miembro nacido o educado dentro del grupo acepta el esquema estandarizado ya elaborado de la pauta cultural recibida de sus antepasados, maestros y autoridades como una guía indiscutida e indiscutible en todas las situaciones que se dan normalmente dentro del mundo social (Schutz: 1974). Esta concepción natural del mundo incluye los supuestos "obvios" pertinentes a un grupo social determinado.

El pensar habitual puede ser mantenido mientras confirmen su validez ciertos supuestos básicos: 1) que la vida, especialmente la vida social, seguirá siendo la misma que hasta ahora; es decir, que volverán a presentarse los mismos problemas, que exigirán las mismas soluciones, y que, por lo tanto, nuestras experiencias anteriores bastarán para dominar las situaciones futuras; 2) que podemos confiar en el conocimiento recibido de nuestros padres, maestros, gobiernos, tradiciones, hábitos, etc., aunque no comprendamos su origen y su significado real; 3) que en el curso ordinario de las cosas basta, para dominar o controlar los sucesos que podemos encontrar en nuestro mundo de la vida, saber algo acerca de su tipo o estilo general; y 4) que ni los sistemas de recetas como esquemas de interpretación y expresión, ni los supuestos básicos subyacentes que acabamos de mencionar, son asunto privado nuestro, sino que son igualmente aceptados y aplicados por nuestros semejantes (Schutz: 1974)

Con un precedente como este, el manejo de la *receta* resulta en definitiva crucial, con miras a orientar lo que serán las acciones futuras; el campo de relación se va haciendo estrecho, pero como se verá, en últimas esa actitud recaerá sobre quienes la incitaron, es decir, sobre la guerrilla misma; en adelante, ese actor armado podrá ser también objeto de distanciamiento, de reprobación a sus actos, lo que plantea una disyuntiva de

aceptación entre los que en definitiva asumen una militancia- algunas veces abierta otras no tanto-, y los que no están de acuerdo con la presencia y los actos de la insurgencia guerrillera. Estas dos posiciones, más una tercera de matices ambivalentes al respecto, configuran tipologías del habitante urbano y rural en el municipio. Lo anterior significa, en suma, que el puente que separa los rencores que un poblador puede tener por el asesinato de un ser querido es muy corto respecto a la posibilidad que este actor/poblador se decida a colaborar con el grupo armado contrario para cobrar a su modo una deuda de sangre o venganza.

“Descubiertas” las formas y tipos de interacción presentes en la zona, es pertinente hacer una última observación. Aunque centrífugamente todos los interactores comparten espacios sociales de manera ineludible, centrípetamente representan tres “milieu” distintos (los que están con la guerrilla, los que apoyan y sacan provecho de los narco-paras y los que se hacen los “ciegos”). Los milieu impuestos por los guerreros en esta zona del Valle del Cauca nombran, distorsionan, sobredimensionan o minimizan, niegan, dosifican, encubren, evaden y justifican las acciones violentas con el objeto de ejercer mayor control social de los cuerpos y de los lenguajes. Produce entonces una embriaguez del silencio y la pertinencia de estrategias de no uso de los sentidos por parte de los pobladores (ciegos, sordos y mudos). El anestesiamiento y la amnesia han hecho mella en las voces de los pobladores.

4.3 Santuarios y espacios de inmunidad: fronteras de la violencia

El centro del pueblo refleja el flujo social del mismo. Ahí está el parque principal, la Parroquia San Bernabé y, muy cerca, a seis calles de ahí, el mercado. Además, el prostíbulo también se encuentra cerca, apenas a ocho calles de la parroquia, aunque al lado de este templo religioso se encuentren dos bares que concentran a los paras y narcos: de estos, es el bar Trejos el que destaca en el centro porque ahí se producen tres o cuatro muertos por fin de semana y, sin embargo, nunca permanece vacío, pues es un lugar de encuentro “social” muy frecuentado por los pobladores.

Aquí bien vale detenerse en la consideración por el uso del espacio exterior de los sujetos en contraposición con el espacio íntimo y familiar. El uso del espacio es la manera como los sujetos se apropian del territorio y lo construyen estableciendo relaciones con dicho espacio y, a la vez, con los otros. El uso se refiere a la interrelación que establecen los pobladores en su vida cotidiana con los espacios que el pueblo les ofrece, generalmente como lugares de encuentro en donde se producen apropiaciones

no sólo sensoriales, sino también simbólicas. Acciones sustentadas en experiencias empíricas con el municipio: trazar algunas rutas, encontrarse en ciertos senderos, visitar familiares con frecuencia, etc. Sin embargo, no es un uso “tranquilo” y “sosegado”, pues se encuentra restringido por la presencia e incursiones de los guerreros, así como por ciertas normas formuladas por estos y las justicias paraestatales que han impuesto.

Aunque los actores armados “copan” todo el territorio y controlan socialmente a las poblaciones, existen tres espacios de encuentro que tienen la particularidad de no registrar muertes: se trata del mercado de alimentos, la parroquia católica y el prostíbulo.

Este epígrafe remite a una paradoja, que no es de fácil comprensión para el lector ajeno a la realidad colombiana: ¿Cómo es posible que en una guerra irregular como la colombiana, atravesada por la crueldad y el desconocimiento del “otro”, pueda haber *espacios de inmunidad*, es decir, en los que no se producen enfrentamientos entre guerreros?

A esos lugares los denominaré de aquí en más “Santuarios”, entendiéndolos por ellos, los espacios donde la violencia de los actores armados no está presente. La pregunta sociológica relevante, para dar cuenta en las siguientes páginas, es por qué en los denominados santuarios se puede convivir, a pesar de las diferencias ideológicas, políticas y de intereses: ¿Qué tienen en común estos tres espacios para que se respeten los guerreros?

El santuario remite a un espacio de encuentro, de relajación para algunos (los hombres), sagrado para una mayoría católica (el templo) y primordial para todos (mercado de alimentos). En los denominados “Santuarios” se puede convivir porque, sencillamente, se trata de tres espacios *vitales* para el equilibrio emocional y biológico de esta pequeña sociedad. Se trata en suma, de un factor común denominador: los tres espacios remiten a *necesidades básicas* del diario vivir de sus pobladores.

Considero, a modo de tesis para este epígrafe, que el factor que disuade es realmente el *miedo*, elemento que permite-extrañamente- poner de acuerdo al universo social municipal, bajo la convicción de que resultaría muy caro (“a todos”), arriesgar aquello que se valora, porque en realidad se lo necesita. Por ello, la violencia armada lo que lograría, en cambio, es colocar en peligro la satisfacción de dichas *necesidades*,

El temor a perder esos bastiones de equilibrio emocional, espiritual y físico (prostíbulo, parroquia y mercado de alimentos), conlleva “forzadamente” a la configuración del “santuario”: pero más que por convicción, es por una razón de peso, vale decir, por *miedo*: 1) *miedo* a perder la consideración divina y, por tanto, arriesgarse a la no absolución de sus pecados; 2) Por el *miedo a cortar el circuito alimentario*; 3) *por el miedo* a perder un espacio de desahogo sexual en un mundo limitado (tanto en los límites matrimoniales, como en los límites de la oferta en el uso del tiempo libre).

Intentaré desarrollar cada uno de estos *miedos*:

1) El primer *miedo* (a la ira divina), permite a guerreros y desarmados, expiar las culpas, sentir que Dios perdona “a pesar de todo”. Se trata de un espacio que los actores armados “necesitan” para que el acto de matar no sea tan pesado, es decir, les permita vivir y dormir “con ello”. De ahí que es necesario establecer un pacto de “no agresión”. Siendo la parroquia un espacio “neutro”, si se llegase a “profanar” el templo, es más lo que se perdería que lo que se gana, es decir, todos perderían: el profanador (legitimidad, apoyo y lealtad, así como “perdón”) así como los demás (un espacio para encontrarse con Dios).

2) El segundo *miedo* (el ámbito de provisión de alimentos), requiere una doble lectura. Por una parte, del mercado de alimentos devengan sus ingresos los campesinos, cultivadores, productores e intermediarios. Y, por otra parte, si se llegase a poner en peligro la continuidad de este espacio- ya sea por un atentado, una masacre colectiva, amenazas y listas negras, éxodo y desalojo- entonces se podría provocar un déficit alimentario o, como bien denomina técnicamente la FAO, una situación de “inseguridad alimentaria”. Y tras cortarse los circuitos de cultivo, recolección, venta y compra de alimentos, todos perderían: los campesinos que venden y los pobladores del casco municipal que compran. Aunque unos y otros se perciban como colaboradores y simpatizantes del otro bando. Los de aquí y los de allá, tiros y troyanos, se necesitan recíprocamente, en una clara y evidente relación de interdependencia. Sin campesinos, no habría quién cultivara alimentos, y viceversa, sin consumidores o compradores, no habría a quiénes venderles alimentos.

3) El tercer miedo es más poroso y, por tanto, tal vez más difícil de descifrar y entender para un observador ajeno a la realidad colombiana, sobre todo la de las zonas rurales y pequeños poblados “semi-urbanos”. Tanto el burdel “El Recreo” como el bar “Trejos” constituyen los dos escasos lugares donde los hombres jóvenes y adultos se encuentran. Con una escasez de oferta en recreación, sumado a una cultura machista, en la que ir “de putas” es tan natural como ir al cine, a comer, a jugar billar, etcétera-como se dice en la jerga masculina-

Como ya se planteó en el capítulo 3 (¿Por quién se “silencian” las campanas? Colorario normativo en el mundo de la vida vallecaucana: las justicias “para-estatales), los paramilitares “administran” y “gerencian” burdeles y prostíbulos, mientras que las FARC se han manifestado en contra de la prostitución, pero no han podido eliminar esta práctica social tan corriente en la rutinaria “agenda” semanal de los campesinos.

Cabe enfatizar que los pobladores de zona urbana y rural, acuden semanalmente a los burdeles, para satisfacer deseos y fantasías sexuales que, tal parece, no llevan a cabo en sus matrimonios o noviazgos. La figura de la “prostituta”, así como la “institución” del burdel, forman parte integral de la esencia del colombiano rural, vale decir, de su proceso de socialización. Y en ese sentido, aunque hago referencia a “zonas urbanas”, lo cierto es que se trata de pequeños centros urbanos que, como ya lo he reiterado en otros lugares del estudio, tienen características más cercanas al mundo rural que al urbano. La novia y la esposa son figuras que merecen “respeto”, en cambio, la que peyorativamente se denomina como “puta”, es objeto de búsqueda de aquellas represiones típicas de un ambiente machista, homofóbico y limitado.

Al burdel ingresan campesinos, sindicalistas, ganaderos, comerciantes, en fin, “todos”, haciendo de este, el lugar donde se encuentra el universo masculino de los municipios, corregimientos y veredas, sabiendo de antemano que el “otro”- aquel que está sentado en la mesa de al lado tomando cervezas y riéndose-, a pesar de ser enemigo (sea narco, para, guerrillero, o simpatizan o colaborador de estos), no desea meterse en problemas, al igual que ellos.

En el bar Trejos se juegan billar, póker y otros juegos de cartas, se hacen apuestas de toda índole (obviamente no controladas por el Estado), y en su mayoría los asistentes son hombres. Frente a la plaza y al lado del templo católico, el bar Trejos señala la conjunción entre alcohol, armas y poderes encontrados, señalando aquí además que cada fin de semana el número de muertos en dicho lugar siempre sobrepasa la media docena y, sin embargo, dicho local nunca cierra sus puertas a su peculiar público. Uno de los entrevistados, Clemente, asiduo cliente del lugar, relató con lujo de detalles uno de los habituales asesinatos que ahí se produce:

“En el bar Trejos hubo tres muertos a cuchillo limpio el sábado pasado. Pero uno de ellos fue por ajuste de cuentas. Dos tipos bravos se enfrentaron entre sí, se dieron (sic) en la puerta. Yo estaba por la calle y ví que en una de las puertas dejaron al muerto. Según me comentaron, fue porque un tipo le ganó jugando a las cartas a otro que es policía, apostaron plata pero el que perdió apostó plata que no era de él, sino dinero de la esposa, el carro de la esposa y

no pudo responder..... así cualquiera apuesta, con la plata de la esposa (se ríe). Resulta que el perdedor no respondió y dos noches después volvieron a encontrarse. Según cuentan, el policía dijo que iba a jugar otra vez a las cartas pero que ya venía, que iba a su tiendita y al volver el tombo le dio su cuchillazo por aquí (imita un cuchillazo por la nuca y luego por el cuello), lo alcanzó en el suelo con cuatro o cinco puñaladas. Nadie se metió, aunque alguien amagó a intervenir y el tombo le dijo ¿Usted por qué se mete? Y el tipo estaba desangrándose, eso fue mucha sangre. Y el policía de civil salió lo más fresco (sic).

¿Y sabe que lo fue lo peor? Que el tipo ahí tirado seguía vivo, muy mal, desangrándose, pero estaba vivo. Pero nadie lo llevó. Nadie quiso meterse. El herido ahí quedó como 20 minutos, imagínese en “Trejos” a sólo 200 metros del hospital y recién a los 20 minutos apareció la policía, porque nadie se metió, el tipo estuvo ahí tirado desangrándose y nadie lo llevó sino lo recogió la policía. Y eso que Trejos es propiedad de la Iglesia, está en arrendamiento. Y el tipo se murió en el hospital, porque ya se había desangrado mucho. Y mire que la estación de policía está al frente de la plaza, apenas a 50 metros de ahí” (Clemente, poblador urbano)

*Los encuentros en la parroquia:
De pecadores y pecados, de culpas y absoluciones*

Al hacer referencia al templo, hay que primero detenerse en la plaza, pues ambos (templo y plaza), son los espacios de interacción por excelencia. Los pobladores hacen uso diario, tanto del parque como de la parroquia San Bernabé, perteneciente al culto Católico. No falta nunca el paseo dominical por las calles y el ingreso a la misa ese día. La significación de estos lugares claves en la socialización de los pobladores, está dado por un hacer respecto a la vivencia del mundo real. Por medio de este hacer se organiza la experiencia cotidiana, es decir los pobladores fabrican su mundo social. La interacción social al fin de cuentas, es un orden negociado, temporal, que debe ser reconstruido en forma permanente, con el fin de interpretar el mundo.

Los pobladores forman en la parroquia, el templo y el mercado, redes de conversación y encuentro. Las redes remiten a espacios de confraternidades y solidaridades más que todo familiares, que se dan cita en estos espacios “públicos” específicos. Pero ¿de qué se habla? Del campeonato de fútbol, del tiempo y de las cosechas, del último chisme del pueblo, de modas, de recetas de cocina, de los hijos y las familias en general. Pero nunca se hace referencia a la guerra, a la política, al conflicto armado. De eso no se habla.

La plaza y el templo entonces se “usan” con diversos objetivos, que sintetizaré en tres:

- a. Como punto de encuentro y de citas esporádicas (familiares, asuntos amorosos, etc)
- b. Como lugar de referencia en el Centro, tanto para lugareños como para los escasos forasteros.

c. En el caso particular de la plaza, se “usa” como lugar de descanso, debido a la existencia de bancas y espacio para conversar. Las más asiduas son las mujeres ancianas, que hacen “antesala” en la plaza antes de ingresar al templo católico. Ese mundo simbólico de los ancianos/as que “usan” el espacio público, en éste caso la plaza principal, está conformado por valores de defensa de su núcleo familiar e indiferencia por el de otros. Cada cual defiende su ámbito consanguíneo.

La centralidad del espacio estudiado (plaza, templo y mercado), lo es como punto de encuentro, más no de poder (ésta característica le pertenece a los actores armados). Estos espacios de encuentro, son lugares de constitución de lo simbólico y puesta en escena de la ritualidad municipal. Sin embargo, es pertinente señalar que los pobladores “usan” la zona en forma segmentada, es decir, la recorren por fragmentos, debido justamente a la presencia de los guerreros, así como sus testaferros, “sapos”, lavaperros y soplones.

En el pequeño centro del municipio (al igual que los centros de todas las veredas y corregimientos de la zona) se encuentra la organización espacial y territorial de las relaciones sociales. De manera fragmentaria, espontánea o motivada, obedeciendo a factores de necesidades diarias, de carácter familiar o vecinal, los pobladores se encuentran, se conectan o rechazan, y se localizan en tiempos y espacios determinados.

Los pueblos de la zona no solo son conglomerados humanos, ya que la significación de sentidos y la construcción social cotidiana, por parte de sus moradores, implican diversas formas de uso y encuentro. Tanto la plaza como la parroquia católica San Bernabé, constituyen los dos escenarios de mayor interacción que permiten una construcción y entramado social, así como la constitución de las rutinas cotidianas. La plaza, el templo y el mercado son ámbitos fundamentales para la mediación entre lo individual y lo público, son las instancias más usadas de regulación de los intereses. Pero dicha “función” mediadora de estos tres lugares señalados realmente está coercionada y restringida, pues si bien se puede hacer “uso” de estos, lo cierto es que no se puede hablar nada relacionado con el conflicto armado.

Todos, guerrilleros camuflados, policías, soldados y narcos, campesinos y pobladores urbanos se encuentran ahí. Unos se conocen, otros ni se han visto o no quieren percatarse de la presencia del otro. Están en un lugar neutral, un espacio que debe ser respetado. Una situación especial, muy sui géneris, no cabe duda.

Las ofrendas o los diezmos son extremadamente generosos. Generosidad en la ofrenda, generosidad en la oración y fuertes golpes de pecho: señales que reflejan un desdoblamiento en los parámetros de lo “moralmente aceptable”. Los rezos entonces forman parte de una extraña combinación con el crimen. Ambos se conjugan en un solo acto. Pareciera que no existe contradicción alguna en el hecho de matar y rezar al mismo tiempo. La religión en Colombia (concretamente el cristianismo y con mayor delimitación el catolicismo apostólico romano), ha tenido una postura ética ambigua frente a ciertas actividades delictivas. Con todo y el uso de estas prácticas, para Elsa Blair, no es muy claro el sentimiento religioso al que apelan los asesinos en Colombia:

“Por momentos, es sólo una instrumentalización: los rezos y el agua bendita para las balas son más expresión de un rito-como rezar un talismán a modo de protección- que expresión de un fervor religioso, aun cuando sí se encuentra en ellos esa mentalidad mágica que constituye el sentimiento religioso. En otros casos, es la franca utilización, como lo dejan ver Bedoya y Jaramillo. El sicario sabe que en el “mercado” en el cual está inmerso hay mucha oferta: si él no mata a quien le asignan, otro lo hará. Es mejor asegurar los pesos que imbuirse en consideraciones éticas: si le pagan por matar a alguien es porque ese alguien tiene que ser un “faltón”. Además, entre los más religiosos cabe aquí una consideración de índole “al tipo ese le llegó la hora. Dios ya quería llevárselo. Yo solo soy un instrumento”. (Blair: 2004: 103-104).

“El Recreo”: el burdel del goce evasivo

*“No temo, aunque el miedo me acompaña todos los días.
Y en el fondo no puedo tener miedo a que me maten,
porque yo ya estoy muerto” Frase de Pablo Escobar*

Después de las seis de la tarde, el encuentro social masculino se concentra en bares, cantinas y prostíbulos.

Cabe señalar que los dos burdeles del pueblo son semejantes. Uno se llama “Doña Elisa” y ya está en sus últimos suspiros, pues no ha podido “competir” con el de los paramilitares (“El Recreo”), que no sólo es el más grande y cuya clientela es más numerosa, sino que trae consigo a las mujeres más jóvenes y según la opinión de los hombres del pueblo, las “chicas más bonitas”.

El prostíbulo (burdel), es un espacio de socialización, aunque no medien ahí muchas palabras. Lugar “ideal” para evadir la realidad, en este ámbito del “goce pagano” se produce el “crecimiento” biológico-hormonal-social de los jóvenes de la zona, pero también del escape de los hombres adultos de sus responsabilidades familiares y confirmación- desde la mirada del observador externo- de las dinámicas de ese mundo

machista y homofóbico que no deviene solamente en el autoritarismo de los guerreros, sino que también comparten los pobladores lugareños.

En este espacio y tiempo determinados para y por la búsqueda del placer sexual, el conjunto de comportamientos realizados por los actores sociales no difiere. Aunque a simple vista las situaciones sociales pueden parecer “claras y ordenadas”, normalmente esta percepción de la realidad obedece a que los “clientes”- sean campesinos o pobladores CSM, los guerreros o sus acólitos- solo van “a lo que van”. Normas y relaciones implícitas, muy evidentes para todos. A los proxenetas que lavan sus dineros del narcotráfico en estos establecimientos (quienes siempre son paramilitares, pues los guerrilleros nunca “administrarían” ni fungirían como “proxenetas”), no les importa de donde provenga el dinero ni la calidad ni carácter del cliente. Aquí nadie toca a nadie. Dado que las situaciones sociales al interior del burdel, están configurados por la interacción entre clientes, prostitutas y proxenetas, sus componentes no están aislados, sino que se encuentran interconectados formando redes complejas, pero que raramente han llegado al conflicto y si sucede así, se debe únicamente a la explosiva conjunción del alcohol y las armas.

Por lo tanto, en la cantina y en el prostíbulo, según lo observado, la violencia no desaparece completamente, sino que sólo se dirige, dispersa y desideologizada, a personas particulares y no a tipos sociales

Alrededor de cincuenta mujeres, en edades comprendidas entre 15 (menores de edad) y 40 años, “ofrecen” sus servicios a la voraz llegada de hombres que no tienen otra forma de ocupar el tiempo libre (otra es el encuentro en bares para conversar y ver fútbol, o jugar naipes). Generalmente estas jóvenes mujeres son “traídas” en camionetas todos los martes por los paramilitares y narcos, provenientes de las ciudades de Pereira, Manizales, Cali, Tuluá y Armenia. De igual modo, estos sujetos las llevan de “regreso” en el amanecer del día domingo, mucho antes de que la sociedad de este pueblo despierte y asista fielmente a la misa dominical (11 a.m), quizás la de mayor concurrencia.

En una conversación sostenida con mi informante y una chica del burdel, hubo dos frases que me llamaron poderosamente la atención. Es la convicción que tenía esta joven- que no pasaba de veinte años, de que la culpa de la guerra y del narcotráfico en Colombia, la tenían los norteamericanos, pues, según ella : “Mientras existan drogadictos gringos, habrá colombianos que lucharán por este gran negocio, pues toda demanda trae oferta, ¿no? Mataron a Escobar, pero mira cuántos más aparecieron. Mientras los dragones

sigan pidiendo a gritos sus polvos blancos en el norte, habrá alguien en Colombia que se arriesgue. ¿O no vale la pena arriesgarse?”

Finalmente, una “estampa” muy interesante para destacar. En una de las esquinas de “El Recreo”, se encuentra una mediana fotografía enmarcada de Pablo Escobar, el capo narcotraficante del cartel de Medellín, junto a una frase que lo “inmortalizó” ante esa socialización mafiosa en el país: *“Cuando a uno le da miedo por todo, se muere veinte mil veces en la vida y cuando uno no es miedoso, sólo se muere el día que le toca y le da miedo una única vez”*.

*“Dónde se come no se mata”: el mercado de alimentos
como espacio de inmunidad*

Ahora reorientaré la mirada hacia el tercer “santuario” o espacio de inmunidad:

El mercado popular de alimentos. El domingo es el día que los campesinos “bajan” de las montañas y de los pueblos de “arriba” a vender sus productos en el mercado del municipio (zona urbana). La oferta es amplia: el arroz, la papa, tomates, cebolla y zanahoria se cuentan entre los productos de mayor demanda. Pero el asistir regularmente el domingo al mercado tiene varios usos y espacios de interacción. Veamos dichas connotaciones:

1) En mayor medida, “proveerse” de alimentos para el resto de la semana. Generalmente, no se escuchan grandes comentarios sobre el conflicto armado. La gente va a ofrecer o a comprar alimentos, a saludarse, a preguntarse por las novedades de sus hijos, a tomarse un “tinto” o “tintico (un “cafecito”), a caminar y pasar el tiempo, a preguntar por la suerte de las cosechas a lo largo de la temporada, a indagar en las irregularidades del tiempo y de los ascensos o descensos de temperatura.

2) En menor y más cautelosa medida, el mercado es un centro de acopio de información, único espacio de cruce y encuentro entre los campesinos de veredas y corregimientos alejados y el centro municipal, aunque los pobladores “urbanos” comparten con aquellos un mismo mundo de consumo cultural. Como lo relatan en los dos siguientes testimonios M. y S., habituales compradoras dominicales de alimentos, algunos indagan y se enteran de la situación de orden público, asesinatos y matanzas recientes:

“Venir a comprar las verduras y las frutas, nos permite conocer las novedades del pueblo y de la zona. A veces bajan los campesinos con noticias de ataques entre paramilitares y guerrilleros, o simplemente nos comentan acerca de venganzas y ajustes de cuentas. Uno aquí se entera de muchas cositas, cosas que se susurran, que se dicen suavemente al pasar. Aunque uno no deja de tener cuidado en lo que dice y escucha, claro está” (Doña Petrona, pobladora del casco urbano.)

O también cuando se realizan conjeturas acerca de un caso de violencia, que en diversas ocasiones se tergiversan bajo el manto de la duda, el chisme o el rumor, además de colocar en duda cínicamente los referentes ideológicos, por una parte, o de inocencia por la otra (“por algo habrá sido”) que contaminan los motivos de los actores en un conflicto complejo, tal como lo señala otra pobladora, doña Bárbara:

3) El mercado de alimentos también se constituye como “antesala” para ir a misa de 11 a.m. Es decir, que están quienes, sin grandes pretensiones por indagar, saber ni enterarse “de nada”, van al mercado los domingos temprano, con el mero objeto de que ese día “les rinda”, es decir, hacer las compras rápidamente, volver a casa y salir nuevamente a la Iglesia (la misa dominical va de las 11 a.m a 12, un tiempo de charla afuera de la parroquia y luego a casa), así el domingo por las tardes lo dedican a ver televisión, especialmente series norteamericanas o los clásicos partidos de fútbol, en compañía de toda la familia:

“Yo siempre vengo a mercar los domingos, lo hago bien tempranito a eso de las 8 y media, hago todas las compras pa’ la semana y luego me voy a cambiar a la casa para ir a la misa. No pierdo ningún domingo sin ir a mercar y después rezar” (Lina, peluquera)

Capítulo 5 Desenmascarando las significaciones y valoraciones en el mundo social colombiano

5.1 Dime qué arma cargas y te diré quién eres: construcción social de las reputaciones

¿Cuáles son las motivaciones y expectativas que llevan a los actores armados a “hacerse respetar” a través de las armas? El uso y la ostentación de las armas constituyen una vía para ascender socialmente, pues el camino del trabajo formal y del propio sendero académico es subestimado y en cambio se asume conveniente el más rápido y expedito: el enriquecimiento ilícito. Además, el futuro no importa porque no ha llegado, el pasado ya pasó y el presente es lo que importa. De ahí que si una acción de riesgo no conlleva a la muerte, el arriesgado actor armado -o el desarmado que se encuentra involucrado- considera que tuvo (y tiene) suerte, por lo tanto se comporta como el apostador ludópata que gana una vez y sigue apostando: le salió bien en una ocasión ¿por qué no otra vez?

En Colombia el culto y la fascinación por las armas no ha sido incompatible con el culto religioso. De hecho, se percibe la asistencia continua de narcotraficantes y paras a las iglesias colombianas. El uso de cadenas que en los cuellos llevan colgados a Cristo, la Virgen María y diversos santos, no hace sino confirmar que todo asesino o actor armado

en Colombia profesa el culto al cristianismo, especialmente a la línea adscrita y conocida como católica apostólica y romana.

Del cómodo acuerdo “vivir y dejar vivir” (que se lleva a cabo especialmente en los santuarios como las Iglesias, la plaza de mercado y, en algunas ocasiones, los prostíbulos o burdeles), se pasa al incómodo “matar y no poder dormir”, es decir, al espacio en el que no se puede conciliar el sueño, no por un asunto de culpa, sino por la posibilidad de que en la mitad de la noche actores armados irrumpen en viviendas particulares.

La guerra, sea desde el lugar que se ocupe, constituye para los guerreros una posibilidad de obtener un “reconocimiento social” deseado por ellos a causa de la exclusión social de la que son objeto. Este reconocimiento es legitimado socialmente en la acción y en la palabra, pues los guerreros se refieren a su accionar como un “trabajo”, es decir, como un empleo: el típico acto de matar por dinero. Las víctimas pueden ser rivales en los negocios, por tener cuentas pendientes, los delatores de algún hecho delictivo, víctimas indiscriminadas como medida de presión, etc. Lo cierto es que el poder que otorga usar un arma y de decidir o “administrar” la decisión de acabar la vida de los otros, les da cierto status de “duros” a los guerreros, condición que por supuesto les otorga poder, es decir, al reconocimiento se agrega el poder, como lo refleja una fuerte frase (que lo dice “todo”) en una entrevista realizada por Elsa Blair (2003: 94) a una banda paramilitar cercana al narcotráfico en Medellín: *“¿sabe qué, hombre? En esta vida, mate el primero y tenga un hijo, y ya con eso se immortaliza. La violencia aquí es de todo a todo”*.

Ingresar a un grupo armado ocupa un lugar significativo en los relatos vitales de muchos de los campesinos o ciudadanos con los que se mantuvo diálogos en los meses de trabajo de campo. El proceso de afirmación del sujeto en un contexto marcado por ciertas elaboraciones como “hacerse respetar con un fierro en la cintura”, “ser duro y que no se metan conmigo ni con mi familia”, lleva a una cierta embriaguez de poder expresado en la posesión y el dominio sobre un territorio, así quien lo ejerza (o abuse) sea un guerrillero o paraco “raso” (sin rango jerárquico) o un “lavaperro” (un guardaespaldas o corredor de dinero de los narcos en zona de alto riesgo). Los adultos, pero especialmente los jóvenes de la zona, configuran, construyen y definen sus identidades a partir del acceso y el éxtasis que otorga el poder del uso de las armas¹⁶⁵

¹⁶⁵ Aunque hace referencia a un contexto marginal de una ciudad como Medellín, Elsa Blair nos regala un relato de un joven sicario, cuya fuerza narrativa es impresionante: “También aquí todos sabemos que con el arma viene la muerte y se lleva a más de uno pero, como si fuera necesario, lo silencian: *“Sabén que si me vienen a sonar aquí, aquí me dejan, pero con el animal que tengo*

Vistas así las cosas, es pertinente señalar que en la región abordada en este trabajo de campo (y podríamos ampliar a toda Colombia) se ha generalizado la capacidad de disponer de la vida del otro, con niveles excesivos y desregulados de muerte violenta, donde el exceso está dado por los circuitos sociales, es decir, por las esferas institucionales e informales de la vida social involucradas tanto en términos de su producción como también, y sobre todo, de su legitimación. Cualquiera tiene el poder de disponer de la vida de otro, “*resquebrajando así la legitimidad “weberiana” de la comunidad política*” (Blair: 2004: 31). Como lo sintetizó crudamente un poblador: “*Aquí, cualquier hijueputa malparido (sic) te puede quebrar*” (matar). ¿Cuáles son los efectos culturales de una amenaza permanente de muerte que no puede ser conjurada?

Como el futuro es incierto, el presente debe ser disfrutado al máximo. La ostentación de las riquezas de los paramilitares y narcos en la zona hace que los pobladores se “delaten” en sus sensaciones: la envidia y la ambición están a la orden del día. Desear bienes raíces, automóviles lujosos y una vida holgada que, en el caso de los hombres, iría acompañado de mujeres jóvenes y guapas, se resumiría en la frase “Yo quiero lo que tú tienes, tú tienes lo que yo quiero”. Aunque las guerrillas colombianas hayan cometido decenas de abusos de poder y más de un error trágico en la guerra¹⁶⁶, cabe señalar y reconocer que este afán por enriquecerse no atañe ni compete a los guerrilleros.

El inocultable afán de obtener enormes recursos monetarios y ascender socialmente en forma rápida e irregular, es posible porque uno de los problemas fundamentales de la zona objeto de estudio es la gran brecha existente entre las normas legales y el comportamiento socialmente aceptado, es decir, hay una gran divergencia entre lo legal y lo legítimo. Este fenómeno afecta de manera especialmente grave a los derechos de propiedad, los cuales en la historia de toda Colombia han estado asociados al privilegio, la audacia, la “buena suerte”, la destreza para manipular la ley y otros factores relacionados con el abuso del poder y la explotación de amplios sectores de la población, por lo cual la distribución del ingreso y de la riqueza resultantes no es legítima entre dichos sectores (Thoumi, 1995: 26).

“Si usted tiene algo y se lo puedo quitar, pues se lo quito”: Por eso los colombianos no tienen restricciones internalizadas a sus comportamientos (Kalmanovitz: 2002: 166).

me llevo a más de uno, saben que yo no me voy solo” (Blair: 2003: 30). El “animal” al que hace referencia es su arma.

¹⁶⁶ Como fue el caso en el 2001 de Machuca, departamento del Chocó, donde el incendio del derrame de petróleo a partir de explosiones realizadas por la guerrilla del ELN provocó la muerte por quemaduras graves a ciento veinte personas de un solo pueblo.

Asimismo, es posible interpretar los secuestros característicos de Colombia como simple transformación de rentas: si el capital de una persona es ilegítimo y se ha obtenido por privilegio, audacia, “buena suerte” o “habilidad” para burlar la ley, o para sacar ventajas, entonces quien no tiene acceso a esos medios de enriquecimiento puede capturar a quien sí tuvo acceso y así transferir rentas (Thoumi, 1995: 29).

El hecho de que los derechos de propiedad estén continuamente en tela de juicio hace que sea necesario establecer sistemas privados para protegerlos. Dado que el Estado por lo general no tiene capacidad de hacer cumplir contratos, ni puede proteger la propiedad, entonces surgen sistemas privados para ello. Varias características de la economía y sociedad colombianas reflejan estos procesos. Una de ellas es el surgimiento de grupos paramilitares y de policía privada; otra, tal vez más importante, es la estructura de la industria que refleja la debilidad de los derechos de propiedad y la gran falta de confianza para efectuar transacciones económicas.

Además, el riesgo de violar leyes y reglamentos económicos no solamente es bajo, sino que además, muchas veces estas acciones son “legítimas”, lo que fuerza al gobierno a adaptarse a esta realidad, a lo menos implícitamente. Por eso, en los últimos veinticinco años ha habido más de diez reformas tributarias, la mayoría de las cuales han incluido amnistías que promueven los sistemas para ensuciar capital, puesto que disminuyen las expectativas de costos futuros para limpiarlo. Toda organización criminal disminuye sus riesgos si desarrolla una red de apoyo en la sociedad. En el caso del lavado sucede lo mismo. Cuando se cuenta con un grupo familiar fuerte y grande y con amigos muy leales (compañeros de infancia, de colegio, de barrio) es posible utilizarlos para “lavar”. Es decir, se utiliza la capacidad de un grupo de personas para evitar la detección. Por eso el testafierro¹⁶⁷ es común en estos casos. Entre mayor sea el capital a esconder, mayor es la necesidad de una red de apoyo. Básicamente, el riesgo marginal de detección aumenta con el tamaño. Es por eso que los grandes narcotraficantes tienen que desarrollar amplias redes de apoyo social. Finalmente, en una sociedad en que es generalizada y aceptada la violación de leyes y reglamentos económicos, el lavado se facilita (Thoumi, 1995: 32).

Además de justificarse como defensa de la propiedad, el poder económico de los narcos llena un vacío y calma una angustia que viven cotidianamente propietarios de tierras vinculadas a la agricultura comercial o ganaderos asediados por las guerrillas a través

¹⁶⁷ “Prestanombres” en el argot mexicano.

de la práctica del secuestro, el chantaje y la extorsión. El vacío se refiere a la incapacidad del Estado de ofrecer una seguridad que permita garantizar la marcha de sus negocios. La inversión narcoterrateniente no sólo es un mecanismo de lavado de dineros sino que, desarrollada en el ámbito del actual conflicto, abre condiciones óptimas para insertarse, en contextos que se definen por el poder económico y la capacidad militar. La inserción narcotraficante lidera social e ideológicamente un proceso pragmático de tratamiento y resolución del conflicto que coincide con las opciones de guerra de baja intensidad en la cual se mueven las fuerzas de seguridad estatal. Su ventaja radica en que, al potenciar el modelo de privatización de la fuerza, se rompen todas las garantías que deben asumir las fuerzas estatales por la vida, seguridad y bienes de la población civil en el contexto del conflicto, por la implementación de un patrón de seguridad que afecta directamente a las comunidades.

De este modo la adjudicación de responsabilidades por la violencia ejercida a través de la práctica de las masacres, a grupos al margen de la ley o cualquier otra denominación, tipifica una violencia funcional que se protege por una impunidad que compromete a diferentes instancias del Estado. Es decir, los paramilitares hacen el “trabajo sucio” que las Fuerzas Armadas no pueden realizar, de ahí las complicidades que se han presentado.

Como ya se ha planteado en los epígrafes anteriores, en la zona circulan las figuras de “lavaperros” y “testaferros”. El “lavaperros”, así como el “sicario” o el “traqueto”, es un personaje social difundido en todo el país, pues no solamente es la mano derecha del “patrón”, sino también hace el “trabajo sucio” y tiene posibilidades de acuerdo a su lealtad de “heredar” el liderazgo de su banda paramilitar o cartel siguiente. Y en el peor de sus posibles herencias, llegaría a testaferro o “prestanombres”. El testaferro es quien tiene las propiedades de un narco o un paramilitar a su nombre, para evitar sospechas de las autoridades, a modo de fachada y de “lavado de activos”. El problema les resulta cuando tienen que comprobar el origen de sus ingresos. Sin embargo, las redes sociales del narcotráfico los protegen y cubren con los mejores abogados. Ese es un punto frágil y espinoso de las autoridades colombianas en sus esfuerzos “maquillados” por “desmantelar” las redes del narcotráfico y del paramilitarismo (como señalamos en otros epígrafes, el Estado colombiano “juega el juego” de que persigue a los narcos y quiere atraparlos, pero en el fondo los ampara bajo el manto de la impunidad, como lo refleja la “Ley de Justicia y Paz” actual, en el que los paramilitares y narcotraficantes se entremezclan).

En estos sujetos paramilitares y narcotraficantes existe un profundo escepticismo que, sumado a lo riesgoso de su actividad, los hace conscientes de que su vida es efímera: saben que van a morir y no les importa vivir poco mientras ese breve tiempo les traiga lujos que por vía de un trabajo legal no obtendrían rápidamente. Esa sería su “filosofía”, tenerlo todo o nada, incluso pender en la cornisa de la oscilación “o la gozo o me matan”.

Todo el mundo sabe todo, pero nadie “sabe nada”, es decir, todo el mundo social de nuestra zona de estudio se encuentra configurado alrededor de estas figuras que reflejan el enriquecimiento ilícito pero “nadie ha visto nada”. Los propios familiares de los traquetos, lavaperros y testaferros sacan partida de la situación, reciben dineros mensualmente y hasta prestan sus nombres para los derechos de propiedad¹⁶⁸. Por eso también acuden –obviamente- a la estrategia del ciego, sordo y mudo. Realmente, resultaría poco creíble que los mismos no sepan que sus hijos están involucrados en ajusticiamientos en la zona, en cobro de “cuentas” y en “vigilancia paramilitar” no solo del municipio sino de la región.

Las redes sociales de los paras y narcos en la zona, ven a éstos como “hijos, hermanos o padres responsables”. Hay un cierto orgullo de las actitudes “filantrópicas” de narcos y paras en sus redes sociales y en algunos espacios de la comunidad donde se comportan como “generosos empresarios”. En la zona se percibe un indisimulado orgullo porque algunos personajes- vía las armas, la adscripción a un grupo armado- han “llegado lejos en la vida”. Los traquetos, lavaperros y testaferros se prestan para la vigilancia y defensa de los predios ganaderos de Zarzal, Roldanillo y Ansermanuevo en el norte del departamento.

Los paras y narcos encuentran predilección por automóviles lujosos, así como una profunda “debilidad” por fincas y haciendas, con decenas de caballos y cabezas de ganado. A mayor cantidad de hectáreas y animales, mayor sensación de “placer” y poder. En esa lógica depredadora y machista, le agregan la “posesión” de mujeres hermosas a

¹⁶⁸ Se ha mencionado en diversos libros (“prohibidos” y “censurados” en el país), que el padre del actual presidente Alvaro Uribe, era un testaferro o prestanombres del cartel de Medellín, así como también que los primos Ochoa Vélez (por el apellido materno del presidente que es Vélez), estaban involucrados con los mandos altos de dicha organización criminal en los años ochenta. Ahora, con bajo perfil, son “empresarios exitosos” de su ciudad Medellín, tercera urbe del país que, a pesar de los “maquillajes” de la clase dirigente actual, es señalada en el humor popular de todo el territorio nacional como “Metrallín” o “Metrallo”, en alusión a las ametralladoras “Uzzy” que usan paramilitares y narcotraficantes.

su lado (la mujer como un “bien” para “mostrar”). Bien vale aquí acudir al testimonio de don Ruperto¹⁶⁹:

“Yo voy mucho al corregimiento de Galicia, tengo amistades allá. De unos años para acá los paras fueron convirtiéndose en los vigilantes, en la “policía” de la región, ellos vigilaban la cuestión moral, se daban cuenta que había robos, y mataban a la gente que robaban y no dejaban a nadie vivo, algo como “moralizante”, una operación “limpieza” como las llamaban ellos, las mejores muchachas que habían en el pueblo se convertían en las mujeres de ellos, y ellos pues eran muy especiales, grandotes, pues nunca he visto a un paramilitar chiquito¹⁷⁰, imagínate costeños que son, y “enamorado” hasta morir, pues entonces todas las mujeres se convierten en sus mujeres, las novias de ellos, entonces eso le cortó la autonomía a los hombres del municipio, si alguien se mete con la novia de algún paraco o si son prostitutas y se enamoran de un cliente de ellas, pues tienen que irse de ahí porque las matan.....recuerdo el caso de la muchacha de un paramilitar que se enamoró de un guerrillero, pues la sacaron de su casa y la mataron en plena calle...son los amos y dueños del pueblito y entonces se ha vuelto la zona de tolerancia (prostitución), la zona de ellos, para tomar trago todo el día cuando no están rondando y cuidando”. (Don Ruperto)

Por ello, de las relaciones más comentadas de los narcos y “paras” en Colombia se destacan las que éstos establecen con las llamadas “reinas de belleza”¹⁷¹. Recordemos aquí que en Colombia se producen más de doscientos “reinados” y ferias en diferentes departamentos y regiones, además de las fiestas que se celebran en todo el país en el mes de agosto. De ahí que involucrarse sentimentalmente con una mujer amante de un narcotraficante, paramilitar y hasta oficial del ejército, es firmar su propia sentencia de muerte, tal como lo relata el testimonio del mismo don Ruperto:

“Yo tenía un amigo que era mi jefe aquí. El era revisor fiscal, contralor municipal, y pues yo trabajé con él en el 2002, no sé por qué había muchas mujeres bonitas, unas de aquí y otras recién llegadas, traídas por los paramilitares, pues el caso es que la mujer o amante de un narco era una de las más hermosas del pueblo, pero esta se enamoró de mi jefe y empezó todo el mundo a opinar que estaba corriendo peligro Alberto ...así se llamaba mi jefe pues porque esa mujer estaba enamorada de él y el también le paraba bolas¹⁷², aunque el fuera casado y pues yo le dije a Alberto que tuviera cuidado con ese tipo porque le estaba sacando la novia, pues no me hizo caso y a las dos semanas le pegaron tremenda matada (sic): le metieron 8 tiros en frente de su propia casa, frente a su mujer y sus hijos” (Don Ruperto).

Un asunto muy importante para destacar aquí es que la mayoría de estudiantes universitarios en la región, están cursando la licenciatura de Química. Y son muy “cotizados” los servicios de los químicos por parte de los carteles de narcotráfico, en nuestro caso, el del Cartel del Norte del Valle. Una estudiante de dicha licenciatura, cuya

¹⁶⁹ Colocaré ciertas palabras “entre comillas” para enfatizar en su articulación con los análisis realizados a lo largo del estudio.

¹⁷⁰ “Chiquito”: “chaparrito” en el argot mexicano.

¹⁷¹ Ver en la sección Anexos, una crónica periodística acerca de la captura de una “Reina” de belleza colombiana en Chile en el año 2006.

¹⁷² “Parar bolas” equivale a “prestar atención”.

identidad resguardaremos aquí, nos presentó sus impresiones al respecto, y finalmente nos explica por qué ella- a diferencia de algunos compañeros de Facultad- no ha caído tentada por las ofertas de los carteles regionales:

“Los químicos son muy buscados por los narcos y paramilitares, porque sabemos extraer los metabolitos secundarios. El principio activo de la coca es la cocaína y esto solamente se puede extraer realizando toda una serie análisis de procedimiento químicos, y entonces una persona que estudie química pues obviamente sabe de eso. En la licenciatura estudiamos una asignatura que se llama fotoquímica y ahí vemos lo que es el estudio de las plantas y nosotros trabajamos con diversidad de plantas, medicinales de todo tipo y como tenemos tanta diversidad a nivel de flora y fauna,entonces nos dan en los cursos la oportunidad de elegir una planta cualquiera. Entonces por ahí es donde más trabajo hay con todo esto del narcotráfico

Mira que una compañera de Química aquí en el norte del Valle tiene mucha gente conocida en Zarzal, Roldanillo, Cartago. Ella tiene un familiar que trabaja con el cartel y como le han financiado su licenciatura la tienen ya comprometida a trabajar cuando se gradúe. Y también ha recibido otras ofertas de trabajo (sic), ella me comenta que allá hacen mucha producción semanal, la pasta de la coca, la cocaína pura, la base está en dos millones y medio de pesos. Ella me estuvo comentando que en una semana ellos producían varias toneladas, trabajando fuerte para enviar cargamentos. Y que le pagaban muy bien, unos seis millones semanales¹⁷³

En mi carrera de licenciatura tengo muchos compañeros que tienen esta visión. Ante tanto desempleo, pues caen en la tentación de trabajar con el narcotráfico. Y entonces cuando terminamos la licenciatura, nos decimos ¿y ahora qué? para conseguir la práctica laboral es muy difícil y un buen trabajo es casi imposible, le exigen a uno tres o cuatro años de experiencia laboral pero nadie te da la oportunidad y pues ¿Cómo obtiene esos años de experiencia? Entonces tampoco nos vamos a dejar morir de hambre. Y más si se presenta de esa forma, pues ese es el camino para ganar el dinero más fácil, de obtener dinero en cantidades alarmantes.

Pero yo no acepto ni aceptaré, porque el riesgo es muy grande y uno sabe que todas esas personas terminan asesinadas. Y una vez que los narcos aprenden a hacer el procedimiento químico de la extracción, que en realidad es muy fácil de aprender y enseñar, pues ya no le sirves a ellos para nada, entonces ya no te van a dar seis millones sabiendo que es un procedimiento tan sencillo que cualquiera lo puede hacer, entonces ellos te matan, porque tampoco van a dejar un informante o un testigo por ahí suelto. Lo raro es que aunque sabemos que eso puede llegar a pasarnos, los químicos siguen cayendo en esos carteles. Tal vez porque creen que al estar adentro se van a volver amigos de esas personas y van a ganar sus confianzas, pero eso no sucede, eso no es tan fácil, una vez que ellos aprenden los procedimientos rutinarios del proceso, ya uno no les sirve de nada” (Valentina, estudiante)

¹⁷³ Equivalente a 2.500 dólares estadounidense semanalmente

5.2 “Nadie es eterno en el mundo”¹⁷⁴: visión de futuro y expectativas vitales

En Colombia hay que ser rico o hay que ser peligroso. Ser peligroso en Colombia implica asumir probabilidades altas de morir o ser herido, pero a la vez acceder a recursos que de otra manera serán inalcanzables, aparte de los beneficios laterales que resultan del efecto exhilarante de la visibilidad. **Francisco Gutiérrez Sanín**

Iniciaré este epígrafe con una premisa fuerte: la “guerra” colombiana ha sido un verdadero fracaso para todos los actores involucrados en ella: fracaso para la insurgencia guerrillera, que en más de cuarenta y tres años, no se ha podido “tomar” el poder, fracaso para el Estado que no ha podido frenar a la guerrilla; fracaso para los paramilitares que no pudieron cumplir con su papel de “exterminadores” del proyecto guerrilleros ni derrotar los procesos campesinos de luchas por la tierra; fracaso para los carteles del narcotráfico que no han podido evitar la extradición; y, finalmente, fracaso para los actores desarmados que no han configurado un capital social ni una cultura política que imponga condiciones y límites a los actores armados.

A cambio de estos fracasos que se entremezclan, ha predominado en Colombia un modo de vida fuertemente incierto, donde cada actor armada configura ordenes fácticos de dominación, basados en factores cada vez más militarizados y cada vez menos políticos. Se trata, de una incierta “Ley de la selva”.

Aprueben o no los métodos de los paramilitares, de la guerrilla, del Terrorismo de Estado, es indudable que muchos colombianos profesan una ideología “justiciera” o cultura de la reivindicación más o menos explícita o borrosa. La cruda realidad social justifica por supuesto el descontento, aviva el resentimiento y alimenta la actitud contestataria (PNUD: 2003:44).

El poblador urbano no vislumbra un futuro claro: nadie, ni siquiera los pobladores de las grandes ciudades colombianas, está exento de sufrir el conflicto en carne propia: cilindros de gas, bombas, asesinatos, masacres, secuestros, extorsiones, minas “quiebrapatras”, violaciones, torturas, desplazamiento, desaparición o exilio. Pero, tal como lo señala el informe del PNUD:

¹⁷⁴ Este es el título de una canción del género “narco-corrido” que suena mañana, tarde y noche en las emisoras de la región, en los peseros y taxis en zona urbana, en las calles, en las cantinas ¡Y hasta lo escuchamos en el burdel o prostíbulo!!!!, en fin, en todo tiempo y lugar.

“La omnipresencia física del conflicto no es incompatible con su marginalidad política. Primero, porque la gran mayoría de la gente vive la “guerra” como inseguridad o amenaza, no como esperanza. Segundo, porque no hacen falta muchos, sino pocos individuos armados para causar daños, alarma y conmoción de gran escala; en un país con la extensión y población de Colombia, 37 mil quinientos guerrilleros y paramilitares (16.580 de las Farc, 8.500 del Eln y 12.550 de las Auc, según los estimativos más autorizados), son más que suficientes para llevar la guerra a todos los rincones, aunque no sean sino siete de cada diez mil habitantes en nuestros campos y ciudades”

Y es que el tan manido y mencionado “empate militar” entre los diversos actores armados, es una realidad que reconoce todo poblador inserto en regiones de conflicto. Una guerra excepcionalmente prolongada y con una final muy lejano, sin batallas decisivas, con fronteras de predominio militar y órdenes fácticos mutantes y porosos, donde la “pacificación coyuntural” de una zona, trae el “calentamiento coyuntural” de la otra, y viceversa; donde la guerrilla tiende a predominar militarmente en las cordilleras, mientras que los paramilitares se asientan en los valles y altiplanicies; donde uno crece, y entonces el otro se repliega; donde uno efectúa alianzas, mientras el otro incursiona en mecanismos de terror aplicado.

La vida cotidiana afecta la concepción del “no futuro” de la población no armada, de la imposibilidad de construir un proyecto de nación, pero, además, ni siquiera un proyecto personal con certidumbre. Y aunque el “riesgo” es consustancial a la vida del ser humano, es pertinente aclarar que los “riesgos” e “incertidumbres” de un colombiano, no tiene parangón con el de otras sociedades del mundo (especialmente occidental).

Huérfano o cojo de sentido, el futuro no da razones para el optimismo, pues así como el pasado reflejó una sociedad nacional fragmentada, el presente no sólo lo refleja (fragmentación/polarización), sino que además expresa un lento caminar sobre las llamas de la desolación. Aunque el peso de la guerra se vive en las regiones, en unos departamentos más que otros, la sensación generalizada es que “esta vaina no la arregla nadie” (Don Filomeno)

El amparo de la ilegalidad que encuentran los actores armados, se inserta en la realidad de vallecaucanos cuya subsistencia o prosperidad dependen de actividades informales, grises o francamente ilegales. Como bien ha señalado Molano (1990), la guerra en Colombia comenzó con las luchas por la tierra y acabó en una disputa por las bonanzas. Y tras ese desencadenante, la degradación conllevó a una guerra de perdedores.

A su manera, monstruosamente fragmentada y territorializada, las diversas guerras se han vuelto una rutina diaria de los colombianos. Para unos y para otros, para aliados, enemigos o CSM, tras un triunfo lejano (¿tal vez imposible?) de la insurgencia o el paramilitarismo, y años perdidos (e irrecuperables) para una paz esquiva, el luto y el dolor, se encuentra el mayor peligro residual de la guerra: la desesperanza, lo cual deviene en la sensación compartida de la posibilidad de un futuro.

Si el pan de cada día en gran parte del territorio colombiano (y este Valle del Cauca no escapa a esta situación, obviamente), son las masacres, asesinatos, ejecuciones sumarias, secuestros, abusos sexuales, despojo de tierras, desplazamientos forzados, masacres y extorsiones, y, adicionalmente, se observa un elevado nivel de desempleo, subempleo e informalización del empleo¹⁷⁵, entonces, es lógico que los pobladores busquen salidas posibles, pero no necesariamente “salir” de la región, sino re-ubicarse en el apoyo o simpatía hacia un grupo armado o, además, intuir posibles cambios en el predominio militar, y, acorde a esta intuición, encontrar el mejor postor para sus intereses.

La guerra incentiva para algunos la posibilidad de la “movilidad social”, hacer una carrera profesional en el ejército (el de Colombia, es el mayor ejército de América del Sur, proporcional a su población), es también una vía de escape para unos, así como una luz al final del túnel ante la falta de opciones para otros; es una respuesta ante una venganza planeada o el reflejo de odios heredados; es simplemente un proyecto político-ideológico para unos, o un modo de vida mercenaria para otros.

Todo ello configura, además, elementos de juicio suficientes para el pesimismo generalizado en un “no futuro” de los pobladores, puesto que este (el futuro), se presenta dramática y claustrofómicamente limitado: no existe posibilidad de construir un “nosotros”, pero tampoco un “yo” que produzca estabilidad en una biografía proclive a ser narrada unitariamente. Apenas el cruce de violencias y de memorias les dicta a los pobladores la lección ya aprendida y que no debe ser olvidada: no hay tiempo ni lugar para reflexionar acerca de un nosotros ni tampoco de un “yo”, sino solo es pertinente atenerse a lo que hay (recetas, estrategias) para seguir viviendo. Ello es así, porque tanto los guerrilleros,

¹⁷⁵ Sumando desempleados, subempleados y otras variantes de la informalidad, el propio Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) estima que ronda un 65 a 70% (sin contar que, de los colombianos que se encuentran en el sector laboral formal, sus salarios en general son precarios, salvo una fracción de apenas 10% de privilegiados: altos mandos, gerentes, ejecutivos de alta formación, etcétera). De ahí que autores como Alfredo Molano, haciendo uso de su singular y fresca inteligencia, afirme que los actores armados se han constituido en los mayores proveedores de empleo en Colombia.

paramilitares, narcotraficantes, miembros del ejército y la policía, así como los pobladores "desarmados", no tienen tiempo ni espacio para reflexionar sobre ellos mismos, evidenciando una seria dificultad para narrarse y para recordar, es decir, para "pensarse" a si mismos.

Si el mundo social no es más o menos posible de ser "controlado" por los campesinos y pobladores urbanos, pues la "administración del derecho" de morir o vivir no pasa por sus manos sino a través de otros (como si los guerreros fueran los "pilotos" del viaje de sus vidas); entonces ¿cómo se percibe el futuro? ¿Cuáles son las expectativas que tienen de la vida? ¿A qué aspiran o a qué se resignan? Antes de responder estas preguntas, resulta pertinente que recordemos aquí a Schutz, quien consideraba que la selección de cosas que son significativas para el actor social, es decir, la constelación de intereses preponderantes en éste que determinan sus proyectos de acción, son a su vez determinados por su situación biográfica. Es decir, *"la situación actual del actor tiene su historia; es la sedimentación de todas sus experiencias subjetivas anteriores. No son experimentadas por el actor como anónimas, sino como únicas y dadas subjetivamente a él, y solo a él."*(Schutz: 1993: 58).

Puedo deducir de gran parte del material empírico recolectado, que los pobladores se contentan con disponer de la satisfacción de sus necesidades básicas cotidianas, preguntándose en muy raras ocasiones por las posibilidades de la finalización del conflicto armado. Aunque lo anterior parezca una afirmación muy fuerte (habrá quien pueda parecerle peligrosa, sin duda), lo cierto es que no se percibe en este ambiente descrito cuestionamiento o reflexión crítica, salvo de parte de sindicalistas¹⁷⁶ opositores al gobierno Uribe, los cuales, aunque ácidos en sus comentarios, no dejan de ser prudentes y saben hasta dónde pueden llegar sus voces. Los que no han aplicado esta prudencia "ya no están" en el municipio: o están exiliados, o desaparecidos o están bajo tierra.

El poblador no armado compra alimentos en el mercado, saluda a sus semejantes e incorpora en su acervo de conocimientos informaciones permanentes para esquivar los peligros que lo acechan. Pero ¿Cuáles son sus representaciones sociales sobre la vida y la muerte? En la novela "Cien años de soledad", García Márquez nos presenta a un

¹⁷⁶ Recordemos aquí que la tasa de sindicalización colombiana es una de las más bajas de Latinoamérica, no comparable con la fuerte tradición sindical en países como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay. Dicha situación ha sido explicado por diversos analistas en dos sentidos: o la ausencia de una cultura política o los terribles efectos del terrorismo de Estado que ha marcado el derrotero histórico colombiano. Una discusión pertinente pero que-obviamente- no podrá ser resuelta en el presente estudio.

personaje central que confiesa, en medio de sus padecimientos, no saber aún el origen de su tragedia. De igual modo, la contrapregunta del notario en una de las entrevistas (“¿Por qué carajo estamos luchando?”) lo dice todo. Aún aquellos que han creído luchar por una causa legítima, sin ninguna otra contraprestación sustancial, tarde que temprano se dan cuenta de la inutilidad de sus acciones (y lealtades).

La acción de los pobladores desarmados y su interacción con los armados, está determinada en gran medida por esquemas e imágenes de experiencias provenientes del depósito social de sentidos. En ese sentido, los pobladores acusan sus propias fatalidades. Colocar el énfasis en la urgencia de disminuir el desempleo, dejando por fuera de la conversación la violencia del conflicto armado (tal como sucedió en varias entrevistas), refleja un estado de cosas muy interesantes: el conflicto armado se rutinizó, y, tal vez por ello, es más importante poseer un trabajo estable que estar complicándose la vida “reflexionando” sobre un conflicto armado en el que los pobladores desarmados no tienen forma de incidir.

La resignación reina en no pocos entrevistados. Algunos, los más jóvenes, sueñan con la posibilidad de irse. La mayoría- los más adultos y ancianos-, no han viajado mucho¹⁷⁷. Pero es el segmento de los menores de treinta años, los que subordinan la finalización del conflicto a la urgencia de encontrar un buen empleo (sobre todo “estable”). Tal como lo señaló Melchor:

El futuro lo veo difícil, lo veo más cercano a las ciudades que en las zonas rurales. Veo la situación de las guerrillas y paramilitares más difícil. Pero creo que es bueno que exista esa gente, porque esa gente presiona y ayuda mucho. Y pues la violencia está en todas partes del mundo, pero aquí los medios de comunicación lo sacan más a flote, pero aún en los países más desarrollados hay locos, hay sádicos, hay psicópatas, en todas partes hay violencia.

Para que haya paz tiene que haber guerra. A mí si me gustaría irme de aquí, pero no por la guerra, porque violencia hay en todas partes del mundo, sino por más posibilidades económicas. Porque aunque uno trabaje duro en otras partes, uno consigue buen dinero. Allá en otros países uno trabaja duro por un buen sueldo, pero aquí uno trabaja duro y no consigue un buen sueldo”
(Melchor)

Algunos adultos entrevistados intentan imaginarse un futuro distinto, o la posibilidad de salir del país. Pero enseguida “aterrizan” ellos mismos, convencidos que se trata de un imposible. Más de uno hace referencia además a un amigo que “vive en el extranjero” y

¹⁷⁷ En una conversación informal, cuatro hermanos me preguntaban reiteradamente acerca de la vida en México y de “lo chévere que sería poder viajar en avión y conocer otros países”

que además le comenta las diferencias en las vivencias respecto a su territorio. Es pertinente entonces leer lo que nos confiesa don Filomeno:

“Para mí no hay esperanzas, porque nada va a cambiar, porque los responsables son las mismas dos oligarquías liberales y conservadores, no creo que el pueblo vaya a tener nunca techo, en este momento el desempleo y la intranquilidad reina en el país, la prostitución nos tiene “llevados” (sic). Uno oye que en Holanda no pasa nada como acá en Colombia, uno no oye que en Canadá o en Francia pasen cosas como acá....es otra oligarquía, pero es una oligarquía más profesional (sic) más intelectual.....vea por ejemplo, un amigo exiliado mío estuvo en Canadá y un ingeniero lo llevó a pasear y le dijo que dejara el carro parqueado pero mi amigo colombiano le dijo ¿Y el carro qué? No hombre...déjelo así.....y al otro día el carro estaba ahí.....si usted deja un carro en la noche en Colombia, al día siguiente ya se lo robaron.

Aquí no hay empleo, no hay cultura....vea la contradicción tan verraca (sic) primero hace muchos años no le daban empleo porque usted no era bachiller, ahora son bachilleres y tampoco.....pero vea ahora ese muchacho que entró y está ahí es un hijo mío (señala a su hijo que está viendo una telenovela mexicana).ni siendo bachiller consigue trabajo ¿por qué se ve esto? (la violencia). ¿Usted cree que puede subsistir un campesino con cuarenta mil pesos¹⁷⁸ semanales trabajando de lunes a sábado para pagar energía, agua, vestuario, alimentación y arriendo? No puede.....tiene que aguantar hambre esa familia.....y entonces lo buscan a uno y le dicen...”vea hermano usted está como viejito para que se vaya de sicario, pero aún se puede ir de escolta”.....desafortunadamente en mi patria vale más la vida de un perro.....(Don Filomeno)”

Otro caso particular de proyectos de futuro lo constituyen las mujeres jóvenes y con ambiciones que son “seducidas” por criminales que se hacen pasar por filántropos. Relaciones de la belleza femenina con el crimen que nos permiten observar a jóvenes y hermosas mujeres capaces de canjear una vida “relativamente tranquila” por la tentación del poder y las lisonjas de los criminales municipales. Se trata de todo un mercado de intercambio de placeres por poderes. Y como donde hay oferta hay demanda, las adolescentes y jóvenes del pueblo aceptan ser las consentidas de mafiosos que algunos tienen la desfachatez de mencionar como “hombres de negocios”.

Las expectativas de futuro de esas mujeres, al igual que la de los narcos y paramilitares, se expresa en un concentrado hedonismo exacerbado en vivir en eterno presente, pues no saben (ni les importa mucho) que les depare el futuro. Poder, exhuberancia, sexo, respeto adquirido y dominio fáctico sobre los otros, constituye el incentivo suficiente para dejar satisfecho a esa horda de paramilitares y narcos que pululan en los municipios del centro y Valle del Cauca.

¹⁷⁸ Pesos colombianos equivalentes a 20 dólares estadounidenses.

5.3 El fin de la inocencia: Valoraciones en la tierra del azúcar y el café

“ Consigue la plata, mijo, consíguela honradamente y si no, consigue la plata, mijo”
Frase popular antioqueña¹⁷⁹

“Prefiero una tumba en Colombia que un calabozo en los Estados Unidos”
Pablo Escobar Gaviria. Cartel de Medellín

Ha sido tan dramática la dimensión del conflicto y el número de personas asesinadas o desplazadas en Colombia que algunos intelectuales como Daniel Pécaut han considerado que se trata de una verdadera “guerra contra la sociedad”, según la cual la población- que en su mayor parte no se identifica con ninguna de las fuerzas en conflicto-, se encuentra “rehén” de facciones poderosas e incontrolables. Sin embargo, diferimos de esta premisa del académico francés, en tanto plantea que la sociedad es “ajena” al conflicto, como si la sociedad fuera un todo homogéneo y no tuviera participación en la conformación de grupos de la muerte, o como si los guerreros que actúan en los grupos armados no hubieran salido de la misma sociedad que Pécaut considera “ajena”.

Existe una cierta tendencia en algún tipo de ONG, la mayoría de medios masivos de comunicación, el gobierno nacional y las élites industriales y empresariales de “trivializar” la violencia, como si ella fuese un campo delimitable de víctimas y victimarios, de buenos y malos, de enemigos versus defensores de la democracia. En esa lógica, es pertinente recordar que un ministro del gobierno de Pastrana dijo justamente hace 6 años que la violencia en Colombia se acabaría “si los medios de comunicación dejaran de hablar de ella”.

Paradójica y cínica afirmación. Paradójica porque los “mass media” en Colombia no construyen precisamente análisis rigurosos para comprender la guerra y formar ciudadanía. Esa no es precisamente su visión. Y cínica la afirmación de dicho ministro, porque representa la ceguera, sordera y mudez de las élites colombianas que están más interesadas en “vender” ese 30% del territorio que es apto para el turismo internacional, especialmente la capital de la República y la costa del Caribe.

De ahí esa mirada (ingenua por una parte o no exenta de intereses creados por la otra), que indica que la “sociedad civil” en Colombia es “víctima” de los actores armados y que estos últimos son los responsables únicos de la desinstitucionalización y poco apego a respetar las normas y los pactos sociales que caracterizan al país.

¹⁷⁹ Antioqueño: originario del Departamento de Antioquia, cuya capital es la ciudad de Medellín.

Nada de lo anterior. La inocencia es un factor frágil para defender aquí. Veremos a continuación algunos argumentos que nos guiarán en la discusión sobre esa “sociedad de la mentira”, que alguna vez señaló la politóloga y periodista María Teresa Herrán.

Según Alfredo Rangel, las drogas ilícitas en el conflicto armado colombiano cumplen el mismo papel que los “diamantes ensangrentados” en Angola o Sierra Leona, es decir, “son el combustible de la guerra” (Rangel:2005). William Reno advierte que el análisis del factor económico aquí (sea petróleo, diamantes o drogas ilícitas), no conlleva a afirmar que *“el beneficio económico sea la motivación de todos los individuos en todas las guerras internas en Estados débiles. Los combatientes en las guerras internas pueden buscar diversos objetivos simultáneamente”* (Reno: 2000: 44-45)¹⁸⁰

El valor del enriquecimiento a cualquier costo

Es pertinente aquí partir de una idea fuerte: en esta región los intereses de apoyo, colaboración y simpatía se articulan a la búsqueda de beneficios personales, lo cual refleja que “hacer la guerra” conlleva al enriquecimiento ilícito, es decir, los guerreros (y con ellos sus colaboradores y simpatizantes, vale señalar, sus redes sociales de apoyo), ven en la violencia un modo de vida o “trabajo”, entre otras cosas, pero bien vale señalar que, tal como lo plantea la cita del párrafo anterior (William Reno) diversos motivos se entremezclan, ya sea los económicos, o los altruistas guerrilleros (la búsqueda de un mundo equitativo), o los defensores del status quo paramilitares, o los estigmatizadores del “demonio comunista y ateo” como aún sigue pregonando la Iglesia Católica colombiana, entre otros.

Para entender ello (el por qué y cómo se configura esta significación del enriquecimiento ilícito), es importante previamente resaltar algunas características de la industria de las drogas ilegales que condicionan la forma como ésta penetra la sociedad regional que

¹⁸⁰ Vélez (2000) intenta analizar la expansión territorial de las FARC y el ELN, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de los municipios, donde hacen presencia. Resalta cómo la guerrilla colombiana, a partir de los años ochenta, amplió su radio de acción, estableciéndose en municipios con algún potencial estratégico en términos políticos, militares o económicos, mientras que anteriormente primaban los municipios de frontera con poca presencia del Estado (casos de Caquetá, Guaviare y Putumayo). Desde entonces, su patrón municipal- según Vélez-lo definieron municipios que ofrecieron recursos importantes para financiar la guerra, con el objetivo de trasladarse a las ciudades y así “urbanizar el conflicto”. A través de ejercicios econométricos realizados para seguir las tendencias del posicionamiento territorial de las FARC y ELN con datos de 863 municipios, encuentra que las características que son relevantes para determinar su presencia actual son los que evidencian riquezas o recursos del municipio (medidas a través de variables como el índice de infraestructura vial y el ingreso per cápita). Sin embargo, este resultado no implica que las guerrillas hayan cedido terreno, ya que las zonas donde tradicionalmente han tenido influencia siguen estando bajo su control y han logrado ejercer funciones reguladoras, propias del Estado.

estudiamos: 1) En Colombia la industria ilegal es diversificada e integrada; 2) Para poder operar, toda industria ilegal requiere desarrollar redes de apoyo social que la protejan de la acción del Estado. Estas redes se desarrollan por medio de grandes incentivos: quienes apoyan la industria reciben grandes beneficios, pero quienes la traicionan sufren también graves consecuencias. Es decir, la industria se basa en lealtades fuertes, por lo cual generalmente involucran a parientes, amigos de infancia, compañeros de colegio y, en general, personas con quienes se haya compartido una cotidianidad¹⁸¹.

Al finalizar el siglo XX el capitalismo y el Estado Moderno que le es funcional, no han logrado convertirse en el modo dominante de organización societal colombiana. Las particularidades sociogeográficas y las autonomías regionales no son las únicas que han limitado la expansión del sistema en Colombia. Más de la mitad de la población económicamente activa está por fuera de las relaciones de producción capitalistas, aunque el sector informal no escapa a los circuitos del capital. Una tercera parte de las transacciones de la economía son subterráneas, es decir, no registradas por las estadísticas. La violación a los Derechos Humanos y las consecuencias de la violencia generalizada, quedan en completa impunidad, al no existir las mínimas garantías procesales y una completa desconfianza respecto a la eficacia de los organismos del Ministerio Público¹⁸².

El desarrollo económico colombiano es notablemente paradójico. El relativo éxito económico ha estado acompañado de un rápido crecimiento de la economía informal, productora de bienes y servicios legales e ilegales, especialmente drogas psicoactivas; de la continua presencia de grupos guerrilleros, cuyas fuerzas han aumentado en años recientes; de la organización y desarrollo de grupos paramilitares; y de una creciente desconfianza en la capacidad del Estado para hacer cumplir sus leyes y los contratos

¹⁸¹ El estudio más riguroso al respecto, fue el realizado por Krauthausen y Sarmiento (1991). Sin embargo, se requieren nuevas investigaciones sobre las lealtades de los pobladores en esas dinámicas de capitalismo gansteril que nos ha tocado presenciar y convivir

¹⁸² Es tan generalizada la impunidad reinante, que en los pocos casos -debido a la presión internacional- en que hay un reconocimiento de la responsabilidad legal frente a acciones violentas de sus miembros, como fue el caso del municipio de Trujillo, Valle del Cauca (donde el ejército y grupos paramilitares literalmente cercenaron con sierras eléctricas a más de un centenar de campesinos señalados de pertenecer a grupos guerrilleros), los acusados de este crimen aún permanecen como miembros activos de las fuerzas de seguridad del Estado. Peor aún, cuando hay sanciones se limitan a la reubicación territorial de los oficiales y suboficiales de su zona o región de acción o, en un extremo drástico, la destitución de sus cargos, pero en muy escasas ocasiones hay condena penal y las sanciones (indemnizaciones a los familiares de las víctimas) son asumidas por la Nación (es decir, se socializa la culpa) (Camacho: 2002: 55; Thoumi: 1996:33; Krauthausen y Sarmiento: 1997:21).

formales entre particulares (Revéis, 1995: 210). Todo ha sido acompañado de una gran corrupción, criminalidad generalizada y de una amplia violación de derechos humanos.

Diversos autores han caracterizado a Colombia como la “sociedad de la mentira” (Herrán, 1986); otros, como una colectividad en la que predomina una ética de la desigualdad, basada en un individualismo extremo que ha producido un grupo muy grande de personas, cuyo comportamiento no tiene ningún control interno (Kalmanovitz, 1989:47), es decir, que actúan “como si no tuvieran conciencia”; o como una sociedad atrapada en una “*trampa de la deshonestidad*” (Thoumi, 1987: 58). A nivel periodístico, ya es de sentido común en el resto de Latinoamérica, señalar a Colombia como un ejemplo de “narcodemocracia”. Estas caracterizaciones reflejan el proceso de deslegitimación del régimen político sufrido por el país, pero también ponen el dedo en la llaga de las responsabilidades que le atañen a una sociedad que no “puede lavarse las manos”, aunque se haga la desentendida. La complejidad de la situación es tan grande, que no es posible elaborar un modelo que la explique completamente. Para empezar, se parte de un problema fundamental en la sociedad y economía colombianas: la debilidad de los derechos de propiedad. Durante toda su historia nacional, su sistema económico ha tenido que funcionar con derechos de propiedad en entredicho social. De igual modo, el lavado de divisas y activos ha sido un fenómeno generalizado que trasciende a la industria de drogas ilegales, y que es simplemente la otra cara de la moneda de procesos que ensucian activos y divisas (Thoumi, 1987: 77).. Por ello, es sorprendente la capacidad de las personas y la economía del país para esconder y ensuciar activos, así como también la rapidez para lavarlos.

Adicionalmente, la región investigada, el Valle del Cauca, tiene una enorme fama: grandes extensiones de tierras, ricas en pastos para ganadería y aptas para todos los cultivos posibles. Dichas extensiones de tierras son muy apetecidas por narcos y paras, quienes además construyen grandes propiedades para el descanso y recreación de ellos y sus extensas familias. Además, como se ha señalado anteriormente en la caracterización de la zona, desde Tuluá (centro del Valle) hasta Cartago (Norte del departamento), se encuentra el más temido cartel de cocaína actualmente en el mundo: el del Norte del Valle. Eso le otorga un ingrediente muy especial a la zona de estudio, pues la estructura de la industria de drogas ilegales necesita comprar protección generando corrupción.

La corrupción generada por la producción de materias primas para drogas ilegales, su manufactura y contrabando, tiende a tener efectos regionales fuertes. Siguiendo a

Thoumi (1995), la legitimidad de cualquier actividad social, se basa en la existencia de un amplio consenso social respecto a que ésta se puede llevar a cabo de la forma en que se realiza. La depredación de tierras respondería a la lógica “Yo quiero lo que tu tienes, tu tienes lo que yo quiero”. Cuando esto ocurre, el ingreso y capital generado- aún con depredación o amenazas- se “legitima” por los grupos sociales cercanos a los paras. De ahí se deriva que pueden haber actividades económicas ilegales pero legítimas y, a su vez, actividades ilegítimas que sean legales.

En ese orden de ideas, lo que aquí se refleja es una “doble moral” en las voces y acciones de muchos colombianos, pues señalan a la guerrilla por el daño hecho por el secuestro y voladura de oleoductos, pero lavan dinero del narcotráfico, hacen las veces de testaferros y legitiman las masacres del paramilitarismo. El sector privado colombiano se ha desarrollado en un entorno caracterizado por una gran falta de confianza entre los participantes en el mercado, donde hay altos costos de transacción, gran incertidumbre, derechos de propiedad muy débiles y ausencia de un árbitro imparcial que proporcione un sistema eficaz de resolución de conflictos. La dificultad para hacer cumplir contratos crea una fuerte incertidumbre. El lavado en finca raíz rural también ha sido común. En este caso, los empresarios ilegales o sus testaferros han comprado grandes terrenos, en donde los derechos de propiedad y la presencia estatal son débiles¹⁸³. Con frecuencia, estas compras tienen lugar en zonas de fuerte presencia guerrillera, la cual es contrarrestada por grupos paramilitares asociados a la industria de drogas ilegales. En estos casos, las tierras se valorizan con la acción paramilitar, lo que ha sido un incentivo para comprarlas¹⁸⁴

¿Cuál ha sido y es la conducta de las poblaciones enfrentadas a la presión de los grupos armados? Tanto Pécaut, (1997b: 110) como Rangel, (2005: 41) detectaron el cinismo, el pragmatismo o la capacidad de aprendizaje en la conducta de poblaciones sometidas al control de grupos armados. La dificultad de los paramilitares y guerrilleros en la generación de orden, justicia y seguridad en la zona bajo su control, radica en que la fragilidad de su dominación, llaman al acoso constante de la contraparte. Aunque no está en duda la capacidad de expansión de las organizaciones guerrilleras, lo que no esta

¹⁸³ El trabajo de Reyes (1995) presenta el cuadro más completo de este fenómeno

¹⁸⁴ En uno de sus más conocidos trabajos, Alejandro Reyes (1995), demuestra con un vasto y riguroso trabajo empírico, que las compras de tierra rural por parte de narcotraficantes han sido grandes, aunque es difícil estimar certeramente el área total comprada con fondos procedentes de las drogas ilegales. A pesar de las limitaciones al respecto, Reyes sugiere que el área total adquirida por medios ilícitos, estaría rondando los 4 o 5 millones de hectáreas de tierras, primordialmente dedicadas a la ganadería extensiva (aproximadamente 20% de las tierras ganaderas del país) y las compras han sido de grandes parcelas. (Reyes:1995)

muy claro es si puede hacer coincidir esa expansión con un grado de legitimidad mayor al que actualmente evidencia, ante la incursión paramilitar o el fortalecimiento del ejército que lleva a cabo el gobierno de Uribe Vélez.

Lo que cohesiona, unifica y le da continuidad a las sociedades es el conjunto de las significaciones que éstas instituyen; significaciones que al ser encarnadas en el obrar-hacer y decir-representar constituyen las sociedades y el tipo de individuos que ellas producen. Es en este contexto, donde se sitúa la discusión sobre el narcotráfico, considerando como una idea fuerte que las perturbaciones de esta sociedad colombiana proceden de: 1) la crisis de sus instituciones y significaciones fundamentales, o 2) la precariedad permanente de tales instituciones y significaciones. Si aceptáramos que el narcotráfico trajo consigo una nueva significación (que lo dudamos, pues creemos que siempre estuvo ahí), entonces la “nueva” significación ha promovido, siguiendo a Malaver *“el consumo desaforado, el endeudamiento, el reconocimiento y aceptación social a partir de la ostentación de las riquezas, el derroche, el goce sin medida, la vida en continuo presente que se consume y el tratar de lograr las cosas sin el más mínimo esfuerzo”* (Malaver: 1996: 71).

De esta manera, el tipo de valoraciones que rigen el hacer social- dinero, poder, ostentación- se convierten en metas a lograr para tener reconocimiento y aceptación, a través de la capacidad de consumo. Así mismo, esta tendencia viene acompañada del repliegue creciente de los individuos a su esfera privada, con el consecuente deterioro de su participación efectiva en los asuntos de la colectividad (Malaver: 1996: 72). La industria de las drogas, su producción y consumo (así como lo que está motivando a los actores armados y sus colaboradores), no es entonces un accidente marginal de la sociedad colombiana, sino uno de sus productos. En el interior mismo de ésta, se encuentran los elementos que gestan al empresario que produce las drogas psicoactivas (al igual que el campesino que se presta para cultivarlas).

¿Por qué el narcotráfico dejó de ser una práctica marginal para convertirse en una empresa consolidada, productora de riqueza y amenazadora del orden social, político y económico actual?¹⁸⁵ La cuestión en mención, es inseparable de la pregunta sobre el problema de la violencia.

¹⁸⁵ Dicha pregunta desborda y supera el interés específico de la presente tesis, aunque obviamente el narcotráfico es el “combustible de la guerra” en Colombia, por lo menos de esta “última” guerra (años ochenta hacia acá)

¿Cuáles serían en Colombia las valoraciones y significaciones explícitas sobre las que la sociedad ha mantenido su unidad y organización? De acuerdo con los diferentes estudios antropológicos sobre el tema, en Colombia no se puede hablar de una sola cultura o de una sociedad homogénea. Para Malaver, el fenómeno del narcotráfico en nuestro país, se posibilitó por las condiciones que crean el conjunto de significaciones que instituyó “la cultura paisa” (antioqueña) que allí se produjo.

Se configura así (siguiendo con precaución el argumento de Malaver), una significación central “nueva”, que otorga un alto valor al enriquecimiento, con independencia de los medios que se utilicen para obtenerlo. Aquí plantea Malaver, una hipótesis de trabajo que deseamos traer a colación, por su pertinencia a esta discusión:

“El valor que explícitamente se promueve en la cultura (paisa-antioqueña) en Colombia es el del enriquecimiento a partir de una lucha personal y en un largo proceso; pero al mismo tiempo, la significación implícita que confiere al enriquecimiento un valor, como la finalidad de vida a alcanzar sin importar los medios que se empleen para lograrlo, opera con igual o mayor fuerza. El significado que termina primando es la significación del enriquecimiento como fin en sí mismo. Esto lo vemos con claridad en aquella tradicional frase que expresa el padre antioqueño al hijo: “consigue plata, hijo mío, consíguela honradamente, y si no....consigue la plata, mijo”; o también cuando se dice: “disponer del dinero es lo importante, propio o ajeno es secundario””¹⁸⁶ (Malaver: 1996: 28).

Así pues, vemos cómo un principio, una norma o una ley de carácter sustantivo que debe regir el hacer social, queda anulada por una significación opuesta, que es la que se impone la mayoría de las veces. A nuestro juicio, éste es el origen de lo que en términos morales llamamos corrupción. Entre las hipótesis de Thoumi sobre por qué se desarrolló la industria de drogas psicoactivas en Colombia, adquiere importancia lo que él llama la falta de legitimidad del Estado y su incapacidad para controlar grandes zonas del país. Proceso de deslegitimación que contribuyó al florecimiento del narcotráfico, en la medida en que a un Estado débil le queda imposible imponer una normatividad que se cumpla en todo el territorio nacional y, por ese déficit de control, habrá algunas regiones donde las posibilidades de que prospere lo ilícito son mayores. Pero el desarrollo de la llamada economía subterránea, que en muchos frentes es difícil de diferenciar de la legal, no es la que deslegitima el régimen y debilita al Estado; ésta es parte constitutiva del ordenamiento social y su intención no es desestabilizar sino integrarse cada vez más al orden existente¹⁸⁷.

¹⁸⁶ El subrayado es mío, porque señala fidedignamente el entorno cultural de la que se nutren los actores armados en el municipio objeto de estudio.

¹⁸⁷ En esa lógica, ya he desarrollado (en el capítulo dos), la idea de que el narcotráfico no se configura en una posición anti-sistema, es decir, en contra del Estado liberal o del sistema

Las condiciones que han permitido la creación y consolidación de esta nueva empresa-industria de alta rentabilidad como es el narcotráfico están asociadas estrecha e inextricablemente con la crisis de las significaciones constitutivas de la sociedad colombiana, por el surgimiento de nuevas significaciones que terminan siendo dominantes y significaciones que desde su origen están formuladas de manera contradictoria¹⁸⁸. En el centro de estas crisis se crea la figura del empresario narcotraficante. En el tipo que podemos denominar “narcotraficante”, se descubren algunos rasgos característicos del empresario medio colombiano, lo que ha permitido que el negocio de las drogas psicoactivas haya dejado de ser una práctica marginal, para convertirse en una industria y en una empresa exitosa. Los sujetos observados en el municipio (“el traqueto” “el lavaperro”, “el capo”), no se perciben a sí mismos como delincuentes. En esa apreciación que tienen de sí, no podríamos decir que haya cinismo; más bien, lo que allí se evidencia es que han interiorizado y encarnado las significaciones y valoraciones que la sociedad ha promovido, en especial aquellos principios subyacentes que han terminado siendo validados en la vida social. Expuestas de esta manera las cosas, la actividad del narcotraficante devela la inconsecuencia del principio que promovía el enriquecimiento a partir de un trabajo honesto y mediante un largo proceso, palabra esta (proceso) que queda vacía de sentido, pues solo interesa la transacción afortunada para enriquecerse. Esta transacción forma parte del propio proceso.

Ahora bien, el evidente y exagerado éxito económico que exhiben los narcotraficantes en la zona objeto de estudio (por el cartel del norte del Valle, principal cartel de cocaína en el mundo entero), su gran capacidad de consumo, la manera como distribuyen su riqueza, en otras palabras, su adecuación al conjunto de las significaciones sociales, fueron configurando su reconocimiento y admiración por parte de amplios grupos de la sociedad.

No creo exagerar al decir que ser narcotraficante, familiar o amigo de ellos, otorga prestigio. En ese sentido, no se puede hablar de infiltración del narcotráfico en la vida nacional: éste fenómeno no es una extraña exterioridad patológica que haya

capitalista. Por el contrario: refleja un acentuado nacionalismo y una búsqueda de ser integrado a las dinámicas formales, con el objeto de bajar su perfil. Cabe recordar cómo el cartel de Medellín propuso a uno de los gobiernos de la década de los ochenta, pagar toda la deuda externa colombiana, si a cambio se firmaban compromisos sólidos para eliminar la extradición y la persecución a sus capos.

¹⁸⁸ De ahí que un filósofo como Jaramillo-siguiendo una fuerte influencia Habermasiana-, insiste que el de Colombia es un caso de modernidad “inconclusa”.

descompuesto a una sociedad sana¹⁸⁹. Los diferentes estamentos de la sociedad, se inter-relacionan complejamente con éste fenómeno. Pero de este análisis no se deduce de manera simple o generalizada que estamos frente a una narco-democracia o a una narco-economía. Como lo señala el análisis de Thoumi, los dineros producto de la industria del narcotráfico no han sido determinantes en el relativo crecimiento y estabilidad económica del país. Lo mismo se podría decir en términos políticos. No caben dudas de la influencia de estos dineros en muchos sectores, incluida la financiación de campañas electorales, para congreso, alcaldías o presidenciales. Pero afirmar que las políticas fundamentales del Estado están al servicio de sus intereses, es una aseveración temeraria y con arriesgado fundamento.

Dicho en un término muy duro, el enriquecimiento ilícito ha sido legitimado. Y de ello se alimentan los paramilitares y la guerrilla, al igual que corroe instituciones como el ejército. De ahí que el caso de la masacre de 10 de los más renombrados policías del cuerpo de élite antidrogas, asesinados por un grupo numeroso de soldados y oficiales en Jamundí (sur del Valle del Cauca, 80 kilómetros de aquí), no causó conmoción a cuatro días de las elecciones presidenciales¹⁹⁰

El narcotráfico en Colombia no es un fenómeno espurio, el tumor extirpable del organismo social colombiano¹⁹¹. Este simplista recurso a la mutilación -propio de moralismos-, deja a un lado el hecho de que junto a la poderosa y proteica presencia del narco-capital en la economía colombiana, existe una amplia narcocultura. Una cultura que, por un lado, valoriza el tráfico de drogas como vía adecuada de ascenso social, al traficante como empresario intrépido y a muchas de sus inversiones como oportunos y loables aportes a zonas y sectores sociales donde el Estado apenas se ha hecho presente; y que, por el otro, desvaloriza muchas de las acciones oficiales en su contra al considerarlas fariseas, inútiles o antinacionales (Ramírez: 2003:38). La violencia del narcotráfico se ha convertido en las dos últimas décadas en un grito para la participación

¹⁸⁹ Como enfoques funcionalistas pretenden señalar.

¹⁹⁰ 35 soldados y oficiales del Batallón de Alta Montaña, abrieron fuego cruzado contra 10 policías del prestigioso cuerpo élite antidrogas en una emboscada en ese municipio del Valle del Cauca el pasado 24 de mayo de 2006 (se trata del más prestigioso escuadrón colombiano entrenado por la DEA). Todos fueron asesinados y rematados a quemarropa. Los oficiales del ejército involucrados, explicaron posteriormente que lamentablemente se trataba de un “error”. Las pruebas de la justicia ordinaria en Colombia (que le quitó el caso a la Justicia Penal Militar en un escandaloso suceso), indican que no fue un error, sino una masacre intencional, a través de un “encargo” del narcotráfico que se encuentra infiltrando al ejército. En otro país, este escándalo le hubiera producido un alto costo político en las elecciones presidenciales a Uribe, quien quiso desviar la atención del país en este delicado asunto. Pero no. El asunto quedó como la mayoría de los casos de este estilo en Colombia: en completa impunidad. 4 días después, Uribe ganó las elecciones presidenciales (¿Acaso no se trata de una sociedad ciega, sorda y muda?)

¹⁹¹ Como ciertos criterios de sanidad social han querido verlo.

social (grupo de “Los Extraditables”), señalando, de paso, la esclerosis de los vasos comunicantes de una democracia incapaz de articular en su dinámica la irrupción de novedades sociales (Ramírez: 2003: 39)

Liposucciones y siliconas: el atajo al paraíso

El narcotráfico ha permeado la zona fuertemente desde hace más de veinte años. Pero, ¿realmente la ha permeado, es decir, ha venido “de afuera” y ha “contaminado” a la socialidad, o ya había en dicha sociedad patrones de conducta que favorecieran el enriquecimiento ilícito? Pues pensar en una versión inocente, pura y romántica de la población urbana y campesina (a lo Rousseau), nos llevaría a la pura victimización (a modo de “el hombre nace bueno y el narcotráfico lo vuelve malo y perverso”). Veamos, por ejemplo, el caso de muchas señoras devotas y cristianas de la zona, quienes de la boca para afuera pregonan el “amor por el prójimo”, pero que en su praxis cotidiana están legitimando el enriquecimiento a cualquier precio, así como la discrecionalidad en la aplicación de justicia.

La visibilización de relaciones instrumentales de género (entre mujeres, paras y narcos), no podría reducirse simplemente a una falta de autoestima (aunque es obvio que mucha no tienen), que se refleja en el gran número de mujeres que acuden a la silicona y a la liposucción, con el objeto de incrementar sus acciones en los mercados municipales, es decir, en lo pequeños y medianos poblados¹⁹². Dado ello, se supone que dichas operaciones son una “inversión”, con el objeto de ser más visible ante los ojos de los hombres. Pero ¿Qué tipo de hombres están en la mira de estas “cazadoras”? Pues aquellos que tienen mayor capacidad adquisitiva y de consumo, y con los que las “mujeres-siliconas” pueden establecer significados socialmente compartidos. Para no dar más rodeos: narcos, paramilitares, ganaderos, comerciantes mayoristas, altos funcionarios del Estado, etcétera.

Tentadas y seducidas por el escandaloso encanto de la riqueza fácil y el poder, las mujeres de los guerreros viven protegidas por ejércitos privados. Parece entonces que el principio valorativo que atraviesa las relaciones sociales municipales es “todo tiene un precio”. Pero la clase política local y regional (y hasta podríamos sugerir sin equivocarnos nacional), con pocas excepciones, también se va a la cama- aunque sea simbólicamente- con los mafiosos. Luego, como se ha indicado, no se puede contraponer Estado a los

¹⁹² Esta tendencia, en realidad, deviene de dos ciudades colombianas (Cali y Medellín) en las que es posible encontrar, no solamente la mayor cantidad de mujeres hermosas del país, sino la mayor tendencia en operaciones de siliconas y liposucción. Coincidentalmente, se trata de las ciudades donde se originaron los dos principales carteles de narcotráfico de los años ochenta.

narcos, pues los primeros son el paraguas de los segundos en la historia contemporánea colombiana.

La frase que resumiría el ideal de la mayoría de adolescentes y jóvenes mujeres de la zona urbana y rural sería “Yo quiero un marido que me haga vivir bien”¹⁹³. Cabe señalar que dicha afirmación no es un indicador de menor nivel educativo, pues hasta una estudiante universitaria lo reflejó en una de las entrevistas. Esa es, según esa estudiante, una “ilusión” de sus vecinas del barrio, de sus compañeras de secundaria y hasta de algunas de sus amigas de universidad. O el sentir de doña Petrona, que le aconseja a su hija cuál es el tipo de “hombre” que le conviene: “*Yo siempre le digo a mi hija que no se vaya a conseguir un vaciado y pobre diablo*”, sentir que en ninguna forma está en contravía a la de un joven entrevistado, Tomás: “*Los paras y los narcos siempre están acompañados de las mujeres más jóvenes y bonitas*”.

En ese contexto, la guerra le da a los paramilitares la oportunidad de obtener “dos pájaros de un solo tiro”: reconocimiento (vía armas y combatir a la guerrilla) y prestigio (vía robo de tierras y “posesión” instrumental de mujeres). Para los paras y narcos, “tener” a las mujeres bellas es “equiparable” a grandes fincas y autos lujosos: son referentes de “prestigio. Aquel mandamiento cristiano “No desearás la mujer del prójimo”, se aplica escasamente si ese prójimo está armado.

Cabe hacer una aclaración: las significaciones de enriquecimiento ilícito asociado con belleza femenina, es exclusivo del casco urbano y no del entorno rural, donde las mujeres campesinas se inscriben en otra lógica.

En cambio, en los pequeños, medianos y grandes municipios o cascos urbanos colombianos, convergen paras, mujeres jóvenes y hermosas y también se “visibiliza” los bienes materiales de narco-paras.

Entre los marcos valorativos de muchos pobladores (por no decir todos), se encuentra la subestimación de lo académico, lo intelectual y el largo plazo. Igualmente, la envidia y la codicia son sentimientos arraigados. La frase de una señora es diciente “*¿Para qué estudiar si eso no da plata? Los ricos no estudian*”.

¹⁹³ Nota clave al margen: Un “best sellers” colombiano y una serie televisiva llevan el mismo título “*Sin tetas no hay paraíso*” señalando el aumento descomunal de operaciones de siliconas (y liposucciones) entre las jóvenes colombianas en la última década. Dicha tendencia se da paralelamente a la influencia del neoparamilitarismo y los nuevos narcos de los últimos años.

Dormir tranquilo” sin deudores ni acreedores: La institución de los “intermediarios” y la demanda de sicarios

Otro aspecto interesante de las significaciones es el de acudir a formas de justicia para-estatal para resolver asuntos privados que, en una situación normal en cualquier otra sociedad, solamente se llevaría a cabo por la justicia ordinaria. Me refiero aquí a la institución de los intermediarios (“enviar a matar por encargo”), lo cual denota una cierta discrecionalidad de la muerte: lo que Michael Thausig denominó como “muertes significativas y muertes insignificantes”. La fuerte frase de un comerciante lo dice todo: *“No me ensucio las manos: si lo necesito pago por hacer matar”*. Ese comentario surgió de una conversación (ajena), que pude escuchar “reservadamente” en el único gimnasio del pueblo, a raíz de una deuda que esa persona tenía pendiente por cobrar. Tal parecía que el deudor no “daba la cara”: *“Para eso voy a ver a los paras y les pago un dinero y en un par de días me saca de encima el esfuerzo de cobrarle a ese hijueputa (sic): o les paga a ellos o ahí lo dejan tirado con un par de balazos”*-dijo en voz relativamente alta, sin tener problema en que se lo escuchara.

En “La hora de los dinosaurios: depredación en el conflicto armado colombiano”, los investigadores Salazar y Castillo (2004), citan a Peter Waldman, con el objeto de explicar este fenómeno social (muy colombiano) de matar “por encargo”:

“A finales de los noventa, el sociólogo alemán Peter Waldman (1999), hizo un “descubrimiento” que los propios colombianos no habían podido hacer: nada distingue mas el carácter de nuestra violencia y el avance de nuestro muy antiguo conflicto armado, como el hecho de que los colombianos no “matamos”, sino que “hacemos matar”. En lugar del acto violento que toma la justicia en sus propias manos, los colombianos hemos aprendido a pagar, dando un rodeo por una institución propia del mercado para asegurar la desaparición del otro que nos amenaza, se cruza en nuestro camino, obstaculiza nuestros negocios o tiene la perspectiva de ser un riesgo potencial para nuestra supervivencia. “Hacer matar” supone pagar por la muerte o por la desaparición del otro. Implica, por lo tanto, la presencia de un elemento de intercambio, la ejecución de un contrato voluntario entre dos partes que buscan el beneficio privado.

Desde la pequeña ejecución pagada para sacar del camino algún rival, a un deudor olvidadizo o un acreedor molesto, hasta el gran contrato de seguridad celebrado con la guerrilla o con alguna organización paramilitar, pasando por la infinidad de operaciones que involucran violencia y uso de las armas a cambio de ventajas económicas, la regularidad visible es la presencia de dos elementos: el uso de las armas o del terror para sacar el mayor provecho posible del estado de anarquía existente, y el desarrollo de una intrincada red de intercambios que se van convirtiendo en instituciones sociales provisionales y fragmentarias, pero operativas “. La mayor matanza continua del mundo, para un país que no está en guerra declarada, va de la mano con la puesta en marcha de un conjunto de instituciones mercantiles, en cuyo centro está la figura del contrato racional en que las dos partes no harían mas sino sellar un acuerdo que va en beneficio de ambas. Se trata, entonces, de una violencia calculada, funcional, económica (Salazar y Castillo: 2001: 18)

Tal situación sucede con deudores o acreedores en el municipio. Los paras pueden ser excelentes cobradores o silenciadores, de acuerdo a quien deba o quien desee cobrar. Los individuos que pueden, pagan para asegurar el cumplimiento de contratos, para garantizar la propiedad sobre sus bienes y activos y, sobre todo, para incrementar la probabilidad de su supervivencia (que muchas veces implica la eliminación del que puede ser, en su percepción, una amenaza para la suya). Se paga para defenderse, pero también para “enviar a matar a alguien”. Este último elemento depende, en forma decisiva, de recolectar, a tiempo y con la mayor exactitud posible, la información requerida, y de aprender, sobre la marcha, a tomar las decisiones correctas. Las relaciones de los civiles con las organizaciones armadas y con otro tipo de organizaciones políticas, comunitarias y de ayuda humanitaria, pasan por el intercambio de dinero, lealtad, recursos y apoyo logístico a cambio de información y decisiones. Las dos principales metas del poblador en estas circunstancias, se reducen a sobrevivir y ampliar sus oportunidades económicas.

El “monstruo” en el espejo: el caso Garavito y las consideraciones de la doble moral colombiana

Para ir cerrando este epígrafe, cabe analizar detenidamente un caso paradigmático que se presentó en Colombia durante el 2006 y que bien vale traer a colación aquí: se trata del escándalo que provocó en el país la entrevista televisada al “primer” asesino en serie de Colombia, Luís Alfredo Garavito.

Dicho caso es pertinente discutirlo, porque constituyó la “única vez” que se formaron grupos grandes de personas a conversar y opinar en la zona de estudio, lo cual nos puede otorgar interesantes pistas sobre el habitus intergrupal que señalé en otros epígrafes. Se trató de un debate “sui generis” en el municipio, la única oportunidad que tuve de observar la población entera, en la zona rural y urbana, alrededor de un eje temático o preocupación “común” a todos.

Precisaré entonces el caso. En el mes de mayo de 2006, la cadena de televisión RCN llevó a cabo una entrevista “exclusiva” a un recluso llamado Luís Alfredo Garavito, el cual es ni más ni menos que el primer “asesino en serie” de la historia colombiana, a quien se le imputa el asesinato de 165 niños desde 1990 al año 1999 en el que fue capturado¹⁹⁴. Actualmente, Garavito se encuentra condenado a 40 años de cárcel, el máximo permitido

¹⁹⁴ Aunque confesó haber asesinado a 165 niños y declarado dónde los tiene enterrados, hasta el momento solamente se han encontrado 115 cadáveres de los niños señalados por Garavito. Medicina forense sigue en la búsqueda de la identificación de los restantes. Todos los niños habían sido denunciados como “desaparecidos” desde 1990 hasta el año 1999 en que fue apresado este siniestro personaje de la ya convulsionada historia reciente colombiana.

por el código penal. Pero –he aquí el centro del escándalo- existe una laguna jurídica en cuestión. En el sistema penal colombiano, existen varias rebajas de condenas penitenciarias posibles: un tercio si el acusado confiesa su culpabilidad desde el principio y le ahorra tiempo al sistema judicial; otro tercio de tiempo de rebaja de condena si el recluso estudia alguna licenciatura, diplomado o termina sus estudios básicos de primaria o secundaria, si presenta buena conducta o realiza alguna actividad comunitaria. El hecho es que Garavito ha cumplido con todos estos requisitos¹⁹⁵ y, tras haber sido condenado a 40 años y llevar un total de siete años en su haber, en solo cinco años y medio saldrá de prisión tras abonársele los privilegios de rebaja de penas en el código penal colombiano. He aquí el nudo del escándalo, *“la incapacidad de la justicia colombiana para darle su merecido a un animal como éste”*-como me expresaba alterado un poblador del casco urbano.

En la entrevista televisiva, el pedófilo Garavito se confiesa arrepentido y convertido al cristianismo. Además, formuló ante las cámaras una frase muy fuerte (pero sobre todo “surrealista”), que provocó mayor estupor e indignación en la población del Valle del Cauca, pues afirmó que si lograba salir pronto por buena conducta, *“iba a lanzarse para ser elegido en el congreso colombiano y luchar por los derechos de los niños”*. Ironía, cinismo o locura, esta declaración desató la “ira” de los pobladores que no dejaron de reunirse y hablar del tema. Por lo menos, durante siete días y sus noches, en el pueblo y la región no se conversaba de otra cosa sino del caso Garavito y la “injusticia” que se iba a cometer en Colombia, si un asesino de tal calaña, saliera “libre” de la cárcel¹⁹⁶.

Algunos comentarios que vale la pena colocar aquí sobre el tapete sobre el escándalo Garavito y que denotan una cierta “discrecionalidad” sobre la violencia, son los siguientes:

1) *“Ese enfermo mental no debería vivir: ¿por qué no le dan pena de muerte? Deberían descuartizarlo y hacerlo sufrir por esos pobres niños y sus adoloridos padres”*.

¹⁹⁵ Y además, Garavito ha entrado, desde hace tres años, a formar parte de un grupo de oración, de afiliación cristiana, que visitan las cárceles colombianas. En la mencionada entrevista televisiva, Garavito afirmó que ya dejó atrás su pasado y que se encuentra “a paz y salvo con Dios”, pero sus compatriotas no le creen.

¹⁹⁶ Esa misma semana de mayo de 2006 se produjeron dos casos paralelos de gran magnitud en la actualidad colombiana: 1) El juicio a los 157 soldados y militares acusados por robo de una majestuosa suma de dinero en el Caquetá (más de cuarenta millones de dólares); 2) La masacre de Jamundí (Valle) producida por un batallón militar de alta montaña a un grupo de 10 policías de “antinarcóticos” que se encontraban haciendo operativos antidrogas (hecho que ya he analizado en páginas anteriores). Pero estas dos fuertes noticias (paralelas y coyunturales), no lograron “opacar” el “escándalo” por la inédita entrevista al pedófilo y asesino Garavito.

- 2) *"No se puede creer que en Colombia exista gente de esa calaña que esté viva".*
- 3) *"Qué terrible e inhumano que nuestro sistema de justicia no sea más severo con estos criminales".*
- 4) *"Dios mío, esto no debería permitirse. Es un monstruo que no debería tener el privilegio de vivir y cínicamente ser entrevistado".*

Aunque la desmesura del exceso en la sociedad colombiana o el hiperbolismo de la violencia son parte de la cotidianidad, la realidad de la violencia en el país se niega todos los días, como si ocurriera en otra parte. Y, paradójicamente, los pobladores urbanos y rurales de nuestro estudio, asisten todas las noches a su cita mediática con los noticieros televisivos, observando casos de violencia y depredación del conflicto armado, como si sucediera en otra parte y no ahí, frente a sus narices. Les escandaliza a todos los 165 niños asesinados por Garavito, pero escasean los comentarios sobre los miles de muertos de los actores armados, como si la muerte y la violencia que están presentes en sus interacciones y prácticas sociales, no pudiera ser. Aquí también valdría la pena traer a colación una brillante frase del recientemente fallecido Clifford Geertz: *"Hay numerosas maneras de oscurecer una verdad evidente"*.

De este modo, es posible enfatizar el fin del mito de la inocencia o victimización de la población civil, en la medida en que algunas- si no todas- las gentes alcanzan a conquistar el anhelo de enriquecerse, aunque sea breve y esporádicamente, pues el acecho de la DEA y del gobierno colombiano (con todo y su debilidad institucional y debido principalmente por la presión internacional), siempre es una sombra que no los deja completamente tranquilos.

Capítulo 6 Nuestras guerras, nuestras memorias, nuestros muertos¹⁹⁷. Sombras del pasado e incertidumbres del presente

"No es verdad que lo que ha pasado esté en el pasado" George Herbert Mead (1929).

Si se mira hacia atrás y se revisa el material empírico hallado y analizado en el capítulo anterior (interacciones y estrategias), se recordará que los acervos de conocimiento de los pobladores constituían un reflejo de la memoria colectiva, es decir, una herencia social que les permitía a todos configurar sus actuaciones, con la precaución suficiente en sus interacciones con los guerreros, en aras de seguir sus rutinas. Dichos acervos de conocimiento, se encuentran claramente articulados a la memoria colectiva, en la medida

¹⁹⁷ Tomado prestado de una frase de Gonzalo Sánchez

en que esta última, permite mantener las imágenes del recuerdo, la de las guerras sufridas por sus antepasados, o la de la infancia de los entrevistados más ancianos, lo cual repercute en sus conductas actuales, así como en las estrategias aplicadas, acordes a la herencia social que le han legado sus ancestros.

Las entrevistas efectuadas en este estudio a treinta y cinco pobladores, arrojaron fuertes evidencias (luces) sobre la memoria de las guerras y las violencias. El espacio de la entrevista es una valiosa oportunidad para la expresión de la memoria y la reconstrucción de la identidad coral y las biografías individuales, atravesadas por la muerte, la incapacidad de la construcción de un “nosotros” o una “simbología nacional”.

¿Cómo nombran los pobladores de la zona de estudio el pasado? La memoria no es solo huella identificable. Es también representación mental de un proceso social y cultural. De allí que un campo problemático al estudiar la cadena continua o discontinua de las guerras y la Violencia es el de cómo nombrar, periodizar y ordenar los eslabones de la cadena. El carácter relacional, no esencialista, de los actores en un contexto de guerra constituye el eje de dichas nominaciones como por ejemplo “Bandoleros”¹⁹⁸ “Delincuente”, “bandido”, “guerrillero”, “terrorista”, las cuales expresan ante todo relaciones de poder, que varían con el tiempo, funciones, escenarios y observadores.

¿Qué tipo de huellas marcan nuestra historia nacional? ¿Cómo nos las representamos y condicionan nuestro presente? ¿Cómo restituir los heterogéneos fragmentos en una memoria común? Todo ello nos llevaría a la imperiosa necesidad de emprender una arqueología de las guerras colombianas, aunque no fuera posible hacerlo en este estudio sino en los que lo continuarán.

Cinco ejes analíticos configuran la relación memoria y violencia, evidenciada en las voces de los entrevistados. Dichos ejes son los siguientes:

- 1) La percepción de la repetición de la violencia, es decir, que la violencia para muchos pobladores es una sola, vale decir, que se reitera en todos los tiempos y por lo tanto, siempre “hemos estado en guerra”;
- 2) Desde las voces de los más viejos, el recuerdo de la polarización liberal-conservadora, permitía “identificar” claramente al “otro”, ya sea liberal (rojo) o conservador (azul);

¹⁹⁸ El libro de Eric Hobsbawm de finales de los setenta destacaba en “Bandoleros, gamonales y campesinos” el caso colombiano.

3) Tanto en la época de la polarización de los cincuenta (“godos azules versus liberales “come-curas”), como en la guerra actual, existe un factor común: *el despojo de tierras*

4) Lucha de memorias: de la historia oficial a la memoria campesina y guerrillera. La disputa de estas dos memorias contrapuestas, contribuye a dispersar las miradas de pobladores urbanos y rurales en el Valle del Cauca.

5) La ausencia de conmemoraciones como cierre represivo de la memoria colectiva. No hay monumentos, no hay fechas para exaltar en la comunidad. Los mayores de 40 años vivieron, por ejemplo, la masacre de Trujillo en los ochenta, la más cruel en la historia de esta región. Pero, por ejemplo, al recordar hechos de violencia, los entrevistados más jóvenes acudieron a los diversos ejercicios de la memoria que les han manifestado sus mayores, aunque no hubieran vivido en carne propia dichas masacres de hace dos décadas.

A continuación, desarrollaré cada uno de estos aspectos, articulando testimonios y análisis respectivos

6.1 La Percepción de la repetición de la violencia

Una lógica del sentido común, que se encuentra presente en casi todos los testimonios de los informantes, es que la violencia ha sido la misma de siempre, vale decir, que Colombia ha tenido siempre una historia de violencia. De esta manera, las narrativas en las que se expresa esta memoria están basadas en la convicción de que la historia es repetitiva lo que esta ocurriendo ahora sería “*lo mismo*” que sucedía en la Violencia de los años cincuenta, lo mismo del siglo XIX, lo de la Guerra de los Mil Días, en las guerras civiles del siglo XIX. En suma, la convicción de que siempre está presente la misma violencia.

Es evidente que no hay otra manera de hacer referencia a la violencia que contando la propia historia, lo que equivale a admitir que la “violencia” sólo se puede narrar a través de una infinidad de historias que no constituyen un conjunto.

La violencia de conjunto, sin duda, también es evocada en nombre de una trama que no es otra cosa que toda la historia colombiana: se supone que la violencia es la misma que está presente a todo lo largo de los siglos XIX y XX. Cuando se expresa aquí que las diversas dinámicas de violencia interfieren entre sí, se afirma, implícitamente, que a pesar de todo tenemos que buscar lo que hace que fenómenos tan distintos puedan tener cierto vínculo común. Cuando se habla de la regionalización de las dinámicas de violencia, tenemos que analizar por qué en un momento dado esos fenómenos toman una forma regional, lo que no es obvio de por sí.

Un estudioso de la violencia colombiana, Daniel Pécaut, ha hecho referencia a la “memoria mítica”, por estar construida como la repetición permanente de lo mismo y por estar basada en la percepción de una contraposición entre fuerzas impersonales. El episodio de “La *Violencia*” de los años cincuenta constituye casi siempre el telón de fondo de las memorias individuales y colectivas. Más de medio siglo después, numerosos son los colombianos que lo evocan como si estuviera el origen de todo lo que les ha ocurrido después¹⁹⁹. La *Violencia* constituye un pasado que nunca ha logrado llegar a ser efectivamente un pasado. Muchas razones han contribuido para que se produzca esta situación:

1) La *Violencia* de los cincuenta, como la guerra actual, es un fenómeno que no se deja fácilmente reducir a un conflicto entre dos campos. Esta es una idea fuerte, una perspectiva que “hace ruido”, pues no se trata de una polarización a secas, sino una multiplicidad de actores, discursos, lógicas, miradas, etc. Sin embargo, desde el comienzo la oposición “formal” o aparente se configuró entre los dos partidos tradicionales (o se era liberal o se era conservador), lo cual define, sin duda, un criterio “amigo-enemigo de validez general; no obstante que otras dimensiones (como el narcotráfico) entran también en juego rápidamente, los actores se multiplican, el conflicto se ramifica indefinidamente de acuerdo con los lugares donde se manifiesta.

2) De enfrentamiento ideológico de conjunto, provocado y dirigido por las elites, se transformó en seguidilla de masacres contra los semejantes, los vecinos. La venganza, el miedo, el apoderamiento de terrenos y casas ajenas, tienen un lugar importante en el recuerdo de los colombianos. La yuxtaposición de relatos fragmentarios- citamos nuevamente a Pécaut (2003: 56), de donde no emerge ningún metarrelato, toma el lugar de relato global. Ninguna posición de conjunto es posible. Sólo hay puntos de vista dispersos. En estas condiciones no fue posible (ni lo es aún) construir un relato histórico:

“La Violencia es una guerra civil sin batallas, sin momentos cruciales, sin héroes militares, con figuras de resistentes que son eliminados posteriormente con mucha frecuencia o juzgados como colaboradores del bandolerismo” (Pécaut: 2003: 58).

¹⁹⁹ Volvamos a “leer juntos” a Pécaut: “*La razón de ello no se encuentra solamente en los sufrimientos extremos que produjo dicha violencia. Al balance de 200.000 muertos que produjo, a los desplazamientos y reagrupamientos forzados que provocó, habría que agregar la experiencia de atrocidades innumerales y una “brutalización de las costumbres” que ha quebrantado todos los referentes éticos. Si bien otras sociedades han conocido, sobre todo en momentos de guerra, este tipo de conmoción profunda, han logrado sin embargo integrarlos progresivamente en su historia*” (Pécaut: 2003: 121)

3) Finalmente, la particularidad de este “origen” consiste en que se resbala a los intentos de ubicarlo temporalmente, pues “La Violencia” es percibida por muchos como un fenómeno que nunca tuvo un final. Al mismo tiempo, brillantemente el mismo Pécaut nos recuerda que la Violencia no tuvo tampoco un comienzo: toda la historia de Colombia sería la historia de la violencia, desde las guerras civiles del siglo XIX hasta los movimientos campesinos del siglo XX. La carencia de una representación compartida de la Violencia, logra borrar de esta manera su carácter de episodio situado en una coyuntura específica. (Pécaut: 2003: 123). Bajo el aspecto de una historia repetitiva, esta pierde su carácter concreto. Lo que se trasluce de hecho es una conceptualización implícita de la historia colombiana, según la cual, el desorden, la injusticia, la impotencia, la violencia, lejos de ser las consecuencias de acontecimientos, existen con anterioridad a ellos y comandan su desarrollo.

Derivado de lo anterior, la memoria también se asume como “mítica” pues la atemporalidad de ésta se manifiesta por la confusión del tiempo. De la misma manera los pobladores relacionan con mucha frecuencia los hechos del pasado con los hechos actuales. La yuxtaposición de los tiempos subtiende la visión de la continuidad. Esta memoria en perpetua mutación conserva al mismo tiempo contenidos invariables. Más que memoria de los acontecimientos es, en efecto, memoria de los sufrimientos y de las atrocidades y éstas parecen idénticas de una fase a otra. Los desplazamientos forzados y los cuerpos mutilados se reproducen sin cesar aunque, ciertamente, cambian los contextos y la escenificación.

Actualmente, la mutilación de los cuerpos opera en un contexto de secularización y de enfrentamiento “prosaico”. Sin embargo, el mismo fenómeno de “brutalización” de los cincuenta está en juego, estableciendo una continuidad que se vuelve a encontrar en la memoria²⁰⁰ Esta memoria es ante todo campesina pero se ha difundido mucho más allá de este marco y sigue siendo el sustrato de una gran parte de la memoria popular que prolonga la concepción de una separación entre “nosotros” y “ellos”, tal como lo reflejan las entrevistas a don Justo, Ruperto, Eustagio y Filomeno²⁰¹.

²⁰⁰ Los “tradicionales” cortes corporales a los sujetos asesinados como el “corte de franela” (estiramiento y corte de la lengua como señal de tortura) y la “práctica social guerrera” de extraer las tripas de los muertos para que “no floten en los ríos” cuando se los lanza a estos, son estrategias atroces de los años cincuenta que todavía se conservan en las violencias actuales (Entrevistas a don Ruperto y don Filomeno)

²⁰¹ Lo que había sido vivido por sus padres como intolerancia partidista se retranscribe en ellos en términos de intolerancia revolucionaria, a nombre esta vez de la creación de un mundo justo. Entre el Laureanismo y la teología de la liberación, tal como ésta influye en ciertas guerrillas, las continuidades son perceptibles con alguna frecuencia; igualmente entre el Gaitanismo y la

Finalmente, y con el ánimo de observar los puentes conductores entre un periodo delimitable de guerra (“La violencia liberal-conservadora 1948-1958) y la otra (emergencia de las guerrillas y otros actores 1964-2007), reseñemos brevemente la historia de violencia desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. De 1958 a 1978 se alternaron los dos partidos tradicionales en el llamado “Frente Nacional”. De esa época data el surgimiento de las cinco guerrillas más conocidas de la historia colombiana, siendo el M-19 y las Farc las más referenciadas. El Valle del Cauca se convirtió en un pasaje o cónclave fundamental para el tránsito de los frentes guerrilleros, especialmente el ELN²⁰² y las Farc, siendo el primero más fuerte y de mayor presencia en el occidente y centro del Valle en los setenta. Su presencia y los métodos de extorsión y ataques permanentes a las élites ganaderas y agro industriales del departamento, fue provocando un “caldo de cultivo” para la agresiva constitución de grupos paramilitares que emergen en los ochenta en alianza con el narcotráfico. El hecho “fundador” de esta alianza-simbiosis, lo constituyó la trágica masacre del municipio de Trujillo.

6.2 La clara identificación del otro: “Godos” azules versus rojos “come curas²⁰³” en los años cincuenta

El 9 de abril de 1948, el líder del partido liberal, el caudillo Jorge Eliécer Gaitán, fue asesinado en la ciudad de Bogotá. En una impresionante y dantesca reacción en cadena, los seguidores liberales no solamente lincharon a su asesino, sino también se enfrascaron en una sed de venganza sin precedentes en la historia del país. Con el magnicidio de Gaitán, el país entró en una situación desbordada, una guerra civil sin límites de consideración con el “otro”, conocida en la historia colombiana como “La Violencia”, la cual duró de 1948 a 1958, una década de fuerte polarización.

En el contexto político y social de mediados del siglo XX, todas las familias colombianas se identificaban o afiliaban a uno de los dos partidos tradicionales, marcando a “fuego” las relaciones sociales. Se era conservador o se era liberal²⁰⁴. No había grises²⁰⁵. No

concepción antioligárquica de las FARC. La memoria interviene aquí, no en el plano de los contenidos, sino de los esquemas mentales.

²⁰² Ejército de Liberación Nacional: guerrilla pro-guevarista, surgida a finales de los años sesenta en el departamento de Santander, al oriente colombiano y muy cerca de la frontera con la hermana República de Venezuela. Sus fundadores hace cuatro décadas fueron destacados líderes estudiantiles y sacerdotes de la Teología de la Liberación (especialmente de nacionalidad española, como el famoso caso del “Cura” Manuel Pérez).

²⁰³ “Come curas” o “mata curas”, en alusión a los liberales que atacaban a sacerdotes, quienes del otro lado del conflicto, apoyaban los grupos de asesinos “Pájaros” y “Chulavitas”

²⁰⁴ Esta polarización deviene del siglo XIX, en la época en que se constituyó la República de Colombia y en la que se formaron los dos partidos tradicionales colombianos, cuyas tendencias

solamente se polarizó el país, sino que se fraccionó el mundo social de sus habitantes en toda la primera mitad del siglo veinte, inclusive hasta principios de los años sesenta.

Dicho fraccionamiento se observaba en todos los ámbitos de la vida social. En los textos escolares, debido a que el partido gobernante era el Conservador, se eliminó toda referencia a libertad de cultos religiosos, se acabó la independencia Estado e Iglesia, se impusieron asignaturas de “Educación religiosa” y “Cívica y valores”, manuales de convivencia, etcétera. El famoso “Manual de Carreño” fue un texto escolar que tuvieron que padecer por lo menos dos generaciones de colombianos, nacidos entre 1948 a 1980. Recién en 1980, afortunadamente fue sacado de circulación en los ámbitos escolares.

Las fuerzas sociales se disputaron la memoria colectiva. Los conservadores configuraron una “historia oficial”, en la que se denigraba de todo aquel que no fuera conservador, católico, casado, bautizado, fiel asistente a las parroquias, etcétera.

La Iglesia Católica, en alianza con el Partido Conservador²⁰⁶, prohibió que se sepultara a suicidas, prostitutas, liberales y comunistas confesos. Como rápida respuesta, y a modo de interesante ejemplo (y hasta apasionante, no cabe duda), liberales y comunistas construyeron, en un pequeño municipio cafetero del Departamento de Quindío, un cementerio especial para ateos, liberales, comunistas, suicidas, madres solteras, consumidores de drogas, dementes, epilépticos, prostitutas, mujeres que fallecieron tras practicarse abortos²⁰⁷, así como los escasos poetas, pintores y músicos underground de los años cincuenta²⁰⁸, es decir, todos los “anormales” (Foucault) y “excluidos” de la “bendición divina”. Dicho cementerio, ubicado en Circasia (Quindío), todavía se encuentra en actividad como reflejo de un fragmento de nuestra historia. En dichos años, en ese cementerio (por iniciativa de sus creadores) se prohibían las misas, cualquier ceremonia religiosa, y austeridad en las ornamentaciones que adornaban las tumbas. Pero como las persecuciones religiosas aparentemente son cosa del pasado, actualmente en dicho cementerio “alternativo” son sepultados un promedio de sólo treinta personas por año, y es mantenido por diversos intelectuales y donaciones de los

(liberal y conservadora), también se reproducían en todo el continente americano, como símbolo histórico-político de las formaciones nacionales latinoamericanas.

²⁰⁵ La izquierda, específicamente el Partido Comunista, hizo filas al lado del Partido Liberal

²⁰⁶ Para muchos, en esos diez años, el verdadero gobierno era la Iglesia Católica Apostólica Colombiana

²⁰⁷ En esa época, una mujer que abortaba era asimilada a una hereje. Recién en el año 2006, se promovió el aborto asistido clínicamente, semejante a la Ley promovida hace pocos meses en el D.F Ciudad de México.

²⁰⁸ Aunque pocos, afortunadamente sobrevivían estos artistas, que abrieron camino en esa Colombia limitada en un nacionalismo y catolicismo dogmático.

dolientes de algunas figuras del Liberalismo y el comunismo que fueron sepultados ahí entre 1948 a 1958, en clara señal de resistencia.

La apelación a la memoria es un recurso político²⁰⁹, una herramienta en la construcción de identidades colectivas, sean étnicas, religiosas, políticas, nacionales o de otro tipo. Al respecto, Le Goff (1991: 134) señala que:

“la memoria colectiva ha constituido un hito importante en la lucha por el poder conducida por las fuerzas sociales. Apoderarse de la memoria y del olvido es unas de las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas.”

El entrevistado más viejo, don Ruperto, quien era apenas un niño en 1948, cuando estalló la violencia, señaló la inevitable necesidad de los liberales de sus corregimientos, de agachar la cabeza y simular su adhesión partidista a los conservadores, en aras de conservar sus vidas y las de sus familias, pero también ofrece su particular punto de vista para explicar las presiones del paramilitarismo en las elecciones presidenciales del 2006, como si el pasado se repitiera, y las amenazas de hace sesenta años continuaran en el presente:

“Aquí desde el tiempo de la violencia hicieron voltear a los liberales al conservatismo.....estos pueblos por acá eran más liberales, pero la represión hizo que la gente por su propia seguridad se volviera conservadora. Pero mire como si quita uno la venda de los ojos con quince latigazos que le dan a uno. Yo le he dicho a muchos por aquí que no votaran por Uribe en las elecciones pasadas. Y en este momento el paramilitarismo está presionando para que no voten por el Polo democrático. Los amenazan a los campesinos y no dejan que salgan a votar. Y como el pobre campesino vive de un jeep y de su transporte y entonces no sale a votar. Mire cómo ganaron en las elecciones hace quince días”.

Para observar detenidamente la polarización bipartidista (liberal versus conservadores) y la configuración de la época de “La Violencia” (1948-1958) en la memoria de los habitantes de la zona, así como la percepción de algunos acerca del pacto bipartidista

²⁰⁹ La obsesión de la memoria ha sido un rasgo destacable en la segunda mitad del siglo XX marcada por el karma de la guerra. Avatares de una conciencia colectiva sobre el Holocausto en Alemania, que comenzó con los paradigmáticos procesos de Nuremberg contra los crímenes y políticas genocidas de los nazis; responsabilidad estatal en la deportación de judíos durante el periodo de la ocupación, reconocida oficialmente en Francia por el Presidente Chirac (1995); gestos públicos de demanda de perdón, como el de Willy Brandt ante el ghetto de Varsovia (1970); Tribunales Penales Internacionales para los genocidios extremos de origen estatal en Yugoslavia y Ruanda (1994). En América Latina, el tema de la memoria irrumpió con el ocaso de las dictaduras del Cono Sur: en Argentina, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP, 1983) y en Chile la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación (1990), extendiéndose a Centroamérica con la Comisión de la Verdad en El Salvador y en el caso de Guatemala a través de la Comisión del Esclarecimiento Histórico y Acuerdo de Oslo (1994).

posterior (denominado “Frente Nacional”), es pertinente leer el siguiente testimonio, el que a pesar de ser un poco largo, cumple con el cometido de abarcar en gran medida todo el periodo histórico que aquí se analiza. Leamos juntos entonces a don Ruperto:

“Mi padre era conservador y me enseñó a ser conservador y me metió al directorio conservador en Bugalagrande y me involucró con la elite conservadora del pueblo, aunque en la familia también había liberales y eso pues traía conflictos y problemas. En la época de la violencia de los cincuenta yo era muy pequeño, es decir, cuando mataron a Gaitán y desde ese entonces todo se volvió complicado. Lo que sucedía en casi todas las familias del país eran divisiones, mi papá y abuelo eran conservadores pero mi mamá era liberal, pero ella se volvió conservadora cuando su hijo, o sea yo, me metí en la política por el conservadurismo y tuvo que empezar a votar por mí en el Consejo.

De esa época ví muchas cosas, pues esas divisiones cuando llegó la violencia complicóla gente avisaba que llegaba al pueblo la cuadrilla²¹⁰ pero la gente no sabía qué cuadrilla venía, pues podía venir la liberal o la conservadora....pues cuando era conservadora, mis tíos y familia de mi mamá tenían que esconderse debajo de las paseras del café en la finca o irse a vivir a otra parte por un tiempo y si venía la cuadrilla liberal, pues era mi papá y abuelo paterno quienes se escondían en la casa. Si me tocó ver una vez pues cuando llegó la cuadrilla conservadora, y nosotros siendo conservadores nos dábamos cuenta con anticipación cuándo venían y me tocó ver a unas 50 o 60 personas bien montados con revólveres y en esa época la moda era poner a brillar a los revólveres....y eso pues era emocionante.....y decían ¡y viva el partido conservador ¡ que viva Don Gabriel¡ pues que era mi abuelo y todos con su sombrero blanco

En Robledo y aquí en Bugalagrande uno veía y todavía ve muchas cosas....Que mataron a fulano, que en tal parte estaba la cuadrilla y que estaba “Lamparilla” un jefe liberal²¹¹, es decir, guerrillero, que tenía una cuadrilla inmensa como de cuarenta hombres.....pues yo creo que eso era en los comienzos de las guerrillas liberales y pues el era el jefe.....eso fue en ...ummm.....a principios de los cincuenta. La abuela de mi esposa, ellos tenían una casita en esa época en San Rafael, pues que no era casa sino una finquita pequeña, que tenían sus vacas, sus gallinas y pues venía la cuadrilla liberal y conservadora y por ejemplo cuando venía “Lamparilla” pues la gente tenía que darles la mejores gallinas, le tenía que dar lo mejor para comerse el sancocho y tomar su trago. Un señor pues que era el abuelo de unos vecinos suyos Guillermo²¹², frente a la casa que usted arrienda, el era un viejo que usaba saco

²¹⁰ Cuadrilla: grupo de veinte o treinta hombres armados, pertenecientes al partido Liberal o Conservador, que en esa época de los años cincuenta andaban a caballo por la región, pues los automóviles en las zonas rurales no se habían masificado aún.

²¹¹ Las guerrillas liberales de los años cuarenta y cincuenta, constituyen el primer antecedente de las guerrillas comunistas de los años sesenta. Obviamente nos referimos aquí a los liberales de los años cincuenta, no los actuales militantes del partido Liberal del cual salió la disidencia interna liderada por el actual presidente Álvaro Uribe Vélez. Un asunto no intrascendente aquí, pues los liberales lideraron a mitad del siglo XX las luchas por la reforma Agraria, los pliegos de los sindicatos, los movimientos estudiantiles, etc. Una vez se produjo el acuerdo bipartidista del Frente Nacional en 1958, el ala “moderada” del partido Liberal terminó siendo semejante al partido Conservador (tildados de “traidores” por liberales radicales). De ahí los fuertes “cismas” producidos en dicho partido, el cual actualmente se encuentra en estado agonizante, pues sus facciones radicales están cercanos al partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, mientras que sus facciones más reaccionarias coquetean –vía clientelismo- con las alianzas de grupos del gobierno actual, el Partido de la “U”, por ejemplo

²¹² Frente a la casa que tomé por renta y viví durante cinco meses, vive una familia cuyo integrante mayor es señalado de ser uno de los jefes “lavaperros” (mandos medios). Lo interesante del asunto es que el abuelo de sus padres, es decir, su bisabuelo, fue asesinado por guerrilleros y él ahora es “traqueto”. Todo un ámbito circular que denota los odios heredados de las guerras en

siempre y que estaba saliendo de un café y pues los jefes de la guerrilla.....ese lamparilla vieron que ese viejito iba a sacar algo del saco y pues le disparó en pleno parque, eso fue hace como veinte años

Hasta los setenta y ochenta había gente que mataba a otros porque eran los “dedos”...dedos era quien había señalado a otros, los que habían sapeado e informado a liberales y conservadores años atrás...eran los dedófilos (sic), los que hacían dedo, y pues en las tabernas o en la calle los mataban por haber sido “dedos”²¹³

También era costumbre en esa época y todavía lo es, que bajaban muchos cadáveres por ese río, la gente no los cogía ni nada, los dejaba pasar, bajaban esos muertos de Ceylán y Galicia. También el que no estaba con el partido oficial en los cincuenta se tenía que ir del pueblo, porque el pueblo siempre fue conservador, la mayoría siempre fue conservadora. De la violencia yo la he vivido desde 1948, que se luchaba entre partidos y que venía nuestro jefe conservador Laureano Gómez, con el expresidente Lleras Camargo e hicieron el Frente o Acuerdo Nacional y pues cada vez que se turnaban los liberales pues nos sacaban y luego pues era un partido una vez y otro partido otra vez, pero ¿Cuál fue último presidente del Frente Nacional? Creo que fue López Pumarejo o López Michelsen.....ya ni me acuerdo, vea usted”

Veamos como ejemplo la vida del propio don Eustagio, un carismático viejo, campesino, cuya familia paterna fue desplazada a principios de 1950, nos entregó su testimonio sobre cómo la división partidista (liberal versus conservadores), condicionó la guerra durante “La Violencia” (1948-1958), atravesando todo su trayecto biográfico:

“Nací en 1948 en una época en que la violencia estaba en fogueo, la plena violencia estaba en ese momento en el Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, los Santanderes.

Mi padre era liberal y mi familia completa era liberal. Cuando se votaba era muy peligroso porque uno salía de votar con el dedo marcado de tinta. Uno rojo y el otro azul, el rojo (liberal) votaba rojo y el azul (conservador) votaba azul, lo cual llevaba a que todos nos identificáramos como conservadores o liberales. La tinta marcaba a los enemigos. La gente se encontraba en los caminos, porque los desplazamientos para el sector campesino eran a mucha distancia, por lo mismo nosotros estábamos a un trayecto de de varias horas de camino de donde la tierra donde mi padre tenía sus propiedades pequeñas de tierras, hasta el lugar donde íbamos a votar. No había desplazamiento de mesas, para decir que hay que votar en la vereda Ricaurte donde vivíamos. Íbamos en burro y todos del campo teníamos que votar en ese pueblo allá y en esas idas, después de depositar el voto, se presentaban muertes por política, por color político, porque el conservador esperaba al liberal y lo mataba o porque el liberal esperaba al conservador y lo mataba.

Yo tenía doce años y me acuerdo que mi papá llegaba aporreado de golpes a la casa. El día de elecciones era un día sagrado, la ley seca prohibía que la gente llevara machete, ni comprara votos, nadie lo vendía porque cada uno votaba por cada partido, pero después se la cobraban, después de las seis de la tarde se formaban grupos de conservadores o liberales y la gente tomaba guarapo y se emborrachaban y se daban duro y se agarraban a los machetazos, puñaladas y

Colombia, así hubiera sucedido hace casi sesenta años.

²¹³ “Dedos” era una palabra que no conocía antes de este trabajo de investigación. “Dedos” en la época de los años cincuenta del siglo XX, era el equivalente a “sapo” de la actualidad, es decir, “informante”, delator, “el que señala”

garrotazos". (Don Eustagio, poblador rural, asesinado al final de este trabajo de campo)

El recuerdo macabro está en la voces de los más viejos del pueblo: en los años 50", los guerreros de uno u otro bando le cortaban la cabeza al enemigo con el clásico "corte franela", un corte que rozaba el cuello de la camiseta de franela usada por los campesinos. Primero caían las cabezas al río. Después se arrojaban al agua los troncos salpicados de sangre. A los abusos y torturas del ejército se sumaron los de los chulavitas²¹⁴, así como equipos de civiles conocidos como los "aplanchadores" en la región de Antioquia, y los "pájaros²¹⁵", (llamados así porque solían actuar y desaparecer rápidamente), en el centro del departamento de Valle, cercano a Cali. Las élites agroindustriales financiaron a grupos armados privados, ofreciendo la "facilidad de crear un cuerpo de vigilancia de sus respectivas propiedades" (Piccoli: 2004: 29). Aquellos grupos, que deberían haberse limitado a combatir el robo de ganado y a desarrollar tareas de vigilancia, se dedicaron realmente al exterminio sistemático de los liberales. Los "Pájaros" actuaron inicialmente en las zonas rurales, en unidades de cuatro o cinco hombres, que se trasladaban en automóviles sin matrícula. Cuando se proponían eliminar a algún opositor, actuaban de noche. En el caso de querer aterrorizar a una comunidad entera, actuaban a la luz del día, portando a menudo un estandarte de la Virgen del Carmen.

El recuerdo más nítido de los ancianos entonces, es la acción y terror producido por los "pájaros" de los 50 y 60 (La época de "La Violencia"). Tal como lo señala nuestra entrevistada de mayor edad:

"Me acuerdo que cuando era pequeña los "pájaros" conservadores le cortaban la cabeza a los liberales con el "corte franela," un corte de machete o hacha que rozaba el cuello de la camiseta de franela usada por los campesinos. Así tiraban las cabezas al río" (Doña Justina, cañera)

Los relatos o narraciones de los cuatro pobladores mayores (en edad) - don Ruperto, doña Justina, don Eustagio y don Justo Albarracín- constituyen sendos relatos de la memoria de las violencias regionales. Sus relatos más intensos se ubican en sus infancias y adolescencias, es decir, en los años cincuenta, la denominada época de "La Violencia", en la que se enfrentaron los partidos liberal y conservador en una lucha que no sólo fraccionó departamentos, sino las mismas veredas, corregimientos y municipios.

²¹⁴ "Chulavitas": matones que se consideraba la policía conservadora del Departamento de Boyacá, adscritos al Partido Conservadores y enviados por la propia Iglesia Católica.

²¹⁵ Asesinos a sueldo del Partido Conservador, aliados de los "Chulavitas"

Para llevar a cabo su acción sistemática de represión, el conservadurismo (oficialista en esa época), dirigió sus aparatos represivos estatales— como la tenebrosa “policía chulavita” procedente de una región boyacense— complementada con la acción de organizaciones paramilitares, como los “pájaros” en el Valle y Caldas, los “aplanchadores” en Antioquia y los “penca ancha” en las sabanas de Sucre (Costa Atlántica), cuyas víctimas habían de costar centenares de miles de muertos (Sánchez: 2002: 125). Un recuerdo que trae en su memoria Don Justo:

“Es que cuando era pequeño, uno veía llegar a los pueblos de por acá mucha gente rara. Decía mi mamá que los hombres malos los traía el demonio de muy lejos. Y era verdad, pues los asesinos venían de todas partes. Se reproducían como las plagas del campo. Dizque pa`que pájaros si también llegaban chulavitas, esos de ruana que venían de tierras frías, del Altiplano boyacense. Traían bajo la ruana escopetas, cuchillos largos y veneno para ratas. Y en sus camiones llevaban machetes, para cuando ya habían torturado a los que se les resistían, pues ahí los cortaban. Esos eran tan desalmados como los pájaros, pero dejaban que las víctimas se regaran en un mar de lágrimas y ruegos por sus vidas, disfrutaban esos chulavitas con los alaridos de la gente. Eran sádicos muy jodidos, luego les metían sus hachazos, cortaban los cuerpos en rebanadas y los tiraban al río, para que al bajar por la ribera, todos los campesinos pudieran ver. Como si les estuvieran diciendo a los demás, miren los que les puede pasar a ustedes también.

Me acuerdo una vez, yo tendría unos 7, o no, 8 años, bueno, perdone usted pero ya es difícil para mí porque fue hace mucho tiempo, pero lo que sí me acuerdo es que una tarde ví pasar flotando como diez troncos de cadáveres y cabezas sueltas por el río. A veces las cabezas se quedaban enredadas en matorrales, pero nadie se atrevía a tocarlas por miedo a quedar satanizado. Y los olores a muertos eran terribles, como sería eso de asqueroso que las mismas aves de rapiña como chulos y gallinazos caían, comían y se iban. Yo creo que hasta esos animales no aguantaban el hedor. Justo ese día que ví bajar por el río muchos cuerpos, íbamos a comer un sancocho, que es la comida que a mi más me gusta, y vea señor, cómo sería mi impresión y revoltura de estómago, que no pude probar nada de sopa ni de nada. Dejé toda la comida ese día (Don Justo Albarracín, corregimiento).

En los años cincuenta, los “Pájaros” fueron utilizados para eliminar o convertir por la fuerza a los liberales más radicales, a los comunistas, protestantes y masones, dentro de una especie de cruzada contra las fuerzas del mal. Según Piccoli (2003: 77), el relato de “El Vampiro”, uno de los jefes más sanguinarios de la Cordillera Occidental, es elocuente y lo dice todo:

“todos colaboraban sin saber muy bien por qué. Yo llegaba a una cantina o a una vereda y decía hay que ir a tal parte a hacer tal “trabajito” y enseguida salían cinco o diez paisanos que se ofrecían”. Piccoli (2003: 77).

Muchos latifundistas aprovecharon la ocasión para ajustar cuentas pendientes con los campesinos que habían ocupado sus tierras en las décadas anteriores.

Con el paso del tiempo, los “pájaros” comenzaron a actuar también en las ciudades más importantes, convirtiéndose en verdaderos mercenarios del crimen al servicio de las autoridades gubernamentales y de los dirigentes del Partido Conservador. Los homicidios eran acompañados a menudo de la mutilación de las víctimas. Los asesinos probaban la realización de su “trabajito” llevando una oreja o un dedo a quien había dado la orden. Relata Piccolli (2003:86), cómo en diversas ocasiones en pueblos del departamento del Valle y Tolima, “pájaros” y chulavitas descargaban de sus camiones en la plaza principal docenas de cabezas cortadas, o mostraron cestos llenos de ojos arrancados a los enemigos.

6.3 Un fenómeno en común de las guerras de antes y la de ahora: el despojo de tierras

En la época de “La Violencia”, mediante el terror sistemático se inducía a comunidades enteras a abandonar sus tierras, o por lo menos a venderlas a cualquier precio. Entre 1948 y 1953, casi 400.000 familias vallecaucanas de afiliación liberal fueron obligadas a huir²¹⁶ a la periferia de las ciudades e internarse en los territorios más inhóspitos del país, como los Llanos Orientales o las selvas amazónicas.

Muchos de los 200.000 terrenos que cambiaron de propiedad en el Valle del Cauca acabaron en manos de las empresas agrícolas, sobre todo las dedicadas al algodón y el azúcar. Esos eran, y lo siguen siendo, los efectos visibles de terror en los campos: el despojo de tierras y bienes, tras el asesinato de los dueños o la utilización de amenazas que obligaban a la venta forzosa, la apropiación de cosechas y semovientes, el incendio de casas. Trapiches y beneficiaderos, la destrucción de sembradíos, la coacción física sobre trabajadores rurales descontentos, las migraciones masivas a las ciudades o el desplazamiento de campesinos a otras zonas de su misma filiación partidista, hasta llegar a homogeneizar políticamente veredas y regiones, y, en últimas, lograr el enrolamiento en un grupo armado de resistencia, constituido muchas veces por miembros de una misma familia. El mismo don Justo entregó un testimonio sobre estos procesos de “despojo de

²¹⁶ En muchas ocasiones los mismos sacerdotes o curas participaban personalmente en las sangrientas correrías. Un “pájaro” que se tomó al pie de la letra las proclamas religiosas fue León María Lozano, vendedor de quesos del departamento de Valle, asmático de nacimiento, que el 9 de abril de 1948 se convirtió en un mito para los conservadores por haber defendido con dinamita la capilla del Colegio Salesiano de Cali, al ser atacada por manifestantes liberales. Desde ese momento la historia regional lo llamó “El Cóndor” y su figura inspiró al más conocido escritor de la región, Gustavo Álvarez Gardeazábal, a escribir su mejor obra, “Cóndores no entierran todos los días”, novela que también fue llevada al cine y se ha constituido en uno de los escasos clásicos del ya precario y austero cine colombiano.

tierras” y amenazas constantes que atraviesan toda la historia de las guerras en Colombia:

“Cuando era joven, recuerdo que era común que las cuadrillas conservadoras y a veces las mismas liberales, mataran gente por quedarse con tierras ajenas. Eran familias enteras, que se desplazaban con mucho miedo, porque los chulavitas les quitaban sus finquitas. Y si uno se hacía el valiente, pues le caían a uno los famosos pájaros, unas bandas de malnacidos que mataban a quienes les encargaban los godos²¹⁷ Siempre fue difícil, pero uno quiere su territa, aquí uno nació y aquí uno se tiene que morir. Es una ley de la vida, donde nacemos, ahí nos morimos, ¿o no? ¿Para qué morirse lejos de dónde uno fue niño, jugó, creció, o donde está la gente que lo quiere a uno?

Pero lo jodido es que las vainas continúan así. O si no, fíjese usted señor lo que le dijeron a mi compadre Alirio hace cinco años, cuando vivía en La Dorada²¹⁸. Unos paras le querían comprar su territa, pero el compadre siempre les decía que no, que no podía, que por favor no le insistieran, por que les decía ¿Cómo iba a alimentar a su familia? Hasta que un día se les acabó la paciencia y se le acercaron y le dijeron que si no les vendía él, entonces que ellos iban a negociar directamente con la viuda. Pues, imagínese, con esas amenazas, para qué pensarlo mucho, ¿no? (Don Justo Albarracín, pensionado, corregimiento)

De lo que se extrae de esta y otras entrevistas, es que la violencia estatal y paraestatal (paramilitar) se encuentra articulada a la impunidad del terrorismo de Estado (presente en la represión conservadora en los cincuenta que provocó la formación de guerrillas campesinas en los sesentas). Se evidencia entonces una continuidad, no sólo en la impunidad que acompaña la represión estatal, sino también en los mecanismos del terror producido por éste. El fenómeno del desplazamiento de dos millones de colombianos, ha recibido una enorme atención e interés de organismos internacionales como la ACNUR²¹⁹ y la OIM²²⁰, así como Organizaciones de Derechos Humanos. Pese a que en el Valle del Cauca también se producen altos índices de desplazados por el conflicto armado interno, por razones de espacio y delimitación del problema y objeto de estudio, se ha dejado por fuera el estudio de casos de este drama colombiano

6.4 Lucha de memorias: de la historia oficial a la memoria campesina y guerrillera

Siendo la memoria una práctica social, no es posible pensar en una única memoria, sino más bien en memorias en plural. Memorias que son sostenidas por distintas prácticas sociales, configuradas por diversos grupos. Justamente, al *hacer memoria*, lo que se realiza al tiempo, es la conformación de una identidad grupal, es decir, de un grupo propiamente tal. El tema es que algunas de ellas cobrarán mayor visibilidad –como es el caso de las historias oficiales- y otras serán más bien soterradas, marginadas, pero no

²¹⁷ “Godos” es el nombre que en Colombia han recibido (y reciben aún) los conservadores.

²¹⁸ La Dorada, es un municipio del Departamento de Caldas.

²¹⁹ Organización de la ONU que se dedica al apoyo y solidaridad con los refugiados

²²⁰ Organización Internacional de Migraciones.

por ello disueltas y apagadas. Así, a lo que nos enfrentamos directamente cuando hablamos de memoria, es a *un campo de conflicto entre memorias*, donde cada una de ellas se articula desde su verdad, discutiendo los olvidos y las manipulaciones que desde los otros se sostiene. El ejercicio de “conservación” del pasado no son meramente formas simbólicas encaminadas a la construcción de la identidad y la nación, sino ejercicios políticos deliberadamente desarrollados y con intereses claramente definidos.

Como bien señaló Halbwachs, la memoria individual es una elaboración colectiva que remite a “cuadros sociales” cuyo fundamento se encuentra en la familia y en grupos sociales y por esta vía en la memoria de estos grupos. La Violencia, tanto como la guerra actual, significan una amplia ruptura de los vínculos y una transformación de los actores sociales preexistentes. Que la memoria revista el doble aspecto de una memoria fragmentaria inmediata y de una memoria mítica y atemporal no debería, pues, asombrar: es ante todo una consecuencia de que ella sólo se apoya parcialmente en las colectividades y de que los individuos sólo logran darle un sentido parcial.

Los fenómenos de violencia, tanto los de los cincuenta o los de la fase reciente (1984 hacia acá), no han dado lugar a un relato histórico ampliamente reconocido que puede servir de soporte al trabajo de la memoria. Por el contrario- ha señalado Pécaut (2003: 79) incluso se ha producido un corto circuito entre relato histórico y memoria. Lo que parece como relato histórico reproduce relatos de memoria más o menos elaborados y pretende encontrar en ellos la prueba de su autenticidad. Recíprocamente, las memorias se modelan sobre los lugares comunes que subtienden el relato histórico, recogiendo fragmentos y tratando de integrarlos. Un ejemplo de ello lo constituye el más fuerte paro campesino de los últimos treinta años en todo el occidente colombiano, producido en la región de estudio y cuya remembranza la construye con su relato don Eustagio, uno de los líderes de los campesinos cañeros en el año 1975, asesinado al final de trabajo de campo:

En el ingenio Rio Paila hemos sido testigos de muchos asesinatos y persecuciones. El testimonio que le puedo dar a usted es del paro de 1975, en el cual yo entré a participar....esa huelga duró 6 meses y fue muy dura....nosotros estábamos respaldados por diferentes grupos de izquierda como el Moir, el PCC y la Juco²²¹, junto a las Farc. Enfrente había mucho ejército y policía, además de infiltrados. Usted sabe que en esas huelgas se hacen muchas manifestaciones y llegamos a un extremo de enfrentarnos civiles y campesinos con las fuerzas del Estado, enfrentarnos con los armados, a mi me tocó vivir esa violencia.....la vivimos todos los días y noches de esos seis meses, peleando por defender unos

²²¹ JUCO: Juventud Comunista colombiana; PCC: Partido comunista colombiano; MOIR: Movimiento Obrero Internacional Revolucionario.

derechos de una convención colectiva de trabajo que no nos querían reconocer.....nos tomamos un sitio de La Paila y ahí estuvimos, con el apoyo de la Unión Patriótica....ahí hubo mucha gente de ambos grupos, había representantes de Barrancabermeja, de Ecopetrol, teníamos tanto asesores jurídicos como de izquierda, ahí nos traían comida, del Cauca y del Tolima, se solidarizaron de muchas partes diversos grupos y organizaciones, hasta los grupos armados como el M-19 y las Farc.

Para que nosotros no pudiéramos guardar el boletincito que nos entregaban en los sindicatos y nuestras perseguidas organizaciones, pues nos controlaban. Todos los días de ese tiempo nos entregaban un boletín informativo explicando el proceso de la huelga, pero las presiones a nuestras familias eran muy grandes. Todo boletín.....pues al que lo cogieran con algún boletín, se iba pa´ la cárcel, entonces nosotros por el miedo teníamos que deshacernos del boletín y botarlos.....la empresa dio órdenes de no recibir boletines ni difundirlos... decían que las casas que tuvieran boletines al ser allanadas, iban a encarcelarnos... la empresa decía que todo aquel trabajador que estuviera participando iba a ser responsable del despido de todos los demásuno por temor a eso no guardaba boletines, porque el temor siempre está ahí, existe toda la vida.....

No nos dejaron que cogiéramos ventaja en el paro...el poco tiempito que había nos solucionaron el problema.....nos importan ustedes, decían en la dirigencia de la empresa, les vamos a solucionar el problema ...vamos a pagarle este salario básico.....después de haber terminado la huelga, se hicieron pactos y arreglos con nuestros salarios, pero también despidieron a 480 compañeros de un solo bloque.....a ver...también quedaron presos como unos veintidós hombres.....muertos perdimos a un trabajador y a un estudiante de secundaria.....de La Paila mismo, la familia Hurtado....el estudiante salía de su escuela a la una de la tarde y nos acompañó a una manifestación y pues estuvo de malas.... y todavía vive el papá y recuerda su dolor por ahí...el papá por apodo le dicen “medialeva” porque cayó en la balacera enorme, porque el ejército se enfrentó con nosotros, se nos pararon cuando llegamos a la empresa.....nosotros íbamos gritando consignas..... echando “abajos”, que viva.....que viva Camilo²²², que viva la huelga.....y todas las consignas.

....y nos pararon en la central y eso fue un “fogueo”²²³ eso no se veía nada, gases lacrimógenos, volaban los disparos, las pedradas, los pedazos de pared que les tirábamos.....nosotros empezamos un 14 de noviembre de 1975 la huelga y terminamos el 16 de junio de 1976, una huelga larga y muy dura, tal vez la más dura de toda Colombia en esa época...a ver.....sí...diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio...síel 16 de junio....correcto...el 16 de junio.....ahí nosotros quedamos.....perdimos la huelga...nos tocó entrar a trabajar sin solucionarnos los problemasnos despidieron a 480 compañeros, se quedaron los muertos ahí, otros quedaron en la cárcel y otros desaparecieron...y a los que no nos cancelaron el contrato nos quedamos con una represión muy enorme, había militares y había gente que nos metían al trabajo a ver qué hablábamos...pues sí como infiltrados....bueno eso estaba muy a la expectativa de todo.

No podíamos ni contradecirle a nadie, ni sacar a nadie de ahí.....los trabajadores nuevos eran sospechosos para nosotros. La represión estaba dentro de la empresa, afuera todo parecía normal, Bugalagrande era un municipio que lo manejaba el alcalde ...el nos acompañó en la huelga, le decían “el pájaro”....a él lo persiguieron mucho, a él lo mataron, a Héctor Fabio Useche, el ejército lo

²²² Se refiere al famoso padre (sacerdote) Camilo Torres, quien abandonó los hábitos religiosos e ingresó a la guerrilla del ELN en 1966, para caer muerto en combate apenas dos meses después en las montañas del departamento de Santander

²²³ “Fogueo”: Tiroteo

señalaba y acusaba como cómplice de las guerrillas, pero en realidad es porque el nos apoyó, porque el era un jefe sindicalista antes de ser alcalde.....el como administraba la parte cooperativa, el hizo tomar terrenos a los terratenientes de aquí con plata de la cooperativa, compraron lotes y los dividieron para los trabajadores, y cada uno de nosotros empezó sus casas con créditos²²⁴

Dicen que lo mataron fuerzas políticas, recibía amenazas, de pronto fueron paramilitares aliados con José Ortiz, pero nunca hubo castigados ni detenidos.....nunca hubo respuestas....aquí en Colombia las muertes de los hombres valientes siempre se quedan en la impunidad, se largan los sospechosos porque nunca se puede comprobar nada.....eso es a nivel mundial, no se mata de frente sino a la espalda. El que ve por el mismo temor de la misma guerra no delata nada, aquí matan a cualquier y decimos pues pa' que voy a abrir la boca si después voy a aparecer por ahí muerto". (Don Eustagio, in memoriam)

6.5 La ausencia de conmemoraciones como cierre represivo de la memoria colectiva

En la relación memoria social y conflicto armado en Colombia, vale señalar que las masacres más recordadas por todos los pobladores fueron las de Trujillo (Valle); Mapiripán (Meta); Puerto Alvira (Meta); La Gabarra (Norte de Santander) y San José de Apartadó, por sólo nombrar cinco entre decenas de masacres de campesinos, nos permite entender que en la memoria social de los campesinos de la zona de estudio, la incursión de un grupo armado con su respectivo orden fáctico, tarde o temprano traerá consecuencias en aquellos que tomaron partido por algún bando.

En ese ejercicio de pensar la relación memoria y conflicto armado, consideramos que los “odios heredados” cumplen un papel fundamental, pues son encadenantes de nuestras guerras, impidiendo así que se pueda establecer el puente de la venganza a la política. Las guerras y conflictos no son más que una de las manifestaciones más protuberantes de la crisis prolongada de la sociedad colombiana, lo cual refleja relaciones muy complejas, alusivas, en primer lugar a los procesos de construcción de identidad, es decir, a las representaciones que los pobladores se hacen del conflicto y sobre todo, de ellos mismos como región y como un fragmento de nación; en segundo lugar, a la pluralidad de relatos, trayectorias y proyectos que se tejen en relaciones de poder que afirman, suprimen o subordinan a determinados actores. Lo anterior se debe a que la memoria es, en sentido profundo, una forma de resistencia a la muerte, a la desaparición de la propia identidad.

En el derrotero histórico colombiano las ruinas de las diferentes guerras siguen presentes, se convive con ellas, sencillamente porque las guerras no han terminado y el pasado no ha pasado. Una serie de manifestaciones supremamente heterogéneas nos

²²⁴ La casa donde se llevó a cabo la entrevista.

han legado las violencias de estos dos últimos siglos: luchas partidistas, luchas por la apropiación de la tierra (con rasgos diferentes de acuerdo a las regiones, según se trate de regiones de colonización o donde coexisten latifundios y minifundios, etc.), desplazamientos masivos de población, bandolerismo social y político, auto-defensa campesina.

Al respecto, es interesante observar el título del último libro del profesor francés y experto “colombianista” Daniel Pécaut: *“Memoria imposible, historia imposible, olvido imposible”*. Se trata, pues, de una triple imposibilidad la que resalta Pécaut en el contexto de la guerra que hace estragos en este momento: la imposibilidad de la memoria, la imposibilidad del olvido y la imposibilidad de la historia. Para hacerlo, se sitúa Pécaut en tres planos de análisis: la experiencia inmediata de la violencia, las memorias que se movilizan para tratar de dar cuenta de ella, el relato histórico que pretende reconstruir la genealogía del conflicto interno. La confusión entre estos tres planos pone de manifiesto, desde su mirada, la especificidad de los efectos del conflicto. La memoria partidista de “La Violencia” tiende a borrarse en los últimos tiempos, pero la memoria de la Violencia no se ha disuelto.

La memoria no es una propiedad íntima y privada, sino una acción y *práctica social*, siendo uno de sus efectos la diversidad en el cómo recordamos. No por casualidad, los habitantes de las veredas rurales que se disputan paramilitares y guerrilleros, empiezan la narración de sus desgracias relatando: “ese día, ellos llegaron y mataron”. La discontinuidad temporal se impone como categoría central de la experiencia: de un momento a otro, el acontecimiento cambia el universo social de las personas afectadas; aquí se destaca el olvido sobre la memoria, ya que cada acontecimiento nuevo va desplazando el anterior.

Pero en este centro y norte del Valle del Cauca no encontramos conmemoraciones, expresiones públicas de repudio a la violencia ni señalamientos de culpabilización. Sólo el silencio sepulcral, aquel que reconocemos en los cementerios, o aquel que es típico de las imposiciones de los regímenes dictatoriales ¿Tal vez pueda ser el silencio una estrategia del recuerdo de los pobladores observados? Si para el sentido común el silencio es una expresión directa del olvido, podríamos hacer el ejercicio (inverso) de pensar al silencio como forma de expresar lo que se recuerda y lo que se desea olvidar.

De ese modo, podríamos considerar -en forma extrema- al silencio como una configuración de la memoria, es una acción que prefiere no pronunciar palabra acerca de lo 'ya acontecido'. Se sabe, se conoce, se recuerda, pero no se expresa, porque la guerra no ha terminado, porque el pasado no ha pasado y se tiene en el remanso de los hogares hijos y nietos que mantener a salvo. Un terapéutico olvido, no una cobardía que se esconde en el silencio. Esa podría ser "otra forma" de ver las cosas. Un sepulcral silencio, pragmatismo para seguir viviendo²²⁵.

La historia oficial en el Valle del Cauca ha propiciado que los mismos sobrevivientes de las diferentes masacres y matanzas en la zona se mostraran reticentes en exhibir sus relatos públicamente por temor a represalia y porque en el caso de desapariciones o asesinatos, la presentación pública de esas narraciones los pondría en peligro.

En la historia y memoria regional, entonces, emerge como lugar y fecha clave la serie de asesinatos cometidos en el Municipio de Trujillo (Valle, a unos 30 kilómetros de la zona de estudio), uno de los episodios sangrientos de la historia colombiana reciente mejor conocidos gracias a la condena que recibió el Estado colombiano, y a la documentación que finalmente se pudo acopiar en el curso del proceso, todo un caso típico y emblemático, el cual puso de presente, lo complejo de la trama de relaciones entre el narcotráfico y diversas modalidades de violencia en el Valle del Cauca, así como su variación en el tiempo para una región circunscrita.

En un complejo escenario regional, Trujillo se convirtió en un cruce de caminos violentos donde convergían todos los grupos armados, lo cual estalló con las decisiones de algunos actores y la intromisión de otros nuevos. Los paras y narcos empiezan a realizar "acciones de limpieza", desapariciones y asesinatos selectivos, y contaban para ello con la colaboración de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, a efecto de garantizar la construcción y operación de grupos paramilitares. Por parte del ELN, se respondió militarmente a los narcos e impulsaron la movilización campesina. Esto desencadenaba, por consiguiente, la introducción de un nuevo actor en la zona: el Ejército

²²⁵ Al respecto una afirmación interesante de un entrevistado: *"Por aquí se toma mucho alcohol. Usted observará muchos borrachos que son controlados y reprimidos por los paras. Y es que yo a veces pienso que el alcohol nos permite sobrellevar las tensiones del día a día"* (don Ángel, poblador rural, pero trabaja en el casco urbano del pueblo)

En situaciones de violencia organizada los sobrevivientes con frecuencia no han podido ni siquiera pronunciar los nombres de los familiares, hablar sobre las circunstancias de su muerte o desaparición, ni mucho menos señalar los culpables e iniciar procesos tendientes a esclarecer el paradero de los que han desaparecido.

Por lo anterior, los rituales para conmemorar eventos o son reprimidos o nunca se llevan a cabo, sencillamente porque la guerra no ha terminado (y el pasado no ha pasado) y por lo tanto, se enfatiza más en seguir viviendo que en recordar. Victimarios y víctimas siguen conviviendo y los significados y preguntas sobre la guerra no se llevan a cabo, ya sea por temor, indiferencia o un terapéutico olvido. Tal como lo señalan los siguientes dos testimonios de entrevistados:

Testimonio 1

“Hace doce años me mataron a mi esposo. Quedé viuda con veinticinco años. Nunca más me casé, pero me tocó lidiar con cinco hijos que me dejó mi Dios.....tres varones y dos hembritas. El dolor fue muy grande y hasta perdóné a sus asesinos ante Dios. A veces pienso que fue un error, porque según me dijeron en esa época lo confundieron con otra persona....no sé, tal vez sí, pero quizás nunca lo sabré realmente.

Y ahí pensé que la vida no me iba a hacer más daño.....imagínese ¡¡¡, qué más daño que dejarla a una viuda, pensé en ese entonces. Pero no, para mi desgracia no fue así.

Cuando mataron a mi hijo José²²⁶ hace tres años, mi vida se vino abajo. Los días y las noches se me hacían eternos. No podía dormir, no podía comer, ni salía a la calle. No podía creer que me mataron al muchacho, no, no....Dios mío, sólo tenía veinte años, era el hijo mayor, el que me ayudaba a cuidar a los otros. Pero tuve que tomar fuerzas para volver a empezar, pues como usted puede ver aún los que me quedaron son adolescentes, y todos dependemos de todos.

Las primeras veces que salía a la calle y me cruzaba con los dos malparidos hijueputas (sic) que mataron a mi hijo, el corazón se me encogía, no sabía si ponerme a llorar o buscar un arma para matarlos. Pero ellos son lavaperros de por acá. Si les hago daño, se me vienen los otros y me rematan a mis muchachitos o violan a mis dos hijas, no.....por Dios cómo me duele todo al recordarlo. Pero no puedo hacer nada. Y tampoco tengo cómo irme de acá. Qué más quisiera que largarme con los míos. Quisiera irme porque no sólo tengo que cargar con el dolor de la pérdida de mi hijo, sino con la amargura de verles la cara todos los días a sus asesinos” (Doña Matilde, viuda, corregimiento de la zona rural

Testimonio 2

“Soy huérfano desde los tres años, mis padres fueron desaparecidos porque formaron parte de los paros campesinos en Trujillo, hace ya más de veinte años. Fui criado por una tía, hermana de mi madre, que me salvó de la tragedia de mi familia. Siempre he vivido por acá.

Según me contó mi tía, ella no pudo encontrar a mi mamá y papá, pero unos vecinos de ella le dijeron que sí habían visto los cuerpos calcinados en una

²²⁶ El nombre de su hijo también fue cambiado por seguridad de su madre y familia.

casa que había recibido morteros y granadas.....una casa en la que muchos campesinos lograron esconderse del tiroteo.....pero aunque mi tía buscó y buscó, nunca pudo encontrar los cuerpos, porque los desaparecieron tras la balacera, para no dejar rastros ni pistas de nadie.

Lo que yo le cuento pues no lo viví yo, pero sí lo escuché muchas veces de boca de mi tía y de algunos vecinos que a veces le cuentan vainas²²⁷ a uno. Dicen que los paras y narcos de Don Diego se juntaron y que los policías y el ejército se hicieron los huevones²²⁸ que no sabían, para no entrar a defender a los manifestantes. Y también se sabe que murieron muchos guerrilleros del ELN, pues porque ellos habían cercado la zona. A la hora de las evidencias, muchos cuerpos fueron desaparecidos, otros calcinados, porque llegaron organismos de Derechos Humanos y hasta la Cruz Roja, pero no podían entrar al pueblo, porque eso quedó hecho mierda todo.....como se militarizó toda la cordillera y las montañas de por ahí, entonces los guerrillos tuvieron que borrarse del mapa²²⁹ y dejaron a mucha gente que los apoyó sin protección. Ahí fue cuando desaparecieron al último grupo de participantes del paro, ahí fue cuando mi tía no supo nada más de mi mamá y mi papá.

Yo siempre trato de imaginarme cómo habrán sido sus últimos minutos de vida, qué habrán pensado, qué se habrán dicho para darse ánimo.....no sé, tal vez pensaron en mí, en sí la tía había podido sacarme de ahí o no. Me los imagino en medio de tanta tensión, disparos, llantos, gritos, del esconderse y saberse cerca de la muerte.....no sé, trato de forzar ello, pero no puedo, no tengo elementos para recordarlo. Y hasta he dejado de tener pesadillas con ello.

Mi tía me recuerda todos los días que ellos me querían mucho, que daban la vida por mí, que eran muy valientes, que personas con tanta berraquera²³⁰ como ellos no se ve por aquí todos los días. Aunque le confieso que todavía quisiera, aunque sea por una vez en la vida, verlos..... sí señor, poder ver a mis padres, poder decirles tantas cosas, o tener la oportunidad de saber dónde quedaron enterrados para visitarlos y llevarles flores. Lo que más me entristece es no saber dónde están enterrados.

No siento dolor, lo que se dice dolor, porque era muy pequeñito cuando ello pasó, pero al ver las fotos de esos padres que no tuve, me llena una angustia en el pecho que no sé qué carajo decir. Trato de disimular una que otra lágrima ante mis amigos y compañeros de la escuela. Y cuando hacen fiestas por el día de la madre, intento evadir la realidad, trabajando horas extras (Manolete, 25 años, vive en un corregimiento en zona rural pero trabaja en el municipio)

6.6 Guerra, política y memorias

La memoria no se interesa tanto por el acontecimiento sino por las huellas de la experiencia vivida, su interpretación, su sentido o su marca a través del tiempo. De ahí que el interés por comprender la guerra colombiana, conlleve a preguntarse por las guerras que en el proceso de continuidad y ruptura, permite la continuidad de otras guerras, cada una diferenciada de la otra. Para Sánchez (2006: 23)

²²⁷ "Vainas": cosas.

²²⁸ "Hacerse el huevón": hacerse el "pendejo"

²²⁹ "Borrarse del mapa": huir (también se dice popularmente "perderse", es decir, irse)

²³⁰ "Berraquera" (o "Verraquera" indistintamente): Valentía de una persona aguerrida, que "va al frente", que lucha por sus causas. Un hombre valiente sería un "berraco" o "verraco"

“Las exigencias de comprensión de la guerra actual, las que han llevado en años recientes a un redescubrimiento ávido de las guerras del siglo XIX. Todo ocurre como si se esperara que la relectura de las viejas guerras pudiera descifrar la actual, en el supuesto de que las primeras, de alguna manera, le impusieran su propia trama a la de hoy, puesto que, como lo ha señalado Bernardo Tovar en un notable ensayo, “Los muertos también mandan”. Así lo atestigua, por ejemplo, la profusión bibliográfica en torno a las guerras civiles y, en especial, a la Guerra de los Mil días, con sus 100.000 muertos”²³¹.

Tal vez entonces es pertinente insistir-como bien afirman Pécaut y Sánchez-, más que en las dicotomías, en las intersecciones de la guerra y la política. Pero esto no debe impedir reconocer igualmente que la cronicidad de nuestra violencia, especialmente bajo su expresión bélica, es excepcional en el contexto latinoamericano²³², y que produce, aparte de los obvios efectos económicos y políticos, impactos culturales en una doble dirección: primero, remitiendo, quiérase o no, a la idea de una “cultura de la violencia”, no necesariamente en el sentido de una naturaleza violenta del hombre colombiano sino al menos de una tendencia históricamente identificable y recurrente de la guerra. Por lo tanto, diversos analistas consideran que la presencia histórica de la guerra tiene vínculos determinantes con la construcción de nuestro imaginario de nación.

El historiador Gonzalo Sánchez considera que la cronicidad de dicha violencia remite, también paradójicamente, a otra dirección: una cultura del consenso, pues a toda guerra le continuó una amnistía y a toda amnistía le siguió una guerra, lo que a la larga ha llevado a la idea de que todo es negociable, todo el tiempo²³³. Las élites dirigentes colombianas han hecho como si las guerras o conflictos no hubieran existido²³⁴, pues en

²³¹ De las guerras civiles hay infinidad de reconstrucciones escritas –memorias- elaboradas por los grandes jefes guerrilleros, que consideraron que sus hazañas y sus objetivos eran dignos de ser relatados para la posteridad. Lo mismo ha acontecido con los guerrilleros reinsertados desde 1990. Los libros de memorias de Guerrilleros dan testimonio de esta época. Dos de los últimos ejercicios de esta naturaleza son el de Vera Grave (M-19) “Razones de Vida” y el de María Eugenia Vásquez, “Escrito para no morir: Bitácora de una militancia”. Los más referenciados suelen ser el de Franco Isaza sobre las Guerrillas del Llano y el de Manuel Marulanda (comandante de las Farc) “Cuadernos de campaña”. Un libro notable y casi olvidado actualmente es “Balas de la ley”, del Sargento Alfonso Hilarión.

²³² Al respecto, ver: Gonzalo Sánchez (1993). “Los días de la revolución, Gaitanismo y 9 de abril en provincia”. Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán. Bogotá; Aguilera, Mario y Sánchez, Gonzalo (2001), *Memoria de un país en guerra: los mil días 1899 – 1902*, Bogotá, Planeta/lepri/Unijus, 2001, pp.329-366

²³³ Ver al respecto el artículo del profesor Mario Aguilera, “Amnistías e indultos, siglos XIX y XX”, en Revista Credencial Historia, No.137, mayo 2001, pp.8 –13; y en : Jorge Orlando Melo, *Ibid*, pp,14-15

²³⁴ No falta aún el colombiano que responda preguntando ¿Cuál guerra? o “la guerra es en tal región” cuando se le interroga sobre su realidad nacional (como si la guerra solamente fuera

aras de la reconstrucción de la unidad social y política de la nación, las amnistías han sido una forma de perpetuarlas, de negarse a resolverlas. Según un estudio reciente en el siglo XIX se produjeron en Colombia, por parte tanto de gobiernos democráticos como de regímenes autoritarios, 17 amnistías y otras 9 en el siglo XX, inscritas no tanto en una intención reparadora sino en cálculos estratégicos de los vencedores. Al respecto nos señala Sánchez:

“Esta propensión al pactismo y el perdón no es asunto exclusivo de la sociedad y el Estado acosados de hoy. Como parte de la recomposición política después de las guerras, en el siglo XIX, se ha señalado, hubo numerosas amnistías (perdón al delito) e indultos (perdón a la pena), no solo a nivel nacional, sino también con radios de acción muy limitados, en el ámbito regional o local; a veces sobre el conjunto de un ejército rebelde, y otras con exclusión de los jefes; a veces por delitos específicos, y en otras con generosidad extrema, como fue la de 1880, en la que representantes del poder constituido y de los rebeldes se conceden amnistía mutua, en una especie de versión laica del perdón en la católica Colombia del siglo XIX” (Sánchez: 2003: 34)

Ahí podemos encontrar, tal vez, la razón del pesimismo evidenciado en las memorias colectivas de los pobladores, pues las guerras han sido inconclusas y por ello sus memorias son circulares, es decir, que las guerras finalizan tras acuerdos de Paz coyunturales, pero no se resuelven y por eso un tiempo después se reinician con otras motivaciones y características. Al respecto es pertinente traer a colación nuevamente a Gonzalo Sánchez:

“Las guerras se terminan pero no se resuelven. Los antiguos combatientes, con la conciencia de haberse enfrentado por una causa perdida, sobreviven a la espera de la próxima guerra²³⁵. Basta recordar que en el siglo XIX, salvo en un caso, todas las guerras las pierden los rebeldes, hecho que consagró literariamente García Márquez en Cien Años de Soledad, atribuyéndole a su protagonista, el coronel Aureliano Buendía, el haber participado en 32 guerras civiles y haberlas perdido todas” (Sánchez: 2003: 55).

Para Sánchez entonces ningún conflicto se “resolvió” o fue “cerrado” (Sánchez: 2006: 55):

“Si aceptamos, con Lewis Coser que hay que diferenciar los conflictos que terminan, de los conflictos que se resuelven, deberíamos concluir que no hay en nuestro turbulento pasado guerras resolutivas. La guerra de los mil días primero termina catastróficamente con la usurpación de Panamá y la Violencia de los 50 terminaría luego con un Frente nacional percibido como pacto de élites, en tanto dejó por fuera a quienes pagaron los costos de la guerra: los campesinos”

Nuestras memorias están rotas, pues son el producto de nuestra propia inestabilidad. La propia “rutinización” del conflicto, hace que el colombiano común pierda el sentido de la

regional y no nacional). Aunque cartográficamente esto puede ser así, dicha omisión al conflicto puede orientarnos acerca de la fragmentación de la construcción de lo nacional o colombianidad.

²³⁵ El subrayado es mío.

sorpresa y del asombro, quitándole así fuerza a la escasa acción colectiva que queda. Como ha señalado Jean Michel Blanquer (Cfr Sánchez: 2003: 61), lo que caracteriza el momento actual de la guerra en Colombia no es el equilibrio de las fuerzas sino la indefinición:

“el olvido es una manifestación o reafirmación del poder que lo decreta, sea en forma unilateral, como ocurrió en los años 50, sea en forma relativamente consensuada, como en los 90, pero siempre a nombre de una legitimidad de la cual el poder se reclama depositario incontestado. El olvido y el perdón no son, pues, sobre el poder, sino sobre los rebeldes²³⁶. Lo que lo malogra es que ese olvido no tiene costos para el poder, pues queda exento de ese otro ejercicio de memoria que es el reconocimiento, entendido como aceptación del sentido de sus demandas, así sean controvertibles, o no realizables con los procedimientos invocados²³⁷.

Debido a que la memoria ha sido vivida como un problema recurrente en la historia de Colombia, es que ha sido escasamente tematizada. Retornando a Gonzalo Sánchez (2006: 89)

“La omnipresencia, real o imaginaria, de la guerra en el devenir nacional, nos ha hecho vivir en una especie de presente perpetuo, donde poco o nada cambia. Cómo acumular entonces el recuerdo, hacer memoria, en una historia inmóvil, en un continuum de la guerra? Segundo, y aunque parezca paradójico, la guerra hace vivir el presente de manera tan aplastante, que aparecería como si todos los tiempos se juntaran en el instante que vivimos, tercero, el periodo de la Violencia en particular, atravesó de una manera tan crucial todas las instituciones, y las vidas de todos los individuos, que la responsabilidad histórica es mas difícil de definir que en cualquier otra experiencia latinoamericana sin alimentar el recrudescimiento de las heridas. Y tal vez, porque con lo que vemos hoy ya ha dejado de ser excepcional, el carácter envolvente del presente y la

²³⁶ Ver al respecto dos libros que retoman esos procesos inconclusos y no cerrados de la reparación y justicia. Varios autores (1998) *“Duelo, memoria, reparación”*, Bogotá, Fundación Manuel Cepeda Vargas; y Sánchez, Gonzalo (1989) *“La Violencia: De Rojas al Frente nacional”* en Nueva Historia de Colombia, Tomo II, Bogotá, Planeta, pp.172-173.

²³⁷ Ciertamente el ya clásico libro *“La Violencia en Colombia”*, producto de la *“Comisión Investigadora de las Causas de la violencia”* de los años cincuenta, fue el primer registro que le reveló a los colombianos las dimensiones y formas del horror que acababan de transitar, pero sin que generara las consecuencias políticas que hubiera debido, dado el interés de las fuerzas hegemónicas y la tradición nacional por el olvido (sugiero al voyeur seducido ir a *“Estado del arte de la investigación sobre el conflicto armado colombiano”* en la sección anexos). Los ineficaces y frágiles tribunales de conciliación y equidad, que actuaban todavía bajo la presión de la Violencia inconclusa, y en una desventajosa relación de poder, dejaban a merced de los beneficiarios materiales de las violaciones o el usufructo, la discrecionalidad de la reparación económica que se proponían. Enfatiza Sánchez que el acento del debate se puso en Colombia, a diferencia de otros contextos, en torno a la reparación material de las víctimas. Lo demás quedaría en el ámbito de lo irreparable (Sánchez: 2003: 100). Efectivamente, a los familiares de las víctimas se les ha reparado durante décadas con migajas de tierras y cheques. Pero, décadas después, en las zonas de reparación se vuelven a violar los Derechos Humanos, así como se siguen saqueando tierras, violando mujeres y desplazando familias enteras. Sólo que la siguiente vez lo sufren más los hijos y posteriormente los nietos.

perdida del sentido de sucesión parecen ser rasgos distintos de nuestras representaciones de la política”.

Las guerras civiles colombianas serían, desde esta perspectiva, guerras inconclusas, en tanto, con frecuencia, una motiva la siguiente, haciendo de la paz, en sentido estricto, una simple suspensión temporal de las hostilidades

El conflicto armado en el Valle del Cauca actúa sobre la concepción del tiempo de sus pobladores, puesto que estos aluden a hechos mediante el cual “nociones de tiempo son comunicadas en términos de “espacios visualizados”(Hallan y Jockey: 2001: 49) : “cuando vivíamos allí” ; “cuando la masacre tal”; “cuando huimos de la finca”; “cuando nos fuimos para la capital”. Topografía y tiempo se anudan en el mismo enunciado.

El pasado se convierte, así y dialécticamente, en la perturbación del presente (Halbwachs 1925). Las violencias que siempre circularon por el Valle del Cauca quedaron depositadas en la memoria colectiva e instalada profunda pero perversamente en las relaciones y en la cotidianeidad social y personal, es decir, en el vínculo social municipal.

En las condiciones actuales de la guerra en Colombia, la experiencia de violencia llega a ser mucho más destructiva que la experiencia de la violencia anterior (la de la polarización liberal/conservadora de los cincuenta), porque se hace más difícil relacionar la propia experiencia personal de la violencia con una historia global, es decir, con los acontecimientos a nivel nacional.

En ese caso, podemos señalar cinco grandes momentos en la relación memoria social, historia y violencia en el Valle del Cauca: 1) surgimiento del bipartidismo y las polarizaciones (siglos XIX), Los pájaros de los 50 y 60 (La época de “La Violencia”), 2) la consolidación de las guerrillas en los años 70 y 80, 3) la emergencia de los carteles de las drogas en el departamento a mediados de los 80’, 4) La brutal y sanguinaria contraofensiva paramilitar desde la masacre de Trujillo a finales de los ochenta y 5) el reposicionamiento guerrillero a la luz de su incremento en diversas zonas de la región, marcado publicitariamente con el secuestro “masivo” de treinta representantes políticos en la cámara del departamento en el año 2001, a plena luz del día y bajo sofisticados procedimientos de inteligencia que dejaron en ridículo al gobierno colombiano de Andrés Pastrana.

La irrupción de las Auc en el Norte del Valle (fines de los ochenta), cambia el panorama de un modo drástico, pues no se trata de una mera incursión, sino de la implantación abrupta de una organigrama complejo, diseñado en función del control territorial más amplio, con un numero significativo de hombres en armas y con el propósito de controlar las principales vías de acceso. Como si se propusieran ilustrar el significado de las interacciones estratégicas, y en respuesta al crecimiento sostenido que habían mostrado las Farc

Con el arribo de los paramilitares, se empieza a mencionar la palabra “masacre”²³⁸ para incorporarla al lenguaje diario de las violencias. Las masacres constituyeron una “marca registrada” de la barbarie paramilitar, dirigida a golpear a la base social de las guerrillas, a sus simpatizantes o, en forma extrema, hasta al que fuera neutral, es decir, quien no apoyara al gobierno y rechazara a la guerrilla y movimientos sociales.

Bajo esta modalidad de muerte violenta (masacre), crecieron sensiblemente las cifras de la violencia en el país. Aun cuando un número exacto de masacres es un dato muy difícil de obtener, un estudio –sin duda el más completo al respecto– reporta una cifra de 1.228 masacres entre el 1º de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1993 (Uribe y Vásquez: 1995: 88). El dato que registran los autores es bien significativo en cuanto a la magnitud del fenómeno, sobre todo si tenemos en cuenta que esta modalidad se ha incrementado notablemente en los años posteriores a dicho estudio (Blair: 2003: 40): *“En términos de sus significaciones, encontramos que la masacre, con respecto a la ejecución misma de la muerte, es portadora de un grado excesivo de violencia, porque conlleva a niveles de crueldad y de sufrimiento asociados a la mutilación y la manipulación de los cuerpos. En efecto, el cuerpo es el símbolo de inscripción del horror, mediante mensajes cifrados, en esta forma de asesinar”*.

Es importante señalar que la recuperación de la historia no es un asunto de “verdades” sino más bien una estrategia narrativa que toma forma de acuerdo con el momento histórico en el que se construye; en este sentido, el pasado aparece también como una proyección de deseos y como olvido sistemático. El relato de la memoria histórica de un grupo social juega un papel principal, pues el uso de la memoria es, sin duda, un fuerte

²³⁸ No existiendo una definición precisa de masacre, diversos organismos de Derechos Humanos en Colombia, se han puesto de acuerdo que una masacre ocurre, cuando han sido asesinadas más de diez personas. Desde ese punto de vista, las masacres como magnas tragedias, se cuentan por centenares en el país.

recurso político. Al hablar del “uso de la historia” se hace referencia a las políticas de la memoria, a la manera en la que el pasado es construido, narrado y utilizado por los distintos grupos sociales. La memoria se encuentra siempre filtrada por marcos sociales, de manera que en la narración de la memoria, emergen los significados compartidos.

En el caso de las FARC este “uso de la memoria” se identifica con una apelación reiterada al evento de Marquetalia, que produce un efecto cíclico en la historia. Los eventos pasados que se narran en el discurso de las FARC se presentan como repeticiones o réplicas de un mismo evento paradigmático: la toma de Marquetalia en el departamento del Tolima²³⁹ Este evento se invoca como explicación del presente, a él se remite la razón de ser del movimiento armado y la caracterización de un Estado represivo que permanece a través del tiempo. La historia aparece como inmutable y cíclica y así mismo el movimiento guerrillero y sus fines, cuyo origen campesino y de resistencia se invocan constantemente para situarse frente a ese Estado represivo.

De ahí que muchos campesinos apelan a la toma a Marquetalia de 1964, es decir, la toma de una colonia agraria tolimese, en la que un pequeño grupo de autodefensas campesinas que huían de la violencia bipartidista se establecieron. Esa toma, ni más ni menos, es el mito fundacional de la guerrilla más antigua de América Latina. Marquetalia es el mito fundante de la violencia en Colombia para las Farc porque en él se reúnen elementos aún no resueltos que siguen perpetuando el conflicto: lucha por la tierra, desplazamiento del campesinado pobre por parte de los grandes terratenientes y la respuesta militar (represiva) del Estado a las demandas sociales. Es decir, los guerrilleros apelan a ese pasado campesino. Es interesante sin embargo que Marquetalia no se encuentra de una manera muy nítida en la memoria nacional (especialmente urbana y de los más jóvenes²⁴⁰). La violencia está como presente continuo, así como lo están los hechos de abusos en contra de la población campesina, narrados por el movimiento guerrillero, pero no se vislumbra claramente su origen.

De las entrevistas realizadas en la región de estudio se pueden extraer por lo menos tres indicaciones: a) Los relatos individuales, relacionados con la experiencia de la violencia,

²³⁹ Como un dato que trasciende lo anecdótico, las FARC surgieron en el Tolima, es decir, a unos 100 kilómetros de la zona de estudio.

²⁴⁰ En un estudio exploratorio realizado entre estudiantes del primer año de licenciatura en la Universidad Nacional de Colombia en la pequeña ciudad de Manizales, encontré que el 85% de los estudiantes no conocían el mito fundacional de Marquetalia que han construido las Farc como emblema de la lucha y orgullo insurgente. En D’abbraccio, Guillermo (2001). “¿Y eso a mi qué me importa? Representaciones sociales sobre el conflicto armado en estudiantes de licenciatura en Caldas”. Mimeo interno de cátedra. Grupo de Trabajo académico en Gestión Cultural. Manizales.

no se inscriben en un relato más amplio; b) Los pocos relatos de conjunto de la violencia asumen la forma de mitos de la violencia (desde los años 50) que se sustraen ampliamente a la historia c) Los “hechos” tienen un estatuto de realidad que no se deja insertar fácilmente en una historia con un significado.

a) En los relatos que son resultado de experiencias individuales, las referencias a la “violencia” están siempre presentes. La trayectoria de una vida es descrita a menudo como un desplazamiento espacial ininterrumpido, con la “violencia” en el punto de partida, activa en cada reorientación de la trayectoria, y presente de nuevo en el punto de llegada el cual, por lo demás, no es más que el comienzo de una nueva etapa. Como afirmó Don Eustagio:

“cuando salimos del Cauca porque nos perseguían llegamos aquí, pero también encontramos violencia, aunque no nos estuvieran buscando precisamente a nosotros”

En resumen, en el trasfondo de las diversas memorias de las violencias que se evidenciaron en las voces de los pobladores de mayor edad reseñados en las páginas anteriores, se encuentra siempre la violencia de los años 1945-1960.

Además, prevalece en sus voces, la convicción de que se trata de una violencia que no está relacionada con actores específicos, sino que toma el aspecto de una fuerza bárbara que escapa al control de todo el mundo. Pécaut lo señala acertadamente:

“Durante la Violencia de los años cincuenta, muchos campesinos decían: “llegó la violencia” como si se tratase de un ente concreto” (Pécaut: 2003: 55).

Es decir, los hechos violentos no son siempre imputables a seres humanos e, incluso cuando lo son, se cargan a menudo en la cuenta de una “fuerza inhumana”, escondida detrás de los seres humanos, con lo cual se intenta dar expresión al acceso o a lo no representable. Un ejemplo de ello lo constituye la frase de una mujer, que a todas luces se reconoce como “devota”:

“si tantas desgracias y muertes ha traído Dios a nuestro país, es porque algo de ello nos merecemos” (Doña Petrona, municipio en el casco urbano).

Finalmente, el pesimismo cunde, y el optimismo parece un bien escaso. Casi todos los entrevistados coincidieron en que la situación no va a cambiar. Por ello, uno de los más lúcidos estudiosos de la violencia colombiana (Pécaut: 2002: 78)²⁴¹, - nos señala a los

²⁴¹ Daniel Pécaut, un encantador y carismático francés que hemos adoptado como colombiano, se suma a la lista de intelectuales e investigadores extranjeros (Gilhodes, Hobswan, Peter Waldman,

estudiosos nativos que el conjunto de los fenómenos de violencia no van a poder evitar desembocar en procesos traumáticos- si hiciéramos el ejercicio de un proceso de paz exitoso, así como de un probable “post-conflicto”. Parecería, afirma este investigador galo, que más bien las dinámicas de violencia se estuvieran rutinizando y que una vez más el sistema colombiano es capaz de adaptarse a ellas o de absorberlas.

Capítulo 7 A modo de cierre

La militarización de la política y la bandolerización de la guerra

“La guerra le dio a mi hermano la posibilidad de hacer las dos cosas que más quería, atacar la guerrilla y volverse un hombre rico” **Carlos Castaño. Mi confesión.**
(confesiones del famoso jefe paramilitar, condensando así los objetivos de su hermano Fidel, creador del paramilitarismo en los ochenta)

Según el equipo de investigación del Journal of Peace Research, existen cuatro tipos de conflictos armados: a) los conflictos armados internos (tales como la lucha del estado peruano contra Sendero Luminoso), b) los conflictos armados internos que han vivido un proceso de internacionalización (como por ejemplo la guerra civil en El Salvador la cual contó con la participación de los Estados Unidos, por un lado y , por el otro, de Nicaragua y Cuba), c) Los conflictos armados extra-estatales (como la actual coalición antiterrorista contra Al- Qaeda) y d) finalmente, los conflictos armados inter-estatales (cuyo último episodio en Latinoamérica fue protagonizado por Perú y Ecuador) (Gleditsch: 2002)

Desde el inicio de la guerra fría (1945) hasta la actualidad, diversos cambios se han producido respecto a los conflictos armados: Las guerras interestatales constituyen en el presente internacional una minoría respecto a lo que en la clasificación anterior se denominaron conflictos extra-estatales, internos internacionalizados o intra-estatales.

Según Pizarro, de los 33 conflictos armados que existían en el 2001, solamente uno era propiamente interestatal (India y Pakistán). (Pizarro: 2004: 40). Algunos autores sostienen que las guerras interestatales han disminuido porque los altos costos y el poder destructivo de las armas actuales, especialmente las nucleares y químicas, se han constituido en un factor disuasivo. Una idea fuerte es que los regímenes democráticos liberales no se declaran la guerra entre sí, sino que se encuentran en una estrecha relación de interdependencia (Kaldor: 2001). Desde el fin de la guerra fría los conflictos armados internos han constituido más del 80% de las guerras y sus víctimas. Por

entre otros), que nos han aportado rigurosas miradas sobre nuestra rutinización de la violencia.

ejemplo, entre 1989 a 1996, solo hubo tres conflictos armados interestatales frente a 89 internos o de orden “doméstico” (David: 1997).

En *“Internal War. Causes and Cures”*, Steven David define un conflicto armado interno como *“una confrontación violenta cuyos orígenes echan raíz esencialmente en factores domésticos más que en factores ligados al sistema internacional, y en el cual la violencia armada transcurre esencialmente en los límites de un solo Estado* (David: 1997: 576). Este aspecto (el supuesto predominio de factores “domésticos” en el origen y prolongación de las guerras), es supremamente polémico. Creo que aquí David se apresura en señalar que la causas de esos conflictos son eminentemente “domésticos”, pues asuntos como la presencia del narcotráfico, o políticas represivas (como la “anti-terrorista” del tejano justiciero Bush), o las que en los años de la guerra “fría” marcaban las posiciones de alianzas y contrarios, evidencian que los conflictos internos no pueden ser explicados exclusivamente a partir de factores “domésticos”.

Una de las características de los conflictos prolongados es su metamorfosis a través del tiempo, tanto en lo que atañe a los cambios en el contexto interno como externo.²⁴² ¿Por qué persiste entonces la guerra en Colombia?²⁴³ Si retomamos las reflexiones acerca de las denominadas guerras de “larga duración” (desde 1964 hasta ahora se enmarcaría la “última” guerra colombiana, diferenciándola de otras guerras anteriores), diversos analistas consideran que son precisamente los conflictos armados más difíciles de solucionar “debido no solamente a los niveles de odio y desconfianza que han generado (“las deudas de sangre”), sino a la socialización de la violencia en muchos sectores sociales como una forma “normal” de resolución de conflictos, así como a la erosión

²⁴² Para Pizarro el caso de Angola es pertinente de señalar, puesto que el conflicto en dicha nación pasó de una guerra anticolonial (contra el dominio de Portugal), a una guerra contrarrevolucionaria (debido al apoyo de los Estados Unidos y África del Sur a Unitas en contra del gobierno marxista), y finalmente, se transformó en una guerra inter-étnica degradada debido a la lucha por el control de las estratégicas minas de diamantes y las zonas petroleras. Las guerras contrarrevolucionarias se acentuaron durante la Doctrina Reagan, cristalizándose a favor de los “guerreros santos” o “Mudjahidín” en Afganistán, de la RENAMO en Mozambique, de UNITAS de Jonas Savimbi y de la Contra en Nicaragua.

²⁴³ A pesar que el sentido común de quien desconozca el caso aquí planteado lo pueda llevar a suponer que la violencia en Colombia deviene de la emergencia de las guerrillas en los años sesenta del siglo XX, lo cierto es que este país andino tiene una larga historia de confrontaciones violentas. En efecto, los diversos conflictos que se han producido en los siglos XIX y XX, se caracterizaron por su “regionalización”. En el inicio del siglo XIX se produjeron cuatro guerras civiles y más de cuarenta pequeños conflictos regionales que desangraron el país. El siglo XX en Colombia se inició con una cruenta guerra, que segó la vida de 180.000 colombianos, es decir, el 4,3 % de la población en ese entonces. La guerra de los mil días, tal como se la conoció, dio la bienvenida al siglo XX, reflejando la incertidumbre de la frágil República de Colombia que aún no terminaba de “consolidarse” como tal. (González: 1994:20)

estatal en sus dos funciones primordiales: justicia y seguridad” (Pizarro: 2004: 44). Ahora bien, la pregunta no será solamente por qué persiste, sino además cómo es que persiste entre una población que nace, vive y muere en un contexto en guerra que a todas luces se ha naturalizado para sus gentes²⁴⁴.

Al igual que otros conflictos en el mundo (especialmente los de carácter étnico) el de Colombia ha dado muestras de una gran crueldad en el ejercicio de la violencia²⁴⁵. En la confrontación entre hutus y tutsis en la Ruanda de 1994, sobresalió el uso de la crueldad. La campaña de exterminio de la etnia tutsi había sido una acción premeditada y organizada, lo que permitía calificar esas masacres como genocidios. Cabe preguntarse si las atrocidades cometidas en Ruanda eran esenciales al proyecto genocida: ¿Cuáles lógicas de odio y cuáles determinantes históricas y políticas hicieron posible tanta crueldad? ¿Por qué el sufrimiento se vuelve un fin en sí mismo? Vale aquí ubicar también el estudio de Primo Levi sobre el genocidio nazi, para retomar el problema de la crueldad cincuenta años después en la Europa contemporánea. Levi señala cómo en esta concepción (nazi) el enemigo no solamente debería morir sino que debería hacerlo con suplicio²⁴⁶. Es pertinente entender la masacre como un exceso en estado puro, lo cual permite esclarecer las significaciones de esta violencia que riñe con los códigos y regulaciones propias de los conflictos, y deja ver que acciones como las masacres apuntan a la destrucción total.

“Cada época tiene sus propias formas de guerra” dijo alguna vez Clausewitz²⁴⁷. Y en el caso de esta Colombia que nos ocupa, ¿qué forma tiene “su” guerra? Tras el amplio material empírico que se obtuvo en el trabajo de campo, la tentación de responder precipitadamente es grande. Contestaríamos apresuradamente que se trataría de “Una guerra de mafiosos”. Pero ¿será acaso sólo eso lo que caracteriza a esta nueva guerra?

²⁴⁴ Diversos analistas colombianos hacen referencia a una “Cultura de la violencia”, pero ¿Cómo se constituye la aceptación de la violencia como parte del “orden” cotidiano, de ver y relacionarse con el mundo? ¿Cómo se construye la percepción social (representación social) del otro como enemigo o alguien/algo al que sólo se le puede tratar en términos instrumentales?

²⁴⁵ En la literatura reciente se encuentran elementos ilustrativos más sugerentes para pensar, con las debidas diferencia y precisiones, el problema colombiano Ver Primo, Levi (1989), *Les naufrages et les rescapes. Quarante ans apres Auschwitz*, Gallimard, Paris; Fawaz N.Traboulsi (1994), “Rituales de la violencia”, *El Viejo topo*, No.80, Barcelona, dic.

²⁴⁶ Otro ejemplo de esta crueldad de proximidad, en otro contexto cultural, basada en el conocimiento del “otro” (la víctima) en el momento de infligir suplicio, nos lo presenta Fawaz N. Traboulsi: “Es así como atentar contra la ird (el honor madre–hermana–hija) constituye la “herida simbólica” suprema de la violencia verbal para los libaneses” (Traboulsi: 2002: 52)

²⁴⁷ Clausewitz, Carl Von (1995), “De la Guerre”, Paris. Editions de Minuit, pp 703

¿Acaso solo la podemos caracterizar como una guerra irregular en el que la depredación de recursos y el consiguiente enriquecimiento ilícito son sus objetivos centrales?

En efecto, la intervención de la economía en el conflicto armado colombiano ha tenido un largo proceso que, a grandes rasgos, ha presentado las siguientes características: a) presencia de la economía campesina en la etapa de la colonización armada, b) ayuda externa de países socialistas durante la Guerra Fría, complementada con abigeatos, robos a bancos y esporádicos secuestros y extorsiones de personas pertenecientes a los sectores más pudientes de la sociedad, c) irrupción de los cultivos ilícitos en las posesiones y propiedades de amplias capas campesinas, d) renta coactiva de exportaciones primarias tales como el oro y el petróleo, e) uso generalizado del robo, el secuestro y la extorsión, f) ganancias derivadas de la progresiva inserción en la cadena del narcotráfico.

La economía de guerra como tal, como sistema de capacidad de acumulación sostenible y constante, solo llega a darse en el conflicto colombiano en la medida en que aparecen aparatos bélicos autónomos por efectos de la expansión y la competencia entre los antagonistas dentro de un universo estrecho y limitado. Pero la economía de guerra es una creación de la política de guerra y tanto sus fuentes como su lógica de acumulación dependen del tipo de conflicto, de la concepción del poder buscado, de las estrategias para lograrlo y del espectro de alianzas para compartirlo. Si, como hemos planteado hasta ahora en este escrito, los objetivos de la izquierda armada (insurgencias) y la derecha armada reaccionaria (contrainsurgencia), no van más allá de una micro-política para la consecución del poder local, debemos reconocer, en consecuencia, que sus soportes económicos no son otra cosa que acomodaticios instrumentos para lograr sus recortados fines.

¿ Quedará entonces, nuestro conflicto armado dentro de esa “gran mayoría de movimientos insurgentes” caracterizados por ser *“más que expresión política (...) una forma de crimen organizado para extraer rentas”*, agrupados por Collier en su estudio sobre 161 eventos de guerras civiles en el mundo en desarrollo desde los años setenta? La respuesta no es sencilla, y parecerá ambigua: sí, pero no²⁴⁸.

La relación de las Farc con la economía del narcotráfico no se debe, sin embargo, a una especie de proclividad hacia la coca que explicara su alta dependencia de esta última

²⁴⁸ No se trata de una respuesta “cantinflasca” o ambigua. Por una parte es “Si”, porque para unos (paras y narcos), la guerra es un negocio redondo, pero es también “No” porque para otros (guerrilleros especialmente), hay un fuerte sentido político de lucha por la justicia social en sus acciones. Búsqueda codiciosa por una parte, vía armada por el otro.

como parecen hacerlo entender algunas descalificaciones simplistas de carácter político de la guerrilla. El hecho mismo de que ésta (FARC) se haya opuesto, inicialmente, a los cultivos de coca en el Caguán, muestra que la dinámica de esa relación es mucho más compleja de lo que lo haría entender una ética política más preocupada por la escolástica de los valores que por los condicionamientos de un proceso bélico.

Para corroborar ello y poder interpretar adecuadamente las miradas de nuestros informantes en el campo, consideraré pertinente retornar brevemente a las relaciones guerra y política en la historia colombiana. En uno de sus más recientes libros, el historiador Gonzalo Sánchez (2002), intentó develar las relaciones entre la guerra y la política, las cuales a su juicio han sido siempre conflictivas, contradictorias y ambiguas, y varían de acuerdo con el momento histórico en que se presentan. Desde las guerras civiles del siglo XIX, relativamente inocuas en comparación con las del siglo XX, hasta las trágicas contiendas armadas de la actualidad, envilecidas por sus tácticas y métodos de lucha, ha corrido bastante agua por debajo de los puentes. En algunas ocasiones, la guerra se ha subordinado a la política; en otras- las más- la política se ha subordinado a la guerra; en todas, sin embargo, guerra y política han jalonado la historia de Colombia como no ha ocurrido con la de ninguna otra nación de América Latina.

Guerra y política, orden y violencia, violencia y democracia y, en el límite, vida y muerte, son algunas de las múltiples oposiciones y complementariedades a partir de las cuales se hace descifrable la historia colombiana (Sánchez: 2002:13). A decir verdad, si hay algo que obsesiona en el devenir histórico y en la cotidianidad de este país es la no resolución de los contrarios, su terca coexistencia, como si formaran parte de una cierta disposición natural de las cosas. Sólo de manera coyuntural, en momentos de aguda crisis, polaridades como ésta de guerra y política se sienten socialmente y se perciben intelectualmente como relaciones problemáticas (Sánchez: 1991: 14).

Acaso lo que le añade complejidad y fuerza ilustrativa al caso colombiano es la diversidad de combinaciones de dicha relación en los distintos contextos históricos: a veces, como en las guerras civiles del siglo XIX, guerra y política entran en relaciones de continuidad y complementariedad; otras, como en la guerra civil no declarada de los años cincuenta, la guerra se despliega como una estrategia de exclusión, de supresión de la política; en una tercera fase, la de la guerra de guerrillas que se inicia a partir del Frente Nacional, las armas se convierten en sucedáneo de la política y, finalmente, en el momento actual, los términos de la confrontación están caracterizados por una fragmentación extrema tanto de la guerra como de la política.

Lo que finalmente persigue el uso de esta violencia regional en el caso del Valle del Cauca (en la sustitución del Estado), es la construcción y usufructo de un poder local que, en su escala marginal de manipulación de las instituciones públicas y privadas propias del sistema capitalista, permita apreciables márgenes de participación ilegal en el uso y distribución de la riqueza social. Es aquí donde se encuentra un punto clave (pero atención: no el único) para entender el conflicto armado en esta región colombiana: convertido en una oportunidad y una forma de vida dentro del limitado conjunto de opciones que ofrece y niega una sociedad tan cerrada e inequitativa como la colombiana. Obviamente, este aspecto no niega que para muchos, especialmente para los guerrilleros, milicianos y militantes, la guerra encierra un sentido político e ideológico, unos referentes claros, un proyecto político basado en la utopía, que apresuradamente se ha señalado -desde el oficialismo uribista- como un vacío de ideales en la guerrilla. No es así, aunque tampoco cabe descartar que las oportunidades económicas que brinda un ambiente de guerra, permite a muchos (especialmente la contraparte paramilitar), obtener botines por esa vía, que en una situación de paz sería impensable alcanzar.

La relación entre los frentes guerrilleros y la comunidad de base refleja que el montaje de su predominio armado depende de la adopción de métodos que involucran, como actores de guerra, a sectores de población que circunstancialmente y por la misma mecánica de la coexistencia con la guerrilla apoyan en la logística de transporte, alimentación, medicamentos, servicios financieros o información. El poder local de las autodefensas, siempre disputado por las guerrillas, establece un círculo vicioso impuesto por la búsqueda de un monopolio que, como el del territorio, se caracteriza por su escasez: criminalizando, desde la normatividad de guerra asumida por cada uno de los contendores, cualquier contacto voluntario o involuntario con el contrario (Picolli: 2003: 180-181), reflejando además un escenario territorial y unos intereses particulares tan estrechos, que el poder local termina convertido en botín y objetivo autosuficiente de lucha.

De ahí que podemos afirmar que en nuestra zona de estudio²⁴⁹, el conflicto armado y las violencias que lo atraviesan se encuentran articulados a un proceso de militarización de la política y bandolerización de la guerra. Esos poderes locales, construidos por grupos situados en la ilegalidad y que, gracias a una economía de guerra sustentada por poderosas estructuras criminales, han logrado resquebrajar, en esta parte del país, las soberanías territoriales e institucionales del Estado. En los pobladores se cristalizan y

²⁴⁹ E intuimos que en las otras zonas de conflicto armado también, pero eso está fuera del alcance de esta tesis.

materializan las relaciones sociales violentas que se viven en el resto del país. La militarización de la política produce una progresiva militarización de la vida social, apoderándose una violencia casi compulsiva de las relaciones interpersonales. Empiezan a preponderar en la vida social, las formas de pensar, sentir y actuar de los militares. La guerra normaliza entonces las relaciones sociales deshumanizantes.

De entrada, lo que parece insinuarse en un contexto regional como este, es que la naturaleza de esos poderes está definida no solo por rasgos nuevos, tales como una economía de guerra altamente contaminada por los recursos ilícitos (narcotráfico, secuestro, extorsión)²⁵⁰, sino también por aspectos estructurales e históricos que, como el del clientelismo político y social, han moldeado la dominación tradicional en las regiones colombianas. En el caso de este último, ya se ha llamado la atención sobre el hecho de que el sistema de clientelas ha terminado por servir de soporte para que, desde la insurgencia de extrema izquierda y la contrainsurgencia de extrema derecha, se monte el aparato de coacción armada destinado a interferir, “mediante amenazas, en la asignación de los recursos públicos con fines electorales o como mecanismo para lograr el apoyo popular”.

Así llegamos a la noción de “clientelismo armado” (Rubio: 1999:31), fenómeno que, según decir de Alfredo Rangel, “*no es otra cosa que la apropiación privada de bienes públicos a través de la amenaza de las armas*”. Posteriormente, Mauricio Romero usará el término de empresario militar o de la coerción para darle sentido al poder local de las autodefensas. Las autodefensas son vistas, en consecuencia, como grupos de hombres que hacen de su destreza en el ejercicio de la violencia organizada, o de su empleo como amenaza, un medio de construcción de poder tanto para su uso personal como en beneficio de otros. Así, según Romero, ellas “intimidán, protegen, recolectan información, saldan disputas, dan garantías, hacen cumplir contratos y cobran impuestos, entre otras actividades”²⁵¹.

²⁵⁰ La época de los secuestros como modalidad de financiación de la guerrilla, se inicia a finales de los años setenta del siglo XX, antes no. Igualmente con el narcotráfico, el boom de la cocaína se inicia en los años ochenta. Y en ese sentido, es pertinente señalar que el boom de la marihuana de los setenta no movilizó a los actores armados, pues el margen de ganancia no es igual al de la coca.

²⁵¹ Allí se evaluó un reporte sobre cómo el dinero del régimen subsidiado de sector salud para la asistencia de la población más pobre del país estaba siendo utilizado por las autoridades gracias a su participación en el aparato de corrupción integrado por funcionarios públicos y políticos locales que desviaba un 40% de los recursos, es decir, 2.5 billones de pesos, manejados por las Administradoras del Régimen Subsidiado ARS. En consecuencia se formó un equipo integrado por analistas financieros, fiscales anticorrupción y Policía judicial que al examinar las finanzas de la salud en los 22 municipios del Atlántico y en su capital, encontró nexos ilegales de las

La territorialización privada se define como un progresivo fenómeno de redistribución geográfica entre poderes particulares antagónicos, lo cual rompe el tejido social resultante del largo proceso histórico a través del cual se ha ido articulando la sociedad civil. Tal fenómeno, que conlleva la enajenación de las diversas jurisdicciones, competencias y nexos constitutivos del orden territorial vigente en lo social, lo económico, lo político y lo judicial, es característico del conflicto colombiano en sus dos variantes: a) los territorios contraestatales, conformados por los grupos guerrilleros rurales y urbanos de la subversión de izquierda; b) los territorios paraestatales, conformados por los grupos rurales y urbanos de las autodefensas anti-insurgentes.

En cuanto a los primeros y pese a lo que su nombre pueda indicar como oposición estatal, ellos no son el resultado de una violencia para la sustitución social, es decir de un radical proyecto de demolición del orden vigente, sino de una violencia para la participación social entendida esta como una demanda de integración dentro de lo que se considera un excluyente sistema de distribución de la riqueza y las oportunidades sociales. Una violencia que, en el caso pionero de las Farc y durante todo el periodo fundacional de la colonización armada, tuvo el carácter instrumental de acceso a una reforma agraria que, pese a cierta altisonancia retórica, no dejaba de encuadrarse en la perspectiva del más lozano desarrollo burgués. El verdadero trasfondo de este proyecto de lucha no era, pues, anticapitalista sino antimonopolista. No estaba orientado hacia el derrumbamiento del Estado capitalista, sino hacia su transformación en un régimen sociopolítico que ampliara los umbrales de participación y representación de las clases bajas y medias de la sociedad.

Por otra parte, en lo que atañe a los territorios dominados por el paramilitarismo, puede señalarse la concordancia entre su nominación y el tipo de violencia ejercida desde ellos, ya que lo que se proclama es la defensa del status quo o salvación del sistema existente mediante la recuperación de territorios amenazados u ocupados por la guerrilla, lo que le permite “suplir” al Estado en el cumplimiento de sus compromisos fundamentales de salvaguardia de la vida, la libertad personal y la propiedad privada.

Como bien lo advirtió Camilo Echandía Castilla, al considerar la experiencia de muchas regiones con presencia de los primeros y preguntarse “si su oferta de protección no es

autodefensas con algunos alcaldes, secretarios de salud y de Hacienda, gerentes de los hospitales y “ hasta con dueños de droguerías. Ver diario El Tiempo abril 25 de 2005, Bogotá.

mayor a la demanda“, es decir, si la protección que ofrece supone el uso real o potencial de la violencia: y si, en lugar de acabar con una situación de desconfianza, no termina más bien alimentándola. Sin embargo lo que se quiere resaltar acá, independientemente de los equilibrios entre la oferta y la demanda del servicio y de la calidad o resultados finales de este, es que la carencia del bien de la seguridad pública es una realidad objetiva y es percibida como tal por sectores concretos de la comunidad dispuestos a pagar por ella. Es a partir de esta urgencia que el “servicio” represor paraestatal de las autodefensas (paramilitares), se va concretando en un poder local propio construido a expensas del que se le quita a la guerrilla, y bajo la promesa de una temporalidad que debe expirar cuando el Estado recobre sus legítimos poderes regionales.

Pero al interior de semejante dinámica es preciso tener en cuenta que, como ya lo he señalado anteriormente, la relación entre tales antagonismos crea un delirante juego de espejos que reproduce no solo las ambivalencias éticas propias de su mortífera lucha sino también las condiciones y los medios para la construcción y la defensa de un poder local cuya existencia se da en la medida en que niega al otro. Recordemos que el poder local de las actuales FARC, empezó a fraguarse desde las incipientes guerrillas campesinas cuando en las zonas de colonización, junto a los combatientes especializados en la defensa militar del territorio, se conformaron ligas agrarias orientadas a crear formas de organización para emprender acciones colectivas frente al Estado y los terratenientes. La relación político–militar establecida entre estos grupos y sus bases sociales fue comprometiendo cada vez más esferas de actividad dentro de las comunidades rurales. Conflictos vinculados con la posesión y propiedad de bienes, normas de convivencia, acciones de desarrollo comunitarios, empezaron a ser tramitados desde un nuevo orden que, con el tiempo y el fortalecimiento de los grupos armados, dio lugar a jurisdicciones guerrilleras que satisfacían el interés de los pobladores por afianzar una organización local que el Estado, con sus ausencias legales y agresiones de hecho, les habían negado.

Puesto en perspectiva, hay bastantes semejanzas entre las Auc y las Farc en cuanto al poder local. En un orden de importancia que le daría el primer lugar a las relaciones entre la lucha por el poder regional y la conquista del poder central, parece claro que las dos organizaciones comparten un ejercicio de la violencia orientado no hacia la sustitución social, sino hacia la participación social lo cual determina el horizonte estratégico de la lucha política y militar y, en consecuencia, la naturaleza misma de la búsqueda y preservación del poder local. Lo cual es apenas lógico ya que una estrategia política y militar que no tenga como fin real y último la toma del palacio presidencial, termina

condicionada por todo el conjunto de tácticas discrecionales emanadas desde los mandos locales para conservar el control y usufructo de los poderes locales.

Se trata, de hecho, de una municipalización del conflicto que termina por provocar varias transformaciones: 1) en el sentido de la guerra al reducir los alcances políticos de control del poder; 2) en las expectativas de los combatientes al ofrecerles ideales más prácticos e inmediatos que los exigidos por una afectación profunda del Estado central; 3) en la estructura y funcionamiento organizacional al debilitar las redes de dependencia e inspección entre las máximas jerarquías nacionales y las unidades locales de la organización; 4) en la violencia misma al ampliar su uso ofensivo y defensivo a una casuística mayor de oportunidades e intereses individuales y de grupo, y al debilitar tanto la formulación como la aplicación de cánones generales para regular su empleo. Se trata, en suma, de una municipalización del conflicto que, en el caso específico colombiano, terminó por convertirse en uno de los factores principales de su degradación política, militar y económica.

Puede decirse que el principio de autodefensa, invocado por un grupo social como única posibilidad de asegurar su supervivencia dentro de un espacio y en un momento dados de su historia, es claro indicador de graves fallas en las relaciones Estado/Sociedad. No es el debate de ideas lo que dividen o distancian a los colombianos, sino la competencia rapaz por el ejercicio del poder, el control de los recursos y de las poblaciones. Lo decisivo de la interacción cotidiana por parte de los guerreros ha sido la consolidación de los métodos usados para obtener a toda costa propiedades y acumular riqueza y controlar en forma efectiva a la población civil. Con acciones calculadas, ejemplares, rápidas, que involucran el terror masivo paralizante (o lo desencadenan), las organizaciones armadas pretenden alcanzar ciertas consecuencias: lealtades, desplazamientos, cambios en la conducta de los civiles, ganancias territoriales. Todo esto podría hacer parte de la "Guerra Harapienta" como la denominado Leroy Thompson, citado por Michael Ignatieff (1999). Es la guerra del fin del milenio pero a "lo colombiano": utilitaria, funcional, calculada, con una relación bien definida entre medios y fines, y por esos mismos, con una muy larga duración (Salazar y Castillo: 2001:13)

Así, en lugar de tener la guerra como la continuación de la política por otros medios, los colombianos hemos convertido a la guerra en la continuación, por medios violentos, organizados y mercantiles, de conversaciones imposibles, y de conflictos no enfrentados y no resueltos. En una sociedad con la tasa de homicidios de la colombiana, y en medio de un conflicto en el que la población civil es objeto de disputa violenta, la aspiración a la

supervivencia se vuelve casi natural. Al mismo tiempo, y aunque suene paradójico, el desorden social y del desplazamiento continuo de población genera oportunidades económicas. Pero el objetivo de sobrevivir tiene la primacía. Por eso poblaciones enfrentadas a este tipo de situaciones, deciden aceptar la protección de una de las organizaciones armadas, o de una alianza de ella, siempre y cuando esta protección sea sólida y creíble. Cuando deja de serlo, o cambian de protector o se desplazan (Salazar y Castillo: 2001: 26). Las instituciones, normas, acuerdos, contratos, intercambios que han surgido en el proceso de adaptación de los colombianos al estado de anarquía en el que deben sobrevivir, no son tan pasajeros ni tan extraños ni tan secundarios como la sabiduría convencional parece creerlo.

Y, por el otro lado, y en consonancia con la militarización de la política, encontramos la otra cara de la moneda: la bandolerización de la guerra

Ha señalado Duncan (2006), que las autodefensas se encuentran en una transición que va más allá del concepto de crimen organizado (“actividades delincuenciales llevada a cabo por varios individuos”) hacia una actividad y red de mafia (“forma más sofisticada de crimen organizado (...) la protección y coerción de determinadas transacciones en una sociedad”). El papel de los santuarios rurales de las autodefensas, en la descripción de Duncan, es servir de centros desde los que se posee el control real sobre los nodos o células operativas que regulan las transacciones ilegales (como el contrabando y el narcotráfico), las transacciones legales vulnerables) como los sanadresitos, los mercados de abasto, los juegos de azar, los tenderos y los transportadores) y controlan instituciones de gobierno y justicia en pro de “impunidad”, inmunidad, información, seguridad e influencia sobre las decisiones políticas. El punto de salida de esa transición serían las zonas rurales que hoy controlan y numerosos pequeños municipios, y el punto de llegada estaría en ciudades intermedias, y en barrios subnormales y ciertos distritos de grandes capitales (Duncan: 2005: 154). Ese proceso estaría cambiando la estructura del poder político en Colombia, por el desequilibrio entre esos “Señores de la guerra” y algunos políticos locales (los menos) que no quieran plegarse a su sistema de influencia y control.

Para este autor, entonces, es la función de utilidad de las autodefensas sobresale el mismo tipo de finalidad del comportamiento criminal: *“el objetivo final de las redes mafiosas que se instalan en lo urbano: producir fortunas sin precedentes que puedan trasladarse en liquido hasta las zonas rurales”*. Con el camino a medio despejar, Fidel, el mayor de los Castaño, siguió sumando a su inventario de bienes raíces (haciendas),

algunas de ganaderos que prefirieron recibir altas sumas de dinero y abandonar la región. Cuando Fidel Castaño murió tenía a su nombre 20.000 hectáreas, 30.000 cabezas de ganado y 200 millones de pesos en efectivo (Duncan:2005:187).

Como bien afirman Boris Salazar y Castillo (2001), no basta con eliminar las llamadas causas objetivas del conflicto, con alcanzar una mejor distribución de la propiedad de la tierra o incrementar las posibilidades de participación democrática de las fuerzas excluidas. No basta, tampoco, con fortalecer al Estado en general y hacerlo más fuerte allí donde ni siquiera ha logrado despegar. Se requiere, además, construir una organización social que no propicie, premie e incentive las conductas depredadoras que están en el centro de la destrucción de los vínculos comunitarios en Colombia

Lo que habría que eliminar, es una serie de formas de incidir en el orden social, de interactuar con otros agentes sociales que traen consigo la certidumbre de que comportamientos depredadores pagan en el corto y en largo plazo. La lectura de la *Violencia* clásica como un puro fenómeno político, olvida que su efecto más duradero fue el vasto paso de riquezas y propiedades de unas manos a otras. La proliferación de organizaciones armadas parecen decirnos: si la política no permite cambiar la situación, quedan las armas. Con los gobiernos de “mano dura” como han sido el de Fujimori (Perú) y Uribe (Colombia) hay muchas armas y muy poca política. La población que acepta la dominación de paramilitares o guerrilleros, no tiene una clara definición ideológica: está eligiendo una forma de sobrevivir, que dentro de su situación y sus restricciones, es la que le brindaría la mejor situación posible. También, porque no tiene una posición ideológica definida, ha logrado mayores probabilidades de supervivencia: al no estar “etiquetadas” de forma definitiva a ninguno de los dos bandos, las distintas poblaciones han podido maniobrar en la anarquía colombiana.

En un nivel tan bajo de orden y en las condiciones de anarquía extensa reinantes, muchas regiones de Colombia, las organizaciones paramilitares y guerrilleras se convierten en gérmenes de orden y en mecanismos para mejorar las ventajas competitivas de cada uno en la lucha por la obtención y conservación de los recursos escasos en disputa. Estas condiciones se exacerbaban en aquellas regiones y territorios en los que las actividades económicas predominantes (coca, amapola, contrabando de gasolina²⁵² y cientos de productos, esmeraldas, etcétera) es decir, donde la ilegalidad se

²⁵² En la frontera colombo-venezolana, existe un “cartel de la gasolina” que trae por contrabando la gasolina desde la hermana Venezuela, ya que su precio es cuatro veces menor que la colombiana. Ese cártel fue creado por el Bloque Para “Catatumbo” en el Departamento del Norte

extiende a todos los contratos e intercambios que allí se realizan. Al quedar todo cubierto con el manto de la ilegalidad, el estado renuncia a ser el garante de las interacciones entre los habitantes. Los derechos de propiedad, los contratos, los intercambios quedan en el limbo. Sin ellos, sin embargo no puede haber vida social. Es apenas natural que un nuevo tipo de orden primitivo surja en esas condiciones²⁵³. En ese sentido, ¿qué tipo de vínculo social se genera en una población que se encuentra en contacto con un grupo armado? Al no estar presente ese monopolio estatal de la fuerza física en Colombia, la violencia de los actores armados no estatales se incrementa cuando el poder del Estado disminuye.

La legitimidad varía entre grupos sociales, lo que dificulta la aplicación legislativa, como las leyes sobre control de precios, lavado de ingresos y capital. Lo que es legítimo dentro de un grupo no lo es dentro de otro. Por ejemplo, lo que es legítimo para la guerrilla es muy distinto de lo que es legítimo para la Junta de acción comunal en el casco urbano del municipio. Las diferencias entre legitimidad en diferentes regiones del país son claras, pero también puede haber diferencias grandes dentro de zonas pequeñas. En estas circunstancias la legislación sobre temas económicos frecuentemente es vista como una imposición de los grupos más poderosos, atacando frecuentemente los valores culturales e intereses económicos de grupos pequeños o débiles. Por lo tanto, no es sorprendente que las diferencias en lo que es o no legítimo generen conflictos²⁵⁴. (Thoumi, 1995: 27-28)

Aunque diversos analistas señalen esas coincidencias entre las Farc y los paramilitares (búsqueda de un control local, presión sobre presupuestos públicos, “reemplazan” al Estado en el orden social y el reflejo de este proceso es que implantan códigos de conducta o “justicias paraestatales”, etc), por otro lado autores como Alfredo Rangel considera que aún cuando no puede decirse que en la base del enfrentamiento entre las

de Santander, cuya capital es Cúcuta.

²⁵³ Siguiendo a Salazar y Castillo (2001, 43): “No es difícil ver que el desarrollo de las FARC en la última década, y los cambios estratégicos adoptados por el ELN, apuntan en forma clara hacia la creación de núcleos o embriones de Estados primitivos en aquellos territorios en los que su influencia, poder de fuego y cumplimiento de funciones propias del Estado (justicia, seguridad, orden) así lo permiten. En el centro de esa estrategia de constitución de Estados primitivos esta la capacidad que tienen como organizaciones militares de mantener algún grado de monopolio de la violencia en los territorios bajo su control. Ese monopolio, sin embargo esta abierto a permanente disputa por la acción y avance de la estrategia de terror de las organizaciones paramilitares y por la presión que puedan mantener las Fuerzas Armadas regulares.”

²⁵⁴ Por ejemplo, en los EEUU el gobierno tiene un problema de legitimidad en los guetos urbanos, mientras que en Colombia lo mismo ocurre en las zonas rurales del sur y suroccidente (guerrilleras). En ambos casos estos problemas están relacionados con las actividades relacionadas con las drogas ilegales, pero las trascienden.

guerrillas y los grupos paramilitares existan proyectos, visiones o modelos distintos de desarrollo rural -el de las guerrillas basado en la pequeña propiedad campesina y el de los paramilitares sustentado en la gran propiedad terrateniente-, “*sí se puede afirmar que existe una lucha por la propiedad de la tierra y el control de territorios que tiene móviles y propósitos diferentes. Para la guerrilla el control territorial es funcional y coadyuva a su proyecto de expansión político – militar, mientras que la propiedad de la tierra es un tema de su plataforma política que debe ser resuelto por medio de una reforma agraria. Para los paramilitares el control de territorios va muy ligado a su voracidad para hacerse lo más pronto posible a la propiedad de la tierra: el primero cumple propósitos contrainsurgentes y de seguridad personal, la segunda es una vía de acumulación y blanqueo de capitales particulares adquiridos por medios ilícitos y violentos.*” (Rangel: 2005: 67)

Siguiendo con esa idea cabe preguntarse ¿Cuáles son los efectos que producen la mentalidad guerrera y el recurso privado a la violencia en el tejido de la sociedad, en sus niveles local, regional y nacional? ¿Cuáles son los efectos de una justificación de la violencia sobre la cohesión social de las poblaciones? ¿Qué concepción de lo público y de lo privado manejan estos promotores de la violencia privada? ¿Cómo se concibe la participación del Estado y de la sociedad en el manejo de los conflictos?

Creemos que el fondo del problema es la relación público/privado. En primer lugar, hay que plantear que el variado espectro de las diversas violencias urbanas y rurales, de cualquier dimensión que sean y cualquiera sea su contexto, tiene un sentido político: toda violencia supone una concepción y un ejercicio del poder en distintos niveles, lo mismo que una concepción del Estado y de la subyacente relación entre los ámbitos público y privado de la vida. Así, todos los fenómenos diferenciados de violencia tienen un referente político común, pues implica la no aceptación del Estado como un espacio público para la resolución de los conflictos. Más aún, evidencian que el límite entre lo público y lo privado es sumamente difuso. Sin embargo, es pertinente señalar o enfatizar enérgicamente que el Estado es el primero que funde lo público y lo privado al organizar grupos o escuadrones de la muerte, es decir, al acudir a formas de justicia privada.

La responsabilidad del Estado en esta situación es ineludible, pues el paramilitarismo ha sido un fenómeno político y social creado desde los entes gubernamentales y élites empresariales, fenómeno que literalmente se les fue de las manos a estos últimos, pues los paramilitares se han convertido en el “Frankenstein” político más complejo. El escándalo de la “parapolítica” del 2007 refleja esta compleja situación: chantajes de los

paramilitares (AUC) al gobierno Uribe, como si les estuvieran diciendo a éste y a los empresarios, élites dirigentes, ganaderos, jefes de la Iglesia Católica²⁵⁵, es decir, a todos aquellos que los “crearon” y legitimaron: “si nos extraditan, cantamos todo y así mismo nos hundimos y jodemos todos juntos”²⁵⁶.

De igual manera, los escuadrones de la muerte que pululan en las ciudades colombianas, a través de la trágica “limpieza social” (asesinato de mendigos, indigentes, drogadictos, etcétera, denominados tenebrosamente por los colombianos como “desechables”) es un asunto exclusivamente estatal en complicidad con amplios sectores del comercio en las urbes (y zonas rurales también) que buscan ofrecer una “imagen adecuada” al turismo internacional. Algunos llegan a justificar estos procedimientos ilegales en términos hobbesianos, es decir, el recurso a la violencia privada, por la supuesta incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo que devolvería a éstos el recurso a la violencia a la que habían renunciado en el pacto originario del Estado.

Para autores como Pécaut, la violencia en Colombia no tiene que ver con los excesos de un Estado omnipresente y todopoderoso sino, más bien, con los espacios vacíos que deja el Estado en la sociedad. Afirmación discutible y refutable la de Pécaut, pues aunque no hemos tenido en Colombia Juntas Militares represoras y genocidas como las que sufrió entre 1976 a 1983 la sociedad argentina, o las que se presentaron con los gobiernos fascistas y represores de Pinochet (Chile), Stroerness (Paraguay) o Alvarez (Uruguay), la democracia colombiana es “formal” pero limitada, cabe decir, una democracia restringida. El periodo del “Frente Nacional” así lo atestigua, pues desde 1954 a 1978, el partido liberal y conservador se “turnaron” literalmente el poder, dado que el pacto de dicho “Frente”. Y en su “larga” y supuestamente “ejemplar” vida democrática, se han miles de masacres, desapariciones y “excesos” en el uso de la fuerza. Y en ella el Estado es claro responsable, por acción u omisión.

Sumado a lo anterior, es el hecho de que la clase política y empresarial colombiana siempre se “jactó” de constituir una “democracia” con una larga continuidad de procesos electorales y supuesto “apego” a las reglas de juego constitucional. Lo cierto es que más

²⁵⁵ La posición de la alta jerarquía de la Iglesia Católica en Medellín y Cali, así como en zonas de la Costa Atlántica (Montería, Valledupar, Barranquilla, Cartagena, el departamento de Magdalena, etc) y los Santanderes, entre otros lugares, es de completa y absoluta permisividad y complicidad con las masacres paramilitares, de anuencia y legitimación de estos, de señalamientos y estigmatización de grupos de izquierda y defensores de Derechos Humanos. En ningún momento tales jefes pueden “lavarse las manos” como Poncio Pilatos, pues aunque no han apretado los gatillos, sí los han promovido.

²⁵⁶ Ver al respecto en la sección “Anexos”, reportajes y crónicas periodísticas reunidas durante el trabajo de campo. (marzo-agosto 2006)

de esa fachada (hipócrita de parte de sus élites), se escondió “la basura debajo de la alfombra”: el Estado colombiano sí ha sido un actor promotor de la violencia, al fomentar y/o aliarse con grupos de ultraderecha que, como el paramilitarismo y los carteles de las drogas, no sólo han provocado un caos social permanente, sino que además se han apropiado por la fuerza- apoyados por ese terrorismo de Estado siempre presente- de cuatro millones de hectáreas que pertenecían a más de tres millones de campesinos en las tres últimas décadas, de los que dos millones (¡ los sobrevivientes !) huyeron desplazados por los paramilitares y engrosan desde principios de los años noventa del siglo XX, los anillos de pobreza y marginalidad en los cinturones de pobreza en las periferias y márgenes de las medianas y grandes ciudades colombianas.

Para finalizar, el comentario de don Ruperto es elocuente. A pesar de tanta violencia y guerras que se entremezclan para todos, la esperanza deja un margen para el “consuelo”: *Cómo será este país de maravilloso, que hay guerra y muerte y sin embargo vivimos.....póngale cuidado a lo que le estoy diciendo pues*”. Así como las memorias sociales de los pobladores son fragmentadas, podríamos decir que la de los actores armados también lo es, constituyendo una especie de memoria-mosaico polifónica, donde todos hablan pero ninguno se escucha (a modo de diálogo de sordos). Fragmentación del poder (no un monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, sino un oligopolio), que obedece no solamente a lógicas de búsqueda desenfrenada del poder, así como también dinámicas de la rebeldía insurgente que histórica y tradicionalmente ha operado en Colombia (resistencia a la autoridad). Ello se refleja en diversidad de grupos guerrilleros²⁵⁷, de negociaciones, de expectativas, de temporalidades, de memorias.

²⁵⁷ Tal como desde sus orígenes se identificaron a sí mismos: Quintín Lame (indígena), Epl (línea china Maoísta), Eln (Castrista guevarista), Farc (marxista leninista), M-19 (nacionalista popular), por nombrar solamente cinco de las más grandes y conocidas.

Una puerta entreabierta: Siete consideraciones finales para dar cuenta del mundo social colombiano

¿Qué está diciendo la sociedad del centro y norte del Valle del Cauca sobre ella misma en esa interacción cotidiana con actores armados en la que hay tanto subordinación, como complicidad e intereses? ¿Cómo entender entonces la relación violencia y orden social en esta región que se intentó observar con lupa a lo largo del estudio? ¿Qué pasa en una sociedad como ésta en el aspecto simbólico cuando hay exceso de muerte, duelos inconclusos y exceso de ritos funerarios? ¿Cómo hablar de la muerte violenta, el amedentramiento permanente, la sumisión y el acto criminal “ejemplarizante” en la calle, de todos estos escenarios, sin caer en un manejo frágil o torpe de ello? Es decir, ¿Es posible dar cuenta de estas realidades sin perder de vista un análisis fino que posibilite comprenderlas? Contar dicha realidad, narrándola, no puede pretenderse ocultando la muerte, negándola o disfrazándola, sino desenmascarándola.

Inicialmente, cabe decir que tanto el poder del narcotráfico como el de las guerrillas y grupos paramilitares, es decir, del signo que sea, se insertan en la tradición de la fragmentación del poder y de la precariedad del Estado, propios de una sociedad que no ha logrado construir un espacio público para la resolución de sus conflictos. Bien vale volver a una pregunta recurrente a lo largo de este estudio: ¿Cuáles son los efectos que produce la mentalidad guerrerrista y el recurso privado a la violencia en el tejido de una sociedad como la que aquí se ha presentado, en su nivel local y regional?

Para dar cuenta de dicho interrogante, vale señalar que a lo largo del estudio, así como del material empírico que lo soporta, hemos podido constatar que los modos y tipos de interacción que llevan a cabo los pobladores en su coexistencia cotidiana con el miedo, la coerción de los guerreros y la necesaria inercia de seguir adelante con sus trayectos biográficos, constituyen un mundo social particularmente frágil, pero cierto: ahí están sus recetas y acervos de conocimientos, sus rutinas y narraciones, sus espacios y prácticas sociales, sus expectativas de futuro y proyecciones de vida, sus motivaciones e incentivos. En ningún momento pasivos, se trata en suma de actores y actrices que desde sus diversos roles en el escenario- protagonistas, coprotagonistas, actores de reparto, maquilladores (lobos vestidos de ovejas así como camaleones)- transitan con relativa suficiencia entre la tensión y la interacción de sus cornisas biográficas-corales.

A partir de observar los haceres (prácticas sociales) del día a día de pobladores, enmarcados en códigos de conducta o “justicias paraestatales” por una parte, así como

las estrategias de sobrevivencia- a modo de acervos de conocimiento nos diría Schutz- por la otra, se comprenden analíticamente la construcción significativa de sus mundos sociales. En ese ambiente paranoico de persecuciones y fantasmas por doquier, cada sujeto identifica a los “leales”, “relativamente leales” y los que en un principio son los “otros”. Es decir, los posicionamientos de cada sujeto responden a sus experiencias y conocimiento del terreno que vivencian, como espacio de recreación permanente del vínculo social al cual pertenecen. En ese contexto, la violencia y el conflicto se constituyen en medios de socialización y de formación de relaciones y ordenes sociales.

La evidencia empírica que a lo largo del estudio se ha presentado (especialmente en los capítulos 3, 4 y 5) indican dos tendencias: una tribalización de la violencia pero también una trivialización de ésta. Además, dicho material empírico también desnuda la debilidad de las premisas de ONGS e investigadores de Derechos Humanos que reducen el conflicto a la dicotomía de víctimas-victimarios. El mundo social aquí observado desbordó por mucho ese parecer de dichas organizaciones, pues las responsabilidades, complicidades y actividades/pasividades se mezclan y difuminan.

Con el objeto de sistematizar el análisis de los resultados más sobresalientes de la investigación, en esta fase final presentaremos siete consideraciones o conclusiones que den cuenta de la dinámica de la interacción presente en el estudio.

Una *primera conclusión*: la comprensión relacional y dinámica de este conflicto armado colombiano, no puede reducirse exclusivamente a la ausencia de un diseño institucional, ni tampoco se ubica plenamente en la responsabilidad o “culpabilidad” de un actor determinado, sino que se juega en un conjunto de prácticas, escenarios y regulaciones de los órdenes político-culturales y económico-sociales. De salida de la puerta y de los pasillos o corredores que hemos transitado tanto el autor, como el director-copiloto, lectores, evaluadores, curiosos y voyeuristas, pertinente resulta remarcar que la violencia en el Valle del Cauca está relacionada con la imposibilidad de consolidar la concepción de un orden social unificado. La imagen misma de la nación colombiana como “unificada” sigue siendo muy precaria. En igual situación se encuentra lo regional, pues detrás del telón colombiano se ha descubierto que hay más territorio que nación y más nación que Estado.

Una *segunda conclusión*: los grupos armados ilegales que hemos presentado en la interacción con los pobladores son básicamente idénticos. Ni la guerrilla ni los paramilitares han sido capaces de crear la división nosotros-ellos que caracteriza a

muchas de las guerras civiles. Típicamente la guerrilla y los paramilitares establecen su control a través del reclutamiento y el amedrentamiento de poblaciones, que tratan de adaptarse y sobrevivir sea cual sea la sigla del ejército ilegal que domina la escena. La violencia ejercida por los guerreros constituye un orden social, reflejando así la interrelación entre el tipo de violencia aplicada por un actor dado y el tipo de orden fáctico (y predominio militar) que este constituye.

La Violencia está relacionada con el hecho de que tanto lo social como lo político tienden a ser descifrados bajo el signo de la dialéctica “amigo-enemigo”, según los términos de Carl Schmitt. Ello significa enfrentamiento con un enemigo del cual nada se puede decir salvo que él es el otro, un obstáculo para mis fines y que es suficiente para definir su naturaleza el hecho mismo de su existencia, y en un sentido particularmente fuerte, ese ser otro, de tal modo que en los bordes del abismo los conflictos que tengo con él/ellos no pueden resolverse a partir de un conjunto de normas de convivencia establecidas. De ahí que –vale decir, una tercera conclusión - los estatutos de población civil y del no combatiente tan difíciles de preservar en cualquier conflicto armado están, por tanto, muy amenazados en una contienda como la colombiana en la que los objetivos estratégicos de la guerra quedan confinados dentro de unos escenarios territoriales y unos intereses particulares tan estrechos, que el poder local termina convertido en botín y objetivo autosuficiente de lucha.

Las organizaciones armadas que observamos a lo largo de toda la escenografía municipal en el presente trabajo, imponen el cumplimiento de contratos y supervisan- de manera sumaria y violenta- los intercambios y relaciones entre los individuos. ¿Nos devolvemos a Hobbes acaso? Tal vez nos estemos regresando al estado de naturaleza ¿o tal vez podemos ser exagerados al decir que nunca salimos de él?²⁵⁸

²⁵⁸ Recordemos aquí que lo que está en el centro de la argumentación de Hobbes no es la ausencia de un soberano o de un Estado absoluto. Tampoco es la predilección de los hombres por el estado de guerra de todos contra todos (Salazar y Castillo: 2004: 33). En realidad, el hombre hobbesiano, si no estuviera obligado por las condiciones estratégicas de la situación, preferiría un estado de paz en el que pudiera mejorar su bienestar económico y su reputación. ¿Qué es, entonces, lo que justifica la existencia de un estado de naturaleza? El conocimiento que tienen los hombres de su situación estratégica. Si cada individuo sabe que los demás individuos saben que su supervivencia depende de anticipar las acciones “defensivas” de los otros, el resultado será un estado de guerra de todos contra todos“. Por tanto, el estado de naturaleza hobbesiano no es el resultado de la ignorancia o de la brutalidad de los hombres, ni de su preferencia atávica por la violencia y la agresión. Ya que cada uno sabe que los otros son como él, sabe también que la única forma de sobrevivir es “adelantarse” a los demás, golpear primero, hacerse más fuerte, concentrar mas recursos enviar a los otros (antes que lo hagan con él) a pertenecer al montón de muertos (Canetti, 1973) que es el verdadero objetivo de la guerra. “ (Cfr Salazar y Castillo: 2004: 34)

Una idea común atravesó y atraviesa esta (y otras) investigaciones: Los principales factores contingentes del conflicto desde los años ochenta provienen del narcotráfico. Eso ya es un lugar común que permanentemente se ha señalado aquí y en otros estudios. Pero el elemento más perturbador de la nueva violencia “narco” ha sido la expansión de los ejércitos privados antiguerrilla y la anómica paramilitarización de la guerra. La tentación de la violencia por efecto de la pérdida de poder que enunciaba Hannah Arendt es, pues, aplicable a la escenografía colombiana.

Una cuarta conclusión fuerte: las violencias crean las relaciones sociales municipales y regionales, es decir, la violencia entendida como relación social configura el escenario municipal y ordena el mundo cotidiano. Eso sonaría a obviedad porque “estamos” en guerra. Pero “atenti”: los que no están armados, es decir, los pobladores, así se hagan los ciegos, sordos y mudos, no son actores pasivos, ni siquiera en un sentido moral. Las relaciones sociales municipales han creado posiciones, roles, etcétera, lo cual nos lleva a enfatizar que los actores no armados siempre son activos. Hay un compromiso con las relaciones marcadas por la violencia, ya sea por acción (comprometidos por interés o simpatía) o por omisión (ciegos, sordos y mudos).

En el mundo social de la región colombiana estudiada encontramos retóricas colectivas de fuerte arraigo- como: “hay que ser rico y hay que ser peligroso”, “hecha la ley hecha la trampa”- que resultan frases dominantes, mientras que, en la otra orilla, es decir, mantenerse dentro de las normas (y, sobre todo, actuar críticamente dentro de ellas) tiene costos muy altos. En esa dinámica, los actores armados, cada cual a su modo, intentan institucionalizar el orden social. Sin embargo, los órdenes sociales son contingentes, frágiles, inciertos como los propios predomios militares territoriales. Nótese que si el predominio es limitadamente “militarizado”, entonces se asemeja a un barco frágil de papel, presentando ya otra cara: simple y llanamente represión y uso de la fuerza.

El juego de relaciones entre procesos de legitimación y procesos de coacción, entre adhesión y terror, se ha ido resolviendo a favor del terror organizado como único medio de consolidar dominios territoriales, en una dinámica que podríamos llamar de tribalización de la violencia. Desde 1998 hasta el 2003, en Colombia murieron más personas por año que en la conflictiva Yugoslavia, siendo sólo comparable con Sierra

Leona, Burundi, Ruanda y Angola. En una sociedad como la colombiana, donde el conflicto se prolonga, se extiende y se profundiza afectando las más variadas esferas de la vida social, resulta paradójico hablar de ciudadanía. No obstante, la reacción institucional frente al conflicto tampoco favorece la vindicación de la ciudadanía. En su afán por imponer el orden, el Estado se llena de argumentos para desvirtuar las bases del conflicto, para reducir su naturaleza estructural y para encaminarlo a la salida exclusivamente policiva-represiva, judicial y militar.

En la *quinta conclusión* nos aproximamos a descifrar a los colombianos: lo que este estudio develó fue un mundo fragmentado y atomizado de sujetos que por gracia legal son ciudadanos. Sectores medios y subalternos de la sociedad colombiana han luchado desde la oposición/insurgencia guerrillera o desde la narcotización/bandolerización paramilitar. Es como si nos resistiéramos a la autoridad, la desconocemos, matamos al padre (Estado) o lo enfrentamos permanentemente en nuestra historia nacional, pues es como si no tuviera para nosotros ninguna autoridad para ordenarnos socialmente. Y mientras no se puedan “descifrar” a nuestros criminales y sus cómplices, así como a los que se hacen los CSM, entonces el conflicto no avanzará hacia una posible solución, entiéndase, hacia un deseado proceso de paz.

A las dificultades e imposibilidades de identidad étnica, racial, cultural y geográfica que presenta este país²⁵⁹, se suma el tener como destino el estar llegando a la decadencia sin haber conocido la madurez. Con unas élites o clases dirigentes divorciadas de un propósito nacional, la sociedad colombiana no vive las obligaciones y los deberes inherentes al modelo democrático, porque sus sentidos democráticos— la vista, la escucha, el olfato— ya están atrofiados. En suma, en este trabajo se intentó pensar y reflexionar la violencia como un campo conflictivo de significaciones e interpretaciones.

Los significados de la violencia no son homogéneos, sino contradictorios (y relativos en un sentido amplio). Al estar inserta en estrategias de poder, la violencia es utilizada estratégicamente. Lo que encontramos entonces tras bambalinas, es la negación de la otredad y la alteridad, así como arbitrariedad y discrecionalidad en la justificación de la aplicación de la violencia. Bueno, confesémosnos, ni tan bambalinas.

¿Cuáles son los *discursos* y *significados* de la violencia, entendida como problema en una dimensión cultural, más específicamente en el ámbito de los significados sociales

²⁵⁹ Con ello no se quiere afirmar que la heterogeneidad sea el factor generador de conflicto, pues en toda América Latina se presenta esta situación y sin embargo las otras naciones no sufren los embates de la guerra como si sucede en Colombia.

que adquiere esta práctica? Abordar, pensar y discutir la violencia, implica problematizar y complejizar la cuestión del poder, entendiendo a la violencia en términos de proceso social, cuya dinámica se ve atravesada por relaciones de poder históricamente determinadas. Como bien afirma Foucault, en la aplicación de la violencia, las diversas estrategias y mecanismos del poder se ocultan en relaciones de dominación, entendidas como prácticas insertas en las mismas raíces del tejido social, actuando por medio de la regulación de los aspectos privados de nuestros trayectos biográficos, constituyéndonos como sujetos.

Sostener el carácter social de la violencia implica alejarse de los argumentos psicologicistas y que ponen las causas y los efectos de la violencia en los sujetos individuales. Los colombianos no son “violentos” ni propensos a ser violentos, por lo que se requiere abandonar su comprensión como si se tratase de un fenómeno natural, es decir, negar que los colombianos “somos violentos por naturaleza”. La violencia no es un proceso ligado a una natural disposición del colombiano hacia la violencia, pues esta ha sido producida en nuestra sociedad en un contexto histórico y cultural específico (‘por no decir sui géneris). Entender la violencia como una producción humana, una forma de relacionarnos que es producida por todos en nuestra vida cotidiana permite pensar en que puede ser revertida. Pero esta posibilidad conlleva el asumir radicalmente el carácter construido de dicho fenómeno, lo que implicaría (entre otras cosas), que no existe ninguna esencia natural que esté a su base.

En la región estudiada predomina la creencia de que la sociedad está compuesta por una mayoría de bribones que se rebuscan lo suyo y se desinteresan de los demás. De ahí que la guerra sea un “trabajo” como cualquiera. Lo que ya Mockus había señalado como la “enfermedad colombiana”, es decir, la configuración de un ambiente social dominado por la ley del más fuerte, del más vivo, del más astuto, un reino natural hobbesiano. Por ello, el que critica o se atreve a subvertir el orden social de los guerreros, muere en el intento. Vale aquí recurrir al “humor negro” de uno de los entrevistados *“Héroe es el huevón (sic) que no se calló, criticó y no alcanzó a huir”*, chiste de mal gusto que refleja en sí el atrofiamiento de los sentidos de la vida democrática ausentes en la zona estudiada, es decir, seres que han normalizado el uso de la violencia para zanjar sus diferencias.

De este modo, los colombianos hemos renunciado a construir juntos la nación. Emerge reiteradamente la cuestión de la fragilidad de la “simbólica” nacional, la cual no es ajena a la desconfianza respecto al Estado. Este sentimiento se encuentra casi en todas partes

en América Latina durante el siglo XX, porque el Estado parece tener una mera existencia abstracta con relación a los *municipios* y a las provincias y porque los fundamentos de su legitimidad son inciertos. Sin embargo, en el caso colombiano, esta desconfianza se ha prolongado y hasta una gran parte de las élites comparte con los sectores medios y populares ese sentimiento de desconfianza respecto al Estado.

La guerra no sólo es rentable sino compatible con un estilo de vida, es decir, crea estructuras de oportunidad de tipo local. Cuando una sociedad como ésta se acerca a situaciones límite y a quiebres catastróficos de, por ejemplo, el aparato de justicia, se piensa de inmediato en expresiones como desinstitucionalización, crisis, ingobernabilidad, etc. Imaginamos dicha sociedad en la que un número significativo de integrantes escoja la opción de no disponer de un árbitro porque los que tienen a su disposición no satisfacen sus intereses. De ahí entonces llegamos a la *sexta conclusión*: el entorno social del municipio, corregimientos y veredas estudiados aquí es turbulento como fenómeno cognitivo definido por la intensidad de los parámetros de incertidumbre. La única manera de sobrevivir en estas condiciones extremas es la adaptación de una estrategia que ha demostrado ser eficiente: bajar la cabeza, no interrumpir al guerrero, no “hablar de más”, no opinar, es decir, hacer uso de ese triple “seguro de vida” que reiteradamente se ha señalado a lo largo de este estudio: hacerse el “sordo, mudo y ciego”. En esas circunstancias, se corroen las redes de confianza y solidaridad. Las formas de justicia paraestatales reflejan las antinomias a la prevalencia del derecho en Colombia, y las contradicciones y complementaridades entre lo legal y lo ilegal, lo oficial y lo no oficial, lo violento y lo pacífico.

Lo de violencia y democracia en ese peculiar país es, en fin, la relación de dos fenómenos que se explican entre sí. La violencia colombiana no es ajena a la democracia colombiana, puesto que esta ha estado inhabilitada históricamente para asimilar la novedad y la diferencia de otras fuerzas sociales y políticas (entiéndase organizaciones de la izquierda colombiana condenadas al ostracismo). Es una democracia con un déficit de representación largamente acumulado. Y es una violencia que se genera y reproduce en unas condiciones que la sustentan. La Violencia llega a convertirse en la esencia de las relaciones sociales y del campo político y a ser percibida como tal, pues no es solamente un conjunto de hechos; es también la manera como se concibe lo social y lo político. Esta sería nuestra *séptima y última conclusión*.

La duración del conflicto tiene un efecto importante sobre las posibilidades futuras de una reinserción exitosa y duradera. Independientemente de las condiciones jurídicas, políticas

y socio-económicas en que se dé una posible reinserción de miles de combatientes, un conflicto corto tiene un menor impacto sobre el tejido social, sobre el régimen político y sobre el Estado mismo, que un conflicto largo. Por el contrario, los conflictos largos como el colombiano tienden a degradarse y a producir heridas irreparables en la sociedad; por eso las medidas tendientes al perdón y la reconciliación tienden a ser a la vez más drásticas y menos susceptibles de ser aceptadas por todos los actores del conflicto (véase por ejemplo la controversia en torno a las amnistías y las comisiones de la verdad tanto en El Salvador como en Guatemala).

En cuanto al Estado, los conflictos largos tienden a deteriorar aún más aquellos aparatos claves para la construcción de la paz y la consolidación democrática (como el ya deslegitimado de la justicia, por ejemplo). De tal manera que, independientemente de las demás condiciones, la *larga duración* (43 años en esta última guerra) debe ser contada en sí misma como una de las características que nos permiten comprender el conflicto colombiano. Nada hace pensar que las cosas vayan a cambiar en los próximos años. Estos colombianos observados actúan jurídica y políticamente de acuerdo a un predominio de lo particular sobre lo general, cultivando así el círculo vicioso de nuestra fragilidad pública y la instrumentalización de la vida social.

Ante una Colombia en el ojo del huracán o en el medio del laberinto latinoamericano, la coexistencia de varias modalidades de violencia, que se solapan regularmente de modo indiferenciado, es un desafío para la investigación en Ciencias Sociales. Los estudios van siempre rezagados detrás del desarrollo violento de nuestra sociedad. Aunque abundan en Colombia los relatos, crónicas y “memorias” de las guerras civiles del siglo XIX, así como análisis de las orientaciones estratégicas de los actores armados a la luz de la emergencia del narcotráfico como “combustible de la guerra” en el XX, se carece todavía de visiones de conjunto que nos permitan caracterizar la dinámica actual entre guerra y sociedad, es decir, que hagan viable una sociología del conflicto armado.

Hace unos años, Jorge Orlando Melo se quejaba de que en Colombia no contamos aún con buenos estudios sobre el proceso de significaciones culturales en el contexto del conflicto armado. Este estudio intenta aportar un grano de arena en ese camino sin saber aún si podrá cumplir su cometido. Sólo la persistencia y la tozudez de estudios de largo aliento, pueden intentar dar cuenta de estos vacíos que Melo señaló en alguna oportunidad. Y por ello traeré a colación aquí un fragmento del discurso que pronunció Norbert Elías cuando le entregaron el premio “Theodor Adorno”: *El trabajo dentro de la sociología y la historia es una carrera de relevos; uno toma la antorcha de manos de otras generaciones, la lleva solo un momento en la carrera y se la entrega a otra*

generación, que sigue corriendo sin voltear al pasado. El trabajo de las otras generaciones pasadas no se destruye, sino que es la condición de nuestra propia posibilidad, y las por venir". Es preciso entonces tomar con pinzas las condiciones de un estudio limitado como el que aquí se ha presentado. Es delicado trabajar con lo regional como un asunto puntual, es decir, como un estudio de caso que no permite generalizar y que tiene sus propias limitaciones. El peligro esencial del tema demasiado limitado es la parte importante de subjetividad que entra en el aprovechamiento de la documentación. Para mostrar el carácter típico de un caso tratado en una tesis, se arriesga hacerle decir mucho más de lo que se debería. Espero que ello se haya subsanado.

Por eso, tras el largo camino aquí recorrido, estoy convencido que en Colombia necesitamos cada vez más una gran sofisticación teórica y fuerte vigilancia epistemológica para entender el fenómeno de la violencia (y con ello, un esfuerzo de imaginación sociológica insoslayable), pero también -en nuestro rol de científicos sociales- es pertinente plantear una posición política firme (léase crítica) para no caer en las ambigüedades (trampas) que nos tiende un gobierno como el de Uribe, que simula jugar al "juego democrático" mientras debajo de la mesa reparte los naipes de la impunidad jurídica-política y la represión militar.

Finalmente, así como existen seres que viven -o no- las historias que leen, también los hay quienes "leen" -o no- sus historias de vida. Los colombianos se (nos) están (estamos) pareciendo al segundo grupo, pero en el sentido de no "leer" adecuadamente su (nuestra) propia historia, pues esta se ha repetido a lo largo de dos siglos de violencia, criminalidad y desborde de los mínimos sentidos de la cordura. Cuando un observador desprevenido piensa en Colombia, se le viene a la mente un cuadro complejo de conflictos entre diversos actores, una sociedad resquebrajada por una cruenta y larga guerra y, además, una sensación de zozobra por lo que se considera una situación de ingobernabilidad. Estos imaginarios que se construyen afuera están cargados de significados no muy lejanos a la realidad que se produce adentro, aunque las élites sigan insistiendo en mostrar a otras sociedades la "cara amable" de nuestro hogar enviando el polvo por debajo de la alfombra, especialmente cuando se trata de atraer inversiones o promover el turismo a las zonas de maquillaje (léase la costa caribeña colombiana).

No se buscó con este trabajo una mirada compasiva a nuestra realidad: no se pretende ubicarse por encima de los cuestionamientos a las acciones de pobladores atravesados por intereses diversos, ni juzgar por qué hacen lo que hacen, sino tan sólo mostrar cómo

viven, interactúan, coexisten, se aprovechan, sacan partido, se cambian de bando, subsisten o resisten. Aunque suene a exageración o exabrupto, la mayor parte de los pobladores en el escenario estudiado no tienen conciencia de futuro. Tal vez podría uno aventurarse a creer que les da miedo patear con fuerza y dirección “el tablero” de su propio destino, como si los “dioses” les advirtieran, cada vez que lamentan o piensan sobre sus trayectos biográficos, que el destino no les perdonaría el despropósito de alterar sus rutinas. Una comprensión cabal de nuestra sociedad y de nuestro futuro-afirmó en alguna ocasión Gómez Buendía– tiene que dar cuenta a un mismo tiempo de nuestra vitalidad individual pero también nuestro fracaso colectivo. De ahí que este estudio puede servir para exponer desgarradoramente lo bajo que hemos caído (o que tal vez siempre hemos estado ahí). Ya es hora que el polvo de las apariencias que se pretende esconder debajo de la alfombra democrática formal, quede en evidencia ante la mirada impávida de las visitas, pero sobre todo ante los moradores de ese hogar nacional llamado República de Colombia.

Anexos

1. Glosario
2. Cuestionarios aplicados
3. Guías de observación diario de campo
4. Planeación y organigrama del trabajo de campo
5. Estado del arte de la investigación sobre el conflicto armado colombiano
6. Recortes de prensa (marzo-agosto de 2006)

1. Glosario (“colombianismos” y regionalismos, así como siglas de Instituciones)

Andar enfierrado: andar armado

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares)

Berrionda: difícil. Se dice de una situación difícil

Berraco (verraco): un hombre bravo, que no se amilana o “arruga” ante nada. Se dice también de una mujer “brava” que sale adelante por sí misma sin ayuda de nadie)

Boleteo: Presión que se refleja en la “obligación” por parte de diversos sectores de la sociedad (especialmente zonas rurales) de pagar una cuota mensual a los actores armados (equivalente a lo que popularmente se denomina como “vacunas”)

Corregimiento: División administrativa en Colombia. Mayor en tamaño y población que una vereda y menor que un municipio. Todo corregimiento pertenece a la zona rural de un municipio.

Chulos: “Administradores” de las zonas de prostitución (que vienen a ser los propios paramilitares)

Darse: enfrentarse, acuchillarse, dispararse (por ejemplo “darse plomo”)

Drogones: consumidores de drogas perseguidos por los paramilitares y grupos de “limpieza social”

Farcos: pertenecientes a las Farc

Farc: Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (guerrilla marxista leninista)

Fedegan: Federación Nacional de Ganaderos de Colombia

Fierro: arma

Gamínes: Indigentes y mendigos

Gonorrea: mala persona o indeseable (dícese también de un asesino “enfermo” al que hay que “darle”)

JUCO: juventud Comunista colombiana

Los muchachos: Farcos (guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc)

Man: Hombre

Marcado: el que está señalado, es decir, a quien le espera una muerte segura

Muñeco (“el muñeco”): la víctima

Montarla, querer montarla: buscar dominar al otro/a

MOIR: Movimiento Obrero Revolucionario Internacional.

Quebrar: Matar (por ejemplo: “matar a un muñeco”)

Pailas: Estar de malas, o al que le tocó estar de “malas” por estar “marcado”

Paraco (o “para”): Paramilitar

Pararle bolas: prestar atención

Parcero: compañero y amigo de banda (tergiversado del portugués “parceiro”)

PCC: Partido comunista Colombiano

Pelotera: gresca, enfrentamiento

Plante: negocio, dinero para un negocio (por ejemplo, el plante para el cultivo de drogas ilícitas)

Sanandresitos: Zonas de vendedores, agrupados en pequeños “centros comerciales”. Estos vendedores hace dos décadas eran ambulantes. En dichos lugares, en principio y “apariencia” se vende mercancías bajo el control impositivo del Estado, pero también cientos de productos burlan los controles impositivos de la DIAN (Dirección Impuestos de la Aduana Nacional). También es un grito a voces que los sanandresitos son centros de lavados de dineros del narcotráfico. Adicionalmente, se venden ahí cientos de productos “piratas”, especialmente CD y DVD. Provee empleo a más de medio millón de personas en todas las ciudades del país. Su nombre hace referencia a la Isla de San Andrés en el caribe, la cual hace unas décadas era un lugar que se encontraba exento del pago de impuestos por parte del gobierno colombiano, con el objeto de incentivar la inversión nacional y extranjera en el sector servicio (turismo principalmente).

Sapo: Delator, traidor o informante del otro bando

Sardina: hace referencia a una adolescente (sardino si es un muchacho)

Traqueto: narcotraficante de poca monta (o un “nuevo rico” por el narcotráfico)

Tenga pa´que lleve: Frase de los victimarios a sus víctimas

Tombo: Policía

Pilas: Prestar atención (ejemplo: póngase las pilas)

UNIÓN PATRIÓTICA: Partido de izquierda que existió durante la década de los ochenta, considerado el brazo político de las FARC, conformado para ejercer una fuerte oposición política al gobierno, tras los avances del proceso de paz en 1983. En el transcurso de tan sólo cuatro años, más de cinco mil militantes fueron desaparecidos o aparecieron asesinados en las calles de las principales ciudades del país. Los líderes y dirigentes de las FARC y la UP fueron criticados por los sectores progresistas, por haber dejado “al descubierto” y en frágil situación a sus mejores cuadros. Una verdadera tragedia de nuestra historia. De ahí se deriva la resistencia y desconfianza de las FARC ante las exigencias de los voceros del gobierno para que “depongan” las armas, pedido realizado en los dos procesos (fallidos) de paz con los gobiernos anteriores.

Vaina: Esa cosa

Vicioso: consumidor de drogas.

Vereda: En el ordenamiento administrativo-territorial colombiano, equivale a un poblado pequeño, en el que habitan no más de 2 mil personas. Su configuración es rural, sus pobladores son campesinos y la propia vereda pertenece a un corregimiento. Todo corregimiento pertenece a la zona rural de un municipio (una vereda por lo tanto, es una zona más pequeña que un “corregimiento” y por lo tanto, de un municipio). En algunas circunstancias cuentan con todos los servicios públicos (alcantarillado, agua potable, luz eléctrica. Pero en muchas veredas de diversos departamentos del país, esto no se ha cumplido.

Vieja: Hace referencia a todas las mujeres, de todas las edades

Zona de tolerancia: zona de prostíbulos

2. Cuestionarios aplicados

a. Guión de entrevista zona urbana

Clave de "lectura": En la zona urbana dominan los paras y narcos

Nombre:

Edad:

Ocupación:

Lugar y fecha de la entrevista:

Percepciones sobre la violencia. Memoria de las guerras y la violencia

1. ¿Que me podría decir de la situación actual del país?
2. ¿Cuál es la causa de que estemos en guerra en Colombia? ¿Desde cuando se da esa situación? ¿Por qué creen que luchan los paras y guerrilleros?
3. Cuénteme algo de su vida. Dónde nació, cómo fue su infancia y si en ella o en su juventud tiene usted recuerdos del conflicto armado que lo afectara a usted o a su familia

Experiencias violentas vividas

4. ¿Cree usted que el municipio es seguro? ¿Qué consejos les daría usted a turistas que vinieran a visitar la región?
5. ¿Ha sufrido alguna situación de violencia en su municipio? Nos podría usted contar algo al respecto?
6. ¿Qué permiten o qué prohíben hacer los paramilitares y narcos?
7. ¿Ha tenido algún problema con los paras o narcos? ¿Alguna vez ha tenido que darles alguna explicación por algo que usted hizo?
8. ¿Qué hace usted para mantenerse al margen de los paras, guerrilleros o narcos?

Expectativas de futuro

9. ¿Cómo se imagina usted la vida en otros países?
10. ¿Cuáles son sus sueños y deseos para un futuro?

b- Guión de Entrevista zona rural

Clave de lectura: En la zona rural dominan los guerrilleros

Nombre:

Edad:

Ocupación:

Lugar y fecha de la entrevista:

Percepciones sobre la violencia. Memoria de las guerras y la violencia

1. ¿Que me podría decir de la situación actual del país? (política, económica)

2. ¿Cuál es la causa de que estemos en guerra en Colombia? ¿Desde cuando se da esa situación?
3. Cuénteme algo de su vida. Dónde nació, cómo fue su infancia y si en ella o en su juventud tiene usted recuerdos del conflicto armado que lo afectara a usted o a su familia

Espacios de interacción y orden social (para indagar en los códigos de conducta, justicias paraestales y control social)

4. ¿Qué lugares de la zona son las más usadas por la gente para encontrarse y compartir? ¿Cree usted que son lugares seguros?
5. ¿Podría usted contarme acerca de las formas de controlar el orden que lleva a cabo la guerrilla aquí?
6. ¿Ha tenido algún problema con los guerrilleros? ¿Alguna vez ha tenido que darles alguna explicación por algo que usted hizo?

Interacción cotidiana y violencia

7. ¿Ha sufrido alguna situación de violencia en su vereda o corregimiento? ¿Nos podría usted comentar algo al respecto?
8. ¿Cómo es la relación de la población con la guerrilla?

Expectativas de futuro

9. ¿Cómo se imagina usted la vida en otros países?
10. ¿Cuáles son sus sueños y deseos para un futuro?

3. –Guías de observación del diario de campo

De acuerdo a lo estipulado en el apartado metodológico se realizaron observaciones en los siguientes espacios:

1. Espacios centrales de encuentro cotidiano: Básicamente a) la plaza pública central en donde se hacen los intercambios de información, chismes y rumores del día a día: qué pasó en el municipio, qué hay de la vida de fulanito o sutanito, quién falleció, cuál es la última noticia que se conoce, etc adoptando así distintas formas; b) la plaza de mercado donde no solamente se compra y venden productos de la canasta familiar básica, sino también se intercambian opiniones sobre la vida de los pobladores.

2. Espacios paralelos de encuentro y ocasiones sociales: La relevancia de estos ámbitos de observación radica en que permite observar las interacciones en acciones que otorgan otra visibilidad a los actores: me refiero a las ceremonias religiosas, por una parte, o al consumo de alcohol y relaciones con mayor desinhibición (¿?) en bares y prostíbulos

Fue importante identificar y registrar situaciones (acciones y prácticas) que luego fueron complementadas en el análisis de las entrevistas.

Guía general de observación de actividades de interacción

1. Registrar día y hora de “encuentros” campesinos-guerrilleros y pobladores “urbanos”-paramilitares.
2. Descripción del lugar
 - a. Ubicación
 - b. Origen del “lugar” (calle, parque o plaza central, central de mercado, parroquia, etc.)
3. Registrar la regularidad de dichos encuentros (diaria, semanal) y el tipo de la misma
4. Describir el objetivo visible de la actividad
5. Descripción de la dinámica de las actividades
6. Descripción de interacciones
7. Registrar la “llegada” y “salida” de los participantes
8. Caracterizar el tipo de participante (soldado u oficial, jefe guerrillero o miliciano, edad aproximada, género, si es campesino o “poblador urbano”, etc)
9. Describir la dinámica de interacción
 - a. Subordinación
 - b. Cooperación o negociación
 - c. Resistencia
10. Describir la actitud de los pobladores en las interacciones (tranquilidad, nerviosismo, indiferencia, etc.)
11. Intentar “reseñar” conversaciones entre los participantes
12. Registrar las formas de “saludarse” o “evitarse” entre pobladores y guerreros
13. Observar la distribución espacial de los cuerpos (distancia, rigidez o flexibilidad corporal, etc)
14. Observar la dinámica del encuentro (cooperación-actividades individuales, consultas entre los interactuantes)
15. Identificar la existencia de rutinas
16. Identificar las situaciones extraordinarias y la forma de resolverlas (por ejemplo, peleas callejeras por provocación/alcoholismo de algún sujeto).

B- Guía de observación para la plaza principal (zona urbana)

Observar y describir las actividades diarias

1. Reuniones y asambleas convocadas por la alcaldía donde se definen actividades, cronogramas, responsabilidades, objetivos de ciertos planes de gobierno (especialmente porque se produjeron dos épocas electorales en la Colombia del 2006 que “introdujeron” un elemento adicional a lo cotidiano)
2. Respecto a lo anterior, qué tipo de actividades se realiza (propaganda política y de qué partido, difusión, negociación previa con las autoridades del Estado y con los paramilitares, interacción con otros grupos u organizaciones)
3. Describir los momentos del día
 - a. Cuándo se produce el mayor tránsito de personas.
 - b. Dónde se encuentra la gente (observar si esta se produce cerca a la catedral, a la estación de policía, a la alcaldía municipal, al bar central o al prostíbulo.....todos estos “lugares” están alrededor de la plaza principal)
 - c. Tiempo de tránsito e interacción: cuánto dura el trayecto, los actos, actividades, concentración o desconcentración de personas en reuniones informales, etc
 - d. Identificar y describir el “clima” (tensión, alegría, preocupación, miedo, distensión)

- e. Describir el componente (mujeres, niños, hombres, ancianos, jóvenes) ¿Se observan diferentes roles o conductas por individuos o grupos? ¿Quién habla y quién se calla?
 - f. Describir la sucesión de hechos y los grados de conocimiento en la puesta en práctica de las acciones
4. Describir los procesos de interacción de los pobladores con:
- a) Las fuerzas de seguridad estatal (policías)
 - b) Las figuras políticas o institucionales (alcalde, consejeros, sacerdote, maestros, etc)
 - c) Paramilitares
 - d) Otros transeúntes
 - e) El investigador

C- Guión de observación de actividades Parroquia central (encuentros sociales religiosos)

Aunque existen otros cultos religiosos (minoritarios y “subyugados”), se priorizó el católico (apostólico y romano), puesto que en apariencia formal, la mayoría se declara “católico”. Se observaron principalmente hasta cinco ceremonias religiosas (misas 5 a.m y 11 a.m de lunes a viernes.....sábados y domingos: 5 9 y 11 a.m, 5 p.m)

Observación de interacciones: misas, bautismos, primeras comuniones, matrimonios, misas especiales (por entierros).

Día
Lugar
Hora,
Motivo del encuentro: ordinario o especial

1. Describir quienes participan (cantidad de gente, edades, etc)
2. Describir el “ambiente”: tensión, festivo, rutinario, desgana, expectativa, miedo, etc.
3. Descripción detallada de la interacción
4. Registrar si entran o no actores armados (zona urbana: principalmente paramilitares....pero también sería pertinente si el investigador está en capacidad de identificar algún guerrillero “camuflado” situación más difícil de llevar a cabo). Si entran paras, guerrilleros, militares o narcos a la parroquia, observar si lo hacen con armas o no, si están “camuflados”. Describir la reacciones de los no armados ante la entrada y presencia de los armados
5. ¿Qué actitud toma el sacerdote? (se pone nervioso o sigue como si nada?)
6. ¿Cómo termina la sesión?
7. ¿Se dan reuniones informales paralelas (en los pasillos, a la salida en la calle)? Intentar escuchar y reseñar conversaciones informales

Guía de observación de plaza de mercado (sábados y domingos)

Nota: es un lugar clave y neurálgico de encuentro. Es tal vez un espacio único y privilegiado de interacción entre los campesinos y pobladores urbanos (los primeros porque “venden” directamente o a través de intermediarios y los segundos porque van a proveerse de alimentos para la semana).

Fecha
Lugar
Hora

1. Describir la zona, ¿es grande o pequeña? Brevemente ¿qué tipo de productos se venden?
2. Describir el aspecto del lugar y cantidad aproximada de personas
3. Identificar quiénes llegan y se van del mercado (si son actores armados o no)
4. Intentar escuchar y reseñar las conversaciones entre los actores
5. Observar los lugares de ubicación tanto de unos como de otros actores en la dinámica de la plaza de mercado
6. Observar los espacios que se establecen en la interacción entre los diferentes actores (distancias entre ellos, posiciones corporales, etc)
7. Observar si los actores armados “pagan” o cancelan” los productos que se llevan
8. identificar y diferenciar a los actores armados en la medida de lo posible (de qué bando son)



Guía de observación de bares y prostíbulos (8 p.m a 12 pm)

1. Describir quienes ingresan (cantidad de gente, edades, etc)
2. Describir el “ambiente” interno: festivo, rutinario, relajado, etc.
3. Descripción detallada de la interacción (“clientes” y mujeres en los locales)
4. Observar hasta donde sea posible la evolución de las interacciones (atravesadas por el consumo de alcohol)
5. Describir dicha evolución temporal
6. Observar y describir presencia y conducta de actores armados y no armados
7. Describir los tonos de voz de los “clientes” y los actores armados.
8. Describir las reacciones de los no armados ante la entrada y presencia de los armados
8. ¿Qué actitud toma el dueño del local? (bar o prostíbulo) (se pone nervioso o sigue sirviendo alcohol a los “clientes” como si nada?)
9. ¿Se presenta alguna confrontación verbal o corporal? ¿Quién interviene y cómo establece nuevamente el “orden”?
10. Escuchar y reseñar en la medida de lo posible conversaciones o fragmentos de ellas entre clientes, “guerreros” y mujeres
11. Observar y describir las reacciones frente al investigador como “extraño”

Guía de Análisis de Documentos

Nota aclaratoria: Se hace referencia a documentos entregados a la población (urbana o rural) por parte del Estado o los grupos ilegales (AUC, Farc o los narcos del cartel del Norte del Valle)

- a. Identificar qué tipo de documento (Panfleto, cartilla o, instructivo guerrillero o “para”, documento interno, formación, propaganda, etc.) le entregan los paramilitares, militares y guerrilleros a la población
- b. Quién lo firma. Identificar el interlocutor (organización o grupo armado que lo produce):
- c. Analizar el tipo de discurso contenido (informativo, aclaratorio, señalización, retórico, de exaltación, justificación, convocatoria, etc, igualmente si es conciliador o amenazador
- d. ¿Se nombran a “otros”? ¿En calidad de qué? (como “enemigos”, “aliados”, interlocutores, etc)
- e. ¿Se cita a líderes sindicales o alguien en particular?
- f. Identificar los lugares del habla. (El “nosotros” ¿quién lo dice?)

4. Planeación y organigrama del trabajo de campo

**Tabla 1. Guía de actividades durante la primera salida de campo
Marzo 20 –Abril 20 de 2006**

Objetivos

- Reconocimiento del terreno
- Obtención de confianza de pobladores
- Diseño de estrategias para informar sobre el estudio.

Requerimientos específicos de información

- Situaciones de violencia vividos.
- Percepciones de los pobladores sobre los guerreros.
- Tipos de conductas permitidas y castigadas.
- Percepción del pasado, presente y futuro.

Instrumentos

- Observación y registro en diarios de campo.
- Entrevistas con informantes claves.
- 10 entrevistas exploratorias para ir afinando el instrumento

**Tabla 2 Análisis cualitativo
(Observación – Entrevistas a profundidad)
Segunda etapa del trabajo de campo
Abril 21 – Julio 11 de 2006**

1- 35 Entrevistas a profundidad (Entrevistas a las personas contactadas gracias a los dos informantes claves).

-Seguimiento a entrevistados en visitas posteriores

2. Registro diario de observaciones

5. Estado del arte de la investigación sobre el conflicto armado colombiano

Los estudios sobre la violencia en el conflicto armado en Colombia se han orientado en diversas direcciones. En algunos casos, a encontrar la causa básica de la violencia en algún tipo de estructura global (económico, social, política, legal). Otros han buscado los orígenes de las violencias en los factores de orden cultural (“herencias” de identidades partidistas o herencia “social” en la resolución violenta de los conflictos). Otros han percibido la cuestión de manera distinta, considerando que no es posible dar una interpretación única al problema de la violencia. Si bien en algunos trabajos es posible observar alguna similitud en las interpretaciones, lo cierto es que en cada uno de ellos el énfasis está colocado en ciertas teorías explicativas de la violencia sin que ello quiera decir que con frecuencia compartan algunas interpretaciones que estén insertas en otras.

En aras de simplificar y delimitar el estado del arte de la investigación sobre la violencia en el conflicto armado colombiano, solamente señalaré en el siguiente párrafo una obra clásica de los años sesenta y setenta y a continuación en las siguientes páginas enfocaré la mirada a los estudios posteriores a 1985²⁶⁰, porque es desde esa fecha - paralelo a la emergencia terrorífica de los carteles de la cocaína- donde emergen estudios más rigurosos en el país. Un breve balance de cada uno de los estudios e investigaciones realizados sobre la violencia presente en el conflicto armado colombiano nos arrojaría luz sobre cuáles son los principales preguntas, tesis o explicaciones que hasta ahora han despertado el interés de los académicos en esta compleja área

²⁶⁰ En el primer plano de los temas abordados por los investigadores a comienzos de los años ochenta, se vuelven a encontrar las preocupaciones que parecen resurgir del pasado, como los movimientos revolucionarios, o contrarrevolucionarios, la reforma agraria, la apertura democrática, la amnistía o la paz. El estudio de la violencia goza, por lo demás, durante este periodo, de un renovado interés por parte de una nueva generación de intelectuales colombianos, por medio de estudios regionales minuciosos, donde se vinculan la violencia con los conflictos agrarios o territoriales. (Pissoat y Goueset: 2002: 9). Es decir, se pasó de una situación de guerra civil no declarada, donde se enfrentaban esencialmente dos partidos políticos en un país predominantemente rural, a una lucha entre el estado central y numerosos contrapoderes insurreccionales que se imponían localmente en un país en adelante urbano. La violencia y el cierre del sistema político, que estimula la adhesión a los movimientos rebeldes, la violencia y la pobreza, considerada como el “caldo de cultivo” de la criminalidad, eran las principales relaciones dialécticas tenidas en cuenta para identificar las hipotéticas “causas objetivas” de la violencia. En razón de estas carencias y de estas disfuncionalidades, con frecuencia el Estado era considerado el principal responsable, junto con las organizaciones armadas (Pissoat y Goueset:2002:9).

problemática. O si en el caso del departamento del Valle del Cauca que aquí nos ocupa, la persistencia de una guerra que continúa a la otra responde a nuevos condicionantes o estrategias mismas de los actores, más que a cierta tradición de conflictos inscritos en la región.

Escrito inmediatamente después de “La Violencia”, el libro clásico “La violencia en Colombia” de Guzmán, Fals Borda y Umaña abordaba el problema a partir de la teoría del conflicto social. De acuerdo con esta lógica, la Violencia era un proceso revelador de la disfunción de “las instituciones fundamentales”, de la desintegración y de la reorganización de las estructuras mismas de la sociedad. El diagnóstico establecido era, por cierto, muy descriptivo y enmarcado en una fuerte influencia funcionalista. En dicha línea de trabajo se inscribían las publicaciones de politólogos norteamericanos colocando al Estado en el centro del análisis. El ejemplo más marcado en este campo es la obra de Paul Oquist de la cual “la teoría integral” sobre el derrumbe parcial del estado como elemento explicativo de la Violencia ha suscitado controversia, aunque también han contribuido a orientar los debates en este sentido.

Un segundo trabajo a examinar es el de Betancourt y García intitulado “*Matones y Cuadrilleros. Origen y evolución de la violencia en el Occidente Colombiano*”. De acuerdo con los autores, el factor común que liga a las guerras civiles con la violencia de los treinta y los cincuenta no está constituido por “*la descomposición campesina, sino por el manejo electoral, gamonal y caciquil de las luchas de colonos y arrendatarios, es decir, la manipulación partidista del conflicto agrario*” (Betancourt y García: 1990: 26). Según los autores, la violencia en el Valle, hasta los años 50, tuvo una connotación distinta a la ocurrida en Cundinamarca y Tolima, pues en el primer departamento la influencia de los socialistas, comunistas y gaitanistas tuvo que ver más con las ciudades y los jornaleros agrícolas de las planicies que con los campesinos cordilleranos que quedaron a merced de la manipulación electoral de los partidos tradicionales. Aquí, la violencia es analizada como partidista implementada desde arriba. O sea, como una lucha esencialmente política. Igualmente distinguen hacia los años 1955-1957 otros actores que surgirían en el seno mismo de las comunidades campesinas para hacer frente a la violencia conservadora de los “pájaros”, bautizadas como cuadrillas bandoleras y conformadas con base sociales provenientes del liberalismo. Sobre este aspecto, establecen una tipología de tales bandas y cuadrillas y señalan, a su vez, sus distintos grados de compromisos con el poder local o regional o sus diversos lazos con la población. En síntesis, los autores defienden la tesis de la continuidad histórica de la violencia, pues las nuevas formas de la violencia emergen de los restos que se heredaron de los cincuenta, simbolizando en cierto modo la erosión de los sentimientos de inclusión del campesinado en los dos partidos tradicionales.

Otra categoría de trabajo sobre la violencia bien representada en Colombia es la de las monografías regionales. Estas ponen en evidencia cuestiones semejantes a aquellas planteadas en los estudios hechos a escala nacional, revelando que las formas de violencia son, ya, a nivel de una región, múltiples. Estos análisis son de una gran riqueza, ya que se pueden observar sobre el terreno cómo los factores y los actores “macrosociales”, mencionados antes, se entrelazan y entran en interacción.

En el marco del proyecto de investigación “Geografía de la violencia contemporánea en Colombia” Reyes (1988) utilizó por primera vez un trabajo cartográfico riguroso para cimentar su argumentación acerca de la implantación rural localizada de los frentes

guerrilleros. La descripción sistemática de áreas de guerrillas permitió retomar las tesis que asocian la distribución de los grupos insurrectos con luchas sociales ligadas a conflictos agrarios. En cuanto a Lozada y Velez, el trabajo similar que emprendieron los llevó a poner en duda la teoría que apuntaba a las carencias del Estado y a la pobreza como elementos que favorecían la perpetración del conflicto armado, evaluando principalmente, comuna por comuna, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, la correlación existente entre el número de homicidios cometidos y los datos socioeconómicos que expresaban un encajonamiento de las poblaciones por parte del Estado²⁶¹.

Al respecto, el trabajo de Gaitán es una demostración elocuente del interés por la evolución diacrónica de la tasa de homicidios por habitante, sustentando no solamente que el país ha atravesado suficientes periodos de calma relativa después de su llegada a la independencia, sino refutar la noción de “cultura de la violencia” a veces evocada a propósito de la supuesta “continuidad histórica” de la violencia colombiana después del siglo XIX. Así mismo Echandía²⁶², a partir de mapas continuamente mejorados, insiste en el débil valor explicativo de la pobreza en la intensidad de la violencia sufrida en ciertas partes del país²⁶³, el cual en estudios de décadas pasadas había recaído en los procesos de afiliación partidista o de bandolerismo social. Echandía orienta su interpretación hacia las causas más prosaicas e individuales, insistiendo en los odios personales: “Los móviles aparentes de estos asesinatos colectivos eran políticos pero detrás de estos se encontraba casi siempre, la venganzas personales” (Echandía: 1999: 43). Este vacío es, en parte, llenado por Bejarano, cuyo análisis se centra en el vínculo entre la violencia y la economía, a partir de un fuerte estudio sobre el noroccidente, en el que se elaboró un inventario de las riquezas – producción bananera, ganadería o los cultivos ilícitos – como centro de codicia²⁶⁴.

Con respecto a investigaciones sobre la relación entre violencia, interacción y legalidad, los trabajos de Orozco sobre combatientes, rebeldes y territorios, junto con la aproximación de Germán Palacio al concepto de paraestado, constituyen dos rigurosos referentes. Desde una perspectiva regional, el estudio de García sobre la relación entre

²⁶¹ El análisis se ha visto enriquecido por la entrada en escena de investigadores provenientes de otras disciplinas, especialmente de economistas, hasta entonces los menos seducidos por el tema. Se comenzaron a utilizar mas frecuentemente las estadísticas cada vez mas exactas, emanadas del estado, de diferentes Ong. Gracias a estos avances, el estudio de las violencias, busca ahora, aproximarse a las especificidades regionales y locales con un mayor rigor en cuanto a la escogencia de criterios de información, y conforme a los ángulos metodológicos y disciplinarios cada vez mas variados, que permiten hoy en día a los investigadores reevaluar metódicamente ciertas ideas propuestas por los “violentologos” de la generación precedente.

²⁶² Echandía, Camilo (1999). El Conflicto armado y las manifestaciones de la violencia en las regiones de Colombia. Bogotá. Presidencia de la República.

²⁶³ Sin embargo, si la hipótesis de las “causas objetivas” de la violencia se rechaza cada vez más, es también porque los autores han refinado el concepto de la “pobreza” el cual se sustituye por aquel más sutil “de inequidad” que hace referencia no solamente a las diferencias en ingresos entre los habitantes, sino también a la noción de desigualdad en la distribución de la riqueza. Un trabajo econométrico de Alfredo Sarmiento que ha merecido ser cartografiado en tanto que los datos utilizados son precisos, demuestra que las desigualdades constituyen el principal factor que permite explicar el aumento de la tasa de homicidios durante los años noventa. Del mismo modo, el papel del estado continua siendo un punto discutido por los investigadores, que denuncian, no solo globalmente estas debilidades, si no mas precisamente los vacíos del sistema judicial.

²⁶⁴ En la presentación general de sus zonas de estudio, Sánchez y Meertens llevaron más lejos el esfuerzo descriptivo cartografiando el número de homicidios cometidos, lo cual ha provocado una fuerte tendencia de los sociólogos colombianos de profundizar su análisis del bandolerismo político y social en los lugares mas fuertemente afectados

actores en el Urabá antioqueño entre 1960 y 1990, ofrece pistas para entender como se construyó una región (bananera) a partir del conflicto armado y lógicas de territorialización de grupos armados, es decir, del Urabá como escenario sinónimo de violencia exacerbada por el paramilitarismo y las guerrillas del Epl y Farc, provocando identidades escindidas posteriores a los noventa.

También habría que recordar los análisis de Gómez y Uprimny sobre las relaciones entre justicia y violencia. Precisamente, la diferenciación entre delincuente político y común ha sido objeto de una dura crítica por parte de Rubio: según él, la evidencia empírica contradice las dos premisas de los partidarios de una salida negociada al conflicto, que conciben a los insurgentes como bandidos sociales que actúan como actores colectivos, determinados por condiciones estructurales objetivas y opuestos a los organismos del Estado, instrumentos esenciales de los grupos dominantes.

Pero son dos análisis recientes, ricos, sólidos e innovadores basados en el uso competente de metodologías de investigación sociológica los que cabe aquí destacar sobre las justicias que imponen las guerrillas en Colombia: hacemos referencia a los trabajos de Peña y Molano. Partiendo de una identificación detallada de las diferentes categorías de litigantes y de los diferentes tipos de litigios, Aguilera establece una periodización de la justicia insurgente, en la cual distingue tres periodos: justicia militarista, justicia retaliadora y justicia del poder local. Con base en materiales inéditos, Aguilera hace una original contribución a la sociología del derecho.

En “Guerra y política en la sociedad colombiana”, el historiador Gonzalo Sánchez intentó develar las relaciones que han existido a lo largo de la historia colombiana entre la guerra y la política. Dichas relaciones han sido siempre conflictivas, contradictorias y ambiguas, y varían de acuerdo con el momento histórico en que se presentan. Historicidad de la guerra e historicidad de la política es lo que pretende dilucidar Gonzalo Sánchez en este libro, como un intento de precisar, en un modelo no evolutivo sino de rupturas decisivas, los diferentes textos y los diversos tipos de combinaciones entre guerra y política por los que ha pasado el todavía inacabado proceso de formación de la nación colombiana (Sánchez: 1999: 15). Desde las guerras civiles del siglo XIX hasta las más complejas y trágicas según Sánchez del XX (envilecidas por sus tácticas y métodos de lucha) se encuentra que, en algunas ocasiones, la guerra se ha subordinado a la política; en otras- las más- la política se ha subordinado a la guerra. En todas, sin embargo, guerra y política han jalonado la historia de Colombia como no ha ocurrido con la de ninguna otra nación de América Latina

Rangel ha sido pionero en dimensionar la importancia de la amenaza guerrillera y la magnitud de las fuentes de financiamiento insurgente, analizando la forma como dichas fuentes de recursos han pasado de formas predatorias de la población, de baja exposición militar, aisladas, de ocasión, hacia formas parasitarias, donde hay una infiltración de largo plazo en la sociedad, tales como la extorsión a cambio de protección y desfalcos, y hacia una forma más desarrollada, “ donde la economía guerrillera se vuelve arte integral de la dinámica económica regional y le es absolutamente funcional “. Este analista enfatiza en la caracterización sistémica de la guerrilla, señalando además el robo de ganado y rendimientos obtenidos en el lavado de dinero.

Para acercarse al tema de las relaciones de la violencia con el narcocultivo, hay que tener en cuenta el trabajo de J.E Jaramillo, Cubides y Mora, que muestran las interrelaciones entre colonización campesina, coca y guerrilla, y los trabajos del CINEP de Vargas y Barragán. Es interesante señalar como Thoumi relaciona los problemas de la violencia y el narcotráfico con el estilo de desarrollo del Estado y su crisis de legitimidad.

Sobre el desarrollo de la guerrilla, hay que destacar los esfuerzos de Eduardo Pizarro para la historia del origen de las FARC y sobre su carácter insurgente que según este sociólogo “no conduce a la revolución”. De igual modo, es interesante el estudio antropológico de María V. Uribe sobre el regreso de la guerrilla EPL a la vida civil, con una marcada insistencia sobre la subcultura guerrillera, la mentalidad y el origen de los combatientes, sus motivaciones para la lucha, sus vivencias de desarraigo y reinserción, así como las obras de Alape sobre Tirofijo , los relatos de Molano sobre personajes ligados a la violencia , los libros de Villamizar sobre el M-19 y las narraciones de algunos antiguos militantes sobre algunas de sus respectivas organizaciones: por ejemplo, los trabajos de Villarraga, Plazas y Calvo sobre el EPL. Así mismo, los estudios de Fabio López de la Roche sobre la tradición político-cultural de las izquierdas en Colombia, tanto desde los rasgos antidemocráticos de la vieja tradición hasta la invisibilidad de estas y la necesidad de ver también sus contribuciones a la dinámica democrática.

Más recientemente, han surgido algunos estudios que piden mayor respaldo empírico, como intentos de creación de series periódicas, siendo representativos los trabajos de Echandía y Gaitán, así como los de Malcom Deas y Bejarano. La insistencia en la necesidad de combinar los análisis de las condiciones regionales y locales de áreas de conflicto con el análisis de la crisis nacional los acercan bastante al enfoque de los trabajos del CINEP. Particularmente valioso es el aporte de Gaitán para descartar la fácil asociación directa que se suele hacer entre pobreza y violencia y apuntar hacia la dirección más correcta, que sería asociar la violencia al aumento rápido y desigual de la riqueza en determinadas áreas, donde es visible el contraste entre pobres y nuevos ricos, y escaso el control estatal.

Un aporte sobre la dimensión del conflicto armado en las regiones de la colonización fue el realizado por Gómez Buendía (2000,38-39) quien indica que la historia nacional de las últimas décadas se ha estado haciendo en las márgenes, en aquellas regiones de colonización activa en la que los expulsados de la economía urbana buscan oportunidades económicas. Las Farc se han convertido en un “Estado primitivo” que controla una parte de los territorios marginales y de colonización activa del país, con riquezas propias, altos flujos monetarios, y bajos niveles de asentamiento de la población. Son territorios volátiles, en los que no ha habido construcción ni de Estado ni de nación, con servicios públicos primitivos, o inexistentes, ausencia de vías de comunicación y niveles muy bajos, casi nulos, de inversión social. Su relación con el centro urbano del país esta marcada por una dinámica permanente de expulsión y cerco. Porque supieron aprovechar las oportunidades disponibles, con las circunstancias históricas de desarrollo e historia colombiana, las FARC han estado presentes en forma activa en el proceso de colonización ocurrido en las ultimas décadas y, en forma crucial, han controlado las zonas de bonanzas económicas ilegales. En esas zonas han intentado convertirse en una especie de Estado alternativo, que garantiza la protección armada de sus habitantes, imparte una justicia primitiva y autoritaria y cobra la tributación correspondiente a sus asociados.

Respecto a la relación entre violencia, interacción y legalidad, es pertinente revisar los trabajos de Orozco “Combatientes, rebeldes y territorios”, junto con la aproximación de Germán Palacio al concepto de paraestado. Precisamente, la diferenciación entre delincuente político y común ha sido objeto de una dura crítica por parte de Mauricio Rubio, quien afirmó que la evidencia empírica contradice las dos premisas de los partidarios de una salida negociada al conflicto, que conciben a los insurgentes como bandidos sociales que actúan como actores colectivos, determinados por condiciones estructurales objetivas y opuestos a los organismos del Estado, instrumentos esenciales de los grupos dominantes. Así, la realidad encontrada no muestra a los actores armados

como modernos Robin Hoods, con motivaciones altruistas, amplio respaldo popular, una honda adhesión política, una acentuada movilidad y cierto carácter telúrico (una relación cercana con un territorio y una población determinada), sino con conductas muy semejantes a las del delincuente común. Señala que el apoyo económico del campesino a las guerrillas dista de ser voluntario, las relaciones amigables con las comunidades campesinas son escasas, el manejo clientelista de los recursos públicos por parte de la guerrilla no se diferencia del de los políticos tradicionales sino por su carácter armado. Peor aún, el recurso al secuestro o al impuesto sobre el narcocultivo hacen bastante irreal la distinción entre delincuentes comunes y políticos.

Para acercarse al tema de las relaciones de la violencia con el narcocultivo, debemos tener en cuenta el trabajo de Jaramillo, Cubides y Mora que muestran las interrelaciones entre colonización campesina, coca y guerrilla. Es interesante señalar la manera como Francisco Thoumi relaciona los problemas de violencia y narcotráfico con el desarrollo del Estado colombiano y su crisis de legitimidad. Sobre relaciones entre problema agrario y violencia del narcotráfico cabe señalar los análisis de Reyes o de González sobre la Amazonia.

Por su parte, Gaitán ha insistido en la necesidad de combinar los análisis de las condiciones regionales y locales de áreas de conflicto con el análisis de la crisis nacional. Particularmente valioso es su aporte para descartar la fácil asociación directa que se suele hacer entre pobreza y violencia y apuntar hacia la dirección más correcta, que sería asociar la violencia al aumento rápido y desigual de la riqueza en determinadas áreas, donde es visible el contraste entre pobres y nuevos ricos, y escaso el control estatal²⁶⁵. También son útiles las recomendaciones de Gaitán sobre la necesidad de profundizar en el análisis sociológico, antropológico y psicológico de los grupos guerrilleros y paramilitares, de los funcionarios de justicia, miembros de la fuerza pública y de personas involucradas en el narcotráfico.

La idea de la relación entre nueva riqueza y violencia es central en los trabajos de Jesús Bejarano para quien la causa de la violencia no es ni la pobreza en sí misma (la violencia aumenta con la riqueza) ni la ausencia del Estado en sí misma, sino la rápida expansión económica de ciertas regiones, que va más allá de la capacidad del Estado para hacer presencia en ellas. Esto reflejaría la pérdida del monopolio de la coerción legítima del Estado y la incapacidad de la sociedad y de las instituciones judiciales para solucionar civilizadamente los conflictos. Estos planteamientos son bastante cercanos a los que señalan la precariedad del Estado e inexistencia de un espacio público de resolución de conflictos, colocando el problema tanto en el Estado como en la sociedad. También son importantes las precisiones de Bejarano en torno a la evolución del movimiento guerrillero, ya que muchos de los análisis se quedan en el momento fundacional de los grupos rebeldes y prescinden de su posterior evolución. Así, señala que los movimientos

²⁶⁵ Más recientemente, han surgido algunos estudios críticos de los clásicos del conflicto armado. Algunos intentos de buscar datos estadísticos para ir creando series periódicas, como los trabajos de Echandía y Gaitán, han sido importantes. Sin embargo, curiosamente estos autores no se distancian tanto como creen de los autores criticados. Así, Malcom Deas hace un recorrido por la historia colombiana para mostrar que Colombia no siempre ha sido tan violenta como es ahora y que es realmente poco lo que sabemos sobre el tema. Además, reivindica el carácter esencialmente político de la violencia política, que considera irreductible a otras categorías económicas, sociales y culturales. Y subraya algo que generalmente se pasa por alto: se trata de una violencia política que busca el poder en los lugares donde el Estado apenas si puede reclamar el monopolio de la fuerza, por lo que la lucha no se da siempre contra el Estado sino contra otros rivales. Esta afirmación está reforzada por la idea de poca deferencia de la población frente a la autoridad y debilidad institucional. Ambas ideas relacionadas con enfoques centrados en la precariedad estatal.

guerrilleros ya no se concentran exclusivamente en las zonas de colonización más o menos marginal donde se originaron, sino que se han venido expandiendo hacia zonas más ricas, dedicadas a la agricultura comercial, ganadería, explotación petrolera o aurífera, y a zonas fronterizas o costeras, que le permiten acceder a recursos del contrabando. Por lo demás, este cambio de áreas hace que la guerrilla sea menos societaria, menos ligada a las bases sociales y más militarista. Así, las guerrillas de las FARC buscan hoy apoyarse en los sectores no asimilados en las economías del oro, petróleo, banano, palma africana, coca y amapola, donde se produce un rápido crecimiento económico.

En lo que atañe a investigaciones específicas sobre la región que aquí me ocupa- Valle del Cauca-, es pertinente señalar el trabajo del profesor Adolfo León Atehortúa (1995). "El poder y la sangre. Las historias de Trujillo (Valle)". Obra que indaga en la memoria colectiva de las violencias de la región, se inscribe en la denominada literatura testimonial, apoyada en múltiples fuentes documentales-archivos judiciales, archivos históricos, archivos de alcaldías, archivos de Ministerio de Gobierno, documentos de la Procuraduría, juzgados de orden público o instrucción criminal, prensa y la evaluación que hacen los propios actores desde sus propias percepciones y vivencias. El interés de Atehortúa es " *señalar que el proceso de colonización tiene un camino distinto a la ocupación clásica de la lucha por la tierra, no tiene un carácter abierto, desde abajo, sino que está mediado por el control utilitario que los políticos hacen del conflicto agrario para alcanzar influencia electoral*". Esto acontece en los años treinta, en una situación en que se produce un cambio de hegemonía en la política partidista nacional. En los ochenta, vendrían otros actores. La presencia de los narcotraficantes, del Frente Cárdenas del ELN y de algunos miembros del M19 desbordaron espacios de la política tradicional y cada vez más las nuevas fuerzas acudirán al expediente de la fuerza ya sea para producir un reordenamiento del poder político local, reducir las bases sociales de apoyo del adversario o hacer valer sus intereses.

En. "Violencia, conflicto y región. Perspectivas de análisis sobre el Valle del Cauca y el Cauca", Alvaro Guzmán y Mario Luna se mantienen en la línea de una tipificación de la violencia usando el concepto, ya casi tradicional, de escenario. Pero, a diferencia de tratamientos anteriores, se intenta establecer una relación de manera mucho más específica con el aspecto subyacente del conflicto.

Con respecto a la obra del Profesor Campo, "*Urbanización y violencia en el campo vallecaucano*" se puede decir que se inscribe en aquellas teorías que enfatizan ciertas circunstancias económicas estructurales (lucha por la propiedad agraria) que propician el surgimiento de la violencia asociada con la existencia de un régimen político legal que legitima un orden excluyente. Aquí la explicación de los conflictos violentos que suceden desde los años 40, se inscriben dentro de un modelo de urbanización excluyente que favorece el desarrollo de la agricultura comercial mecanizada en detrimento de la pequeña economía agraria. Una modalidad que el autor descubre es la que utilizaron muchos pretendidos propietarios para contrarrestar las medidas que adoptó el gobierno de López Pumarejo en favor de los colonos: la presentación de escrituras y exhibición de títulos falsos. Según Campo, se comprueba que en el Valle se libró una guerra de apropiación de tierras entre pequeños y medianos agricultores o los propietarios y arrendatarios. El autor pretendió demostrar que en el Valle la desintegración de ese campesinado no sólo se transformó en la base social de la agroindustria sino que también entró a formar parte de los pequeños y medianos centros urbanos extendido a todo lo largo del departamento. Lo anterior controvierte aquella tesis marxista según la cual "*la desintegración de la clase social campesina opera en beneficio de la formación del ejército de reserva industrial urbano*".

Representativa de la tradición de las teorías multicausales culturalistas es la obra de Guzmán y Luna intitulada "*Violencia, conflicto y región*". Los autores consideran que la violencia es resultado de una sumatoria de combinaciones de violencias disímiles en la que cada una de ellas tiene su propia dinámica y que como tal, hay que explicarlas aisladamente si se quiere tener un cuadro global de la violencia. En otros términos, para ellos es mejor referirse a los estudios de los distintos campos sociales (económico, político, social) y observar sus posibles conexiones antes que referirse a la estructura social como un todo, es decir, es posible comprender la violencia a partir de la explicación específica de cada uno de los campos. Este trabajo se ubica en una coyuntura específica que comprende el período entre 1990 y 1992. En nueve zonas y considerando la población se tomaron las tasas de homicidio y de delitos violentos para cada subregión en el período 1991-1992²⁶⁶. En suma, lo que los profesores de la Universidad del Valle Camacho y Guzmán quieren demostrar, a partir del análisis de la dinámica regional de la violencia y el conflicto, es que el Estado está lejos de derrumbarse y lo que se viene dando es un proceso de integración con violencia.

Existe otro grupo de investigadores que han adoptado el análisis de la inserción regional de la guerrilla en determinadas regiones del país desde la perspectiva del conflicto como condición inherente a la existencia y la dinámica social y el papel de los grupos en armas en la construcción de territorio. El desarrollo de algunos de estos estudios se hizo bajo el criterio de combinar el enfoque histórico estructural de larga duración con un acercamiento coyuntural, de corto plazo y énfasis regional.

Entre tales trabajos se cuentan los de la zona esmeraldera, Córdoba, el Sumapaz, las zonas de colonización de la Orinoquia y Amazonía. Dentro de este grupo sólo tomaremos dos: "Urabá: región, actores y conflicto 1960-1990" de Clara García y "Colonización y conflicto Armado" de Alejo Vargas. En estudio del Urabá, García resalta el significado social y político que adquieren a posteriori los alzados en armas en la configuración regional, primero, con la integración del territorio y luego propiciando la constitución de actores sociales. Otro aporte investigativo aquí es mostrar cómo la guerrilla incide en la constitución de los actores en la región. Así, en el área bananera es previsible ver como la participación del EPL en las coyunturas laborales trajo como efecto que "*el Estado, la guerrilla, los gremios y los sindicatos se reconocieran mutuamente como actores con intereses regionales, y por tanto definidos en relación con los demás*" (García:1996:165). La autora pone en cuestión aquella visión que ve al Estado como un hecho dado sino, por el contrario, al igual que la región, como un proceso en construcción. Instituciones y normatividad no se perciben como implantación mecánica en el territorio sino construida a la par con la región.

²⁶⁶ A través de un vasto trabajo empírico pretendieron mostrar las más disímiles situaciones de violencia y establecer una relación de hechos y contextos socioeconómicos. Siguiendo una lectura sistemática de 7.298 hechos de violencia a través de la prensa tratan de explicar los hechos de violencia interactiva-individual, los autores introducen variables como el recurso a las armas, tipo de actores implicados y grado de sevicia, distinción de campos y escenarios, tipología de la violencia regional. Entre los primeros resultados que arroja la investigación de estas variables, señalan el recurso a las armas como el factor que explica el 61% de la violencia y su uso predominante se encuentra en subregiones como Botacaucana, Norte del Cauca y Norte del Valle. Respecto a la dimensión organizada de la violencia, los hechos ejemplificados por la participación de grupos paraestatales o resultado de la confrontación militar tienen importancia en la Bota, Norte, Centro del Departamento del Cauca y sur del Valle. La violencia individual ejemplificada en los sicarios se concentra en el Norte del Valle, Cali y Centro del Departamento del Valle. En lo referente a los escenarios, los ajustes de cuentas implican el 32.2% de los hechos implicados, las riñas el 13,9%, la accidentalidad vial 13.3%, los asaltos y robos 11.5% , el narcotráfico un 7.1%, secuestros y desapariciones 5.8%, violencia familiar y de sexualidad el 4.4%, suicidios 3,9% y la denominada "limpieza social", 3.5% (Camacho y Guzmán: 1997: 23).

El otro texto ubicado en esta misma tradición de análisis es el de " *Colonización y conflicto armado* " de Alejo Vargas. La hipótesis aquí es que el desorden social producido en dicha región supuso la primacía de elementos coercitivos en la que los actores se encontraban atravesados por imágenes negativas donde el otro es percibido como enemigo y la utilización de la violencia entra a jugar parte fundamental en los arreglos sociales. El punto central del texto es mostrar cómo la violencia actual se nutre de las violencias anteriores. En sus conclusiones, considera Vargas que la inserción del ELN en la región no es gratuita y se encuentra precedida del descontento de la población con la vieja política y la desesperanza producida por experiencias políticas como las del MRL, el gaitanismo y el Anapismo. Así, a las antiguas contradicciones no resueltas se le agregan otras que crean un caldo de cultivo proclive a las opciones violentas que promueven actores como la guerrilla y el narcotráfico.

Entre otros trabajos que ofrecen una perspectiva distinta a los aquí anotados, se encuentra el estudio sobre " *El surgimiento y andar territorial del Quintín Lame* " de la profesora Espinosa. A partir del análisis etnográfico de un acontecimiento en particular - la recuperación de la Hacienda en el Norte Caucaño - y del surgimiento de nuevos actores indígenas - el Movimiento indigenista armado Quintín Lame-, esta rigurosa antropóloga nos propone una metodología pertinente para emprender la etnografía de procesos políticos regionales. Esta visión se diferencia de otros pues parte del análisis de las especificidades del discurso, de la textura de la vida cotidiana y de la creatividad cultural, para así dar cuenta de la guerrilla en clave de contexto histórico. A la vez, esta obra es una etnografía que por múltiples razones logra trascender las limitaciones de la etnografía tradicional. Siendo etnografía de un acontecimiento y no de un grupo cultural, permite un seguimiento de la creatividad cultural dentro de la cual la cultura no es concebida como un conjunto de reglas de acción y de valores, sino como un proceso de adaptación a un contexto, igualmente nutrido por el encuentro entre actores de culturas diferentes, como por las exigencias del momento.

Logra este estudio de la antropóloga Espinoza, describirnos una cultura forjada en el encuentro de diversos actores que incluye tanto a los indígenas paeces, militares y civiles, hasta campesinos, afrocolombianos, funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas armadas. Su riguroso aporte se debe a que produce una etnografía, primero, cuyo análisis surge de la relación entre varias subjetividades y segundo, porque está organizada en torno al encuentro de la teoría antropológica metropolitana con una teorización propia de los protagonistas. Es decir, en una época caracterizada por la aparición de nuevas voces subalternas en la antropología, Espinosa intenta captar formas alternativas de análisis etnográfico para orientar su interpretación del proceso social y cultural del movimiento guerrillero Quintín Lame de los setenta y ochenta.

En los últimos cinco años han aparecido decenas de trabajos y estudios de los que sólo señalaré ocho que- a mi juicio- son más rigurosos. En una investigación poco común dentro de la literatura acerca del conflicto armado colombiano, Eric Lair (1999) propone un enfoque estratégico para entender el uso del terror por parte de las organizaciones armadas que se disputan poblaciones y territorios. Situado en el contexto de la discusión internacional sobre el carácter caótico o desordenado de los nuevos conflictos que azotan a los países más pobres y en desarrollo (la llamada "Guerra Harapienta"), Lair desecha la idea de identificar las guerras de nuevo tipo con el caos o el desorden. Su punto de partida es que si bien los discursos tradicionales sobre las causas del conflicto han logrado muy poco en términos explicativos y no pueden cubrir los nuevos rasgos que ha asumido el conflicto colombiano, los discursos recientes sobre el carácter "desordenado" del conflicto colombiano no hacen justicia a la complejidad del mismo"

Con el reciente libro de los profesores de la universidad del Valle Salazar y Castillo “La hora de los dinosaurios” se ha comenzado a situar una nueva línea de análisis: la que intenta entender el conflicto armado colombiano desde el punto de vista de la conducta estratégica de sus protagonistas. Ya no se trata solo de entender las lógicas de acción aisladas de sus agentes fundamentales, sino de discernir, reconstruir y pensar la interacción explícita y consciente entre esas lógicas y sus efectos sobre las perspectivas de conjunto del conflicto armado colombiano. Este enfoque –que parte de la teoría de juegos- supone que mas allá de los orígenes de la conducta de cada agente, mas allá de sus motivaciones históricas o estructurales, las decisiones que cada uno toma dependen, en forma crucial, de lo que los otros agentes hagan y, sobretodo, de lo que estos últimos conjeturan que el primero conjetura acerca de sus expectativas²⁶⁷.

No hay duda que la guerra en Colombia ha merecido innumerables trabajos. Pero son muy pocos los que en el marco de la guerra se preguntan por la muerte, por el asunto humano del dolor y el sufrimiento que ella acarrea y por sus consecuencias sobre las poblaciones. Menos aún se encuentran estudios que se interroguen por el nivel de significaciones simbólicas y los efectos que pudieran tener las muertes en combate, o sus posibilidades de simbolización, o la elaboración de los duelos por los muertos y, en consecuencia, las posibilidades de reconciliación de la sociedad. Por ello, una interesante, refrescante y audaz investigación es la de la profesora Elsa Blair de la Universidad de Antioquia titulada “La teatralización del exceso”, en la que la autora se pregunta por las muertes violentas de las guerras pero desde una mirada diferente, es decir, acudiendo a nuevos enfoques desde la antropología forense para pensar el problema. Blair se detiene en las masacres, en su mayoría fruto del conflicto político armado, y que involucran como sus principales víctimas generalmente a los campesinos. Algo se ha dicho sobre esta modalidad de ejecución de la muerte, respecto de su dimensión simbólica y la puesta en escena de rituales de muerte, que cumplen eficazmente con la producción de terror en las poblaciones. En efecto, es por esta vía que la muerte se deja interrogar desde sus dimensiones simbólicas a partir de su ejecución misma, del mismo acto de matar, expresado la mayoría de las veces en la violencia ejercida sobre los cuerpos.

La perspectiva de la obra reciente de María T Uribe se enmarca en la tesis de O’Donell respecto al entrelazamiento diferente de los Estados y sus sistemas legales y normativos con sus sociedades respectivas, lo cual tendría un enorme influjo, no solo en el tipo de democracia que se pueda construir—si es que se construye—sino también en la eficacia y el real funcionamiento de los sistemas legales. O sea que para O’Donell, la clave interpretativa no estaría en los sistemas sino los entrecruzamientos²⁶⁸. Estos ordenes de hecho—factuales—serían entendidos como conjuntos de regularidades, de normas, de saberes, de procedimientos y de usos, dotados de sentidos que definen qué hacer, cómo

²⁶⁷ Para estos dos profesores e investigadores “Las Fuerzas Armadas regulares, las organizaciones guerrilleras, las paramilitares y la misma población civil aparecen, en este contexto, como agentes racionales que buscan unas metas explícitas, siguiendo distintos tipos de acción racional, recurriendo a formas de conocimiento y de organización diversas, basándose en distintos modelos de recolección, procesamiento y transferencia de la información.” (Salazar y Castillo: 2001: 61)

²⁶⁸ María T. Uribe reconoce también su deuda metodológica con los aportes analíticos de teóricos como Todorov “Las morales de la historia” y Fernando Escalante “Los ciudadanos imaginarios” para quienes el dato originario no son individuos libres autónomos y autosuficientes, en los que se funda el modelo democrático de la ciudadanía, sino la vida social organizada en pautas, en creencias de identidades, en jerarquías y sentidos que mantienen regularidad y permanencia, produciendo verdaderos ordenes de hecho e informales en tanto que son vividos y reproducidos como tales

hacerlo, y cómo comportarse: especies de respuestas colectivas e históricas a necesidades sociales de muy diverso carácter²⁶⁹ (Uribe, M.T: 2002: 75)

Los trabajos de Molano son referencia obligatoria si de analizar las investigaciones sobre la interacción cotidiana en el conflicto armado colombiano se trata. Su impronta en obras como “Siguiendo el corte”, “Aguas arriba”, “Trochas y fusiles” entre otras, radica en su amplio conocimiento de las zonas de colonización de zonas de frontera como Caquetá, Guaviare y Putumayo, así como su capacidad de reflejar las voces de los actores armados y no armados en zonas de conflicto, desde la literatura testimonial y enfoques etnográficos.

A partir de mediados de los ochenta el estudio sobre la violencia en el conflicto armado ha adquirido un estatuto singular llegando a constituir un campo de estudio específico (apresuradamente elevado al rango de “violentología” en el discurso mediático o medios masivos de comunicación). Igualmente el interés riguroso y el aporte teórico/empírico de decenas de investigadores extranjeros es un aspecto destacable en la revisión del estado del arte sobre el conflicto armado en Colombia. Citemos aquí ocho de los más destacados, como el politólogo Oquist (EEUU), los historiadores Malcom Deas (Gran Bretaña), E. Hobbawn, J. Henderson, C. Berquist (EEUU); C. Legrand: (Canadá). Los franceses están representados por dos fuertes conocedores del conflicto armado colombiano Gilhodes (politólogo) y Pecaute (sociólogo)

Desde finales de los ochenta, en la investigación social sobre la problemática colombiana se ha hecho necesaria diferenciar distintas modalidades de violencia y una gama de situaciones regionales muy diversas, que desaconsejaban una generalización inmediata (Cubides: 2005: 135), haciendo indispensable en cambio distinguir motivaciones, modalidades, agentes que acuden a la violencia, así como sectores de población más afectados, tipos de víctimas, distribución geográfica de los índices de violencia. A partir de entonces *“puede decirse que se encuentra en auge la labor de análisis que consiste en considerar por separado cada una de las organizaciones que emplean la violencia, su lógica al acudir a ella, discernir su racionalidad, así como las bases sociales que le han permitido surgir, implantarse en un determinado territorio y acumular poder* (Cubides: 2005: 136). El auge actual de las investigaciones indica una tendencia que coloca el acento en la pluralidad, aplazando una visión de conjunto con tal de percibir las interacciones, las interferencias que se presentan entre las distintas modalidades de la violencia colombiana. Y como bien señala Cubides, a la luz de los hechos y evidencias acumuladas, se considera que la intensidad y diversidad de las violencias están creando una nueva concepción del territorio y de la “cuestión agraria”

El balance del estado del arte hasta aquí hecho tiene sentido en tanto permite constatar que son escasos los estudios que se han adelantado en Colombia para entender formas de interacción que los pobladores llevan a cabo con los actores armados. Predominan valiosos y pertinentes trabajos pero brillan por su ausencia los trabajos de campo, lo cual se debe a los propios riesgos del proceso de recolección de información.

²⁶⁹ No se trataría de ordenes completos, homogéneos y coherentes, además, no serían en sí mismos buenos o justos pues no se sustentan en discursos filosóficos o éticos y se mantiene con cierta independencia de las instituciones formales

Bibliografía

Adorno, Theodor (1983) *La personalidad autoritaria*. Buenos Aires, Taurus.

Aguilera, Mario (2003). *Justicia guerrillera y población civil 1964-1999*. En De Souza Santos, Boaventura y García, Mauricio (2003) “*El calidoscopio de las justicias en Colombia*”. Tomo II. Ediciones Uniandes y Colciencias. Bogotá

Aguilera, Mario y Sánchez, Gonzalo (2001), *Memoria de un país en guerra: los mil días 1899 – 1902*, Planeta/lepri/Unijus. Bogotá.

Alonso, Manuel Alberto. (1997). “*Conflicto Armado y Configuración Regional. El caso del Magdalena Medio*”. Editorial Universidad de Antioquia. Instituto de Estudios Políticos. Medellín.

Arango, Carlos (1984) “*Guerrilleras Farc- Ep: crónicas y testimonios de guerra*”. Bogotá, Ecoe/ Anteo.

Aranzueque, G. & Ricoeur, P. (1997). “Paul Ricoeur: memoria, olvido y melancolía”. *Revista de Occidente* N° 198, pp 105-121.

Arendt, Hannah. (1973). “*Sobre la violencia*” En: *La crisis de la República*. Taurus. Madrid.

Arendt, Hannah. (1993). *La condición humana*. Paidós. Barcelona.

Artehortúa, Adolfo (1998) *Conflictos y violencias en el Valle del Cauca*. En Varios autores “*Conflictos regionales: Atlántico y Pacífico*”. Fescol e Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

Atehortúa, Adolfo (1995). *El poder y la sangre. Historias de Trujillo (Valle)* Cinep-Universidad Javeriana. Bogotá

- Bagley, Bruce (1998), "Colombia and the War on Drugs", Foreign Affairs, otoño 1998.
- Bagley, Bruce (2004) "*The Colombian Connection: The Impact on Drug Traffic on Colombia*" en VVAA (2004). "Coca and Cocaine". Columbia University Press. Pp.97-98
- Baró, I Martín (1988). *Psicología Social de la Guerra*. San Salvador: UCA Editores.
- Bejarano, Jesús, Echandía, Camilo (1997) "*Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales*". Universidad Externado y FONADE, Bogotá.
- Berdal, Mats y Keen, David (2002) "*Violence and Economic Agendas in Civil Wars: Some Policy Implications*". Millennium: Journal Of International Studies. V. 26, número 3.
- Berger, P y Luckmann (1968) "*La construcción social de la realidad*". Amorrortu editores. Buenos Aires.
- Betancourt, D y García (1990), M. *Matones y cuadrilleros. Origen y evolución de la violencia en el Occidente Colombiano*. Tercer Mundo, Bogotá.
- Blair, Elsa (1993). *Las fuerzas armadas. Una mirada civil*. CINEP, Bogotá.
- Blair, Elsa (2004) *Muertes violentas. La teatralización del exceso*. Iner. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín.
- Blandón B, Fidel. *Lo que el cielo no perdona*. Bogotá. Colección Lista negra. Planeta, 1996
- Bolívar, Ingrid (2004) Emociones y producción de diferencias en el discurso de las Autodefensas colombianas. Disponible en <http://www.santafe.edu/files/obstclestopeace/bolivar.pdf>
- Bourdieu, Pierre (1995) *Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario*. Editorial Anagrama, Barcelona.
- Camacho, Alvaro y Guzmán, Alvaro (1990) *Violencia y coyuntura*. En "Colombia hoy: sociología y sociedad". Centro de documentación Cendor. Universidad del Valle. Cali.

Camacho, Alvaro (2002) "*Violencia y democracia*". Informe presentado al Ministerio de Gobierno. Varios autores. Universidad Nacional de Colombia. Conciencias. Bogotá.

Camacho, Alvaro (2004) *Empresarios ilegales y región: la gestación de élites locales*. En Silva, Renán (2004) *Región, territorio y sociedad*. Editorial Universidad del Valle. Cali.

Campo, Urbano (1980). *Urbanización y violencia en el Valle*. Ediciones Armadillo, Bogotá.

Campos Zornosa, Yezid (2003) *Memoria de los silenciados*. Ceicos /MSD, Bogotá

Carassale, Santiago (2004). *La acción, sus cursos y proyectos*. Mimeo interno del curso propedéutico del Doctorado en Ciencias Sociales. Flacso. México.

Cárdenas, Miguel Eduardo (2003) *La construcción del posconflicto en Colombia*. Enfoques desde la pluralidad. Cerec y Fescol. Bogotá.

Carmarck, Robert (ed) (1991) "*Guatemala. Cosechas de violencia. Los indios mayas y la crisis guatemaltecas*". Flacso Guatemala.

Castañón, Carlos (2001) *Mi confesión*. Editorial Planeta. Bogotá.

Castillejo, Alejandro. *Poética de lo otro. Antropología de la guerra, la soledad y el exilio interno en Colombia*. Bogotá. Ministerio de Cultura. Icanh. Conciencias, 2000.

Certeau Michel de (1996). *La invención de lo cotidiano*. Nueva Ed. México

Clarín. "*Nos hacían descuartizar a prisioneros y beber su sangre, dijo un paramilitar*." En "*La Barbarie de la guerra en Colombia*": <http://www.clarin.com>, sábado 12 de mayo de 2007. Sección El Mundo.

Clausewitz, Von Kart (1998): *De la guerre*, Paris, Minuit.

Collier, Paul, Anke, Hoeffler y Mans, Soderbom (2001) : On the durations of the civil War, Washington, D.C., The World Bank, Centre For de study of African Economics, Oxford University.

Comisión de estudios sobre la violencia (1997). *Colombia: violencia y democracia*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas (CONADEP, 1991). *Nunca más*, Buenos Aires, Eudeba

Coser, Lewis (1985) "Las funciones del conflicto social". Fondo de Cultura Económica. Mexico.

Coser, Lewis (1970) "*Nuevos aportes a la teoría del conflicto social*". Editorial Amorrortu. Buenos Aires.

Cubides, Fernando (2001) "Municipalización y regionalización de la violencia en Colombia". Mimeo documento Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Cubides, Fernando, Olaya Cecilia y Ortiz, Carlos (1998). *La violencia y el municipio colombiano 1980-1997*". Centro de Estudios Sociales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Cubides, Fernando, Jaramillo Jaime y Mora Leonidas (1986). *Colonización, coca y guerrilla*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Chaplin, Charles. "*Perseguido por el macartismo*" en Dossier Chaplin. "El chiste es cosa seria" Revista Nueva Gaceta N° 8 Bogotá, abril-junio 2003.

Chomsky, Noam. (2004) "Las verdaderas intenciones del tío Sam". Ediciones de la Fundación para la Investigación y la Cultura, FICA. Bogotá.

Chomsky, Noam (2005) "¿Qué se creen los gringos?" Coedición del Instituto de estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación para la Investigación y la Cultura, FICA. Bogotá.

D'abbraccio, Guillermo (2001). "*¿Y eso a mi qué me importa? Representaciones sociales sobre el conflicto armado en estudiantes de licenciatura en Caldas*". Mimeo interno de cátedra. Grupo de Trabajo académico en Gestión Cultural. Manizales.

D'abbraccio, Guillermo (2000). "Cosmovisión jurídica guerrillera en zonas de conflicto: el caso del Cauca, Caquetá y Putumayo". Mimeo documento interno del programa de Antropología Jurídica. Universidad del Cauca. Popayán.

Dávila Ladrón de Guevara, Andrés (1988). *El juego del poder: historia, armas y votos*". Ediciones Uniandes- Cerec, Bogotá.

De Gregori, Carlos Iván (1990) *Ayacucho 1969-1979. El surgimiento de Sendero Luminoso*. IEP. Lima.

De la Torre Cristina (2005) "*Alvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia*". La carreta Editores. Bogotá

De Souza Santos; Boaventura y García, Mauricio (2002) *El caleidoscopio de la justicias en Colombia*. Ediciones Universidad de Los Andes. Bogotá.

Duncan, Gustavo (2006) "*¿Cómo los guerreros sometieron a los narcotraficantes? Historia de una subordinación*". Revista Foro N° 57. Bogotá.

Duncan, Gustavo (2005), "*Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra*". Bogotá: Universidad de los Andes. Centro de Estudios sobre desarrollo económico. En [http: economía.uniandes.edu.co/-economía/archivos/temporal/d2005-02.pdf](http://economía.uniandes.edu.co/-economía/archivos/temporal/d2005-02.pdf).

Duzán, Silvia (1990). *Vive la vida aunque mañana te mueras*. Revista Foro número 11. Foro Nacional por Colombia, enero, Bogotá.

Elías, Norbert (1989). *El proceso de la civilización*. Fondo de Cultura Económica. México

Elías, Norbert (1978) "*What is Sociology?*" Columbia University Press. Nueva York

El Tiempo “*Una muerte violenta cada 20.5 minutos*”, viernes 17 de mayo 2003, p, 3 A. Bogotá.

Estrada, Marco (2001) “*Acción y razón en la esfera política: sobre la racionalidad deliberativa de lo político según Hannah Arendt*” en Revista Sociológica 47. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. México.

Estrada Gallego, Fernando (2001). “*Los discursos de la guerra. Análisis de un caso: los paramilitares*”, UIS Humanidades, vol 30, N° 1, pp 29-42

Fals Borda, Orlando (1985) *Historia de la Cuestión Agraria en Colombia*. Carlos Valencia Editores. Bogotá.

Foucault, Michel (1999). *El orden del discurso*. Tusquets. Barcelona.

Foucault, Michel (1976) *La historia de la sexualidad*. Siglo XXI. Madrid.

Frijda, N. H. (1997). *Conmemorating*. En J. W. Pennebaker, D. Páez y B. Rimé (Eds.), *Collective memory of political events. Social psychological perspectives* (pp. 103-127). Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum.

Fromm, Erich (1975) “*La anatomía de la destructividad humana*”. Paidós. Barcelona. Citado por Baró, I Martín (1988). *Psicología Social de la Guerra*. San Salvador: UCA Editores.

Gaborit, M (2002) *Memoria histórica: Relato desde las víctimas*. Estudios Centroamericanos (ECA), 649-650.

Gambetta, Diego (2007) *La mafia siciliana. El negocio de la protección privada*. Fondo de cultura económica. México.

Gambetta, Diego (1991), “*La mafia el precio de la desconfianza*”, en Fernando Aguiar (comp) *Intereses individuales y acción colectiva*, Editorial Fabio Iglesias, Madrid, 1991.

García, R (1993) *Las guerrillas colombianas: autojustificación de un proyecto imposible*. Foro No 22, Bogotá

García Peña, Daniel (2005), “*La relación del estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico*“. Revista Análisis Político No.53, enero/marzo. Instituto de Estudios políticos y relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Geertz, Clifford (1996). *La interpretación de las culturas*. Gedisa. Barcelona.

Girola, Lidia (2002) “*Alfred Schutz y la pérdida de la inocencia en el análisis sociológico*“. En Revista de difusión cultural de la UAM Azcapotzalco. México.

Gledhill, John (2000). *El poder y sus disfraces*. Ediciones Bellaterra. Barcelona

Goffman, Irving (1959) *Presentation of Self in Everyday Life*. Garden City, New York: Anchor.

González, Fernan (1997). *El transfondo social y político de las violencias en Colombia*. En “Documentos Ocasionales” N° 65 de la Revista Análisis. Cinep. Bogotá.

Gott, Richard (1971) *Guerrilla Movements in Latin America*, Garden City, Doubleday and Company. Nueva York.

Gramajo, Héctor (1995) “*De la guerra.....a la guerra. La difícil transición política en Guatemala*“. Flacso Guatemala. Ciudad de Guatemala.

Grimbert, León y Grimberty, Rebeca (1984). *Psicoanálisis de la migración y del exilio*. Madrid, Alianza

Gros, Christian (2003) *Los campesinos de las cordilleras frente a los movimientos guerrilleros y a la droga: ¿actores o víctimas?* En dossier “Guerra en Colombia: democracia y conflicto agrario” Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Gutiérrez, Francisco (2006) *Nuestra guerra sin nombre*. Editorial Norma, Bogotá.

Gutiérrez, Francisco, Boaventura de Souza y Uribe, María Victoria (2003) “*Conflicto y contexto. Resolución alternativa de conflictos y contexto social*”. Colciencias- Tercer Mundo. Bogotá.

Gutiérrez, Soraya (2005) “Consolidación paramilitar e impunidad en Colombia” en Varios Autores (2005) *Democracia o impunidad*. Fundación para la Investigación y la Cultura. Bogotá.

Gutiérrez de Pineda, Virginia (2003) *La familia en Colombia*. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín.

Guzmán, A y Luna, M (1994). *Violencia, conflicto y región: perspectivas de análisis sobre el Valle del Cauca y Cauca*. En: Varios autores. Territorios, regiones, sociedades. Cerec, Bogotá.

Habermas, Jurgen (1987) *The Theory of Communicative Action*. Vol 2 “*LifeWorld and System: A critique of Functionalist Reason*”. Boston. Beacon Press

Hallan, Elizabeth y Hockey, Jenny (2001) “*Death, Memory and Material Culture*”, Berg, Oxford.

Halbwachs, M. (1925). *Les cadres sociaux de la mémoire*. Paris: Alean.

Herrán, María Teresa (1986) *¿La sociedad de la mentira?* 2° edición, Fondo editorial Cerec y La Oveja Negra. Bogotá

Herrera Zgaib, Miguel (2003) “*Los dilemas del posconflicto. Una genealogía en dos tiempos*”. En Cárdenas, Miguel (2003) “La construcción del posconflicto en Colombia. Enfoques desde la pluralidad”. Cerec y Fescol. Bogotá.

Hilarión, Alfonso (sargento) (1972) “Balas de ley”. Libro de relatos de la vida en un cuartel de la policía en Colombia. Copias sin referencias editoriales.

Hilb, Claudia (2001). “*Violencia y política en la obra de Hannah Arendt*” en Revista Sociológica Número 47. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Hobsbawn, Eric (2002) “*Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la violencia en Colombia*”. El áncora editoriales. Bogotá (hay otra edición semejante en coautoría con Donny Meertens y Gonzalo Sánchez del año 2000).

Hoyos, Juan José (1994). *Sentir que es un soplo la vida*. Medellín, editorial Universidad de Antioquia.

Isaza, Franco (1968) “Las Guerrillas del Llano”. Edición de una copia clandestina que circuló “pirata” en los años sesenta, sin referencias editoriales y en muy mal estado.

Kaldor, Mary (2001) *Las nuevas guerras. La violencia organizada en la era global*, Barcelona, Tuquest Editores, 2001).

Kalmanovitz, Salomón (2002) “*Las instituciones, la ley y el desarrollo económico en Colombia*”. Observatorio de economía Latinoamericana. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Kalyvas, Stathis (2004); “*La ontología de la “violencia política”: acción e identidad en las guerras civiles*”, en revistas Análisis, Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y relaciones Internacionales de la Universidad nacional de Colombia, No.52, septiembre/diciembre.

Kalyvas, Stathis y Arjona, Ana (2005) “*Paramilitarismo: una perspectiva teórica*”. En Rangel, Alfredo: Paramilitarismo. Editorial Fundación Seguridad y Democracia. Bogotá

Krauthausen, Ciro y Sarmiento, L. F (1997) “*Cocaína & Co: un mercado ilegal por dentro*”. Tercer Mundo editores. Bogotá.

Lair, Eric (2005) “*El terror, recurso estratégico de los actores armados. Reflexiones en torno al conflicto colombiano*. En “Guerra en Colombia: actores armados”. Colección temática Iepri y Análisis político. Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bogotá

Lair, Eric (2003) "*Reflexiones acerca del terror en los escenarios de guerra interna*", en Revista de Estudios Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Uniandes/Fundación Social, No.15, p.96.

Leal Buitrago, Francisco (2006) "*La política de seguridad democrática 2002-2005*". En revista Análisis Político N° 57, mayo-agosto 2006. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Leal Buitrago, Francisco y Dávila, Andrés (1990) *Clientelismo: el sistema político y su expresión regional*. Tercer Mundo. Bogotá.

Leal Buitrago, Francisco (1994) *El oficio de la guerra. La seguridad Nacional en Colombia*. Tercer Mundo editores- Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Le Bot, Yvon (1992) *Guatemala: violencia, revolución y democracia*. Editorial FLACSO Guatemala y Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, México, D.F

Lechner, N. (2002). *Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política*. Santiago: LOM Ediciones.

Le Fort, Claude (1990), *La invención democrática*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Le Goff, Jaques (1991) *El orden de la memoria: El tiempo como imaginario*. Ediciones Paidós, Barcelona.

Le Grand, Catherine (1992) "*Los antecedentes agrarios de la violencia: el conflicto social en la frontera colombiana: 1850- 1936*" en Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (comps) *Pasado y presente de la violencia en Colombia*. Cerec. Bogotá, pp 128-251

Levi, Primo (1989). *Les naufragés et les rescapés, quarante ans après Auschwitz*. París, Gallimard, 1989

López de la Roche (1990). *Ensayos sobre cultura política Colombiana*. En Controversia 162 Cinep, Bogotá.

López de la Roche (1994) *Izquierdas y cultura política. ¿ Oposición alternativa ?*. Cinep, Bogotá.

López Restrepo, N. (2006) “*Narcotráfico, ilegalidad y conflicto en Colombia*” en Gutiérrez, Francisco y Sánchez, Gonzalo (2006) “*Nuestra guerra sin nombre*”. IEPRI. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá

Lorenz, Konrad (1998) *Sobre la agresión: el pretendido mal*. Siglo XXI editores. 20° edición.

Luhmann, Niklas (1996). “*Confianza*”. Editorial Anthropos. Universidad Iberoamericana. México, 1996

Machado, Absalón (1998) *La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio*. El Áncora Editores. Bogotá.

Maccoby y Maccoby, J. (1954) *Métodos cualitativos de investigación*. Princenton University, Princenton.

Malaver, José (1996) “*Reflexiones sobre el narcotráfico, la drogadicción y la crisis de la sociedad actual*” en *Revista Ensayo y error*, número 1, Bogotá

Manitzas, Nitzas (2002) *Los paramilitares en Colombia*. En http://www.fordfound.org/publications/recent_articles/docs/manitzas_spanish.pdf.

Medina Gallego, Carlos (1990) “*Autodefensas, Paramilitares y narcotráfico en Colombia*” Editorial Documentos periodísticos. Bogotá

Mejía, H (2002) *Los defensores de los Derechos Humanos: estigmatización–eliminación: el caso de la Nestlé Bugalagrande*”. Documento Equipo NIZKOR Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh). Organización Mundial Contra la Tortura (Omct).

Meertens, Donny (1995) “*Mujer y violencia en los conflictos rurales*” En revista Análisis político No 24. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá

Middieton, D y Edwards, D (comps.) (2002), *Memoria compartida. La naturaleza social del recuerdo y del olvido* (pp. 125-136). Barcelona: Paidós.

Molano, Alfredo (2002) “*La justicia guerrillera*”. En De Souza Santos, Boaventura y García, Mauricio (2002) “*El caleidoscopio de la justicias en Colombia*”. Ediciones Universidad de Los Andes

Molano, Alfredo (1996), “*Ni cascos azules ni verdes, mesa de negociaciones*”, en *Cambio* 16 No 141, 26 de febrero de 1996.

Molano, Alfredo (1990) *Aguas arriba. Entre la coca y el oro*. El áncora editores. Bogotá.

Molnar, Virag y Lamont, Michele (2002) *The study of Boundaries in the Social Sciences*. Annual Review of Sociology, vol 28 pp 167- 195

Molnar, Thomas (1970) *La izquierda en la encrucijada*. Unión editorial. Madrid.

Montagu, Ashley (1999) *La naturaleza de la agresión humana*. Alianza Universidad Editorial. Madrid.

Moore, Barrington (2001). *Pureza moral y persecución en la historia*. Paidós. Barcelona

Moore, Barrington (1989) *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, México, UNAM

Morin, Edgar (1994), *El hombre y la muerte*. Barcelona, Cairos, 2 edición, 1994.

Observatorio de DDHH y DIH (2002) “*Algunos indicadores sobre el accionar de las autodefensas 1980-2001*” en “*Colombia, conflicto armado, regiones y Derechos Humanos*”. Vicepresidencia de la Republica. Bogotá

Ortiz, Carlos Miguel (2005) “Actores armados, territorios y poblaciones”. En Varios autores “Guerra en Colombia: actores armados. Colección temática Iepri y Análisis político. Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bogotá

Pardo, Rafael (2004) “La historia de las guerras”. Editorial Javier Vergara. Barcelona

Partow, Zeinab y Echeverri, Juan Carlos (2000) *¿Por qué la justicia no responde al crimen?: el caso de la cocaína en Colombia*. Tercer Mundo y Fedesarrollo. Bogotá

Patton, M (1990) *Qualitative Evaluation an Research Metods*. Sage Publications. New York

Pecaut, Daniel (1997a). *Presente, pasado y futuro de la violencia*. En revista Análisis Político No 30, enero- abril de 1997.

Pecaut, Daniel (1997b). *De la violencia banalizada al terror: el caso colombiano*. En: revista Controversia No 171, CINEP, Bogotá.

Piccolli, Antonio (2003) *El sistema del pájaro*. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín.

Piper, Isabel (2006) “*Memorias de violencia política y conmemoraciones*”. Documento interno del Curso virtual en Violencia y Derechos Humanos. Grupos de trabajo CLACSO, Argentina.

Piper, Isabel (2004) *Las huellas de la memoria*. Tesis de doctorado en Psicología social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona.

Piper, Isabel (1998) *Introducción teórica: reflexiones sobre violencia y poder*. En “Voces y ecos de la violencia”. Editorial Cesos. Santiago de Chile

Pissoat, Olivier y Goueset, Vincent (2002). *La representación cartográfica de la violencia en las ciencias sociales colombianas*. Revista Análisis Político No.45. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá

Pizarro, Eduardo (2005) *“Elementos para una sociología de la guerrilla colombiana”* En *“Guerra en Colombia: actores armados. Colección temática Iepri y Análisis político.* Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bogotá

Pizarro, E (2004). *Una democracia asediada. Balance y perspectiva del conflicto armado en Colombia.* Norma. Bogotá.

Pizarro, E (1996) *“Les forces armées dans un contexte d’insurrection chronique ou le statut des forces armées dans la société colombienne”* En: Blanquer, Jean- Michelk y Gros, C *La Colombie a l’aube du trisieme millenaire.* Paris: Institut des Hautes Etudes.

Pizarro, Eduardo (1996) *Insurgencia sin revolución.* Tercer Mundo. Bogotá.

Pizarro, Eduardo (1995) *La reforma militar en un Contexto de Democratización política”* en *“En busca de la estabilidad perdida”* editado por Francisco Leal Buitrago, Tercer Mundo editores, Iepri, Conciencias. Bogotá

PNUD (2003) *El conflicto, callejón con salida.* Informe Nacional de Desarrollo 2003. Bogotá.

Poole, Deborah y Rénique, Gerardo (2004) *El terror y el Estado privatizado: una parábola peruana.* En <http://www.ciberayllu.com.pe/documentos.pdf>

Poole, Deborah y Renique, Gerardo (2000) *Popular Movements, the Legacy of the left, and the Fall of Fujimori.* In *Socialism and Democracy* N° 14 pp 53-74.

Poole, Deborah y Renique, Gerardo (1992) *Peru Time of Fear.* Latin American Bureau. New York.

Ramírez, William (2003) *Violencia y democracia.* En *Guerra en Colombia: Democracia y conflicto agrario.* Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Universidad Nacional de Colombia. Bogotá

Ramírez, William (1990) *Estado, violencia y democracia,* Iepri Universidad Nacional de Colombia, Tercer mundo editores, Bogotá.

Rangel, Alfredo (2005) *El poder paramilitar*. Editorial Planeta Colombiana y Fundación Seguridad & Democracia. Bogotá.

Rappaport, Joanne (1990). "*The Politics of Memory. Native historical interpretation in the Colombian Andes*". Cambridge University Press.

Reno, William (2000) "*Shadow States and the Political Economy of civil wars*" en Mats Berdal, & David Malone, *Greed and Grievance, Economic Agendas in civil Wars*, Centro Internacional de Investoigacionbes para Desarrollo/Rienner. Posteriormente publicado en

Reno, W (2002) "*Shadow States and the Political Economy of the Civil Wars*". Harvard University. Boston.

Renseelaer, Lee (1992) "*El laberinto blanco*". Editorial Cerec, Bogotá.

Restrepo, Luis Carlos (1993). *Mato, luego existo. Dimensión simbólica de la violencia*. En Revista colombiana de psicología número 2, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Revéis, Edgar (1995) *Una agenda tributaria de largo plazo que respete a los colombianos*. En Revista Economía y Desarrollo, vol 2, N° 2, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Reyes, Alejandro (1995) "Compra de tierra por narcotraficantes en Colombia" en *Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social*, editorial Ariel-Phud-Minjusticia. Bogotá

Reyes, Alejandro (2005) *Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias*. En Varios autores "Guerra en Colombia: actores armados. Colección temática lepri y Análisis político. Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bogotá

Richani, Nazih (2002) "*Systems of Violence. The Political Economy of War and Peace in Colombia*". New York University. N. Y.

Ricoeur, Paul (2000) "*La memoria, la Historia, el olvido*". Fondo de Cultura económica. Buenos Aires.

Rivero, Rosa, Bellelli, G., y Backhurst, D. (Eds.), *Memoria colectiva e identidad nacional*. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. Schachter, D. L. (2001). *The seven sins of memory: How the mind forgets and remembers*. Bostón: Houghton Mifflin.

Rodríguez Molar, Ricardo (1985) *Historia de la tortura y el orden represivo en la Argentina*. Textos documentales, Buenos Aires, Eudeba.

Rojas, Carlos Eduardo (1994). *La violencia llamada "limpieza social"*. Bogotá, Cinep.

Romero, Mauricio (2000) *Changing Identities and Contested Setting: Regional Elite and the paramilitares in Colombia*, en *International Journal of Politics, Culture, and Society*, vol.14 No.1.

Romero, Mauricio (2003), *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*, Bogotá: IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, editorial Planeta.

Rouquié, Alain (1984) *El Estado militar en América Latina*, México, Siglo XXI

Rubio, Mauricio (1999) "*Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia*". Ediciones Tercer Mundo, Uniandes, Bogotá.

Salazar, Boris y Castillo, María del Pilar (2001) "*La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia*". Cidse, Universidad del Valle y Cerec, Centro de estudios de la realidad colombiana. Cali.

Salazar, Beatriz (1994) "*La revolución a los hijos: Mujeres y guerrilla*", Bogotá, Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, departamento de Antropología, Tesis de licenciatura. Bogotá.

Sánchez, Ariel y Sánchez, Gonzalo. (2004) "*Mayo 27 de 1964. El huevo de la serpiente*" En *Revista Semana*, Edición 1152.

Sánchez, Gonzalo (2002) "*Guerra, historia y memoria*". El Áncora editores. Bogotá

Sánchez, Gonzalo (1993). “*Los días de la revolución, Gaitanismo y 9 de abril en provincia*”. Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán. Bogotá.

Sánchez, Gonzalo (1991). “*Guerra y política en la sociedad colombiana*” El áncora editores. Bogotá.

Sarmiento Anzola, Eduardo (2001) “*Plan Colombia, conflicto e intervención*”. Revista Nueva Sociedad N° 172, marzo-abril, Caracas, Venezuela, pp 22-35.

Schutz, Alfred (1993) “*La construcción significativa del mundo social*” Paidós. Barcelona

Schutz, Alfred (1974) “*La elección entre diversos proyectos de acción*”. En Schutz: El problema de la realidad social. Editorial Amorrortu, Buenos Aires. pp. 86-108

Scott, James (2000). *La dominación y las artes de resistencia*. Era. México.

Simmel, G (1986) “*Sociología 1. Estudios sobre las formas de socialización*”. Alianza Editorial, Madrid.

Sintraincol (2005) *Informe de la violación de Derechos Humanos en el Valle del Cauca*. Organismos de control político y social. Cali.

Stern, Steve (ed, 1998) “*Shining and Other Paths. War and Society in Peru, 1980-1995*”. Durham Duke University Press.

Thoumi, Francisco (1996) “*Legitimidad, lavado de activos y divisas: drogas ilegales y corrupción en Colombia*” en Revista Ensayo y error número 1. Bogotá.

Thoumi, Francisco (1995) “*Derechos de propiedad en Colombia: debilidad, ilegitimidad y algunas implicaciones económicas*” en Revista Documentos ocasionales número 38, Centro de Estudios Internacionales. Universidad de Los Andes. Bogotá.

Thoumi, Francisco (1987) “*Economía política y narcotráfico*”. Tercer Mundo editores. Bogotá.

Traboulsi, Fawaz N (1994), "*Rituales de la violencia*", El Viejo topo N° 80, diciembre, Barcelona.

Train (2004), Brian R. "The Tupamaros of Uruguay." *Islandnet*. 17 March 2004. En <http://www.islandnet.com/~citizenx/TWTupas.txt>.

Trujillo y Badel (1997), *Costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991 – 1996*. En Revista Planeación y Desarrollo, Vol. 28, No 4. Bogotá.

Turner, Victor (1969) "*The Ritual Process*". Ithaca, Nueva York.

Turner, Victor (1967) "*The Forest of Symbols*". Ithaca, Nueva York.

Uribe, María Victoria (1990) "*Matar, rematar y recontramatar*". Editorial Universidad de Antioquia. Medellín.

Uribe, María Victoria y Vásquez, Teófilo (1995), *Enterrar y callar. Las masacres en Colombia, 1980-1993*" Volumen 1, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Terre des Hommes. Primera edición. Bogotá.

Uribe, María Victoria (2002) "*Enterrar y callar. Las masacres en Colombia 1980-1993*, vol 1. Comité permanente de los Derechos Humanos. Fondation Terre des Hommes. Segunda edición. Bogotá.

Vargas, Ricardo (1999) *Drogas, máscaras y juegos. Narcotráfico y conflicto armado en Colombia*. Tercer Mundo Editores. Bogotá

Vásquez, María Eugenia (2006) *Escrito para no morir. Bitácora de una militancia*". Intermedio editores (colección Narrativas). Bogotá.

Vázquez, Félix (2001). *La memoria como acción social. Relaciones, significados e imaginario*. Barcelona: Paidós.

Vera Grave (2003) "*Razones de Vida*". Editorial Universidad de Antioquia. Medellín.

Vélez, Eduardo (2000) "*Territorio, política y seguridad: tres enclaves de un laberinto*". Documento interno de cátedra. Universidad de Antioquia. Medellín.

Waldman, Peter (1993). *La insospechada fecundidad de la violencia*. En Revista Colombiana de Psicología Número 2, Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, 1993

Waldman, Peter (1997). *Cotidianización de la violencia: el ejemplo de Colombia*. Revista Análisis Político número 32, Iepri, Universidad Nacional de Colombia, sep- dic 1997. Bogotá, pp 34-50

Warren, Kay B (1998) "*Pan-mayanismo y pluriculturalismo en Guatemala*". En <http://www.dkc.mse.jhv.edu/~scholz/lprints/warrenspan.htm>. 20/3/98 Antropología. Princeton University

Weber, Max (1964) *Economía y sociedad*. Fondo de Cultura Económica. México.

Wickham-Crowley, Timothy (1992) "*Guerrillas and Revolution in Latin America*", Princeton University Press, Princeton.

Wickham- Crowley Timothy (1989) "*Winners, Losers and Also-rans: Toward a Comparative Sociology of latin american Guerrilla Movements*", en Susan Echstein (ed), Power and Popular Protest. Latin American Social Movements, Berkeley, University of California Press.

Wolf, Mauro (1988) "*Sociologías de la vida cotidiana*". Col Teorema. Cátedra. Madrid

Zambrano, Fabio (1989) *La invención de la nación. Contradicciones del sistema político colombiano*. Documentos ocasionales N° 56, Cinep. Bogotá

Páginas Web consultadas

www.elspectador.com

www.eltiempo.com

www. Farc.org

www.clarin.com

Referencia a documentales y producciones audiovisuales

Ana Cristina Monroy (directora). Documental en video "*Mujeres no contadas. Historias de 15 mujeres excombatientes del Epl, Quintín Lame, M-19, Eln y Farc*". Video participante en el IV Encuentro Hispanoamericano de video documental Independiente de la ciudad de México D.F. 2005

CNN, 1999, mayo 9, "Colombia's FARC Rebels Intimidating and Isolated", Atlanta.

RCN, "Entrevista a Garavito". Programa de entrevistas "El mundo según Pirri", mayo 15 de 2006